**Orden del Día de la Décima Octava Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**24 de junio del año 2020.**

**1.-** Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.

**2.-** Declaratoria de apertura de la Sesión.

**3.-** Lectura, Discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la Sesión.

**4.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Sesión Anterior.

**5.-** Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.

**6.-** Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión anterior.

**7.-** Lectura de Iniciativas de Reforma Constitucional:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, por la que se modifica el contenido del artículo 158-S de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de adicionar los principios de legalidad y progresividad a este dispositivo.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, por la que se reforma el párrafo quinto del artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de no discriminación por identidad o expresión de género.

**C.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, por la que se reforma el inciso 2, de la fracción I, del artículo 114, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la fracción II, del artículo 12, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para el efecto de reducir la edad mínima para ocupar el cargo de Fiscal General en Coahuila,

**D.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, por la que se adiciona el artículo 171 Bis a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de establecer el deber del estado de proteger la actividad económica y, a la vez, garantizar con medidas extraordinarias su preservación ante crisis y factores que causen daños y perjuicios a la misma.

**7.-** Lectura de Iniciativas de Diputadas y Diputados:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional,por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, por la que se reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones VIII, IX, X y XI al artículo 188 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, a fin de proteger la vida de las mujeres coahuilenses y contemplar nuevas circunstancias punibles dentro del delito de feminicidio.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Fernando Izaguirre Valdés, por la que se agregan diversas disposiciones legales a la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de plasmar en la norma los términos pandemia y endemia, para dar certeza jurídica a toda acción que busque preservar la salud de las y los coahuilenses, en caso de declararse contingencia sanitaria por parte de las autoridades en la materia.

**C.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, que reforma el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, en relación a la obligación de contribuir a la alimentación y cuidado de los hijos por parte de los padres y no solamente de las madres.

**D.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para expedir la Ley de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**E.-** Iniciativa con proyecto de Decreto que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, por el que se crea la Ley de Control, Adopción y Bienestar de los Animales de Compañía para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**F.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Berino Granados,mediante el cual se adiciona el punto 5, a la fracción IX, del artículo 10, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de que se brinde atención prioritaria a los adultos mayores que cuenten con alguna discapacidad, en materia del derecho de acceso a servicios.

**G.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Juan Antonio García Villa, para adicionar dos párrafos -el octavo y el noveno- del artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso, con el objetivo de establecer que las Comisiones dispondrán de sesenta días naturales para dictaminar las proposiciones de punto de acuerdo que al ser presentadas al Pleno éste haya desechado darles el trámite de urgente u obvia resolución, o no se hubiere solicitado. Transcurrido este plazo sin haber dictamen, en cualquiera de las sesiones posteriores al mismo, el o los autores de las proposiciones podrán presentarlas y el Pleno entrará directamente a su discusión y aprobación, en su caso.

**H.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Familia y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado para regular el domicilio del depósito judicial de menores de edad y de quienes requieran asistencia y representación.

**I.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, por el que se adiciona el inciso c) a la fracción I del artículo 5º, así como los artículos 28 bis y 28 bis 1 a la Ley Para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de impulsar los apoyos y financiamientos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado**.**

**J.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Josefina Garza Barrera, por conducto de la Diputada Josefina Garza Barrera, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de homologar la denominación de las Secretarías de Estado, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.

**K.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, por el que se adiciona la fracción XVIII al artículo 86 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila y la fracción XVII al artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de incorporar la concesión de licencia por cuidados materno-paterno para el cuidado y atención de hijos enfermos.

**L.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 309, de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de modificar los requisitos para ser titular del registro público de transporte.

**M.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María del Rosario Contreras Pérez, mediante el cual se reforma la fracción IX, del artículo 285 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de que se sancione a quien adquiera, oculte o comercialice, productos obtenidos de robo a centros educativos

**N.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Diana Patricia González Soto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de armonizar las condiciones para el logro de los objetivos de la ejecución de las medidas impuestas al adolescente, establecidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

**Ñ.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, por el que se reforma la fracción III del artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fortalecer los principios rectores para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

**O.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García, mediante la cual se adiciona el inciso j) a la fracción I del artículo 6 y se reforma la fracción V del artículo 12 de la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir al Instituto Coahuilense de las Personas Adultos Mayores, en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas para la atención y prevención de la violencia familiar.

**8.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción primera del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**B.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII y se recorre la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**C.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona la fracción I, VI y VII del artículo 42, así como la fracción I del artículo 43, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, asimismo se agrega una nueva fracción II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza.

**D.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**E.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**F.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**G.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por la Presidenta Municipal de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un bien inmueble identificado como fracción del lote número 11 de la manzana 15, con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle del Campestre” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Club de Leones de San Buenaventura A.C.”, con objeto de llevar a cabo la construcción de un Plantel Educativo de Nivel Preescolar.

**H.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción de área vial de la Calzada Xochimilco con una superficie de 77.07 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. Daniel Garza González, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**I.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para celebrar un contrato de comodato, con vigencia hasta el año 2030, de un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.”, con objeto de llevar a cabo la instalación de un módulo de Servicios Amigables contemplado en el programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes.

**J.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación, con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel primaria.

**K.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 161.70 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor del C. Antolín Pozos Zaragoza, con objeto de que se destine a uso de casa habitación y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual fue desincorporado con Decreto número 528 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de septiembre de 2016.

**L.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 22,327.706 m2., de la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano” en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor del Organismo Público Descentralizado, Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.

**M.-** Dictamen presentado por la Comisión de Igualdad y no Discriminación, con relación a una Iniciativa de Decreto por la cual se reforma diverso contenido de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza; cuya propuesta confirmar la adopción de las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres a través de políticas integrales de protección de los derechos humanos de las mujeres; suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**N.-** Dictamen presentado por la Comisión de Igualdad y no Discriminación, con relación a una Iniciativa de Decreto por la cual se modifica el contenido de la fracción X del artículo 8 y; así como el contenido de la fracción IV del artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; cuya propuesta esampliar los conceptos de violencia mediática, laboral y escolar; planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**Ñ.-** Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Segundo Párrafo del Artículo 107, el Primer Párrafo del Artículo 111 y se adicionan los Artículos 113 BIS 4 y 133 BIS 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**O.-** Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el contenido de los párrafos primero y tercero del artículo 208 del Código Municipal para Estado de Coahuila de Zaragoza.

**P.-** Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, “Con objeto de que se exhorte atentamente a los 38 Ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respectivos organismos, operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, ante el inicio de la temporada de calor, pero, sobre todo, en vista de la actual pandemia por coronavirus” planteado por el Diputado Benito Ramírez Rosas.

**Q.-** Dictamende la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 225, segundo párrafo; y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional.

**R.-** Dictamende la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se propone reformar los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV y VII y 118, y derogar los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, anexándose voto particular presentado por el Diputado Juan Antonio García Villa.

**S.-** Acuerdopresentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, mediante el cual se pronuncia sobre Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que solicita al Ejecutivo del Estado desarrollar programas que fortalezcan la creación de escuelas municipales para fortalecer el apoyo a talentos deportivos y la cultura del deporte”.

**T.-** Acuerdopresentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, relativo a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares.

**U.-** Acuerdopresentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa”.

**10.-** Proposiciones de Grupos Parlamentarios, Fracción Parlamentaria y Diputadas y Diputados:

**A.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, “Mediante el cual se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Lic. Manuel Bartlett Díaz, reconsidere la cancelación anticipada de los contratos de compra de carbón a proveedores mineros de la región carbonífera de nuestro estado, a fin de evitar el despido masivo de trabajadores y una desestabilización económica en Coahuila”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**B.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada Gabriela Garza Galván, “Con objeto de que este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, exhorte al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para que agilicen los trámites correspondientes, para la liberación y distribución a estados y municipios del fondo de Estabilización la cantidad de 60 mil millones de pesos, ya anunciado, Coahuila le corresponderían poco más de 1,400 millones de pesos y de estos, 280 millones corresponderían a los municipios, ya que dichos recursos son necesarios para implementar las acciones para atender la pandemia en el momento más álgido de la contingencia, de igual forma, se envié un atento exhorto al Lic. Blas José Flores Ávila, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para hacer suya esta petición, y sumar de esfuerzos por un objetivo común”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**C.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila,“Por el que se exhorta al presidente de la república, al secretario de hacienda y crédito público, al director general del instituto mexicano del seguro social, al director general del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, al director del instituto de salud para el bienestar y al secretario de salud federal, para que, en uso de sus facultades, dispongan de un plan que garantice mejores condiciones laborales y económicas, así como bienestar para las familias del personal de salud público o privado que valientemente ha enfrentado la emergencia sanitaria del covid-19 en el país.

**De urgente y Obvia Resolución**

**D.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal Lic. Andrés Manuel López Obrador a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a través del fortalecimiento y la conservación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), así como a no realizar ninguna acción que tienda a desaparecerlo o disminuir su presupuesto, funciones y/u operatividad”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**E.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 5 Subcomités Técnicos Regionales COVID-19, para que en la medida de sus posibilidades y en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y las Cámaras de Comercio, evalúen la posibilidad de ir abriendo más establecimientos comerciales, actividades y eventos, para acelerar la reactivación de la economía de nuestro estado”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**F.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, “Con objeto de que este H. Pleno, solicite al Fiscal General de Estado que, a la brevedad, inicie de oficio las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad del ex gobernador Jorge Torres en la probable comisión de delitos de índole financiero en perjuicio de la administración pública, de acuerdo a su confesión en Estados Unidos”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**G.-** Proposición con Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares y el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila; conjuntamente con las y los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional; y “del Partido Acción Nacional”; así como la Diputada integrante de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática, el Diputado integrante de la Fracción Parlamentaria “General Francisco L. Urquizo”, y el Diputado integrante de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de que informe sobre las estrategias de comercialización del carbón de pequeños productores de Coahuila.

**De urgente y Obvia Resolución**

**H.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta al Ayuntamiento de Torreón y a su Presidente Municipal Jorge Zermeño Infante, para que instruyan a las corporaciones se seguridad pública a su cargo a que actúen con total apego al orden jurídico y con absoluto respeto a los derechos humanos de la ciudadanía sobre todo en los casos relacionados con marchas, manifestaciones y protestas públicas, como la sucedida el pasado 7 de junio en la plaza mayor de esa ciudad.

**De urgente y Obvia Resolución**

**I.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, “Con el objeto de exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a implementar acciones inmediatas que garanticen el derecho constitucional a la salud de los pacientes con cáncer, asegurando el acceso ininterrumpido a los tratamientos y medicamentos oncológicos necesarios”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**J.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada Rosa Nilda González Noriega, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Fiscalía General del Estado para que continúe con las investigaciones sobre la filtración y venta de fotografías íntimas de jovencitas de la región centro del estado, ya que aún permanecen páginas en redes sociales que las publican y/o comercializan”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**K.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, “Con el objeto de que esta Soberanía le haga un respetuoso exhorto a los 38 Municipios del Estado de Coahuila, para que, en sus Cabildos puedan hacer un merecido reconocimiento a los trabajadores de las áreas de limpieza, mantenimiento, y recolección de basura en nuestro Estado, porque aún en medio de esta Pandemia del Covid-19, gracias a su importante y noble labor han mantenido limpias nuestras ciudades, haciéndoles patente la manifestación de gratitud pública por parte de la sociedad Coahuilense, porque a la par de los Médicos, Enfermeras, y otros servicios de emergencias, no obstante los riesgos para su salud y de sus familias, hacen una labor valiente y dedicada en beneficio de todos nosotros, de ahí, que éste sea el momento oportuno para hacerles patente el respaldo y el apoyo tanto del Gobierno y de la sociedad en su conjunto, a su indiscutible vocación de servicio dado que su labor ha resultado clave para la protección sanitaria de todos los ciudadanos”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**L.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Fernando Izaguirre Valdés, “Por la que se solicita a la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Turismo, a que convoque a sesión conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 49 de la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad que la misma coadyuve con la Secretaría de Salud estatal y a los sub comités técnicos de salud, para que evalúen y autoricen la apertura gradual de parques, centros ecológicos y turísticos, liberar el acceso a las piscinas y/o albercas en hoteles y centros de alquiler, y que estos, cuenten con protocolos y lleven a cabo las medidas de prevención ante la pandemia que afecta al sector económico y turístico de la entidad”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**M.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada Rosa Nilda González Noriega, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que adopte algunas consideraciones en la suspensión del servicio eléctrico a los usuarios que durante esta contingencia sanitaria no han cumplido con sus pagos, tomando en cuenta que muchas personas vieron interrumpido su fuente de ingresos a consecuencia de la pandemia”.

**N.-** Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, “Por el que se solicita no desaparezcan las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor en la región Sureste, Centro, Desierto, Cinco Manantiales y Norte de nuestro Estado, pues causara grandes perjuicios a miles de consumidores, que necesitan diariamente de los servicios de estas oficinas para hacer valer sus derechos.

**Ñ.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila,“Por el que se exhorta al Alcalde de Parras Ramiro Pérez Arciniega, a tender puentes de diálogo con las y los trabajadores jubilados de aquel municipio para encontrar a la brevedad una solución justa para ellos”.

**O.-** Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, por el que se solicita se inicie Juicio Político en contra del Alcalde de Parras de la Fuente Coahuila.

**11.-** Agenda Política:

**A.-** Pronunciamiento que presentan las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Josefina Garza Barrera, “con motivo de la conmemoración del día 26 de junio, como el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a víctimas de tortura.

**B.-** Pronunciamiento que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Fernando Izaguirre Valdés, **“**Por motivo de fomentar a que el aparato gubernamental proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural, tomando como base la esencia del derecho, la filosofía y la genética”.

**C.-** Pronunciamientoque presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” de la Honorable LXI Legislatura del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, “En relación con la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, establecida por la Secretaría de Energía”.

**D.-** Pronunciamiento que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, “Con relación al Día Mundial del Árbol”.

**12.-** Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión.

**MINUTA DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 10 HORAS, CON 38 MINUTOS, DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2020, DIO INICIO LA SESIÓN ESTANDO PRESENTES 22 DE LOS 25 DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, INFORMANDO LA PRESIDENCIA QUE EL DIPUTADO EDGAR GERARDO SANCHEZ GARZA, DIO AVISO QUE NO ASISTIRÍA A LA SESIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA, PASADO LO ANTERIOR LA PRESIDENCIA DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN Y VALIDOS LOS TRABAJOS QUE EN ELLA SE TRATARAN.

**1.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO EL ORDEN DEL DÍA, DISENSANDOSE SU LECTURA.

**2.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA, DISPENSÁNDOSE SU LECTURA.

**3.-** SE DIO LECTURA DEL INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**4.-** SE DISPENSÓ LA LECTURA DEL INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO QUE SE PRESENTARON EN LA SESIÓN ANTERIOR.

**5.-** LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE A SOLICITUD DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PRESENTARON INICIATIVAS Y QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LOS PUNTOS DEL 7-A AL 7-M DEL ORDEN DEL DÍA PREVIAMENTE APROBADO, SE DISPENSE LA LECTURA DE LAS MISMAS, TODA VEZ QUE LAS REFERIDAS INICIATIVAS SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA PARLAMENTARIA DE LA PÁGINA DEL CONGRESO, POR LO QUE DICHA SOLICITUD SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**6.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 9, A LA FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 25, LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INCLUIR EN LA INFORMACIÓN QUE LE CORRESPONDE PUBLICAR A LA SECRETARÍA DE SALUD, LA QUE SE ORIGINE COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA EMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARIA DEL ROARIO CONTRERA PEREZ, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

**7.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR LA FRACCIÓN IV, DEL ARTICULO 12; LOS PÁRRAFOS TERCERO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 55, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 61, 62, 63, Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 64, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO, SE TURNÓ A LA COMISIÓNDE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

**8.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN RELACIÓN CON COMPLEMENTAR LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EMILIO DE HOYOS MONTEMAYOR, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.

**9.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN MATERIA REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EN CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA, CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA, SE TURNO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.

**10.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ESTATAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE ADICCIONES, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, SE TURNO A LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA.

**11.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LAS FRACCIONES IX Y X, RECORRIENDO SUS RESPECTIVOS CONTENIDOS A LAS FRACCIONES XI Y XII QUE SE CREAN, DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER COMO ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DEL SISTEMA ESTATAL LAS DE RENDIR UN INFORME ANUAL ANTE EL TITULAR DEL PODER LEGISLATIVO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA ESTATAL; Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA ATENDER LOS CASOS DE VIOLENCIA FEMINICIDA QUE SE REGISTRAN DURANTE EL AÑO EN LA ENTIDAD, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA BLACA EPPEN CANALES, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

**12.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL Y LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO PARA IMPLEMENTAR EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZAREZ, SE TURNÓ A LA COMISIÓN UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

**13.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, CON EL OBJETO DE ESTABLECER DENTRO DE LAS ACCIONES DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y SANITARIAS EN MATERIA DE HIGIENE ESCOLAR, EL FOMENTO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA PROTEGER LA SALUD DEL EDUCANDO Y PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA GRACIELA FERNANDEZ ALMARAZ, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA.

**14.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER QUE, EN LAS ACTAS DE CABILDO SEA PLASMADO EL SENTIDO DEL VOTO DE CADA INTEGRANTE DEL CABILDO, SALVO EN AQUELLOS CASOS QUE LA VOTACIÓN SE ESTABLEZCA COMO SECRETA O POR CÉDULA, QUE PRESNTÓ GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVAN, SE TURNO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS.

**15.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE ARMONIZAR EL DERECHO DE TODA PERSONA A LA PRÁCTICA DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, ACORDE A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y FEDERALES, SIN DISCRIMINACIÓN, RESTRICCIÓN O EXCLUSIÓN POR SU ORIGEN, SEXO, EDAD, DISCAPACIDAD, ORIENTACIÓN SEXUAL, CONDICIÓN SOCIAL O ECONÓMICA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZALEZ SOTO, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD.

**16.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA LA INCLUSIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INTEGRAR DIVERSAS ENTIDADES PÚBLICAS Y A LA SOCIEDAD CIVIL DENTRO DE LA COMISIÓN ESTATAL INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESUS ANDRES LOYA CARDONA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

**17.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE ARMONIZARLO CON LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA LEY ESTATAL EN LA MATERIA**,** QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.

**18.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON RELACIÓN A DAR CERTEZA JURÍDICA DE LAS PENAS A LAS QUE SON SUSCEPTIBLES LAS PERSONAS QUE INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN TIPO PENAL, QUE PRESENTÓ EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCUINARIO INSTITUCIONAL, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.

**19.-** SE APROBÓ POR MAYORIA DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEIDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE AUTORICE A CELEBRAR UN CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO Y LA EMPRESA “MONUMENTOS PUBLICITARIOS S. DE R. L. DE C.V.”, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES, CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y PAGO DE DERECHOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO.

**20.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEIDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, REFERENTE A LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO.

**21.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEIDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2º DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO DE LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE COAHUILA, EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL.

**22.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEIDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDES, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, POR LA QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER NUEVAS ATRIBUCIONES PARA APOYAR A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AL PRESENTARSE UNA EMERGENCIA SANITARIA O DESASTRE NATURAL.

**SE CONOCIÓ Y RESOLVIÓ SOBRE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO:**

**23.-** SE APROBÓ POR UNANIIDAD DE VOTOS “EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL, A FIN DE QUE CONTEMPLE LA IMPLEMENTACIÓN PERMANENTE DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ENTORNO AL COMBATE CONTRA LAS ADICCIONES Y USO DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD”, QUE PRESNTÓ LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

**24.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO PARA QUE HAGA USO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DAR CELERIDAD A LAS AUDIENCIAS, CITAS Y NOTIFICACIONES QUE QUEDARON PENDIENTES EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MONCLOVA, ASÍ COMO LAS QUE SE HAN ACUMULADO DESDE ESTA CONTINGENCIA SANITARIA”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA.

**25.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LA AUTORIDAD EDUCATIVA TANTO FEDERAL COMO ESTATAL, PARA ELIMINAR CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EN EL CASO DE LA ESCUELAS PRIVADAS OTORGAR DESCUENTOS ANTE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL COVID-19”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES.

**26.-** SE APROBÓ POR UNAIMIDAD DE VOTOS , “EXHORTAR A LAS Y LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DE SUS ENTIDADES FEDERATIVAS, CONDUZCAN Y EJECUTEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, CON ESTRICTO APEGO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN ESPECIAL, AQUELLAS QUE IMPLIQUEN LA UTILIZACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA”, QUE PREENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.

**27.-** SE APRBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LOS ALCALDES DE LOS 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA QUE IMPLEMENTEN O, EN SU CASO, CONTINÚEN REALIZANDO JORNADAS DE VIGILANCIA DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS EN TODOS LOS COMERCIOS, TIANGUIS, MERCADOS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS QUE REANUDARON ACTIVIDADES DENTRO DE SUS JURISDICCIONES”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.

**28.-** EN VIRTUD, DE QUE POR MAYORIA DE VOTOS NO FUE CALIFICADA COMO DE UREGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “EXHORTAR TANTO PARA LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA, COMO PARA LA SECRETARIA DEL TRABAJO FEDERAL, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, PARA EL EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, COMO INSTANCIAS PROTECTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y DE LA JUSTICIA LABORAL EN NUESTRO PAÍS, RESPECTIVAMENTE, ABRAN INVESTIGACIONES DE OFICIO PARA VELAR POR EL IRRESTRICTO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES, DEL CONTINGENTE DE MÉDICOS CUBANOS QUE FUERON CONTRATADOS TANTO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, COMO POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, LOS CUALES FUERON ENVIADOS A NUESTRO PAÍS POR EL RÉGIMEN DE LA DICTADURA SOCIALISTA DE CUBA, DADO QUE EXISTEN SERIOS INDICIOS Y CATEGÓRICOS SEÑALAMIENTOS, DE QUE TALES PROFESIONISTAS ESTÁN SOMETIDOS A UN SISTEMA DE TRABAJO ILEGAL POR PARTE DEL RÉGIMEN CUBANO, QUE LOS OBLIGA A PRESTAR ESE TIPO DE SERVICIOS SIN EL PAGO DEBIDO DE SU SALARIO, COMO UNA NUEVA ESPECIE DE ESCLAVITUD O DE SUMISIÓN INVOLUNTARIA A DICHO GOBIERNO, PUESTO QUE LA FORMA DE SU CONTRATACIÓN ES A TRAVÉS DEL PROPIO RÉGIMEN SOCIALISTA, QUIEN ES EL QUE SE BENEFICIA Y RECIBE LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TALES GALENOS, SIN QUE TALES PROFESIONISTAS DE LA SALUD QUE VINIERON A MÉXICO Y ESTÁN PRESTANDO UN SERVICIO LABORAL SUBORDINADO Y DIRECTO, ESTÉN PERCIBIENDO SU SALARIO DEVENGADO DE FORMA DIRECTA, OPORTUNA, ÍNTEGRA, JUSTA, Y DE COMPROBARSE TAL VIOLACIÓN A LA JUSTICIA LABORAL Y A SUS DERECHOS HUMANOS, SE RECOMIENDE Y EXIJA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE YA NO LE ENTREGUEN AL GOBIERNO CUBANO TALES EROGACIONES, SINO QUE SE PAGUE DIRECTAMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A CADA UNO DE LOS MÉDICOS CUBANOS CONTRATADOS, TAL Y COMO LO ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS PLASMADOS EN NUESTRA LEY FUNDAMENTAL, QUE CLARAMENTE ESTÁN ESPECIFICADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NORMAS VIGENTES QUE INELUDIBLEMENTE SE DEBEN DE RESPETAR EN BENEFICIO DE TALES TRABAJADORES”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, LA PRESIDENCIA LA TURNÓ PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

**29.-** EN VIRTUD, DE QUE POR MAYORIA DE VOTOS, NO FUE CALIFICADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO QUE, INFORME A LA BREVEDAD A ESTE PODER LEGISLATIVO LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA DEUDA COAHUILENSE (NETA Y DE PROVEEDORES) SE INCREMENTÓ DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN; ASÍ COMO EL TOTAL DE PAGOS DE SERVICIO A LA MISMA QUE SE HAN REALIZADO HASTA LA FECHA PRESENTE”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ, LA PRESIDENCIA LA TURNÓ PARA LOS EFECTO PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE FINANZAS.

**30.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “SOLICITAR A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA QUE, EN CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN PERSECUTORA DE DELITOS, PERMANEZCA AL PENDIENTE DE LA AUDIENCIA QUE PRECISAMENTE HOY -17 DE JUNIO DE 2020- CELEBRARÁ LA CORTE DEL SUR DE TEXAS EN LA QUE SE DECLARARÁ CULPABLE DE VARIOS DELITOS EL EXGOBERNADOR DEL ESTADO JORGE JUAN TORRES LÓPEZ, Y CONFORME A LOS CANALES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES, SOLICITE COPIA OFICIAL DE LAS ACTUACIONES DE LA AUDIENCIA Y TOME AQUÍ LAS MEDIDAS JURÍDICAS QUE CORRESPONDAN” QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA.

**31.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESNETADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “EXHORTAR AL CONTRALOR MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL ESTADO, PARA QUE INICIEN DE OFICIO UNA INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE EXISTENCIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEPOTISMO, CONTRATACIÓN INDEBIDA Y LO QUE RESULTE, COMETIDAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE COAHUILA EL C. JOSÉ MARÍA MORALES PADILLA Y/O LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE ESA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, A FIN DE QUE SE DETERMINE SU GRADO DE RESPONSABILIDAD EN LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA CONTRATACIÓN DE FAMILIARES CONSANGUÍNEOS Y POR AFINIDAD, PARA EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ESTO AL INCUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODA VEZ QUE ESTO PUEDE SER CONSTITUTIVO DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE O INCLUSIVE DELICTIVA, LA CUAL DEBE SER SANCIONADA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE, LA PRESIDENCIA LA TURNÓ A LA COMIIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS COSNTITUCIONALES Y JUSTICIA PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES.

**32.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCUÓN, “EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO FEDERAL, ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, PARA QUE RECTIFIQUE LA DECISIÓN DE REDUCIR EL PRESUPUESTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (CAED)”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA, LA PRESIDENCIA LA TURNÓ PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIA Y ACTIVIDADES CIVICAS.

**33.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCUÓN, “QUE ESTE H. PLENO, PREVIO ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, SOLICITE AL SECRETARIO DE FINANZAS, EL CUMPLIMIENTO DEL INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS QUE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DEBE PRESENTAR AL CONGRESO EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ, LA PRESIDENCIA LA TURNÓ PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE FINANZAS.

**34.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCUÓN “SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA LA REAPERTURA DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR.

**35.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCUÓN “POR EL QUE SE SEÑALAN DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS POZOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EDGAR SÁNCHEZ GARZA.

**AGENDA POLÍTICA:**

**36.-** QUEDÓ ÍNTEGRAMENTE TRANSCRITO EN EL DIARIO DE LOS DEBATES EL PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, “CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 170 DE LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA”.

**37.-** QUEDÓ ÍNTEGRAMENTE TRANSCRITO EN EL DIARIO DE LOS DEBATES EL PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EDGAR SÁNCHEZ GARZA, “CON RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA 2020”.

**37.-** SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, “REFERENTE A LA NECESIDAD DE SEGUIR RESGUARDÁNDOSE, NO SALIR, SOLO SI ES ESTRICTAMENTE NECESARIO POR ACTIVIDADES ESENCIALES Y NO BAJAR LA GUARDIA EN ESTOS MOMENTOS DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19”.

**38.-** SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA,“EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR QUE REALIZA EL GOBERNADOR DEL ESTADO, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA POR EL COVID-19”.

**39.-** SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS, “PARA RECONOCER AL GOBERNADOR DEL ESTADO Y A LOS 38 ALCALDES DE NUESTRA ENTIDAD, POR SU DESTACADA LABOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, QUE COLOCA A COAHUILA ENTRE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA MÁS PACÍFICOS, DE ACUERDO CON EL ÍNDICE DE PAZ EN MÉXICO 2020, PUBLICADO POR EL IMCO”.

EN BREVES MINUTOS, SE PRESENTARON LOS LEGISLADORES QUE NO PASARON LISTA AL INICIO DE LA SESIÓN, ASISTIENDO FINALMENTE 24 DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DIO POR CONCLUIDA LA SESIÓN SIENDO LAS 13 HORAS, CON 20 MINUTOS, DEL MISMO DÍA, CITANDO A LA DECIMA OCTAVA SESIÓN, A LAS 10:00 HORAS, DEL EL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE.**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA.**  **SECRETARIA** | **DIP. BLANCA EPPEN CANALES.**  **SECRETARIA** |

**INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

**RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO**

**24 DE JUNIO DE 2020**

**1.-** OFICIO REMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA, MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RELATIVA AL CUADERNO DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 01/2020, DERIVADO DEL EXPEDIENTE ELECTORAL 41/2019, CON RELACIÓN AL RECURSO DE QUEJA PRESENTADO POR JAVIER GARZA ANICO Y OTROS.

**SE TURNÓ A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES**

**2.-** ESCRITO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA LOSINFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

**3.-** INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO LA DESINCORPORACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 5,685.400 M2, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, PARA QUE LO ENAJENE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DE ESTADO DE COAHUILA DE ZRAGOZA, A TRAÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**4.-** ESCRITO SUSCRITO POR LA SÍNDICA DE MAYORÍA Y LOS REGIDORES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DEL AYUNTAMIENTO DE PARRAS, MEDIANTE EL CUAL RATIFICAN LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DICHO AYUNTAMIENTO, PRESENTADA EN ESTE CONGRESO

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**5.-** OFICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO, PARA CONTINUAR CON LA ENAJENACIÓN A TITULO GRATUITO DE UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 32,532.76 M2, UBICADO EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO FRACCIÓN DE MITAD ORIENTE DE DICHA CIUDAD, PARA ENAJENARLO A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**INFORME SOBRE EL TRAMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS EN LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO EL 17 DE JUNIO DE 2020.**

Sobre el tramite realizado respecto de las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión celebrada el 17 de junio de 2020, el Pleno del Congreso del Estado, informa lo siguiente:

**1.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Secretaria de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, “Para exhortar respetuosamente a la Secretaria de Salud Estatal, a fin de que contemple la implementación permanente de una campaña de promoción y sensibilización social entorno al combate contra las adicciones y uso de sustancias nocivas para la salud”, para los efectos procedentes.

**2.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada Rosa Nilda González Noriega, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Secretaría del Trabajo para que haga uso de los medios tecnológicos necesarios para dar celeridad a las audiencias, citas y notificaciones que quedaron pendientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Monclova, así como las que se han acumulado desde esta contingencia sanitaria”, para los efectos procedentes.

**3.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió a la Secretaria de Educación Federal y a la Secretaria de Educación de Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila,“Con la finalidad de exhortar a la autoridad educativa tanto federal como estatal, para eliminar cuotas de inscripción en todos los niveles educativos de la educación pública y en el caso de la escuelas privadas otorgar descuentos ante la situación económica del covid-19”, para los efectos procedentes.

**4.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió a la Gobernadora y los Gobernadores de las Entidades Federativas y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Fiscalía General del Estado de Jalisco la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta respetuosamente a las y los Gobernadores de los estados así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a que en coordinación con los Municipios y Alcaldías de sus entidades federativas, conduzcan y ejecuten las medidas de seguridad necesarias para prevenir la propagación del covid-19, con estricto apego al principio de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, en especial, aquellas que impliquen la utilización de la fuerza pública”, para los efectos procedentes.

**5.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió a los 38 Ayuntamientos de la entidad la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, “Con el objetivo de exhortar a los Alcaldes de los 38 Municipios del Estado para que implementen o, en su caso, continúen realizando jornadas de vigilancia de los protocolos sanitarios en todos los comercios, tianguis, mercados y demás establecimientos que reanudaron actividades dentro de sus jurisdicciones”, para los efectos procedentes.

**6.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, “Con el objeto de que esta Soberanía realice un respetuoso exhorto tanto para la Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, como para la Secretaria del Trabajo Federal, Luisa María Alcalde Luján, para el efecto de que en el ámbito de sus competencias, como Instancias Protectora de los Derechos Humanos, y de la Defensa de los Derechos y de la Justicia Laboral en nuestro País, respectivamente, abran investigaciones de oficio para velar por el irrestricto respeto de los Derechos Humanos y Laborales, del contingente de Médicos Cubanos que fueron contratados tanto por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, como por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los cuales fueron enviados a nuestro País por el Régimen de la Dictadura Socialista de Cuba, dado que existen serios indicios y categóricos señalamientos, de que tales Profesionistas están sometidos a un sistema de trabajo ilegal por parte del Régimen Cubano, que los obliga a prestar ese tipo de servicios sin el pago debido de su salario, como una nueva especie de esclavitud o de sumisión involuntaria a dicho gobierno, puesto que la forma de su contratación es a través del propio Régimen Socialista, quien es el que se beneficia y recibe los pagos por los servicios prestados de tales Galenos, sin que tales profesionistas de la salud que vinieron a México y están prestando un servicio laboral subordinado y directo, estén percibiendo su salario devengado de forma directa, oportuna, íntegra, justa, y de comprobarse tal violación a la Justicia Laboral y a sus Derechos Humanos, se recomiende y exija al Gobierno de la República, y al de la Ciudad de México, que ya no le entreguen al Gobierno Cubano tales erogaciones, sino que se pague directamente los servicios profesionales a cada uno de los Médicos Cubanos contratados, tal y como lo establecen los principios Constitucionales y de Derechos Humanos plasmados en nuestra Ley Fundamental, que claramente están especificados en la Ley Federal del trabajo, normas vigentes que ineludiblemente se deben de respetar en beneficio de tales trabajadores”, para los efectos procedentes.

**7.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, “Con objeto de que este H. Pleno solicite a la Secretaría de Finanzas del Estado que, informe a la brevedad a este Poder Legislativo los motivos por los que la Deuda Coahuilense (neta y de proveedores) se incrementó durante la presente administración; así como el total de pagos de servicio a la misma que se han realizado hasta la fecha presente”, para los efectos procedentes.

**8.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Juan Antonio García Villa, “Mediante el cual se propone a este Pleno solicite a la Fiscalía General del Estado de Coahuila que, en cumplimiento de su función persecutora de delitos, permanezca al pendiente de la audiencia que precisamente hoy -17 de junio de 2020- celebrará la Corte del Sur de Texas en la que se declarará culpable de varios delitos el exgobernador del estado Jorge Juan Torres López, y conforme a los canales institucionales correspondientes, solicite copia oficial de las actuaciones de la audiencia y tome aquí las medidas jurídicas que correspondan”, para los efectos procedentes.

**9.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, “Con objeto que el H. Pleno del Congreso, exhorte al Contralor Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, así como al Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado, para que inicien de oficio una investigación por la posible existencia de faltas administrativas, actos de corrupción, nepotismo, contratación indebida y lo que resulte, cometidas por el Alcalde Municipal de Ramos Arizpe Coahuila el C. José María Morales Padilla y/o los servidores públicos integrantes de esa administración municipal y de quien o quienes resulten responsables, a fin de que se determine su grado de responsabilidad en la conducta desplegada por la contratación de familiares consanguíneos y por afinidad, para el desempeño de trabajos en la administración pública municipal, esto al incumplir con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, toda vez que esto puede ser constitutivo de una falta administrativa grave o inclusive delictiva, la cual debe ser sancionada”, para los efectos procedentes.

**10.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Educación, Cultura, Actividades Cívicas y Familia de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, “Mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para que rectifique la decisión de reducir el presupuesto de los centros de atención para estudiantes con discapacidad (CAED)”, para los efectos procedentes

**11.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Finanzas de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, “Con objeto de que este H. Pleno, previo análisis de la Comisión de Finanzas, solicite al Secretario de Finanzas, el cumplimiento del informe mensual de ingresos y egresos que el Ejecutivo del Estado debe presentar al Congreso en los términos de la fracción XIV del artículo 84 de la Constitución Política del Estado”, para los efectos procedentes.

**12.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila,“Por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya la reapertura de la oficina de representación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Ciudad Acuña, Coahuila”, para los efectos procedentes.

**13.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo, planteada por el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria “General Francisco L. Urquizo”, “Por el que se señalan diversas irregularidades en el manejo y funcionamiento de algunos pozos de agua en el municipio de San Pedro, Coahuila”, para los efectos procedentes.

**A T E N T A M E N T E.**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 24 DE JUNIO DE 2020.**

**EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.**

**DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Iniciativa que presenta la diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; de conformidad a las atribuciones establecidas en los artículos 59 Fracción I, y 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos** **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que** **se modifica el contenido del artículo 158-S de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en la siguiente:**

Exposición de motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la fracción IV del artículo 31 el régimen de principios que impera en el sistema tributario mexicano, al tenor de la siguiente redacción:

…. Son obligaciones de los mexicanos:

…..

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido y definido los principios rectores del sistema tributario mexicano, destacando y siendo obligatorios dentro de todo el marco legal hacendario nacional, así como del local, los siguientes: legalidad tributaria, proporcionalidad, equidad y progresividad tributaria.

Destacan entre otros, los siguientes, que explican a detalle los principios fiscales del sistema fiscal mexicano:

Novena Época

Registro: 163097

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXIII, Enero de 2011

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXXVI/2010

Página: 56

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NO TUTELA QUE LA DEBIDA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN TRIBUTO SE HAGA BAJO UN ENTORNO PROPORCIONAL Y EQUITATIVO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para evitar que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del gravamen, el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, y para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien los precise. Asimismo, al atender a la interacción de dicho principio tributario con la garantía de seguridad jurídica, en su vertiente de certeza manifestada en un suficiente desarrollo normativo, ha sostenido que el legislador no debe prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. Sin embargo, este Alto Tribunal no ha sostenido que en cumplimiento al principio de legalidad tributaria, el legislador esté obligado, adicionalmente, a tutelar los diversos principios de proporcionalidad y equidad, como si aquél fuera una meta-garantía constitucional que se infringiría siempre que se faltara a la proporcionalidad o a la equidad aunque, desde luego, el legislador debe velar por que no se violen los principios mencionados en último término, sin que ello derive del principio de legalidad tributaria.

Novena Época

Registro: 163980

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXII, Agosto de 2010

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: P. XXXV/2010

Página: 243

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RESPETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS, QUE ÉSTA ENCUENTRE RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO GRAVADO Y QUE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE GRAVABLE SE RELACIONEN ESTRECHAMENTE.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varios criterios sobre el aludido principio tributario derivado de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que conviene considerar al analizar si una contribución lo respeta: I. Originalmente no se reconocía en el citado precepto constitucional una verdadera garantía hacia los gobernados, sino sólo la facultad potestativa del Estado relativa a su economía financiera; II. Posteriormente, se aceptó que el Poder Judicial de la Federación estudiara si una ley transgredía dicho numeral considerando que aunque no se encontrara dentro del capítulo relativo a las garantías individuales, su lesión violaba, en vía de consecuencia, los artículos 14 y 16 constitucionales; III. Después, se reconoció que aquel numeral contempla una verdadera garantía hacia los gobernados cuya violación era reparable mediante el juicio de garantías considerando lo exorbitante y ruinoso de una contribución; IV. Ulteriormente, se aceptó que la proporcionalidad es un concepto distinto a lo exorbitante y ruinoso estableciendo que su naturaleza radica en que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de manera que quienes tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Conforme a estas bases se desarrolló el ámbito de aplicación o alcance del principio de proporcionalidad a cada uno de los elementos de los tributos directos: i) Referido a la tasa o tarifa, se consideró que el pago de los tributos en proporción a la riqueza gravada puede conseguirse no sólo mediante parámetros progresivos, sino igualmente con porcentajes fijos; ii) En relación con los sujetos, se estableció que las contribuciones deben estar en función de su verdadera capacidad, es decir, existir congruencia entre el gravamen y su capacidad contributiva, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público; iii) Por cuanto se refiere a la base, tomando en cuenta que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica y que las consecuencias tributarias son medidas en función de la respectiva manifestación de riqueza gravada, siendo necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto; y iv) Finalmente, por lo que se refiere al objeto, se estableció que para evaluar la capacidad contributiva del causante, ésta debía estar en relación directa con el objeto gravado. Acorde con lo anterior, se concluye que un tributo directo respeta el principio de proporcionalidad tributaria, cuando exista congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva de los sujetos, que ésta encuentre relación directa con el objeto gravado y que el hecho imponible y la base gravable tengan igualmente una sensata correspondencia, pues de no colmarse alguno de estos parámetros aquél será inconstitucional.

170651. 1a. CCXLIX/2007. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Pág. 14.

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LA PROGRESIVIDAD COMO CRITERIO PROPIO DE DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NO SE LIMITA AL ANÁLISIS DE LA IMPOSICIÓN, SINO QUE TAMBIÉN PUEDE INCLUIR JUICIOS EN TORNO AL REPARTO DIFERENCIADO DEL GASTO PÚBLICO. Algunos sectores de la ciencia económica sostienen que el establecimiento de impuestos progresivos es deseable, pero lo cuestionan como algo complejo; inclusive se ha señalado que la calificación de progresividad no debe formularse considerando exclusivamente el aspecto recaudatorio del fenómeno financiero, sino que también deben valorarse los efectos que corresponden a los sistemas del gasto. En este sentido, en la evaluación de las diferencias que se aprecian en la tributación de los individuos con distintas características puede válidamente involucrarse la diversa distinción derivada de las asignaciones otorgadas a quienes tienen diferentes necesidades, en la parte del fenómeno relacionada con el gasto público. Así, no debe soslayarse que la progresividad del sistema tributario y su intrínseca justicia pueden garantizarse si éste resulta coherente e integrado con el gasto público, que debe dirigirse a satisfacer las prioridades que le asigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendente a lograr una igualdad de hecho. En tal virtud, la desigualdad cualitativa indispensable para cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, es la que se realiza mediante la progresividad global del sistema fiscal en que se alienta la aspiración a la redistribución de la renta, propósito que puede conseguirse a través de la tributación diferenciada, y también mediante el reparto diferenciado del gasto público, atendiendo a las necesidades sociales que el texto constitucional reconozca.

Séptima Época; Registro digital: 1001817; Instancia: Sala Auxiliar; Jurisprudencia.

Fuente: Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Tercera Parte - Históricas Primera Sección – SCJN. Materia(s): Constitucional; Tesis: 198 (H); Página: 2819

IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. TARIFAS PROGRESIVAS [TESIS HISTÓRICA].

En mérito de su debida función en la doctrina fiscal, habrá que contestar que lo arbitrario de una tarifa progresiva es que quede a juicio de la autoridad fiscal determinar la razón por la cual la escala impositiva deberá ser proporcionalmente establecida por la ley, en relación con las funciones que solventa el impuesto en la sociedad actual y que ha llegado a comprender, dentro del gasto público, las prestaciones de carácter social a cargo del Estado, registradas y contabilizadas en el presupuesto de egresos de una nación. La cuota progresiva, como la contenida en los artículos 24, reformado, y 55 de la referida Ley de 1953, cumplen mejor la adaptación de la carga del impuesto a la capacidad contributiva del deudor de éste, pues el punto de partida de toda progresión fiscal parte del principio de la capacidad contributiva del obligado, lo que motiva que el impuesto sea en proporción a esa capacidad contributiva y que los que tienen mayores bienes económicos paguen mayores impuestos, sin que ello signifique romper con el principio de igualdad, dado que ésta sólo opera con respecto a las personas que tienen igual situación económica. El ideal de justicia que debe cumplir la legislación fiscal, es acercarse, lo más que pueda, a la capacidad contributiva personal del deudor del impuesto o a la capacidad contributiva real, si el tributo se decreta, por caso, en razón directa de la propiedad o posesión de un bien inmueble rural o urbano, fuente del impuesto predial.

Novena Época

Registro: 198403

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

V, Junio de 1997

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: P./J. 41/97

Página: 43

EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.

El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

Los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y progresividad tributaria deben observarse en todas las leyes tributarias del país, de los tres órdenes de gobierno; ya que le garantizan al gobernado la seguridad jurídica, la certeza y la legalidad plena a la hora de cumplir con el pago de sus impuestos.

Es el caso, que, en la Constitución Política del Estado, tenemos lo siguiente:

*Artículo 158-S. Toda contribución que establezca el Congreso del Estado para integrar la hacienda municipal, deberá cumplir los principios de equidad y proporcionalidad a que se refiere la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Faltan, como se aprecia, dos principios: legalidad y progresividad.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de

DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO****: Se modifica el contenido del artículo 158-S** de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

**Artículo 158-S. Toda contribución que establezca el Congreso del Estado para integrar la hacienda municipal, deberá cumplir los principios de legalidad, equidad proporcionalidad y progresividad a que se refiere la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

**…**

TRANSITORIOS

**Único. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de junio de 2020**

DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 158-S DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 7º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN POR IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo quinto del artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Como todos ustedes saben, el 28 de junio de cada año se conmemora el día internacional del orgullo LGBTTTIQ+, recordando la larga lucha que las personas pertenecientes a la diversidad sexual han tenido que enfrentar en contra de un sistema que hasta el día de hoy, continúa siéndoles adverso, a pesar de los grandes avances en materia social y legislativa, que se han venido ganando gracias al activismo y al trabajo de visibilización de las diferentes asociaciones y colectivos.

El 28 de junio, no sólo se rememora la serie de protestas y manifestaciones que ocurrieron en el barrio neoyorkino de Stonewall, en donde un grupo de mujeres y hombres trans se enfrentaron a golpes en contra de los policías que constantemente abusaban de su poder mediante la violencia y la represión. Quien diría que ese pequeño momento de resistencia movilizaría a toda la población LGBT en torno a la exigencia de un trato igual, de mayor libertad y de mayor respeto.

Hoy a más de 50 años del inicio de esa lucha, la población LGBT y en especial quienes se identifican como personas transgénero o transexuales, continúan siendo víctimas de discriminación, violencia y asesinato. En un contexto de indiferencia e impunidad, pues su forma de vestir, su forma de actuar pero, sobre todo, su forma de vivir, continúan siendo una molestia para la sociedad más conservadora de este país.

De acuerdo con los datos de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes por Odio y Homofobia, México ocupa el segundo lugar en crímenes por homofobia en América Latina, con un total de 1218 asesinatos en los últimos años, sólo después de Brasil. Además, el reporte realizado por esta asociación asegura que el 96% de los crímenes son en contra de personas travestis, trans género y transexuales y que la edad promedio de las víctimas es de entre 30 y 39 años.[[1]](#footnote-1)

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en su informe “Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América”, que las estadísticas disponibles no reflejan la verdadera dimensión de la violencia que enfrentan las personas LGBTI en el continente americano. Señalando que: “muchos casos de violencia contra personas LGBT no se denuncian ya que muchas personas, temiendo represalias, no quieren identificarse como LGBT o no confían en la policía o en el sistema judicial”[[2]](#footnote-2).

Pese a este contexto de violencia, discriminación y desconfianza tanto social como institucional, nuestro país camina hacia adelante en materia de los derechos de la diversidad sexual, o al menos existe ese compromiso por parte del Estado Mexicano, que ha impulsado políticas públicas para combatir la discriminación, tal es el caso de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual sostiene que: “El gobierno federal priorizará las libertades por sobre las prohibiciones, impulsará los comportamientos éticos más que las sanciones y respetará escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos en todos los aspectos: las posturas políticas e ideológicas, las creencias religiosas, las preferencias sexuales”[[3]](#footnote-3).

Desde aquí, aprovechamos para hacer un llamado al Gobierno Federal, a que conserve aquellas instituciones como la CONAPRED, que han sido parte fundamental en la lucha contra la discriminación de la población LGBTTTIQ+ y cuyo trabajo ha sido cuestionado por el ejecutivo recientemente.

En el ámbito estatal, el Plan de Desarrollo de Coahuila de Zaragoza para el año 2017-2023 prevé poner en marcha una estrategia de atención integral y efectiva en favor de personas que padecen discriminación, exclusión o abandono”3.

De igual forma, el Congreso del Estado de Coahuila ha sido punta de lanza y un importante aliado para la Comunidad LGBTTTIQ+, pues de aquí se ha legislado en materia de pacto civil, matrimonio igualitario, adopción a parejas del mismo sexo e incluso en 2018, aprobamos una nueva ley del registro civil que permite el cambio de identidad de género, con esto, nuestra entidad se ha convertido en una de las más protectoras y comprometidas con los derechos de la diversidad sexual.

El Congreso también se iluminó con los colores del arcoíris, como una muestra simbólica del apoyo a esas minorías sexuales, que todos los días buscan a través del activismo, de la educación y de la concientización un mundo más justo, más equitativo y más incluyente, en el que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos con plena libertad sin importar nuestra sexualidad, nuestras preferencias sexuales, o nuestra identidad o expresión de género.

Es por todo lo anterior, que en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ , someto a consideración de este H. Congreso una modificación al artículo 7º de la Constitución Política de Coahuila de Zaragoza, para prohibir expresamente la discriminación por identidad o expresión de género, y con ello, garantizar en el máximo ordenamiento de la entidad, la igualdad y el respeto que las personas transexuales y transgénero merecen, entendiendo que, en materia de derechos se ve debe caminar siempre hacia adelante y nunca dar un paso atrás.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el párrafo quinto del artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Artículo 7…

…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, **la orientación** o preferencias sexuales, **la identidad o expresión de género,** el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de las personas. La ley establecerá mecanismos a favor de las personas, para que el goce de sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, sean reales, efectivos y equitativos dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que salvaguarda esta Constitución.

….

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 24 de junio del 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”; EN EJERCICIO DE LA FACULTAD LEGISLATIVA QUE CONCEDE EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN I, 65 Y 67 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN IV, Y 152 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE LA CUAL PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR EL INCISO 2, DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ASÍ COMO LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 12, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL EFECTO DE REDUCIR LA EDAD MÍNIMA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL EN COAHUILA, DE 35 A 30 AÑOS, LO ANTERIOR, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113, de la Constitución Política del Estado, la Procuración de Justicia es una función esencial y por tanto indelegable del Estado que tiene por objeto proteger los intereses de la sociedad y resguardar la observancia de la ley, particularmente por lo que toca a la investigación y persecución de los delitos del orden común. Se ejerce a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, denominado Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza que se integra por el Ministerio Público, sus órganos auxiliares y áreas de apoyo.

Conforme a lo anterior, el Ministerio Público es la institución única e indivisible, que dirige la investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos y, en su caso, promueve el ejercicio de la acción penal ante los tribunales de justicia, protege y brinda atención a las víctimas del delito y testigos, con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos del imputado y demás intervinientes. En el ejercicio de su función de investigación y persecución de los delitos, el Ministerio Público goza de total autonomía, para garantizar su independencia en la emisión de las determinaciones de su competencia, por lo que ningún funcionario del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder podrá intervenir en sus decisiones, consecuentemente la actuación del personal de Procuración de Justicia se regirá bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, transparencia, objetividad, independencia y respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, el Fiscal General del Estado presidirá al Ministerio Público y será el titular de la Fiscalía, con las facultades y obligaciones que establecen esta Constitución y las leyes, en el ámbito de la investigación y persecución de los delitos, las decisiones del Fiscal General del Estado únicamente estarán sujetas al mandato de la ley.

Ahora bien, el artículo 114 de la Constitución de Coahuila, en su fracción I, inciso 2, expresamente establece que uno de los requisitos para ser designado Fiscal General del Estado, **será el de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación,** y en concordancia con la disposición constitucional antes referida, la fracción II, del artículo 12, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, también reitera como requisito para ocupar dicho cargo la edad mínima de 35 años.

A este respecto, conviene destacar para darle sustento a la reforma que aquí se plantea, **de reducir la edad mínima de 35 a 30 años, para ocupar dicho cargo público**, nuestra propia Constitución de Coahuila, en el artículo 76, fracción II, expresamente estipula que **para ser Gobernador del Estado, se requiere haber cumplido 30 años de edad para el día de la elección**, circunstancia que indica que si la persona que ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, solo requiere contar con **una edad mínima de 30 años para ocupar tan alta responsabilidad política**, de dirigir los destinos de la administración pública de nuestra comunidad, con todos los compromisos y capacidades que para ello se requieren, **debe de resultar lógico que no debe de ser ningún impedimento el que se reduzca a esa misma edad, la capacidad para ser designado Fiscal General del Estado,** puesto que dejar tal requisito en la forma que actualmente está dispuesto, dicha normativa en determinado momento pudiera vulnerar un derecho humano de poder acceder esa oportunidad laboral del orden público, a una persona que esté interesada en alcanzar ese propósito, no obstante que sí reúna todos y cada uno de los demás requisitos que para ese efecto prevé nuestra constitución, más aún, porque estados como el de Chihuahua y Sinaloa, por mencionar solo algunos ejemplos, tales estados en sus ordenamientos constitucionales expresamente prevén en los artículos 121, y 75, respectivamente, **que la edad mínima para ocupar el cargo de Fiscal General y/o Procurador General se sus entidades, es de 30 años,** de ahí, que se someta a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO: SE REFORMA EL INCISO 2, DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 114.-** Los requisitos, la designación, el ejercicio y la remoción del cargo de Fiscal General del Estado, se sujetará a las bases siguientes:

**I…**

**1…**

**2. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación.**

**3…**

**4…**

**5…**

**6…**

**II…**

**1…**

**2…**

**3…**

**4…**

**5…**

**6…**

**III.**

**IV…**

**V…**

**VI…**

**ARTÍCULO SEGUNDO: SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 12, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 12. De los requisitos para ser Fiscal General**

Para ser designado Fiscal General, se requiere:

1. ..
2. **Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;**
3. ..

1. ..

1. ..

1. ..

**TRANSITORIOS**

**ÚNICO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ATENTAMENTE**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de junio de 2020.**

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR EL INCISO 2, DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ASÍ COMO LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 12, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL EFECTO DE REDUCIR LA EDAD MÍNIMA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL EN COAHUILA, DE 35 A 30 AÑOS**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Iniciativa que presenta el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; de conformidad a las atribuciones establecidas en los artículos 59 Fracción I, y 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se adiciona el artículo 171 Bis a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en la siguiente:**

Exposición de motivos

De acuerdo con la Constitución Federal, el Estado Mexicano debe proteger, alentar y fomentar el desarrollo económico, y a la vez, asegurar la permanencia y vigencia de los elementos que conforman el motor de la economía nacional.

Esto lo podemos confirmar al leer los contenidos del artículo 25 constitucional, que disponen:

*…Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.*

*El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.*

*El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.*

*Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.*

Si bien, es verdad que los estados tienen libertad y autonomía legislativa para redactar sus constituciones, lo cierto es que deben apegarse a la Carta Magna Federal en aspectos como: principios, división de poderes, estructura básica de la administración pública, atribuciones de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos; constitucionalidad de las leyes, atribuciones de las autoridades emanadas por elección popular, etc.

Con el pasar de los años, los estados de la República adoptaron dos modelos principales de constitución local: El que se basa en reproducir grandes apartados de la Constitución Federal y, redactando además, lo que por lógica corresponde al ámbito estatal en los términos y condiciones que impone la Constitución General; y, por otra parte, el que se limita sólo a establecer que se respetará y se acatará en todo lo dispuesto por la Carta Magna en materia de derechos humanos y garantías individuales, redactando el resto de sus contenidos con cierta libertad creativa e independencia. Estos dos modelos o formas las podemos encontrar en un porcentaje algo equilibrado entre todas las constituciones locales del país, incluyendo la de la Ciudad de México.

Los estados tienen deberes en materia económica, pues ésta no es una atribución exclusiva del gobierno federal.

Las entidades federativas tienen, entre otras atribuciones en materia económica:

I.- Garantizar el crecimiento sustentable de las actividades económicas.

II.- Promover y apoyar la creación de nuevas empresas y negocios.

III.- Proteger la actividad económica existente, en el entendido de que es la fuente de empleos, impuestos y generación de riqueza.

IV.- Estimular las inversiones nacionales y extranjeras. Y;

V.- Proteger a la industria local, especialmente la mediana y pequeña, de los vaivenes de la economía para evitar el cierre.

Si bien, estados como Coahuila cuentan con leyes de desarrollo económico y de planeación. La protección, fomento y desarrollo de la actividad económica debe ser una premisa constitucional y no solo secundaria. Las razones son lógicas: Es una actividad esencial del estado, sin la cual, de hecho, todo lo demás no existiría; el empleo depende de la actividad económica, y el bienestar de las familias depende del empleo. En muchos casos, el cierre de las empresas medianas y pequeñas se da por las cargas fiscales, por la falta de créditos de emergencia y por factores relacionados con políticas publicas económicas y fiscales equivocadas. El estado debe responder a estas necesidades y hacer lo que sus atribuciones le permiten para alentar, promover y proteger la actividad económica.

Es pues un deber constitucional, que debe estar plasmado en el máximo ordenamiento local.

Derecho Comparado

Revisamos diversas constituciones locales, encontrando lo siguiente:

Constitución Política del Estado de Hidalgo

*Artículo 84.- En un sistema de economía mixta, el Gobierno Estatal, bajo normas de equidad social, producción y productividad, dará protección, apoyo, ayuda y estímulos a las empresas de los sectores social, y privado, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, cuando contribuyan al desarrollo económico y social, en beneficio de la colectividad, procurando que en el aprovechamiento de los recursos se cuide su conservación y el medio ambiente.*

Constitución Política del Estado de Yucatán

Artículo 87.- Son funciones específicas del Estado:

…

*XIII.- Apoyar e impulsar a las empresas del sector social y las del sector privado propiedad de nacionales, siempre y cuando contribuyan, en el marco de la planeación del desarrollo económico estatal, a los objetivos que en su caso se establezcan;*

Constitución Política del Estado de Durango

*ARTÍCULO 42.- El Estado promoverá el desarrollo económico sustentable, basado en la regulación y fomento del uso de tecnologías para el manejo adecuado del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. En el Estado será prioritario el desarrollo y aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.*

*Las leyes definirán los mecanismos para el fomento y promoción de la inversión, el desarrollo económico, el empleo, la competitividad, la productividad, la conectividad de la economía local con los mercados nacionales y extranjeros, el desarrollo científico y tecnológico y la innovación para el desarrollo económico sustentable; e incentivarán, apoyarán y protegerán a las empresas y a los particulares establecidos en la entidad cuya actividad productiva se realice con observancia de las normas de protección ambiental.*

Constitución Política de Baja California Sur

T I T U L O P R I M E R O

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

…

*6º- Es función del Estado promover el desarrollo económico y social garantizando que este sea sustentable e integral y regular el proceso demográfico, para procurar el progreso social compartido y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y generación de empleo.*

*El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica estatal, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

La pandemia que ha sufrido el país por causa del Covid-19 nos ha dejado muchas lecciones a los mexicanos, una ellas, la que nos interesa para los fines de la presente reforma, es que ni el Estado Mexicano, ni los estados de la República y la Ciudad de México estaban preparados para enfrentar las graves, extensas y prolongadas afectaciones económicas generadas por este fenómeno sanitario.

Millones de empleos perdidos a nivel nacional, decenas de miles a nivel estatal. Cientos de miles de familias condenadas al hambre y a las carencias extremas por los empleos perdidos.

Y luego, lo que nos falta por ver, la muy lenta recuperación de la normalidad, de la actividad económica, con negocios que cerraron muchos en definitiva al no poder afrontar sus deudas fiscales y a proveedores, el pago de sus nóminas. Otros, abiertos, pero sin clientela, justo por la misma razón, la falta de empleo, de circulante, de consumidores, si la gente no tiene trabajo, no tiene dinero y no consume, se rompe el circulo del dinero, de la economía.

Nuestra constitución local, es de las que justamente, no tienen casi referencias a la economía y al deber del estado de fomentarla y protegerla, como las entidades que ya hemos señalado. Esto en los términos de que es una función del estado, es obligatoria, y debe garantizarse.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de

DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 171 Bis** a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

171 Bis. El Estado, bajo normas de equidad social, producción y productividad, dará protección, apoyo, ayuda y estímulos a las empresas de los sectores social, y privado, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, cuando contribuyan al desarrollo económico y social, en beneficio de la colectividad, procurando que en el aprovechamiento de los recursos se cuide su conservación y el medio ambiente.

El Estado protegerá la actividad económica mediante estímulos fiscales y apoyos financieros cuando esta se vea afectada por crisis o factores de cualquier naturaleza, a fin de preservar el empleo y permitir una recuperación integral y sostenida de la economía.

….

TRANSITORIOS

**Único. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de junio de 2020**

DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 171 BIS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCION VI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X Y XI AL ARTICULO 188 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A FIN DE PROTEGER LA VIDA DE LAS MUJERES COAHUILENSES Y CONTEMPLAR NUEVAS CIRCUNSTANCIAS PUNIBLES DENTRO DEL DELITO DE FEMINICIDIO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Los derechos humanos, consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.

Entre todas estas prerrogativas reconocidas desde nuestra carta magna, la de mayor importancia sin duda alguna es el derecho a la vida y a la libertad, ya que, ejerciéndolos, tenemos la oportunidad de desarrollar otra serie de derechos básicos como por ejemplo la no esclavitud, no estar sujeto a ninguna clase de tortura, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, a la libertad de opinión y de expresión, al trabajo, entre muchos más.

Este derecho es más que necesario, es el primordial de todo ser vivo, y sobre todo, es el detonante para poder hacer reales todos los demás derechos universales, constituyendo así la primer base para la prohibición formal y legal en cuanto a causar intencionalmente la muerte a una persona por cualquier medio o razón.

En esta tesitura, es que decimos que por ley todos estamos por igual; hombres, adultos, jóvenes, las mujeres y niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de equidad sobre todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación y violencia, con la única finalidad de vivir en paz y en un ambiente seguro para su desarrollo.

Sin embargo, no podemos negar nuestra actualidad, y la violencia (en específico contra la mujer) ha conducido a la dominación de masas, de grupos y particularmente de géneros. Hoy vemos desatada una ola de violencia y discriminación contra la mujer, nos topamos con la interposición de obstáculos sociales, además que claramente se le suma el freno del avance en terrenos de igualdad, desarrollo y paz. Esta conducta, sin duda alguna viola, menoscaba e impide el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción, en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura.

Cabe precisar que la expresión “violencia contra la mujer” se refiere a todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real, un daño físico, sexual o psicológico, y en la cual, entre otras, se incluyen las siguientes formas de representarse:

• La violencia y los golpes en la familia, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violación por el marido o algún familiar, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer; y

• La violencia al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el acoso, hostigamiento e intimidación sexual en el trabajo o en instituciones educacionales, la trata de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra.

En sí, todos estos actos y muestras de desprecio, de falta de respeto y de ausencia de empatía, infunden miedo e inseguridad en la vida de quienes la reciben, al mismo tiempo que se obstaculiza o limita su acceso a actividades y recursos básicos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en México:

• Alrededor del 400% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia de pareja, mientras que el 67% han enfrentado incidentes de violencia, por parte de sus compañeros sentimentales o de otras personas de su familia, comunidad de trabajo o escuela; igualmente, 445% de las mujeres que trabaja en fábricas, talleres o maquilas, sufren violencia laboral de manera seguida;

• 40 de cada 100 mujeres de 15 años y más han sido objeto de violencia, en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida;

• Diariamente fallecen 5 mujeres por muertes intencionales, como lo es el feminicidio, mientras que 2 mujeres, optan por el suicidio como forma de librarse de todo el daño que les han hecho.

Por otra parte, la estadística de violencia contras las mujeres en México, realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), dio a conocer los siguientes resultados:

• Del total de mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual, por parte de su pareja o expareja, sólo el 17.8% de las casadas y 37.4% de las separadas denunciaron la agresión.

Entre los principales motivos por los que las mujeres no denuncian la violencia contra ellas, es porque *“se encuentra en la creencia de que se trató de algo sin importancia”* (38.5%), *“por sus hijos”* (23.3%), *“por vergüenza”* (18.6%), *“por miedo”* (17.3%), *“porque no sabían que podían denunciar”* (10.5%) y *“porque no confían en las autoridades”* (8.4%).

Es derivado de todo lo anterior que buscamos dejar claro el trabajo realizado y los planes por emprender para la total protección y promoción de los derechos humanos garantes de igualdad entre hombres y mujeres; esta tarea es una de las primeras responsabilidades de los gobiernos y sin duda alguna hoy se coloca en el centro del trabajo de todo el mundo, toda vez que al fomentar la igualdad de géneros, se lograría un mundo con equilibrio, que constantemente apoye en la lucha por la equidad dentro del marco de los derechos humanos que ya mencionamos con anterioridad.

Por eso es por lo que considero oportuno adicionar algunas fracciones al artículo 188 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de establecer nuevas causales o circunstancias a partir de las cuales se pueda actualizar el delito de feminicidio.

Esto con la firme convicción que cada vez que nuestras mujeres se sientan violentadas psicológicamente, emocionalmente o ya sufran de daños físicos ocasionados, tenga la certeza de acudir a pedir la ayuda ideal para la situación y por supuesto, tenga la respuesta quería por la misma autoridad competente para protegerla.

Es por eso, Diputadas y Diputados que se presenta ante este H. Pleno del Congreso el siguiente:

**P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Se **adiciona**: un párrafo segundo a la fracción IV y las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 188 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 188** (Tipo penal complementado de feminicidio)

….

I al III…

IV. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

**Se presumirá que existió una relación sentimental entre el activo y la víctima cuando sea o haya sido concubina, amasia o novia, del sujeto activo o que ésta haya tenido una relación de hecho por la cual vivieran juntos o mantuvieran relaciones sexuales estables o de forma casual.**

V al VII…

**VIII. Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión hacia las mujeres;**

**IX. Cuando comprobada la relación sentimental, afectiva o de confianza entre el sujeto activo y la víctima, se cometa por celos extremos.**

**X.- Que la mujer sea privada de la vida, por razón de su actividad política, social o por la defensa de derechos humanos, ya sea para obstaculizar y/o impedir su ejercicio, sea solo en perjuicio de la víctima o de forma indirecta de otras mujeres; y**

**XI.- Exista o haya existido una relación de subordinación o alguna circunstancia de discriminación, resultante de una relación desigual entre el sujeto activo y la víctima.**

…

…

**T R A N S I T O R I O S.**

**PRIMERO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMALA FRACCIÓN IV Y ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII. IX. X Y XI AL ARTICULO 188 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A FIN DE PROTEGER LA VIDA DE LAS MUJERES COAHUILENSES Y CONTEMPLAR NUEVAS CIRCUNSTANCIAS PUNIBLES DENTRO DEL DELITO DE FEMINICIDIO.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES A LA LEY ESTATAL DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE PLASMAR EN LA NORMA LOS TÉRMINOS PANDEMIA Y ENDEMIA, PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A TODA ACCIÓN QUE BUSQUE PRESERVAR LA SALUD DE LAS Y LOS COAHUILENSES, EN CASO DE DECLARARSE CONTINGENCIA SANITARIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA, Y**

**CONSIDERANDO**

Que en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.

Que en artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estipula que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Que en la Constitución Federal en su artículo 4°, reza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Que en concordancia con los preceptos internacionales y lo plasmado en nuestra Carta Magna, sugieren la implementación de medidas legislativas que garanticen la salud de los ciudadanos de nuestra entidad, más aun, en casos donde se declare Emergencia Sanitaria por eventos extraordinarios como las epidemias, pandemias o endemias.

Que por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La salud es un tema que nos concierne a todos, en efecto, es un asunto de interés mundial donde los Gobiernos y ciudadanos debemos unificar esfuerzos para mitigar y erradicar cualquier agente infeccioso que pudiese propagarse y convertirse en una amenaza para la humanidad.

Al presentarse alguna enfermedad trasmisible y que tienda a propagarse de manera acelerada, la Organización Mundial de la Salud (OMS), previa evaluación del padecimiento, tiene la facultad de declarar una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Dicha declaratoria puede describirse en cualquiera de los 3 conceptos siguientes:

1. Epidemia, ocurre cuando una enfermedad infecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Cabe decir que existen enfermedades no infecciosas que pueden alcanzar la categoría de epidemia, por ejemplo, la obesidad y la diabetes.
2. Pandemia, es la propagación a nivel internacional de una nueva enfermedad donde la población no tiene inmunidad contra ella. Un ejemplo a destacar fue la Gripe Española, que acabó con la vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial entre los años 1918 y 1919.
3. Endemia, es un proceso patológico que se mantiene en forma estacionaria en una población o espacio determinado durante periodos de tiempo prolongados. Puede tratarse de enfermedades infecciosas o no infecciosas, como son la varicela o en su caso la malaria, que es una infección endémica que sigue afectando a los ciudadanos de África hasta nuestros días.

Acto seguido, en nuestro país, la Secretaría de Salud ejercerá acciones extraordinarias en materia de salubridad, conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de Salud, en el que menciona que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República.

Como vemos, es necesaria la implementación de conceptos idóneos en las leyes locales, a efecto de que no existan vacíos legales que mermen su aplicación, ya que, en la actualidad, las afectaciones por la pandemia de COVID-19 llaman a buscar alternativas que beneficien y salvaguarden la salud de las y los coahuilenses. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos comprometidos en realizar todas aquellas acciones legislativas que guíen el actuar de la autoridad en materia de Salud, y que toda acción, tengan una base jurídica que garantice su aplicación ante eventos extraordinarios de carácter mundial en materia de salubridad.

**Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la fracción IV del artículo 21 y la fracción I del artículo 152 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 135 y 136 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sometemos ante esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de**

**DECRETO**

**ÚNICO. – SE AGREGA UNA PORCIÓN NORMATIVA A LOS ARTÍCULOS 115 Y 118 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 115.** Quedan facultadas las autoridades sanitarias competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias***, pandemias y endemias,*** todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y los reglamentos aplicables.

…

**Artículo 118.** Las autoridades sanitarias del Estado podrán ordenar, por causas de epidemia***, pandemia o endemia,*** la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole.

…

**Artículo 6o.** El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos:

Del I al VIII…

***IX. Coordinar esfuerzos con los distintos sectores del Gobierno Estatal, a fin de llevar a cabo acciones que hagan frente ante cualquier epidemia, pandemia o endemia que se presente en la entidad. Al tratarse de agentes infecciosos que se propagan con rapidez entre la población, la aplicación de la presente fracción tendrá carácter de urgente.***

***…***

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. –**  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

***ATENTAMENTE***

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 24 DE JUNIO DE 2020.**

DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO**

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. BLANCA EPPEN CANALES**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

Fuentes:

1. <https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/>
2. <https://es.wikipedia.org/wiki/Endemia>
3. <https://www.afro.who.int/health-topics/malaria>

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES A LA LEY ESTATAL DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE PLASMAR EN LA NORMA LOS TÉRMINOS PANDEMIA Y ENDEMIA, PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A TODA ACCIÓN QUE BUSQUE PRESERVAR LA SALUD DE LAS Y LOS COAHUILENSES, EN CASO DE DECLARARSE CONTINGENCIA SANITARIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 254 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRÍGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES.**

El que suscribe, **Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,** Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado por el Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila**, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares** en ejercicio de la facultad legislativa que concede el artículo 59 fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, someto a consideración del pleno de esta Honorable Representación iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La obligación de dar alimentos se encuentra prevista legalmente en el estado de Coahuila en la Ley Para la Familia, Título Quinto denominado “Del Parentesco y De los Alimentos”, concretamente en su Capítulo Segundo.

Dentro del articulado que lo compone, se establece que se entiende por alimentos: la alimentación nutritiva, el vestido, la habitación, la atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, la asistencia médica y terapéutica en casos de enfermedad, los gastos relativos al embarazo y el parto, la recreación, así como los cuidados y asistencia que requiera el acreedor alimentario en lo particular.

También se señala que es un derecho imprescriptible e innegociable. Además, la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, como en el caso de padres a hijos hasta determinada edad y condición, y en sentido contrario, cuando los primeros llegan a una edad avanzada, la obligación se contempla también de hijos a padres.

Se trata de un derecho y obligación personalísima, es decir, cualquier cara que se represente, el derecho o la obligación, no le pertenece a nadie más que al sujeto que tiene el carácter previsto en la ley.

En la legislación de nuestro estado, los padres están obligados a dar alimentos a los hijos menores de edad, o bien, a los mayores de edad mientras se encuentren estudiando; tienen obligación también los hijos o hijas para con los padres; y finalmente, los adoptantes a sus adoptados, así como los adoptados a sus adoptantes.

Si bien, la ley también prevé la obligación de otorgar alimentos entre cónyuges, concubinos, y personas con una relación estable, misma que persiste incluso después de extinguida la relación de que se trate, esa obligación, no es la que se aborda en esta ocasión.

Acercándonos al aspecto que busco resguardar con esta iniciativa, por lo que hace a la obligación de dar alimentos, la ley prescribe que:

*“****Los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que debe recibirlos****. Al ser determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario vigente en el Estado, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor.*

*Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, la autoridad judicial competente resolverá con base en la capacidad económica del deudor y el nivel de vida que sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años”*

Aparentemente, podría considerarse entonces que al deudor alimenticio no le podría ser exigible el cumplimiento de tal obligación, por el solo hecho de “no tener posibilidad de darlos”. He ahí el punto de la controversia. La interpretación que busca, evadir cumplir con el deber de dar alimentos basada en una “imposibilidad económica” por falta de ingresos, y aún más, por falta de ingresos comprobables, debe dejar de tener un apoyo en el entramad jurídico, pues es claro que ese no es el espíritu de este Poder Legislativo.

Tan es así, que el artículo 280 de la Ley para la Familia dispone expresamente: *“El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión proporcional a la necesidad del acreedor alimentario y a su capacidad de proporcionarlos o incorporándolo a su familia.”*

Es decir, en última instancia, el deudor alimenticio, para cumplir su obligación tiene, como alternativa a la entrega de un monto específico de dinero, la opción de integrar al acreedor alimentario al espacio en el que habita a fin de compartir en él el sustento y proveerle, en la medida de sus posibilidades, de lo necesario.

Finalmente, en dicha ley, se establece que el incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria, así como el disimulo, la ocultación de bienes o cualquier otra maniobra para eludirlo, se sancionará conforme a las prescripciones del Código Penal.

Ahora bien, por su parte el Código Penal del estado, en su Título Noveno, Capítulo Segundo, establece los Delitos contra la subsistencia familiar, y concretamente el numeral 254 se refiere al Incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias.

Dicha norma, prevé actualmente la posibilidad de imponer una medida de privación de la libertad que puede ir desde los tres meses hasta los tres años, así como la imposición de una multa, la suspensión de los derechos familiares, o bien, la condena a reparar el daño, para aquellos que, teniendo obligación legal de proveer a otros de alimentación, habitación, salud y/o educación respecto, no lo hagan o dejen de hacerlo, en la medida de sus posibilidades, pero solo cuando se acredite que esa falta se da ***“a pesar de tener recursos económicos”****.*

Como puede advertirse, este artículo fue diseñado con la finalidad de establecer el supuesto legal para que una persona, obligada a proporcionar alimentos a otra, pudiera ser castigada con multa, suspensión de derechos de familia, o incluso ser privada de su libertad y condenada a la reparación del daño causado, cuando falte a su obligación.

Sin embargo, la redacción de la misma resulta contradictoria con el supuesto que se busca sancionar, que es el incumplimiento de la obligación de dar alimentos.

Se afirma lo anterior, pues establecer un elemento condicionante para acreditar que la conducta desplegada se adecua al tipo penal previsto en el código, redunda en una mayor dificultad o en la imposibilidad para que el Ministerio Público, en representación del acreedor perjudicado, pueda solicitar del juzgador la sanción correspondiente.

La consecuencia: que un muy alto número de deudores alimentarios sostengan dicha conducta durante todo el tiempo que la obligación le sea exigible, evadiendo la justicia a través de una inactividad irresponsable, y dejando en la indefensión a los menores hijos, o bien, a los padres, en estado de necesidad.

De igual forma, la desafortunada redacción impide que la norma sea eficaz, pues si bien permite que la conducta de incumplimiento pueda ser sancionable para quien tiene y se le puede acreditar la disponibilidad de “recursos económicos”, lo cierto también es que para ellos, el cumplimiento de la obligación la mayoría de las veces no demanda la intervención de las autoridades en materia penal, pues el mismo cumplimiento es alcanzable a través de los procedimientos previstos por otras leyes.

La redacción del artículo 254 vigente en el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, si bien es buena en cuanto al propósito, en las más de las veces, el esfuerzo del Ministerio Público de presentar ante el Juzgador a un deudor alimentario para ser sancionado penalmente se viene abajo cuando el juez considera que no se alcanza a demostrar que éste cuenta con “recursos económicos” para encuadrar el tipo penal, lo cual permite, en la mayoría de los casos, que un deudor alimentario evada la justicia penal por el simple hecho de no trabajar, aun pudiendo hacerlo, o de no percibir ingresos comprobables, y ante ello, resultar invisible ante el sistema financiero.

En resumen, en un gran porcentaje de los casos que se pretenden judicializar esperando una sanción penal para quien falta a su obligación de proporcionar alimentos, resulta que el favorecido es el infractor, al convertirse en una misión imposible acreditar el elemento condicionante de que el incumplimiento se actualiza *“a pesar de tener recursos económicos”* del artículo 254, imposibilitándose con ello que el Ministerio Público pueda concluir favorablemente la pretensión o el objetivo perseguido.

Esta problemática es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. La paternidad y la maternidad en muchos hogares de nuestro país y nuestro estado se vive absolutamente distinto a como las leyes y el deber imponen.

En muchas de las ocasiones, esto sucede pues las leyes tienen lagunas, o bien, contienen elementos que impiden su exigibilidad. Ese es el caso del artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, cuya reforma propongo con calidad de urgente.

Es relevante señalar, que la propuesta que planteo para modificar el artículo 254 del llamado Nuevo Código Penal del estado, se refiere a los casos de incumplimiento de la obligación de dar alimentos entre padres e hijos, adoptantes y adoptados, básicamente, y no así a la que deriva de proveídos judiciales entre cónyuges, concubinos o relaciones estables. A éstos últimos, la sanción penal aplicable está prevista en el artículo 255 de manera específica.

Ampliando un poco el lente analítico, resulta importante considerar que México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes en América Latina y el segundo en el mundo, solo después de Estados Unidos. Coahuila, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e (INEGI) 2018 y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante 2019, se coloca como el estado con mayor número de embarazos de adolescentes por cada 100 mil habitantes, además, seis de sus municipios se encuentran dentro de la lista de los 25 municipios del país con tasas más altas de esta problemática.

Si bien no es éste el único factor que abona al incumplimiento de las obligaciones alimenticias al que nos referimos en la presente iniciativa, lo cierto es que, se presenta como referencia, puesto que ello implica que en nuestro estado existe la misma proporción de jóvenes, que están siendo madres y padres a edad temprana, y que deberían estarse haciendo cargo de manera conjunta con la manutención y el cuidado de los hijos procreados al mismo tiempo que apenas adquieren madurez.

Ahora bien, en la entidad, existen diversas políticas públicas encaminadas a la protección de jóvenes en condición de embarazo adolescente que tienen como finalidad, sobre todo, evitar la deserción escolar y procurar afianzar su personalidad y su autonomía económica a través de habilidades para el trabajo.

Sí, decididamente nosotros apoyamos que desde las instancias públicas se acompañe, apoye y empodere a las mujeres coahuilenses, en esta y en cualquier condición, y no solamente a razón de una condición vulnerable, sino desde el espacio educativo básico y con políticas públicas y acciones gubernamentales y legislativas transversales.

Pues bien, la propuesta que hoy expongo, implica que estas medidas puedan complementarse con otras, como la de garantizar penalmente, con el mismo rigor, pero con menor margen de evasión a la ley, la obligación de contribuir a la alimentación y cuidado de los hijos por parte de los padres y no solamente de las madres, al considerar que aunque hasta hoy se han implementado medidas diversas para hacer exigible dicha obligación, como lo es, incluso el Padrón de Deudores Alimentarios, aun así, la problemática persiste, va en incremento y la incapacidad del estado para sancionarla eficazmente, la hace aún más perniciosa pues se vuelve atractiva para quienes se percatan de este hueco para la justicia.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se reforma el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 254 (Incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias)**

**Se impondrá de tres meses a tres años de prisión, multa, suspensión de los derechos de la familia y la reparación del daño a quien no le proporcione, en lo posible, los recursos necesarios a cualquier persona respecto de la que tenga obligación legal de proveer a su alimentación, habitación, salud y/o educación.**

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 24 DE JUNIO DE 2020**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), PARA EXPEDIR LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

Honorable Asamblea Legislativa:

Con fundamento en el artículo 196, fracción I, de la Constitución Política del Estado y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso, la suscrita, DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), respetuosamente comparezco para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto, para expedir la Ley de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Sustento mi Iniciativa al tenor de la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Debo señalar que esta iniciativa para expedir una nueva ley de educación para el Estado de Coahuila de Zaragoza tiene su origen en dos consideraciones. La primera es que las reformas al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, hace necesario que las legislaturas locales armonicen su legislación en materia de educación con las nuevas disposiciones federales, sobre todo en la distribución de competencias.

En efecto, la Ley Federal es una ley general cuya característica principal es la distribución de competencias entre los diversos órdenes de gobierno, competencias que, en muchos casos, son concurrentes.

Además, el octavo artículo transitorio de la reforma a la Constitución Federal, señala expresamente que las legislaturas locales deberán adecuar su legislación en la materia en el plazo de un año. Debe precisarse que la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo de 2019, por lo que evidente el incumplimiento de esta legislatura a un mandato constitucional.

A mayor abundamiento, el octavo transitorio de la reforma constitucional en materia educativa señala (y cito): “Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia, conforme a este Decreto.”

En segundo lugar, la presentación de esta iniciativa está motivada por un acuerdo asumido en el seno de la coordinación nacional de legisladores locales de MORENA, donde nos comprometimos a presentar esta iniciativa ante nuestras legislaturas.

Por estas razones, debo señalar que la presente iniciativa se basa en un modelo de Ley que elaboró nuestra coordinación nacional. No obstante lo anterior, y después de revisar exhaustivamente el texto propuesto, fue necesario hacerle diversas modificaciones, algunas de presentación y otras de redacción para adecuarlo a nuestra realidad.

Lo anterior no excluye, de ninguna manera, la responsabilidad que asumo al presentar la iniciativa a nombre de mi partido.

Estoy convencida que esta aportación será valorada cuando se legisle en la materia pues está elaborada con el sincero propósito de perfeccionar y desarrollar nuestro sistema educativo en beneficio de las y los coahuilenses.

Reitero mi preocupación por el incumplimiento en que esta Legislatura ha incurrido. Si realmente queremos ser un Congreso independiente no podemos esperar que el Ejecutivo Estatal mande una iniciativa en materia educativa cuando es nuestra obligación legislar en la materia, de conformidad a lo expresamente dispuesto en el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional.

Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta honorable asamblea, a efecto de que se le dé el trámite que corresponda, la siguiente

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**Único.** Se expide la Ley de Educación del Estado de Coahuila para quedar como sigue:

**LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**Título Primero**

**Del derecho a la educación**

**Capítulo I**

**Disposiciones generales**

**Objeto de la ley**

**Artículo 1.** La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado.

Su objeto es regular la educación impartida en el Estado a cargo de las autoridades educativas, sus organismos descentralizados, los municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.

**Distribución de la función** **social educativa**

**Artículo 2.** La distribución de la función social educativa, se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación.

**Participación activa en el Sistema Educativo Estatal**

**Artículo 3.** La autoridad educativa estatal fomentará la participación de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Estatal, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones de la entidad federativa, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

**Vigilancia y aplicación de la Ley y glosario**

**Artículo 4.** La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades educativas de la entidad y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el Título Octavo del Federalismo educativo en el marco de distribución de competencias.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridad educativa federal, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

II. Autoridad educativa estatal o Secretaría, a la persona titular del Poder Ejecutivo o a la Secretaría de Educación, así como a las instancias que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa;

III. Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio del Estado; y

IV. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares.

**Coordinación interestatal e intermunicipal** **en proyectos** **regionales** **educativos**

**Artículo 5.** Las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de su competencia, podrán establecer coordinación interestatal e intermunicipal para el desarrollo de proyectos regionales educativos que contribuyan a los principios y fines establecidos en esta Ley.

Para tal efecto, remitirán un informe al Congreso Estatal y al Cabildo Municipal, respectivamente, sobre el inicio del proyecto regional a desarrollar, así como del avance y resultados del mismo a su conclusión.

**Regionalización de los servicios educativos**

**Artículo 6.** Para el cumplimiento de los fines y criterios previstos en esta Ley y de conformidad con las necesidades de la población en sus contextos locales y situacionales, la autoridad educativa estatal podrá llevar a cabo una regionalización en la prestación del servicio educativo, garantizando a las personas el acceso a una educación con equidad y excelencia.

**Capítulo II**

**Del ejercicio del derecho a la educación**

**El derecho a la educación**

**Artículo 7.** Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

La autoridad educativa estatal ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.

**Obligatoriedad** **de la educación**

**Artículo 8.** Todas las personas habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Es obligación de las y los coahuilenses hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación y esta Ley.

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, la autoridad educativa estatal apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal, en los términos que las leyes en la materia determinen.

**Capítulo III**

**De la educación en el Estado**

**Objetivos** **de la acción educativa en el Estado**

**Artículo 9.** Las autoridades educativas del Estado buscarán la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocarán al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las acciones que desarrollen tendrán como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Estatal, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.

**Desarrollo integral humano en la prestación del servicio educativo**

**Artículo 10.** En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para que las personas que habitan en el Estado puedan:

I. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo;

II. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social;

III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso;

IV. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y

V. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos.

**Bases para el fomento de la educación**

**Artículo** **11**. En el Estado de Coahuila se fomentará en las personas una educación basada en:

I. La identidad y el sentido de pertenencia como mexicanas y mexicanos, además del respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;

II. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros;

III. La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político;

IV. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles, y

V. El respeto y conservación del patrimonio cultural e histórico, así como de las tradiciones, usos y costumbres del Estado y sus regiones.

**Principios de la educación**

**Artículo 12.** En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría de la educación.

La educación que se imparta por las autoridades educativas del Estado, además de obligatoria, será:

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que:

a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;

II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que:

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos;

b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

c) Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud;

III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:

a) Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la Nación y del Estado, y

b) Vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Estatal que se determinen en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:

a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado;

b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos, y

c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin, y

V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Título Décimo Primero de la Ley General de Educación y a lo dispuesto en el Título Décimo Segundo de esta Ley.

**Fines** **de la educación**

**Artículo 13.** La educación impartida en el Estado de Coahuila, persigue los siguientes fines:

I. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus capacidades, a través de la mejora continua del Sistema Educativo Estatal;

II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general;

III. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas;

IV. Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios, las instituciones nacionales y estatales;

V. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias;

VI. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones;

VII. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país y del Estado;

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático;

IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país y del Estado, y

X. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país y del Estado.

**Criterios de la educación**

**Artículo 14**. La educación impartida en el Estado se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en todos los ámbitos de gobierno de la entidad federativa.

Además, responderá a los siguientes criterios:

I. Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

II. Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

III. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas;

IV. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia;

V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad;

VI. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos;

VII. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

VIII. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida y del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social;

IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, y

X. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

**Título Segundo**

**Del Sistema Educativo Estatal**

**Capítulo I**

**De la naturaleza del Sistema Educativo Estatal**

**Definición de Sistema Educativo Estatal**

**Artículo 15.** El Sistema Educativo Estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que se imparta en el Estado de Coahuila, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad de la entidad federativa, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias.

**Articulación** **y** **coordinación de los esfuerzos en materia educativa**

**Artículo 16.** A través del Sistema Educativo Estatal se articularán y coordinarán los esfuerzos de las autoridades educativas estatal y municipales, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos en esta Ley.

**Programación estratégica del Sistema Educativo Estatal**

**Artículo 17.** El Sistema Educativo Estatal participará en la programación estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua en el Estado de Coahuila.

**Integración del Sistema Educativo Estatal**

**Artículo 18.** En el Sistema Educativo Estatal participarán, con sentido de responsabilidad social, los actores, instituciones y procesos que lo componen y será constituido por:

I. Los educandos;

II. Las maestras y los maestros;

III. Las madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones;

IV. Las autoridades educativas del Estado;

V. Las autoridades escolares;

VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del servicio público de educación;

VII. Las instituciones educativas, los Sistemas y subsistemas establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa;

VIII. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;

IX. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía;

X. Los planes y programas de estudio;

XI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación;

XII. Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados conforme a esta Ley;

XIII. Los Comités Escolares de Administración Participativa que se conformen de acuerdo con las disposiciones aplicables, y

XIV. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación en el Estado.

La persona titular de la Secretaría o la instancia que, en su caso, se establezca para el ejercicio de la función social educativa presidirá el Sistema Educativo Estatal; los lineamientos para su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

**Tipos, niveles, modalidades y opciones educativas**

**Artículo 19.** La educación que se imparta en el Sistema Educativo Estatal se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:

I. Tipos, los de educación básica, medio superior y superior;

II. Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en esta Ley;

III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y

IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en los términos de esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia.

Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Estatal la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física, la educación artística y la educación tecnológica.

La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta Ley.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse educación comunitaria con programas o contenidos particulares para ofrecerle una oportuna atención.

**Diversidad lingüística,** **regional, sociocultural** **y biocultural en educación**

**Artículo 20.** La educación en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas responderá a la diversidad lingüística, regional, sociocultural y biocultural de la entidad, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores de la población del Estado.

**Capítulo II**

**Del tipo de educación básica**

**Niveles y servicios en educación básica**

**Artículo 21.** La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria.

Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son:

I. Inicial escolarizada y no escolarizada;

II. Preescolar general, indígena y comunitario;

III. Primaria general, indígena y comunitaria;

IV. Secundaria, entre las que se encuentran la general, técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría;

V. Secundaria para trabajadores, y

VI. Telesecundaria.

De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos los Centros de Atención Múltiple.

**Edad mínima para ingresar a la educación básica**

**Artículo 22.** La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de tres años, y para nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

**Educación inicial**

**Artículo 23**. En educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la prestación universal de ese servicio.

Las autoridades educativas estatal y municipales impartirán educación inicial de conformidad con los principios rectores y objetivos de la que determine la autoridad educativa federal en términos de la Ley General de Educación.

Además fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Para tal efecto, promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las familias y a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación psicopedágogica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y defensa de la niñez.

**Educación multigrado**

**Artículo 24.** La autoridad educativa estatal impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación.

Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas del Estado atenderán los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley General de Educación.

**Capítulo III**

**Del tipo de educación media superior**

**Niveles y servicios en educación media superior**

**Artículo 25.** La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes y se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica.

Las autoridades educativas del Estado podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios educativos:

I. Bachillerato General;

II. Bachillerato Tecnológico;

III. Bachillerato Intercultural;

IV. Bachillerato Artístico;

V. Profesional técnico bachiller;

VI. Telebachillerato comunitario;

VII. Educación media superior a distancia, y

VIII. Tecnólogo.

Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y opciones educativas señaladas en la presente Ley, como la educación dual con formación en escuela y empresa. La modalidad no escolarizada estará integrada, entre otros servicios, por la educación a distancia y aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales.

**Políticas para la inclusión, permanencia y continuidad en media superior**

**Artículo 26.** Las autoridades educativas del Estado, en el ámbito de sus competencias, establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos.

De igual forma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para la certificación que otorga la instancia competente, para egresados de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes, que no hayan ingresado a educación superior, con la finalidad de proporcionar herramientas que les permitan integrarse al ámbito laboral.

**Sistema** **Estatal de Educación Media Superior**

**Artículo 27.** El tipo de educación media superior en el Estado de Coahuila se organizará en un sistema estatal. Dicho sistema responderá, en términos de la Ley General de Educación, al marco curricular común a nivel nacional establecido por la autoridad educativa federal con la participación de la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado de Coahuila.

La Secretaría emitirá los lineamientos para la integración y el funcionamiento del Sistema Estatal de Educación Media Superior del Estado de Coahuila con la participación de las instituciones de educación media superior.

**Comisión Estatal de Planeación y Coordinación**

**del Sistema de Educación Media Superior**

**Artículo 28.** Con la finalidad de formular políticas, estrategias, programas y metas en materia de educación superior, se crea la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado.

La Secretaría emitirá los lineamientos de su integración y su funcionamiento.

**Capítulo IV**

**Del tipo de educación** superior

**Niveles y servicios en educación superior**

**Artículo 29.** La educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

**Obligatoriedad de la educación superior**

**Artículo 30.** La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas.

Las políticas que lleven a cabo las autoridades educativas del Estado se realizarán con base a lo establecido en la Ley General de Educación Superior.

**Gratuidad de la educación superior**

**Artículo 31.** En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas estatal y de los municipios concurrirán con la autoridad educativa federal para garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio nacional. En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía.

**Registro Estatal de Opciones para Educación Superior**

**Artículo 32.** La autoridad educativa estatal establecerá el Registro Estatal de Opciones para Educación Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad federativa, así como los requisitos para su acceso.

Para tal efecto, la autoridad educativa estatal dispondrá las medidas para que las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad federativa proporcionen los datos para alimentar el Registro Estatal de Opciones para Educación Superior.

La información del registro al que se refiere este artículo será pública y difundida de manera electrónica e impresa, a través de los medios de comunicación determinados por la autoridad educativa estatal.

**Inclusión, continuidad, egreso oportuno y cobertura en educación superior**

**Artículo 33.** Las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes. Determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los términos que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, opciones de formación continua y actualización para responder a las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico.

**Respeto a la autonomía universitaria**

**Artículo 34.** Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades a las que la ley les otorga autonomía, en los términos establecidos en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, entre otros, reconocer su facultad para ejercer la libertad de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la libertad para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas, y administrar su patrimonio y recursos.

**Capítulo V**

**Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades,**

**la tecnología y la innovación**

**Derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación**

**Artículo 35.** En el Estado se reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura.

Las autoridades educativas estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, promoverán el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social y el desarrollo de las actividades productivas de la entidad.

**Fomento de la investigación, la ciencia,**

**las humanidades, la tecnología y la innovación**

**Artículo 36.** El fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación que realicen las autoridades educativas estatales y municipales se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

**Uso de las nuevas tecnologías de la información,**

**comunicación, conocimiento y aprendizaje digital**

**Artículo 37.** El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto.

**Capítulo VI**

**De la educación indígena**

**Objeto de la educación** **indígena**

Artículo 38. En el Estado se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas de la entidad federativa como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas del Estado.

**Consulta de buena fe y de manera previa, libre e informada**

**a pueblos y comunidades indígenas**

**Artículo 39.** Las autoridades educativas del Estado consultarán de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Acciones en materia de educación indígena**

**Artículo 40.** En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatal y municipales podrán realizar lo siguiente, entre otras acciones:

I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;

II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas, y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas de la entidad;

IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;

V. Tomar en consideración, en las opiniones que emitan para la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar;

VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y

VII. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

**Capítulo VII**

**De la educación humanista**

**Enfoque humanista** **en educación**

Artículo 41. En la educación que se imparta en el Estado se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza.

De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios.

**Fomento de la educación artística**

Artículo 42. La Secretaría generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las culturas. En coordinación con la autoridad educativa federal, adoptará medidas para que, dentro de la orientación integral del educando, se promuevan métodos de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que exprese sus emociones a través de manifestaciones artísticas y se contribuya al desarrollo cultural y cognoscitivo de las personas.

Capítulo VIII

**De la educación inclusiva**

**Educación inclusiva**

**Artículo 43.** La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos.

**Finalidad de la educación inclusiva**

**Artículo 44.** La educación inclusiva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje de todos los educandos en los tipos y niveles educativos, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Para tal efecto, las acciones de la Secretaría en la materia buscarán:

I. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana;

II. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;

III. Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;

IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Estatal por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras;

V. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación, y

VI. Proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad.

**Educación especial**

**Artículo 45**. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales, aptitudes sobresalientes o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación.

La Secretaría, en el ámbito de su competencia y de conformidad a los criterios orientadores para la prestación de los servicios de educación especial que emita la autoridad educativa federal, para atender a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizará lo siguiente:

I. Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, derivados por una condición de salud, para garantizar el derecho a la educación de los educandos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación;

II. Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado;

III. Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria;

IV. Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación;

V. Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, y preste los apoyos que los educandos requieran;

VI. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva, y

VII. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación.

**Medidas para garantizar la educación inclusiva**

**Artículo** 46. Para garantizar la educación inclusiva, la Secretaría, en el ámbito de su competencia, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:

I. Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario;

II. Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas;

III. Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;

IV. Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y

V. Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades.

**Disposiciones de accesibilidad en el Sistema Educativo Estatal**

**Artículo** 47. En el Sistema Educativo Estatal se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente Ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en las demás normas locales aplicables.

**Capítulo IX**

**De la educación para personas adultas**

**Objetivo de la educación para personas adultas**

**Artículo** **48**. La Secretaría ofrecerá acceso a programas y servicios educativos para personas adultas en distintas modalidades que consideren sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales.

Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integral para la vida que posibilite a las personas adultas formar parte activa de la sociedad, a través de las habilidades, conocimientos y aptitudes que adquiera con el proceso de enseñanza aprendizaje que el Estado facilite para este fin.

**Características de la educación para personas adultas**

**Artículo** **49**. La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

**Acreditación de los conocimientos adquiridos**

**Artículo** **50**. Las personas beneficiarias de la educación referida en este Capítulo podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 83 y 145 de la Ley General de Educación. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.

La Secretaría organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para personas adultas. Promoverá ante las instancias competentes, se darán facilidades necesarias a trabajadores y sus familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior.

Quienes participen voluntariamente proporcionando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.

**Título Tercero**

**Del Proceso Educativo**

**Capítulo I**

**De la orientación integral en el proceso educativo**

**La orientación integral en el proceso educativo**

**Artículo** **51**. La orientación integral en el proceso educativo comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje, acorde con este criterio.

**La formación de las coahuilenses y los coahuilenses**

**Artículo** **52**. La orientación integral, en la formación de las coahuilenses y los coahuilenses, considerará lo siguiente:

I. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica;

II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos;

III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de comunicación;

IV. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación;

V. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico;

VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización;

VII. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad;

VIII. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos;

IX. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad;

X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas, y

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica.

Acompañamiento de los educandos en su trayectoria formativa

Artículo 53. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva.

**Evaluación integral del educando**

**Artículo** 54. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

Las instituciones educativas deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento.

**Capítulo II**

**De los planes y programas de estudio**

**Objetivo de los planes y programas de estudio**

**Artículo** **55**. Los planes y programas a los que se refieren en la Ley General de Educación favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país.

Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas.

El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los planes y programas de estudio se basará en la libertad, creatividad y responsabilidad que aseguren una armonía entre las relaciones de educandos y docentes; a su vez, promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicación y el diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa.

Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de Educación, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas estatal o municipales cualquier situación contraria a este precepto.

**Elaboración de los planes y programas de estudio**

**Artículo** **56**. En términos de la Ley General de Educación, la autoridad educativa federal determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de esta Ley.

De conformidad a las disposiciones que se emitan, la Secretaría emitirá su opinión para que se considere en los planes y programas de estudio el contenido los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales del Estado.

La Secretaría podrá solicitar a la autoridad educativa federal actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.

Los planes y programas de estudio en educación media superior atenderán el marco curricular común que sea establecido por la Secretaría con la participación de la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado con el propósito de contextualizarlos a sus realidades regionales. La elaboración de planes y programas de estudio de los bachilleratos de universidades públicas autónomas por ley se sujetará a las disposiciones correspondientes.

En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se refiere este artículo, se podrán fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y los maestros, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo con el contexto de la prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación, entre otros, para la recuperación de los saberes locales.

**Publicación de los planes y programas de estudio**

**Artículo** **57**. Los planes y programas que la autoridad educativa federal determine en cumplimiento de la Ley General de Educación, así como sus modificaciones, se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios.

En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales del Estado y de los organismos descentralizados correspondientes.

**Contenidos para opinión de los planes y programas de estudio**

**Artículo** **58**. La opinión que se emita por la Secretaría sobre el contenido de los planes y programas de estudio será, entre otros, respecto a lo siguiente:

I. El aprendizaje de las matemáticas;

II. El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor aprovechamiento de la cultura escrita;

III. El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía;

IV. El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

V. El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país, la importancia de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas;

VI. El aprendizaje de las lenguas extranjeras;

VII. El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física;

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre;

IX. El fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria;

X. La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual;

XI. La educación socioemocional;

XII. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XIII. El reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso del Lenguaje de Señas Mexicanas, y fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas;

XIV. La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera;

XV. El fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la protección de datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;

XVI. La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental;

XVII. El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de prevención, autoprotección y resiliencia, así como la mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y los riesgos inherentes a otros fenómenos naturales;

XVIII. El fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de relaciones, solidarias y fraternas;

XIX. La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XX. El fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y dispositivos digitales;

XXI. La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento de los derechos humanos para garantizar el respeto a los mismos;

XXII. El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, así como el desarrollo de la creatividad artística por medio de los procesos tecnológicos y tradicionales;

XXIII. La enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano, así como la personalidad de los educandos;

XXIV. El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y

XXV. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Capítulo III**

**De las Tecnologías de la Información, Comunicación,**

**Conocimiento y Aprendizaje Digital en el proceso educativo**

**Utilización de las tecnologías de la información, comunicación,**

**conocimiento y aprendizaje digital en el proceso educativo**

**Artículo** **59**. En la educación que se imparta en el Estado de Coahuila, se utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población.

Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos.

**Capacitación de maestras y maestros para desarrollar**

**habilidades en el uso de las tecnologías de la información,**

**comunicación, conocimiento y aprendizaje digital**

**Artículo** **60**. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, promoverá la formación y capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el proceso educativo.

**Capítulo IV**

**De la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior**

**Emisión de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento**

**de los Servicios de Educación Básica y Media Superior**

**Artículo** **61**. La Secretaría emitirá una Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, el cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos en el Estado.

**Contenidos de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento**

**de los Servicios de Educación Básica y Media Superior**

**Artículo** **62**. La elaboración de la Guía a la que se refiere este Capítulo se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la autoridad educativa federal. En dicha Guía se establecerán los elementos de normalidad mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a conocer las normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de decisiones para fortalecer la mejora escolar.

**Capítulo V**

**Del calendario escolar**

**Determinación del calendario escolar**

**Artículo** **63**. La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos.

Las autoridades escolares, previa autorización de la Secretaría y de conformidad con los lineamientos que expida la autoridad educativa federal, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.

**Contenido del calendario escolar**

**Artículo** 64. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación integral del educando, a través de la práctica docente, actividades educativas y otras que contribuyan a los principios, fines y criterios de la educación, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.

Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado por la autoridad educativa federal.

De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos.

Publicación del calendario escolar

**Artículo** **65**. El calendario que la autoridad educativa federal determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

La Secretaría publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la autoridad educativa federal.

**Capítulo VI**

**De la participación de madres y padres de familia o tutores en el proceso educativo**

**Corresponsabilidad de madres y padres de familia**

**o tutores en el proceso educativo**

**Artículo** **66**. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

**Orientación para las familias de los educandos**

**Artículo** **67**. La Secretaría desarrollará actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.

**Capítulo VII**

**De otros complementos del proceso educativo**

**Escuelas establecidas por negociaciones o empresas**

**Artículo** **68**. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa estatal.

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad de circunstancias.

La Secretaría podrá celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente artículo.

**Formación para el trabajo**

**Artículo** **69**. La formación para el trabajo deberá estar enfocada en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que permitan a la persona desempeñar una actividad productiva, mediante alguna ocupación o algún oficio calificado. Se realizará poniendo especial atención a las personas con discapacidad con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión laboral.

La autoridad educativa federal, en términos de la Ley General de Educación, establecerá un régimen de certificación referido a la formación para el trabajo aplicable en el Estado, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

La autoridad educativa federal, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinará los lineamientos generales aplicables en el Estado para la definición de aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos específicos. Los certificados serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares señalados en estos lineamientos, en cuya determinación, así como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo que sean ofrecidos, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos, a nivel nacional, estatal o municipal.

Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por las autoridades de las entidades federativas, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares. La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Título Cuarto**

**Del educando**

**Capítulo I**

**Del educando como prioridad en el Sistema Educativo Estatal**

**Interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes**

**Artículo** **70**. En la educación impartida en el Estado de Coahuila se priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, la Secretaría garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

**Derechos de los educandos**

**Artículo** **71**. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:

I. Recibir una educación de excelencia;

II. Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral;

III. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad;

IV. Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión;

V. Recibir una orientación educativa y vocacional;

VI. Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral;

VII. Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos como centros de aprendizaje comunitario;

VIII. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las disposiciones respectivas, y

X. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría establecerá los mecanismos que contribuyan a su formación integral, tomando en cuenta los contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos en la elaboración y aplicación de las políticas educativas en sus distintos tipos y modalidades.

**Expediente único del educando**

**Artículo** **72**. La Secretaría creará para cada educando desde educación inicial hasta media superior, un expediente único en el que se contengan los datos sobre su trayectoria académica. En todo momento, la Secretaría deberá atender las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La información del expediente al que se refiere este artículo se proporcionará a la autoridad educativa federal en los términos que señale para actualizar el Sistema de Información y Gestión Educativa previsto en la Ley General de Educación.

**Servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología**

**Artículo** **73**. La Secretaría ofrecerá servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología desde la educación básica hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades.

**Capítulo II**

**Del fomento de estilos de vida saludables en el entorno escolar**

**Lineamientos para la distribución de alimentos**

**y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela**

**Artículo** **74**. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, aplicará y vigilará el cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal sobre la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela.

La Secretaría realizará acciones de vigilancia para que en los alimentos y bebidas que se preparen y procesen al interior de las escuelas cumplan con el valor nutritivo para la salud de los educandos.

**Prohibición sobre la distribución y comercialización**

**de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos**

**Artículo** **75**. Dentro de las escuelas queda prohibida la distribución y comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como las bebidas energizantes.

Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares.

**Fomento de la activación física, el deporte escolar, la educación física**

**Artículo** **76**. La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.

El gobierno del Estado de (nombre de entidad federativa) dispondrá las medidas para que los certificados médicos de los educandos que se requieran para sus trámites escolares se emitan sin costo alguno.

**Cooperativas para fomentar estilos de vida saludables**

**Artículo** **77**. Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal y a las demás disposiciones aplicables.

**Programas alimentarios en escuelas ubicadas en zonas de pobreza,**

**alta marginación y vulnerabilidad social**

**Artículo** **78**. La Secretaría, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, impulsará programas alimentarios para los educandos a partir de microempresas locales, en escuelas ubicadas en zonas de pobreza, alta marginación y vulnerabilidad social.

**Capítulo III**

**De la cultura de la paz, convivencia democrática en las escuelas y entornos escolares libres de violencia**

**Medidas para preservar la integridad física, psicológica y social del educando**

**Artículo** **79**. En la impartición de educación para menores de dieciocho años, la Secretaría en coordinación con otras áreas de gobierno, tomará medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

Cuando exista ausentismo del educando por cinco días consecutivos o siete acumulados en un mes, sin que exista justificación por escrito de madres y padres de familia o tutores, las autoridades escolares de las escuelas públicas y privadas del tipo básico informarán a la Secretaría, la cual emitirá una Alerta Temprana y será remitida a las dependencias y órganos, estatales y municipales, para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para los efectos correspondientes.

**Promoción de la cultura de la paz y no violencia en las escuelas**

**Artículo** **80**. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

I. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática;

II. Promover en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos;

III. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas;

IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos;

V. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas para atender dicha problemática;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas;

VII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales;

VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y

IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar, así́ como coordinar campañas de información sobre las mismas.

**Protocolos para el fomento de la cultura de la paz y no violencia**

**Artículo** **81**. La Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, emitirá protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento del artículo 80 de esta Ley. Entre los protocolos que emita, deberán encontrarse para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

**Seguro escolar contra accidentes personales para educandos**

**Artículo** **82**. La Secretaría emitirá los lineamientos para la contratación optativa de un seguro escolar contra accidentes personales para educandos que cursen el tipo básico. Dichas disposiciones contendrán los esquemas de subsidios que, en su caso, contemple el gobierno de la entidad federativa.

**Título Quinto**

**De la revalorización de las maestras y los maestros**

**Capítulo I**

**Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo**

**Revalorización de las maestras y los maestros**

**Artículo** **83**. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.

Los esfuerzos y las acciones de las autoridades educativas del Estado de Coahuila en la revalorización de las maestras y los maestros para efectos de esta Ley, perseguirá los siguientes fines:

I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos;

II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización;

III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su liderazgo en la comunidad;

IV. Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo;

V. Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa;

VI. Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrolla su labor;

VII. Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa;

VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y

IX. Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables.

**Descarga administrativa**

**Artículo** **84**. La Secretaría colaborará con la autoridad educativa federal en la revisión permanente de las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia.

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de las madres y padres de familia o tutores.

**Sistema de administración de nómina**

**Artículo** **85**. La autoridad educativa estatal y los municipios que impartan educación básica, efectuarán las acciones necesarias para que los movimientos y pagos de ese personal, se realicen a través de un sistema de administración de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, modalidad educativa y la clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto emitan conjuntamente la autoridad educativa federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios de control presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia, publicidad y de rendición de cuentas, y para lo cual la Secretaría y los municipios, mediante los convenios respectivos, se coordinarán con la autoridad educativa federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los pagos se deberán realizar preferentemente mediante medios electrónicos.

**Capítulo II**

**De los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en educación básica y en educación media superior**

**Procesos de admisión, promoción y reconocimiento**

**Artículo** **86**. Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por las autoridades educativas del Estado de Coahuila en educación básica y media superior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa estatal y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

**Capítulo III**

**Del sistema integral de formación, capacitación y actualización**

**Sistema integral de formación, capacitación y actualización**

**Artículo** **87**. La Secretaría constituirá el sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado de Coahuila, para que las maestras y los maestros ejerzan su derecho de acceder a éste, en términos de lo establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

Las opciones de formación, capacitación y actualización tendrán contenidos con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos, así como las condiciones de vulnerabilidad social.

**Fines del sistema integral de formación, capacitación y actualización**

**Artículo** **88**. El sistema integral de formación, capacitación y actualización tendrá los siguientes fines:

I. La formación, con nivel de licenciatura, de maestras y maestros de educación básica con los conocimientos y aptitudes necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos;

II. La formación continua, la actualización de conocimientos de las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología e innovación y otras que contribuyan a la superación docente de las maestras y los maestros en servicio;

III. La promoción de programas de especialización, maestría y doctorado para una orientación integral, adecuados a las necesidades, contextos regionales y locales de la prestación de los servicios educativos y de los recursos disponibles;

IV. La realización de programas de inducción, actualización, capacitación y superación profesional para las maestras y maestros de educación media superior;

V. La promoción del enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, la cultura de la paz y la integridad en la práctica de las funciones de las maestras y los maestros, y

VI. El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa.

La implementación del sistema integral de formación, capacitación y actualización será progresiva y se ajustará a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.

**Convenios para ampliar las opciones de capacitación**

**Artículo** **89**. La Secretaría podrá suscribir convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliar las opciones de formación, capacitación y actualización que para tal efecto establezca la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

Asimismo, impulsarán los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia generados por las instituciones de formación docente y los sectores académicos, de conformidad con los criterios que emita la Comisión.

**Capítulo IV**

**De la formación docente**

**Criterios de las personas egresadas de las**

**instituciones formadoras de docencia**

**Artículo** **90**. Las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia del Estado de Coahuila contarán con el conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y didácticos que les permita atender las necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente, se promoverá el desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de inclusión para todos los tipos educativos; asimismo, se considerarán modelos de formación docente especializada en la educación especial que atiendan los diversos tipos de discapacidad.

**Fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente**

**Artículo** **91**. La Secretaría fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, para lo cual, tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes acciones:

I. Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva escuela mexicana;

II. Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas educativos, particularmente en aquellas instituciones que tengan amplia tradición y experiencia en la formación pedagógica y docente;

III. Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de saberes y experiencias entre las maestras y los maestros de los diferentes sistemas y subsistemas educativos;

IV. Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica y curricular que priorice el máximo logro del aprendizaje y desarrollo integral de los educandos;

V. Promover la integración de un acervo físico y digital en las instituciones formadoras de docentes, de bibliografía actualizada que permita a las maestras y los maestros acceder a las propuestas pedagógicas y didácticas innovadoras;

VI. Promover la acreditación de grados académicos superiores de los docentes;

VII. Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y de la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación, y

VIII. Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la formación, así como programas e incentivos para su desarrollo profesional.

**Lineamientos para proporcionar la formación inicial**

**Artículo** **92**. La Secretaría emitirá los lineamientos para proporcionar la formación inicial en el Estado de Coahuila, los cuales atenderán la programación estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional prevista en la Ley General de Educación.

**Título Sexto**

**De los planteles educativos**

**Capítulo Único**

**De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes**

**Importancia de los planteles educativos**

**Artículo** **93**. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación por parte de las autoridades educativas del Estado o por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Con el acuerdo de las autoridades, madres y padres de familia o tutores y la comunidad, en la medida de sus posibilidades, funcionarán como un centro de aprendizaje comunitario, donde además de educar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y a la comunidad para colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su entorno.

**Requisitos de la infraestructura física educativa**

**Artículo** **94**. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal.

La Secretaría coadyuvará con la autoridad educativa federal para mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento de los muebles o inmuebles que se destinen al servicio educativo.

**Disposiciones normativas a cumplir para construcción,**

**diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas**

**o equipamiento de la infraestructura física educativa**

**Artículo** 95. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, las autoridades educativas estatal y municipales, los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes y los particulares que impartan educación en términos de esta Ley, atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal a los que se refiere el artículo 103 de la Ley General de Educación y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a nivel federal, local y municipal.

Las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regularan en materia de infraestructura por sus órganos de gobierno y su normatividad interna.

**Requisitos para que un inmueble preste servicio educativo**

**Artículo** **96**. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, deben obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás relacionados para su operación a efecto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo anterior, deberá obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar expedido por las autoridades correspondientes, en los términos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal. Los documentos que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos, deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del inmueble.

Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de protección civil y de seguridad que emitan las autoridades de los ámbitos federal, local y municipal competentes, según corresponda.

En la educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, debe demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción II de la Ley General de Educación.

**Atención prioritaria de escuelas en zonas urbanas marginadas,**

**rurales y en pueblos y comunidades indígenas**

**Artículo** **97**. Las autoridades educativas estatal y municipales atenderán de manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades.

En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual, orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa.

A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la autoridad educativa federal, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.

**Instancia estatal para ejercer las atribuciones**

**en materia de infraestructura física educativa**

**Artículo** **98**. La Secretaría, a través de la instancia que determine, realizará las actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo y demás disposiciones legales aplicables.

**Planeación financiera y administrativa**

**para la infraestructura física educativa**

**Artículo** **99**. La Secretaría, en el ámbito de sus respectiva competencia, deberá́ desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de espacios educativos al servicio del Sistema Educativo Estatal, realizando las previsiones necesarias para que los recursos económicos destinados para ese efecto, sean prioritarios y oportunos, y las respectivas obligaciones se atiendan de manera gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la materia.

Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financiamiento conforme lo establezcan las disposiciones aplicables.

**Mantenimiento de los muebles e inmuebles**

**destinados al servicio educativo**

**Artículo** **100**. Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad.

La Secretaría promoverá la participación directa de los municipios para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. Los municipios coadyuvarán en el mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz.

Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la Secretaría. Las acciones que se deriven de la aplicación de este párrafo, en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personal de la escuela, tampoco generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares.

**Colores y nombres de los planteles escolares**

**Artículo** **101**. Los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro.

Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial.

La Secretaría será la facultada para establecer las denominaciones oficiales de los planteles públicos del Sistema Educativo Estatal y deberá hacer referencia a los valores nacionales, maestros eméritos o nombres de personas ameritadas a quienes la Nación o el Estado de Coahuila deba exaltar para engrandecer, nuestra esencia popular y los símbolos patrios.

**Título Séptimo**

**De la mejora continua de la educación**

**Capítulo Único**

**Del proceso de mejora continua de la educación en el Estado**

**Definición de mejora continua de la educación**

**Artículo** **102**. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo permanente del Sistema Educativo Estatal para el incremento del logro académico de los educandos. Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos.

**Evaluación del Sistema Educativo Estatal**

**Artículo** **103**. La Secretaría coadyuvará con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del Sistema Educativo Estatal, con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación.

La evaluación a la que se refiere este artículo será integral, continua, colectiva, incluyente, diagnóstica y comunitaria. Valorará el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades educativas sobre la atención de las problemáticas de las escuelas y los avances de las políticas que lleven para el cumplimiento de sus obligaciones en materia educativa; además de aquellas de madres y padres de familia o tutores respecto a sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en términos de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila y esta Ley.

**Programa Educativo Estatal**

**Artículo** **104**. Con objeto de contribuir al proceso al que se refiere este Capítulo, la Secretaría tendrá a su cargo elaborar un Programa Educativo Estatal para garantizar el acceso a la educación con equidad y excelencia para las y los coahuilenses.

El Programa Educativo Estatal de Coahuila tendrá un carácter plurianual y contendrá de manera integral aspectos sobre la infraestructura y el equipamiento de la infraestructura educativa, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales, entre otros.

**Título Octavo**

**Del Federalismo Educativo**

**Capítulo Único**

**De la distribución de la función social en educación en el Estado de Coahuila**

**Atribuciones exclusivas de la autoridad educativa estatal**

**Artículo** **105**. De conformidad con la Ley General de Educación, corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:

I. Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente;

II. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar que emita la Secretaría;

III. Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica;

IV. Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado esta para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica;

V. Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media superior, respecto a la formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, de conformidad con las disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

VI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con la Ley General de Educación y los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida;

VII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de docentes de educación básica;

VIII. Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

IX. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos la Secretaría, deberá coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría participará en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales;

X. Participar con la autoridad educativa federal, en la operación de los mecanismos de administración escolar;

XI. Vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones ubicadas en la entidad federativa que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Estatal, deban cumplir con las disposiciones en la materia;

XII. Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la autoridad educativa federal le proporcione;

XIII. Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de los planteles educativos de la entidad federativa;

XIV. Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades competentes, las condiciones de seguridad en el entorno de los planteles educativos;

XV. Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que prestan en términos de esta Ley;

XVI. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora continua de la educación que hayan sido implementados en la entidad federativa, y

XVII. Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de Educación, esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Atribuciones concurrentes en materia educativa**

**Artículo** **106**. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren el artículo 105 de esta Ley, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones de manera concurrente con la autoridad educativa federal:

I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V del artículo 114 de la Ley General de Educación, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

II. Participar en las actividades tendientes para la admisión, promoción y reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

III. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 113 de la Ley General de Educación;

IV. Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestras y maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción VI del artículo 114 de la Ley General de Educación, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida. Asimismo, podrán autorizar que las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida en términos del artículo 144 de la Ley General de Educación;

La Secretaría podrá revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables.

Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la autoridad educativa federal;

VI. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia;

VII. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de normal y demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los particulares;

VIII. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General de Educación, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3º. constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la autoridad educativa federal;

IX. Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al Sistema Educativo Estatal, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico, con especial atención a personas con discapacidad;

X. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada;

XI. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad;

XII. Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia;

XIII. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información;

XIV. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos sea de respeto recíproco y atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Política del Estado y demás legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

XV. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación física y la práctica del deporte;

XVI. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

XVII. Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia o tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años;

XVIII. Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;

XIX. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares;

XX. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;

XXI. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo;

XXII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, y

XXIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

El Ejecutivo Federal y el Gobernador del Estado podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114 de la Ley General de Educación.

Además de las atribuciones concurrentes señaladas en esta Ley, las autoridades educativas federal y estatal, en el ámbito de sus competencias, tendrán las correspondientes en materia de educación superior que se establezcan en la Ley General de Educación Superior.

**Atribuciones de los municipios en materia educativa**

**Artículo** **107**. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones VIII a X del artículo 106 de esta Ley.

El gobierno del Estado y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

**Atribuciones para lograr la equidad en educación**

**Artículo** **108**. Las autoridades educativas estatal y municipales, prestarán servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

Para tal efecto realizarán entre otras, las siguientes acciones:

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación;

II. Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, programas de entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, calzado y anteojos para estudiantes de educación básica;

III. Proporcionar apoyos a educandos cuya madre, padre o tutor haya fallecido o sufrido algún accidente que le ocasione invalidez o incapacidad permanente;

IV. Garantizar el acceso a los servicios educativos a las víctimas y promover su permanencia en el sistema educativo estatal cuando como consecuencia del delito o violación de sus derechos humanos exista interrupción en los estudios;

V. Promover la instalación de aires acondicionados en aulas de los planteles educativos que, por sus condiciones climáticas, lo requieran;

VI. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social;

VII. Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las autoridades educativas, a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero;

VIII. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios;

IX. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital;

X. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;

XI. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

XII. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos;

XIII. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos.

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad, asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente.

Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior;

XIV. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema Educativo Estatal;

XV. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna;

XVI. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución, y

XVII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia.

**Consejo Nacional de Autoridades Educativas**

**Artículo** 109. La Secretaría participará en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así como el cumplimiento a los fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y esta Ley.

**Título Noveno**

**Del financiamiento a la educación**

**Capítulo Único**

**Del financiamiento a la educación**

**De la concurrencia en el financiamiento de la educación**

**Artículo** **110**. El Gobierno del Estado y el Ejecutivo Federal, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.

El Ejecutivo Estatal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la entidad, la asignación de recursos de cada uno de los niveles de educación a su cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia.

Los recursos federales recibidos para la prestación de los servicios educativos al Estado no serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El Ejecutivo Estatal publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.

El gobierno del Estado prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifiquen la correcta aplicación de dichos recursos.

Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo.

En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, La Ley General de Educación Superior establecerá las disposiciones en materia de financiamiento.

Recursos para el cumplimiento de las responsabilidades

**de los municipios en materia educativa**

**Artículo** **111**. El gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos de esta Ley estén a cargo de la autoridad municipal.

**Fuentes alternas de financiamiento**

**Artículo** **112**. El Ejecutivo Estatal en todo momento procurará fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

**Recursos para el fortalecimiento de las**

**capacidades de administración escolar**

**Artículo** **113**. La autoridad educativa estatal incluirá en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la legislatura local, los recursos suficientes para fortalecer las capacidades de la administración escolar. Los programas para tal efecto responderán a los lineamientos que emita la autoridad educativa federal.

**Programas compensatorios para reducir el rezago educativo**

**Artículo** **114**. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Estatal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos municipales para enfrentar los rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concreten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que la autoridad educativa estatal deberá realizar para reducir y superar dichos rezagos.

**Título Décimo**

**De la corresponsabilidad social en el proceso educativo**

**Capítulo I**

**De la participación de madres y padres de familia o tutores**

**Derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela**

**Artículo** **115**. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la educación inicial, en concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo;

II. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;

III. Colaborar con las autoridades escolares, al menos una vez al mes, para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;

IV. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere esta Ley;

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen;

VI. Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar;

VII. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos;

VIII. Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo, sobre los cuales podrán emitir su opinión;

IX. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución;

X. Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar, y

XI. Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes, sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas de las escuelas.

**Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela**

**Artículo** **116**. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial;

II. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo;

III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen;

IV. Informar a las autoridades educativas, los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas;

V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, y

VI. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria.

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable.

**Objeto de las asociaciones de madres y padres de familia**

**Artículo** **117**. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto:

I. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados;

II. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;

III. informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos;

IV. Propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores, para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa;

V. Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos, conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar;

VI. Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos;

VII. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos;

VIII. Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos ante las autoridades correspondientes;

IX. Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando, y

X. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores.

Las asociaciones de madres y padres de familia, se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa señale.

**Capítulo II**

**De los Consejos de Participación Escolar**

**Participación de la sociedad para garantizar el derecho a la educación**

**Artículo** **118**. Las autoridades educativas podrán promover la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación.

**Atribuciones de los consejos de participación escolar**

**Artículo** **119**. Será decisión de cada escuela la instalación y operación del consejo de participación escolar o su equivalente el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo podrá:

I. Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional contribuyan a la mejora continua de la educación, en los términos del artículo 136 de la Ley General de Educación;

II. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos y empleados de la escuela, que propicien la vinculación con la comunidad, con independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

III. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa;

IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de proponer acciones específicas para su atención;

V. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren;

VI. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas en su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, y

VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela.

**Atribuciones del consejo municipal de participación escolar**

**Artículo** **120**. En cada municipio del Estado se podrá instalar y operar un consejo municipal de participación escolar en la educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá:

I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

II. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;

III. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

IV. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa correspondiente;

V. Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar;

VI. Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares;

VII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa;

VIII. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad;

IX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública, y

X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Será responsabilidad de la persona titular de la presidencia municipal que, en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la excelencia en educación, así como, la difusión de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

**Atribuciones del consejo estatal de participación escolar**

**Artículo** **121**. En el Estado de Coahuila, operará un consejo estatal de participación escolar en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo, será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar; conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y municipales, gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades que influyan en la excelencia y la cobertura de la educación.

**Capítulo III**

**Del servicio social**

Obligatoriedad del servicio social

Artículo 122. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. En éstas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico correspondiente.

La Secretaría, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales.

**Opciones para la prestación del servicio social**

**Artículo** **123**. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social, las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral.

**Capítulo IV**

**De la participación de los medios de comunicación**

**Contribución de los medios de comunicación**

a los fines y criterios de la educación

**Artículo** **124**. Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fines de la educación previstos en el artículo 13, conforme a los criterios establecidos en el artículo 14 de la presente Ley.

La Secretaría promoverá, ante las autoridades competentes, las acciones necesarias para dar cumplimiento a este artículo, con apego a las disposiciones legales aplicables.

**Creación de espacios y proyectos de difusión educativa**

**Artículo** **125**. El Ejecutivo estatal promoverá la contribución de los medios de comunicación a los fines de la educación. Para tal efecto procurara la creación de espacios y la realización de proyectos de difusión educativa con contenidos de la diversidad cultural de las regiones del Estado, cuya transmisión sean en español y las diversas lenguas indígenas.

**Título Décimo Primero**

**De la validez de estudios y certificación de conocimientos**

**Capítulo Único**

**De las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos**

**Validez de los estudios**

**Artículo** **126**. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, de conformidad con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República.

**Revalidación de estudios**

**Artículo** **127**. Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto en el artículo 129 de esta Ley.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

**Equivalencia de estudios**

**Artículo** **128**. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional.

**Otorgamiento de revalidaciones y equivalencias de estudios**

**Artículo** **129**. La Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes.

La Secretaría otorgará revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudio que se impartan en sus respectivas competencias.

Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos académicos.

Las revalidaciones y equivalencias emitidas, deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República.

Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en esta Ley.

**Acreditación de conocimientos adquiridos**

**Artículo** **130**. La Secretaría, por acuerdo de su titular y de conformidad con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos.

Los acuerdos secretariales señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.

**Título Décimo Segundo**

**De la educación impartida por particulares**

**Capítulo I**

**Disposiciones generales**

**Educación impartida por particulares**

**Artículo** **131**. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, conforme a lo dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programas de estudio; por lo que hace a educación básica y media superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior.

La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren al Sistema Educativo Estatal.

En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos.

La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Los educandos, las madres y padres de familia o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia.

**Requisitos para las autorizaciones**

**y los reconocimientos de validez oficial de estudios**

**Artículo** **132**. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación;

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables, y

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

**Publicación de instituciones autorizaciones y**

**reconocimientos de validez oficial de estudios**

**Artículo** **133**. Las autoridades educativas publicarán, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que se les otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como aquellas que sean clausuradas.

De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez que apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan.

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió.

**Obligaciones de particulares que impartan educación**

**Artículo** **134**. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados;

III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. Corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a las que se refiere esta fracción, con la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa; para tal efecto atenderá los lineamientos que emita la autoridad educativa federal mediante los cuales se realizará dicha asignación en comités en los que participarán representantes de las instituciones de particulares que impartan educación en los términos de la presente Ley;

IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 132 de esta Ley;

V. Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen;

VI. Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades;

VII. Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir impartiendo educación, conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto;

VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y

IX. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación.

**Obligación de particulares que presten servicios educativos**

**sin reconocimiento de validez oficial**

**Artículo** **135**. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad de lo contrario la secretaria de educación pública del estado clausura el establecimiento y dará parte alas autoridades judiciales.

**Capítulo II**

**De los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares**

**Disposiciones para las acciones de vigilancia**

**Artículo** **136**. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos dos veces al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Estatal, deban cumplir con las disposiciones de la presente Ley; además podrán requerir en cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo.

Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los términos de este Título, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio.

Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.

**Infracciones de los particulares que presten servicios educativos**

**Artículo** **137**. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 132 de esta Ley;

II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

III. Suspender actividades escolares o extraescolares en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

IV. No utilizar los libros de texto que la autoridad educativa federal autorice y determine para la educación primaria y secundaria;

V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica;

VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;

VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;

VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos;

IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos o que menoscaben su dignidad;

X. Ocultar a las madres y padres de familia o tutores, las conductas de los educandos menores de dieciocho años que notoriamente deban ser de su conocimiento;

XI. Oponerse a las actividades de vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna;

XII. Contravenir las disposiciones contempladas en los artículos 12, 13, 14, 79, párrafo tercero, por lo que corresponde a las autoridades educativas y 133, segundo párrafo de esta Ley;

XIII. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de sus madres y padres o tutores, medicamentos;

XIV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XV. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje; obligar a los educandos a someterse a tratamientos médicos para condicionar su aceptación o permanencia en el plantel, o bien, presionar de cualquier manera a sus madres y padres de familia o tutores para que se los realicen, salvo causa debidamente justificada a juicio de las autoridades educativas;

XVI. Incumplir con las medidas correctivas o precautorias derivadas de las visitas;

XVII. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;

XVIII. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 135 de esta Ley;

XIX. Impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente;

XX. Cambiar de domicilio sin la autorización previa de las autoridades educativas competentes;

XXI. Otorgar revalidaciones o equivalencias sin observar las disposiciones aplicables;

XXII. Retener documentos personales y académicos por falta de pago;

XXIII. Condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares;

XXIV. Omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios educativos, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación;

XXV. Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de su titular o, en su caso, de la madre y padre de familia o tutor, y

XXVI. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

**Sanciones que corresponden a las infracciones**

**Artículo** **138**. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente manera:

I. Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes criterios:

a) Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta máximo de mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XV, XVI, XXIII y XXIV del artículo 137 de esta Ley;

b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil y un, y hasta máximo de siete mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones XI, XII, XX, XXI, XXII, XXV y XXVI del artículo 137 de esta Ley, y

c) Multa por el equivalente a un monto mínimo de siete mil y un, y hasta máximo de quince mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones VII y XIII del artículo 137 de esta Ley.

Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia;

II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente respecto a las infracciones señaladas en las fracciones IX y XIV del artículo 137de esta Ley. La imposición de esta sanción no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa de las señaladas en el inciso b) de la fracción anterior, o

III. Clausura del plantel, respecto a las infracciones señaladas en las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 137 de esta Ley.

Si se incurriera en las infracciones establecidas en las fracciones XIII, XIV y XXVI del artículo anterior, se aplicarán las sanciones de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

**Criterios para determinar las sanciones**

**Artículo** **139**. Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia.

**Ejecución de las multas**

**Artículo** **140**. Las multas que imponga la autoridad educativa estatal serán ejecutadas por la instancia que determine la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano.

**Efectos de la imposición de sanciones**

**Artículo** **141**. La revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

El retiro de los reconocimientos de validez oficial de estudios, producirá sus efectos a partir de la fecha en que se notifique la resolución definitiva, por lo que los estudios realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial para evitar perjuicios a los educandos.

A fin de que la autoridad que dictó la resolución adopte las medidas necesarias para evitar perjuicios a los educandos; el particular deberá proporcionar la información y documentación que, en términos de las disposiciones normativas, se fijen.

**Atribuciones para la ejecución de las sanciones**

**Artículo** **142**. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

**Procedimiento de las acciones de vigilancia**

**Artículo** **143**. Las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 136 de esta Ley que lleven a cabo las autoridades educativas del Estado de Coahuila, se realizarán de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 152 al 179 de la Ley General de Educación previstos en su Capítulo II del Título Décimo Primero y atenderán los lineamientos que emita la autoridad educativa federal en la materia.

**Capítulo III**

**Del recurso administrativo**

**Recurso administrativo**

**Artículo** **144**. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos relacionados con los mismos, con fundamento en las disposiciones de esta Ley y las normas que de ella deriven, el afectado podrá́ optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.

También podrá́ interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios.

**Tramitación del recurso administrativo**

**Artículo 145**. La tramitación y la resolución del recurso de revisión, se llevará a cabo conforme a la Ley del procedimiento contencioso administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Transitorios**

**Primero**. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;

Segundo. Se abroga la Ley Estatal de Educación, publicada el 28 de mayo de 1996 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.

**Tercero**. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, seguirán aplicándose para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos en lo que no contravengan a este Decreto.

Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán, hasta su conclusión, regidos con los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron.

**Cuarto**. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizaran con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes.

**Quinto**. Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades correspondientes, realizarán consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas relativo a la aplicación de las disposiciones que, en materia de educación indígena, son contempladas en este Decreto; hasta en tanto, las autoridades educativas no realizarán ninguna acción derivada de la aplicación de dichas disposiciones.

**Sexto**. La Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado de Coahuila prevista en el artículo 28 de este Decreto deberá quedar instalada en un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

**Séptimo**. El sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado de Coahuila, previsto en el artículo 87 de este Decreto deberá instalarse antes de finalizar el año 2020.

**Octavo**. El Programa Educativo Estatal previsto en el artículo 104 de este Decreto se presentará en un plazo no mayor a sesenta días contados a la entrada en vigor del mismo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de junio de 2020.

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

Iniciativa con proyecto de decreto **que presenta el suscrito, Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” de la LXI Legislatura del Honorable Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por el que se crea la Ley de Control, Adopción y Bienestar de los Animales de Compañía para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente...**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En enero pasado, la secretaria de Ecología y Medio Ambiente en Coahuila, Eglantina Canales, otorgó un reconocimiento al director de Protección y Control Animal de Monclova, Martín Gómez, por haber esterilizado, en 2019, a mil 200 perros y gatos, además de otras acciones que permitieron reducir *“en buena medida”* la cantidad de animales en condiciones de calle.

Desconocemos si otros ayuntamientos del Estado fueron igualmente reconocidos por realizar labores similares; mientras tanto, este hecho en particular nos permite confirmar, primero, que sí es posible combatir exitosamente el maltrato animal, así como la proliferación de mascotas abandonadas y, por consiguiente, prevenir problemas de salud pública por zoonosis y contaminación ambiental, y, segundo, que, para tal efecto, se requiere voluntad política, lo mismo que disposiciones adecuadas en materia de bienestar de los animales de compañía.

Con base en este convencimiento, prácticamente desde que entró en funciones la actual Legislatura he venido insistiendo en la necesidad de que cada gobierno municipal disponga lo necesario para ofrecer una atención integral a las mascotas, sin dejar de lado el control efectivo de la proliferación de estas, principalmente de perros, pues ello atenta contra la salud ciudadana.

Mediante visitas y reuniones que he sostenido, tanto locales, como regionales, con representantes de varios ayuntamientos, y luego de exponer este serio problema en por lo menos cuatro ocasiones desde esta misma tribuna, a partir de febrero de 2018, he pugnado para que la totalidad de las 38 cabeceras municipales de la entidad cuenten con sus correspondientes Centros de Control Animal (o *“centros antirrábicos”*) como hasta ahora se les denomina.

En diferentes foros he propuesto también que, a través de la adecuación del marco legal respectivo, se inhiban los actos de crueldad animal, mismos que en su momento pudimos detectar, cuando lo ideal es que las familias que poseen animales de compañía, además de alimentarlos y protegerlos correctamente, los vacunen, desparasiten, esterilicen y les coloquen alguna clase de identificación.

En efecto, perros y gatos, por ejemplo, pueden trasmitir unas 150 enfermedades, entre ellas, la rabia, así como padecimientos gastrointestinales, dermatológicos y conjuntivitis, provocada por la desecación de las heces fecales que los animales dejan en la vía pública, entre otros males que generan dichas evacuaciones.

Como se recordará, Coahuila fue catalogado por la firma Mitofsky como un Estado *“amante de los perros”*, pues 74% de las familias cuentan con al menos uno de estos animales en casa. Esto parece ser confirmado con datos de la Secretaría de Salud, que apuntan al hecho de que los coahuilenses convivimos con alrededor de un millón de perros, pero 60% de estos deambulan sin control alguno.

Ante esta realidad, reportes oficiales señalan que sólo cuatro municipios cuentan con Centros de Control Animal: Saltillo, Torreón, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias. De Sabinas se afirmaba que también operaba un centro canino, pero esta información resultó falsa. En cuanto a los 34 ayuntamientos restantes, algunos decidieron, bajo diversos argumentos, eliminarlos, y otros, simplemente prefieren seguir omitiendo el incumplimiento de esta obligación legal.

Otro dato preocupante es que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, la población de mascotas en situación de calle crece alrededor de 20% anual, que en el Estado equivale a unos 200 mil perros. Frente a esta acelerada proliferación, el Gobierno del Estado no cuenta con capacidad sino para practicar sólo 8 mil esterilizaciones por año.

Protección Animal Mundial recomienda esterilizar perros callejeros, pero también canes y felinos que conviven con las familias dentro de sus casas. Dicha asociación civil también hace énfasis en la tenencia responsable, así como en el registro de mascotas y la educación ciudadana sobre su adopción y cría.

Definitivamente, por tratarse de una cuestión de salud pública, el control, principalmente canino y felino, es un asunto de atención prioritaria, pues, insisto, las mascotas lanzadas que constantemente lanzan las familias, además de representar un peligro para el transeúnte, son agentes de propagación, como ya he dicho, de múltiples enfermedades e infecciones de tipo viral, gastrointestinales, dermatológicas, ópticas y respiratorias, entre otras.

Cabe resaltar las responsabilidades vigentes para los propietarios de animales de compañía y para las autoridades de salud y medio ambiente, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Vida Silvestre para el Estado de Coahuila, referente al ordenamiento legal que regula *la situación referente a los animales domésticos y aquellos que se encuentren en cautiverio*.

Así mismo, en el artículo 4º, inciso B, fracción XVIII de la Ley Estatal de Salud, y a otras disposiciones de este mismo ordenamiento legal, como los artículos 6º, 107, fracción V; 111, fracción IV; 120, 239 al 242, y a lo previsto en la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 6, 10 al 15, 20, 57 al 65, 80 y 81. Igualmente, en conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en lo referente a los Centros de Control Animal, Artículos 57 al 65, y Capítulo Segundo, Artículos 14, 15, 19 y 20.

Es un hecho que los 38 Ayuntamientos de Coahuila, en función de sus competencias y atribuciones, y en cabal cumplimiento a la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tienen la impostergable responsabilidad de crear áreas para la protección y bienestar animal, y, la Secretaría de Finanzas, la obligación compartida de coadyubar para el logro de este objetivo, lo mismo que la Secretaría de Salud, en el empeño de reducir la sobrepoblación canina y provenir padecimientos por zoonosis.

Por su parte, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, como los gobiernos municipales de la Entidad, no están exentos de observar la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre todo lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de este ordenamiento, en cuanto a vigilar *el debido cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección y trato digno a los animales*, como en *imponer en los términos previstos en la presente Ley, las sanciones que procedan por la comisión de infracciones, conforme a las disposiciones aplicables*; *aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la protección y trato digno de los animales prevista en esta Ley*; y *establecer y aplicar las medidas correctivas e imponer sanciones correspondientes por infracciones a la presente ley, sus reglamentos y demás disposiciones en el ámbito de sus respectivas competencias*”.

Así pues, contamos con un marco jurídico de referencia muy sólido y moderno, con base en el cual se concibe la Ley planteada en la presente iniciativa, que también se apropia de las premisas que se abren paso entre los defensores de los derechos de los animales, en especial, de los clasificados como *“de compañía”*.

La propia administración pública federal se ha pronunciado incluso a favor de que se le dé un giro nuevo al quehacer de los tradicionales *“centros antirrábicos”*, también identificados como *“centros de control animal”*, que ahora pasarían a denominarse *“Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal”*, los cuales están llamados a ocuparse, tanto de mascotas con dueño(a), como de animales que se encuentren en situación de calle.

Parte del planteamiento consiste en que estos establecimientos municipales realicen una función más completa, en estricto apego a los derechos humanos, como de los animales, lo que incluye la realización de jornadas de adopción y capacitación para el bienestar animal.

Se prevé también la prohibición de sacrificios de mascotas, excepto cuando existieren razones humanitarias para quitarles de la vida, o sea, afecciones graves e irreversibles que encajen en el concepto médico de *“incompatibles con la vida”*, por ejemplo: defectos congénitos, patologías y lesiones.

No debemos perder de vista que, según la organización AnimaNaturalis, en México mueren cada año unos 60 mil animales, lo que coloca al país en el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal.

En suma, se proponen una serie de compromisos básicos para trabajar coordinadamente con asociaciones, refugios, activistas y sociedad civil en el tema de derechos de los animales. Esta labor incluye cursos y talleres sobre bienestar animal y las responsabilidades que implica la tenencia de estos, así mismo, efectuar jornadas permanentes de adopción y esterilización, al tiempo en que se reorientan las actividades de los *“centros* *antirrábicos”*.

Los nuevos Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal están concebidos para ofrecer servicios de salud de primera necesidad, bajo un costo calculado con base en estudios socioeconómicos a las familias.

Esto responde también a las inquietudes que en tal sentido he recogido en reuniones de trabajo, foros y consultas, todos ellos realizados a lo largo de mi gestión con autoridades en la materia, funcionarios estatales, miembros de varios ayuntamientos, especialistas en el tema y con líderes de agrupaciones regionales que se identifican con la procuración del bienestar animal.

Igualmente, esta nueva Ley de Control, Adopción y Bienestar de los Animales de Compañía para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se fundamenta e inspira en el texto definitivo de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptado por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas tras la 3ª Reunión sobre los derechos del Animal, Londres, 21 al 23 de setiembre de 1977.

Proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue asumida por el Gobierno de México y luego difundida por diversas organizaciones e instituciones del país, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el pasado 15 de octubre:

*Considerando que todo animal posee derechos; que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales; que el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo**.*

Así mismo, tomando en cuenta *que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo; que el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos; que la educación implica enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales*, se proclama lo siguiente:

*Artículo 1º*

*Todos los animales nacen iguales ante la vida y la tienen los mismos derechos a la existencia.*

*Artículo 2º*

1. *Todo animal tiene derecho a ser respetado.*
2. *El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.*
3. *Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección por parte del hombre.*

*Artículo 3º*

1. *Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.*
2. *Si* *la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.*

*Artículo 4º*

1. *Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.*
2. *Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho.*

*Artículo 5º*

1. *Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.*
2. *Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre, es contraria a dicho derecho.*

*Artículo 6º*

1. *Todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.*
2. *El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.*

*Artículo 7º*

*Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.*

*Artículo 8º*

1. *La experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, ya se trate de experimentos médicos, científicos, comerciales, o de cualquier otra forma de experimentación.*
2. *Las técnicas alternativas de experimentación deben ser utilizadas y desarrolladas.*

*Artículo 9º*

*Los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni dolor.*

*Artículo 10º*

1. *Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre.*
2. *Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad del animal.*

*Artículo 11º*

*Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida.*

*Artículo 12º*

1. *Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie.*
2. *La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio.*

*Artículo 13º*

1. *Un animal muerto debe ser tratado con respeto.*
2. *Las escenas violentas en las que haya víctimas animales deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, a no ser que su objetivo sea denunciar los atentados contra los derechos del animal.*

*Artículo 14º*

1. *Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental.*
2. *Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos ciudadanos.*

Se ha procurado que la presente iniciativa sea concordante con lo establecido en el Código Municipal del Estado, en particular, con lo previsto en el *artículo 102. ... En todo caso, los ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes: ...* fracción *IV. En materia de servicios públicos municipales: ...* inciso *i) Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera ...* fracción *VII. En materia de educación y cultura, asistencia y salud públicas:* numeral *4. Promover y procurar la salud pública en el Municipio y auxiliar a las autoridades sanitarias estatales y municipales en la planeación y ejecución de sus disposiciones.*

Así mismo, las disposiciones planteadas para la integración de esta Ley de Control, Adopción y Bienestar de los Animales de Compañía para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se corresponde con los ordenamientos generales aplicables, así mismo, con el Código Penal del Estado en materia de Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales; la Ley Estatal de Salud; Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Ley Estatal de Educación; Ley de Vida Silvestre del Estado; y Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Con base en todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la siguiente Iniciativa con...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se crea la Ley de Control, Adopción y Bienestar de los Animales de Compañía para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar en los términos siguientes:

**LEY DE CONTROL, ADOPCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**TÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I**

**OBSERVANCIA Y TERMINOLOGÍA**

**Artículo 1.** La presente ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza, y tiene por objeto la protección, el trato digno y el cuidado adecuado de los animales de compañía, a través de las siguientes líneas de acción:

1. Fomento de una cultura de bienestar animal;
2. Colaboración coordinada de Estado y ayuntamientos para el establecimiento de políticas públicas, ejecución de programas y realización de acciones específicas en materia de protección animal; y
3. Participación de la sociedad civil en tareas encaminadas al bienestar de los animales, particularmente los de compañía.

**Artículo 2.** La presente ley se aplicará de manera supletoria a la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley Estatal de Salud, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, Ley de Vida Silvestre para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como tratados internacionales y leyes federales en materia de salud pública, sanidad animal, vida silvestre, equilibrio ecológico y protección al ambiente, y demás ordenamientos aplicables.

**Artículo 3.** En virtud de que la vida animal consiste en una red de especies interconectada, insustituible y con la que interactuamos, así mismo, debido a que la vida animal ofrece servicios naturales esenciales para el ser humano, como son: recursos medicinales, recreación, apoyo terapéutico, compañía, alimento y patrimonio natural, y en razón de que la biodiversidad es saludable para los ecosistemas, los cuales reclaman el derecho a la vida, la preservación de los animales es indispensable para la sustentabilidad del desarrollo humano, por lo cual se les debe proporcionar protección y cuidado, según las leyes en la materia y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 4.** Son objeto de tutela de esta ley todas las especies de animales de compañía, principalmente perros y gatos, por ser los tipos de mascota que más prefieren los coahuilenses.

**Artículo 5.** Para los efectos de esta ley se entenderá por:

1. **Animal.** Ser viviente del cual se ocupa la zoología, no humano, pluricelular, que siente y reacciona ante otras especies animales, así como al trato humano y a los estímulos de su entorno; se nutre de sustancias elaboradas por otros seres vivos; posee capacidad de movimiento y estructura anatómica formada por órganos y sistema nervioso. El ser humano se diferencia de este al considerarse el único ser racional y con un lenguaje articulado.
2. **Animal de compañía.** Clase de animal doméstico que las personas tienen en sus hogares en calidad de acompañante y que, de un modo u otro, suele considerársele parte de la familia, al interactuar con esta, sin el interés de obtener, mediante su tenencia, beneficios de tipo lucrativo. Se trata, generalmente, de perros y gatos.
3. **Mascota.** Del término francés *“mascotte”*. Animal de compañía, domesticado. Por excelencia: perros y gatos. No está destinada al trabajo, ni a ser aprovechada como fuente de alimento (o “animal de abasto”, como lo define la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza), sino al apoyo y disfrute de su cuidador.
4. **Animal doméstico.** Todas aquellas especies domesticadas y que están bajo el cuidado del hombre; criadas, reproducidas y que conviven con el ser humano, no perteneciendo a la fauna salvaje, entre ellos: los animales criados para la producción de carne, piel u otros productos y servicios para el consumo humano, incluidos los animales de carga y los que trabajan en la agricultura.
5. **Animal abandonado.** El que deambula libremente por la vía pública, sin placa u otra forma de identificación, por lo que se le denomina también *“animal en situación de calle”*. Son mascotas que se encuentren sin el control y cuidados adecuados de sus propietarios.
6. **Adopción.** Tomar legalmente en condición de mascota a un animal de compañía, a través de un contrato verbal o por escrito entre un tutor y una organización de carácter civil, dependencia gubernamental o particular, mediante el cual el nuevo poseedor asume la obligación de proveer bienestar integral al animal.
7. **Tutor.** Persona física o moral que, de manera temporal o permanente, tiene bajo su posesión y responsabilidad un animal de compañía, obligándose con esto a garantizar el bienestar de la mascota.
8. **Bienestar animal.** Estado en el que la mascota tiene satisfechas sus necesidades bilógicas, de salud, de comportamiento y fisiológicas, frente a cambios respecto de su ambiente primigenio, generalmente impuestos por el ser humano.
9. **Trato digno.** Las medidas establecidas legalmente para evitar el dolor o angustia de cualquier animal durante su posesión, propiedad, captura, crianza, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, adiestramiento y sacrificio.
10. **Maltrato animal.** Cualquier acto de agresión, descuido, abandono o sobreexplotación hacia cualquier especie animal, generándole sufrimiento y/o poniendo en riesgo su integridad física y salud integral. Son ejemplos de lo anterior, los siguientes:
11. No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales de compañía o cautivos;
12. Azuzarlos para que realicen alguna actividad o rutina mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen castigos innecesarios o sensaciones dolorosas;
13. No proporcionarles periodos y sitios de descanso adecuados;
14. No brindar a los animales de compañía una vivienda o refugio adecuado, de acuerdo a las características propias de la especie o, a pesar de disponerse de espacio para mantenerlos sueltos, los tengan permanentemente amarrados o encerrados;
15. Someterlos a actividades o rutinas agotadoras cuando no presenten un estado físico óptimo;
16. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos;
17. Emplearlos en prácticas en las que tengan que cargar o arrastrar pesos que excedan notoriamente sus capacidades físicas;
18. No proporcionar espacios adecuados y limpios a las mascotas que se encuentren en establecimientos dedicados a la venta de estos o en los lugares en donde por algún motivo se encuentren bajo resguardo;
19. No proporcionar atención veterinaria a cualquier animal que lo requiera y que tengan por cualquier causa bajo su cuidado, tenencia o resguardo. Quedan exceptuados los casos en donde, por no contar con los medios económicos para su atención, se dé aviso a las autoridades correspondientes o grupos protectores de animales legalmente constituidos, a fin de obtener apoyo para la atención del animal de que se trate.
20. **Crueldad animal.** Todo acto mediante el cual el ser humano produce, de manera intencional, dolor y sufrimiento extremo a las especies animales, como los que a continuación se especifican:
21. Practicar la vivisección con fines científicamente innecesarios, en lugares y por personas no autorizados oficialmente para ello;
22. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que la realice un médico calificado con fines de mejoramiento, marcación, castración o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad;
23. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesiarlos o, aun cuando se les suministre anestesia, la persona que lleve a cabo la intervención no tenga título de médico veterinario, salvo en caso de urgencia, debidamente comprobada;
24. Experimentar con animales, pudiendo utilizar otros métodos para obtener el resultado deseado, o se utilicen animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable, según la naturaleza del protocolo de investigación;
25. Abandonar a cualquier animal de tal modo que quede desamparado o expuesto a riesgos que amenacen su salud e integridad física o las de los seres humanos.
26. Causar la muerte de animales preñados cuando tal estado es patente en el animal;
27. Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios, o con la intención de matarlos, por el solo espíritu de perversidad, venganza, odio o simple diversión;
28. Ocasionar, por cualquier medio, la muerte de un animal, salvo si se trata de sacrificios autorizados bajo las disposiciones normativas aplicables, por cuestiones alimentarias, sanitarias o de otro tipo, debidamente reguladas.
29. **Animal guía.** Especie adiestrada con el fin de apoyar a las personas con alguna clase de discapacidad.
30. **Animales para zooterapia.** Especies que conviven con una persona o grupo de individuos con fines terapéuticos y para el tratamiento de algunas enfermedades de tipo neurológico, psicológico y psiquiátrico, entre otras.
31. **Animal en exhibición.** Todos el que se encuentra cautivo en zoológicos y espacios similares de propiedad pública o privada.
32. **Animal para espectáculo.** Animal utilizado para o en un espectáculo público o privado, fijo o itinerante, bajo el adiestramiento del ser humano, o en la práctica de algún deporte.
33. **Animal para la investigación científica.** Especie que es utilizada por instituciones científicas para la generación de nuevos conocimientos.
34. **Animales de guardia y protección:** Aquellos que son entrenados por personas debidamente autorizadas, a fin de realizar funciones de seguridad personal, vigilancia o protección y guardia en establecimientos comerciales, casas-habitación o instituciones públicas y privadas, así como para ayudar a la detección de estupefacientes, armas, explosivos y demás acciones análogas.
35. **Animal silvestre.** Según la Ley General de Vida Silvestre, las especies que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes o ferales y por ello sean susceptibles de captura y apropiación.
36. **Hábitat.** Espacio del medio ambiente físico en el que se desarrollan organismos, especies, población o comunidades de animales en un tiempo determinado.
37. **Enfermedades zoonóticas.** cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a seres humanos.
38. **Secretaría.** Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a menos que se especifique textualmente que se trata de otra Secretaría.
39. **Consejo.** Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
40. **Centro.** Centro de Control, Adopción y Bienestar Animal.
41. **Esterilización.** Proceso quirúrgico o químico que se practica en los animales, para evitar su reproducción.
42. **Sacrificio.** Muerte infligida a una mascota por un médico, sin generarle sufrimiento físico. Eutanasia que, según la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, consiste en un procedimiento para terminar, de manera humanitaria, con la vida de un animal, por medio de la administración de agentes químicos o métodos mecánicos, que induzcan primero pérdida de la conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor; con el fin de que éstos dejen de sufrir por lesiones o enfermedades graves e incurables, así como por dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados.
43. **Médico.** Médico veterinario o médico veterinario zootecnista titulado con cédula profesional vigente.

**CAPÍTULO II**

**COMPETENCIAS**

**Artículo 6.** Sin menoscabo de sus atribuciones en el ámbito de la protección y trato digno a los animales, según sus respectivas competencias, son autoridades en la Entidad en materia de protección a los animales de compañía:

1. La Secretaría de Salud;
2. Secretaría de Medio Ambiente;
3. Secretaría de Educación; y
4. Los ayuntamientos de la entidad por conducto de sus alcaldes, a través de los Centros, órganos o unidades administrativas competentes.

**Artículo** **7.** Corresponde a la Secretaría de Salud de Coahuila:

1. El establecimiento de Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal, en coordinación con los gobiernos municipales;
2. Vigilar que, en el manejo de animales, el personal de los Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal no atente contra la salud, integridad física o las vidas de estos;
3. Expedir licencias sanitarias e inspeccionar los establecimientos donde se realice la cría, venta y adiestramiento de animales de compañía;
4. Realizar, en coordinación con los ayuntamientos, campañas de vacunación antirrábica, de esterilización, desparasitación y sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas;
5. Asegurarse de que los eventuales sacrificios humanitarios de mascotas, o los que se lleven a cabo por motivos de investigación científica, así como las campañas de vacunación y esterilización, se realicen de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y en apego a los ordenamientos en materia de bienestar animal;
6. Presidir el Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal del Estado de Coahuila de Zaragoza; y
7. Las demás que esta ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.

**Artículo** **8.** Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila el ejercicio de las siguientes facultades:

1. Celebrar convenios de coordinación con autoridades federales y municipales para establecer políticas públicas en materia de bienestar animal y para el cumplimiento de los ordenamientos aplicables en la procuración de la salud y buen trato de los animales de compañía;
2. La difusión de información que genere una cultura cívica de protección a favor de las mascotas y especies animales en general; y
3. Las demás que le confieran esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

**Artículo** **9.** Corresponde a la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a su marco jurídico:

1. Fomentar y difundir las actividades ecológicas que propicien una cultura de respeto y atención integral a los animales de compañía;
2. Impulsar los programas educativos, de todos los niveles, relativos a la preservación ecológica, mejoramiento ambiental y bienestar animal;
3. Vigilar que en los planteles educativos del nivel básico no se efectúen prácticas o experimentos con animales, así mismo, supervisar que las prácticas de vivisección y experimentación realizadas con animales vivos en las instituciones educativas de tipo medio superior y superior que son de su competencia, se efectúen con apego a lo dispuesto por el Capítulo del Título Tercero de esta ley y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan; y
4. Las demás atribuciones y responsabilidades de esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

**Artículo** **10.** Son facultades de los gobiernos municipales:

1. La creación y operación de Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado;
2. La celebración de convenios de colaboración con autoridades estatales y federales, sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras del bienestar animal, con el objeto de brindar cuidado y protección a los animales de compañía;
3. Crear y operar un padrón de organizaciones sociales y asociaciones protectoras de animales, como instrumento que permita conocer sus fines específicos, sus agendas de trabajo y para suscribir convenios de colaboración, así mismo, para incluir su participación en la realización de las tareas contempladas en la presente ley, como son programas de educación, difusión y participación ciudadana;
4. Asistir, de manera voluntaria o por invitación expresa, y con derecho a voz solamente, a las sesiones del Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal;
5. Intervenir en los casos de crueldad animal, en el rescate de los especímenes maltratados y en la aplicación de las sanciones que correspondan;
6. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la presente ley;
7. Promover la participación de personas, asociaciones protectoras de animales, organizaciones sociales, instituciones académicas y centros de investigación, en las acciones relacionadas con la protección y cuidado de los animales;
8. Controlar la proliferación de mascotas en situación de calle, mediante estrategias que no provoquen sufrimiento a los animales, a fin de prevenir daños a otros animales, a personas o al medio ambiente; y
9. Las demás que, por disposición legal, le correspondan.

**Artículo 11.** Cuando por cualquier motivo los animales de compañía queden bajo la responsabilidad del gobierno municipal, serán alimentados y se les proporcionará alojamiento amplio y ventilado, bebederos y temperatura adecuada, según la especie y de acuerdo con lo establecido en las respectivas Normas Oficiales Mexicanas, hasta que sean devueltos a sus dueños, dados en adopción o sacrificados por razones humanitarias, de acuerdo con las circunstancias y posibilidades de cada ayuntamiento.

**Artículo 12.** En ningún caso podrá procederse a la devolución, entrega en adopción o sacrificio de la mascota antes de los 10 días hábiles de que esta haya quedado a disposición de la autoridad municipal.

**Artículo 13.** Tratándose de animales que hayan sido ingresados a los Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal, estos tendrán la obligación, en los términos del reglamento correspondiente, de buscar al propietario, considerando las formas de identificación que tenga el animal; transcurridos 10 días hábiles sin que la mascota sea recogida por su dueño, esta podrá ser entregada en adopción a alguna persona o asociación que asuma la responsabilidad de cuidarla adecuadamente.

**Artículo** **14.** La captura de animales de compañía en la vía pública sólo podrá realizarse cuando estos deambulen sin dueño aparente, y que, por sus condiciones de higiene y salud, sea evidente que se trata de animales maltratados, abandonados y/o extraviados.

**TÍTULO SEGUNDO**

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**CAPÍTULO I**

**CONSEJO ESTATAL PARA EL CONTROL,**

**ADOPCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**

**Artículo 15.** El Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal, es un órgano del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, encargado de coordinar la colaboración institucional y la participación ciudadana, cuya integración se realizará a convocatoria de la Secretaría de Salud, misma que presidirá el Consejo y que tendrá como finalidad principal establecer acciones programáticas y fijar líneas de políticas zoológicas, ambientales y de sanidad, a efecto de garantizar la protección y el cuidado de los animales en todo el Estado.

**Artículo 16.** El Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal, estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias, autoridades y organismos:

1. Secretaría de Salud, la cual presidirá el Consejo, y cuya presencia será de carácter permanente;
2. Secretaría de Medio Ambiente, con asistencia permanente;
3. Secretaría de Educación Pública;
4. Tres representantes de asociaciones protectoras de animales y/o de organizaciones civiles afines;
5. Especialistas invitados y/o, eventualmente, autoridades municipales; y
6. Un secretario técnico.

**Artículo 17.** El Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal, integrado por miembros cuyos cargos serán honoríficos, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Vigilar por que se cumpla el presente ordenamiento;
2. Proponer campañas y estrategias a favor del control y protección a los animales;
3. Promover la cultura de la adopción de animales de compañía;
4. Definir e instrumentar, en coordinación con los gobiernos municipales, las políticas públicas que habrán de regir en materia de protección animal;
5. Proponer a los municipios o, en su caso, implementar campañas de difusión y fomento de la práctica de actividades en materia de control, protección y cultura de respeto a las mascotas;
6. La implementación y coordinación de campañas de esterilización, vacunación, desparasitación y adopción de animales de compañía;
7. El desarrollo de las acciones establecidas en los convenios que la Secretaría de Salud establezca con los sectores sociales, privado, académico y de investigación en la materia de protección animal;
8. El impulso a la creación y correcta operación de Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal en todos los municipios, mismos que tendrán como objetivo principal la atención médica preventiva y curativa, así mismo, el desarrollo de campañas de esterilización como medio para prevenir la sobrepoblación de animales de compañía y la proliferación de mascotas en situación de calle, priorizando tales acciones por encima del sacrificio;
9. El fomento a la creación de reglamentos y manuales de cuidados realizados por los ayuntamientos; y
10. Las demás que se desprendan del presente ordenamiento.

El Consejo sesionará por lo menos una vez cada tres meses, y funcionará conforme a lo dispuesto por su propio reglamento y el plan de trabajo, que serán emitidos por el mismo.

**Artículo 18.** Los representantes de las entidades que formen parte del Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal serán designados por los titulares de sus respectivas dependencias e instituciones, y tendrán conocimientos en los temas de bienestar animal, medio ambiente y/o salud pública.

**Artículo 19.** El procedimiento para definir a los representantes de las asociaciones protectoras de animales y demás organizaciones afines que habrán de acudir a las sesiones del Consejo, quedará establecido en el reglamento correspondiente.

**Artículo 20.** Los titulares de las dependencias que, de acuerdo con este ordenamiento, deban estar representadas, designarán a los servidores públicos que cubrirán las ausencias transitorias o definitivas de los inicialmente nombrados.

**Artículo 21.** El titular de la Secretaría de Salud suplirá, de acuerdo con los lineamientos que el reglamento interior establezca, las ausencias temporales o definitivas de los ciudadanos invitados a participar en el Consejo.

**Artículo 22.** El Secretario Técnico del Consejo será designado por el titular de la Secretaría de Salud, y gravitará en el presupuesto de la misma.

**Artículo 23.** El Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal tendrá la facultad de convocar a gobiernos municipales, así como a ciudadanos expertos en la materia, con el fin de desarrollar de manera eficiente los temas propuestos y aportar sus conocimientos y experiencia, los cuales contarán con voz dentro de las sesiones correspondientes. Lo anterior, sin menoscabo del interés de los ayuntamientos de acudir por iniciativa propia a las sesiones, sólo con voz, en la consolidación de las acciones que, de manera coordinada, se realicen.

**CAPÍTULO II**

**AGRUPACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES**

**Artículo 24.** Las agrupaciones defensoras de los derechos y bienestar de los animales podrán registrarse en los padrones municipales de esta clase de organizaciones, con la finalidad de colaborar con las autoridades correspondientes en el cumplimiento de las acciones encaminadas al control y bienestar animal.

**Artículo 25.** Los gobiernos municipales deberán proporcionar a las asociaciones y organizaciones protectoras de animales la información y apoyo necesarios para cumplir sus fines, conforme a las estrategias o programas de acción acordados con los propios ayuntamientos.

**Artículo 26.** En los Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal, tanto como en albergues y todo establecimiento público donde se manejen animales, se autorizará eventualmente la presencia de por lo menos tres representantes de asociaciones protectoras de animales, debidamente registradas, para que evalúen las condiciones en el trato y sacrificio humanitario de los animales y, en su caso, emitan las recomendaciones que estimen pertinentes.

**Artículo 27.** Con la autorización del gobierno municipal, las asociaciones protectoras de animales podrán coadyuvar en cualquiera de las siguientes actividades:

1. Remitir animales de compañía a los Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal o, en su caso, a refugios o albergues legalmente autorizados, si existiese espacio disponible;
2. Realizar el sacrificio de mascotas, estrictamente por razones humanitarias, siempre y cuando cuenten con el personal debidamente capacitado y autorizado por los ayuntamientos para dicho fin;
3. Abrir y atender refugios de animales de compañía, cumpliendo con las disposiciones establecidas por los ayuntamientos, con el objeto de proveerles de bienestar y darlos en adopción; y
4. Realizar campañas de esterilización de mascotas en situación de calle.
5. Presentar o canalizar denuncias relacionadas con maltrato o crueldad hacia los animales de compañía.

**CAPÍTULO II**

**CULTURA DE BIENESTAR ANIMAL**

**Artículo 28.** Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus facultades, promoverán, mediante programas y campañas de difusión, la cultura de cuidado y protección a los animales de compañía.

**Artículo 29.** Las secretarías de Salud y de Medio Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con los gobiernos municipales, impartirá cursos, talleres de capacitación y de actualización en el manejo de animales de compañía.

**TÍTULO TERCERO**

**TUTELA DE LAS MASCOTAS**

**CAPÍTULO I**

**BIENESTAR ANIMAL**

**Artículo 30.** Toda persona que compre o adopte un animal está obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en la presente ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

**Artículo 31.** Está prohibido realizar o promover actos que lesionen, pongan en peligro o provoquen sufrimiento a los animales, excepto cuando algún(a) profesional de la salud animal considere necesario someterlos a procedimientos directamente relacionados con tratamientos médicos o terapéuticos.

**Artículo 32.** Toda persona que no pueda hacerse cargo de su mascota está obligada a buscarle alojamiento y atención adecuada y, bajo ninguna circunstancia, podrá abandonarla en la vía pública o en zonas rurales.

**Artículo 33.** Tratándose de padres, tutores o los que ejerzan la patria potestad, serán responsables del trato que los menores les den a sus animales de compañía, haciéndose acreedores a las sanciones correspondientes y a resarcir los daños y perjuicios en los casos en que las mascotas causen daños a terceros, a las cosas o a otros animales, todo ello con apego a lo establecido en este ordenamiento, el Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos de carácter penal aplicables para el caso.

**Artículo 34.** La propiedad o posesión de cualquier animal obliga al responsable a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico, propias de la especie.

**Artículo 35.** Queda prohibido transportar perros o cualquier otro tipo de animales de compañía en condiciones inseguras a bordo de vehículos automotores descubiertos, como autos descapotados o camionetas.

**Artículo 36.** Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente ley, tiene el deber de informar a la autoridad competente de la existencia del mismo, y la autoridad competente deberá acudir de manera diligente a verificar la existencia del acto, omisión o hecho que fue denunciado.

**CAPÍTULO II**

**CUIDADOS MÉDICOS**

**Artículo 37.** Las autoridades municipales se asegurarán, mediante inspecciones periódicas, de que la atención médica que ofrecen hospitales, clínicas y consultorios para mascotas, cumplan con los siguientes requisitos:

1. Estar a cargo de un médico, debidamente acreditado;
2. Contar con las respectivas licencias municipal y sanitaria;
3. Disponer de recursos materiales y humanos suficientes para la debida atención a los animales de compañía y contar con espacios adecuados que les permitan moverse con comodidad cuando reciban tratamiento o sean hospitalizados;
4. Que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones, tanto materiales, como de higiene, y con un nivel temperatura ambiental que permita una adecuada atención a los animales; y
5. Las demás que la autoridad municipal disponga en favor del bienestar animal.

**Artículo 38.** En el caso de animales de compañía, cuyas especies no correspondan a las más tradicionales: perros y gatos, la atención médica será proporcionada, de ser posible, por un médico(a) especializado en la especie de que se trate, y podrá prestar el servicio correspondiente en el lugar donde el animal se encuentre.

**CAPÍTULO III**

**CRÍA Y VENTA DE ANIMALES**

**Artículo 39.** Para los casos de la cría y venta de animales, los gobiernos municipales se asegurarán de que toda persona física o entidad jurídica, ya sea pública o privada, dedicada a la crianza y venta de mascotas, se obligue para ello a cumplir con los procedimientos autorizados en los ordenamientos en la materia, a fin de que los animales reciban un buen trato y propicien el comportamiento natural de las especies.

**Artículo 40.** En los lugares destinados a la cría y venta de animales de compañía se deberá observar lo dispuesto en las respectivas Normas Oficiales Mexicanas, las leyes federales y estatales en la materia, el presente ordenamiento y las disposiciones municipales aplicables, particularmente los siguientes requisitos:

El manejo clínico estará a cargo de un médico veterinario zootecnista titulado, con cédula profesional vigente, quien deberá disponer de los recursos necesarios para la atención integral de los animales, y contar con:

1. Licencia municipal;
2. Licencia sanitaria;
3. Comida, agua potable, temperatura apropiada, espacios suficientes y debidamente iluminados, en donde las mascotas puedan alimentarse, dormir y moverse con comodidad, quedando prohibido enjaular de forma permanente a los animales y sobreexplotar a las hembras para efectos reproductivos;
4. Proporcionar el cuidado diario, quedando estrictamente prohibido dejarlos sin la atención debida durante los días no laborables;
5. Llevar a cabo, un médico, cualquier procedimiento quirúrgico, insensibilizando previamente al animal, mediante la administración de anestésicos en dosis suficientes y de acuerdo con lo establecido en este ordenamiento;
6. Vender los animales, una vez desparasitados, vacunados y libres de toda enfermedad, y con certificado médico expedido en el momento de la venta por el médico que sea el responsable del criadero;
7. Tener un control de producción y llevar un registro de camadas; y
8. En el caso de las especies de las que no se logre su venta, procurar entregarlas en adopción, o bien, a los organizadores de eventos que se desarrollen con tal propósito.

**Artículo** **41.** Los establecimientos comerciales, ferias y exposiciones donde se vendan animales, están obligados a otorgar a cada comprador un manual, médicamente certificado, para el cuidado, albergue, dieta de la mascota adquirida y, adicionalmente, información sobre los riesgos ambientales de su liberación al medio rural o urbano, y acerca de las sanciones a las que los dueños podrían estar sujetos por el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás relativas.

**Artículo 42.** Las instalaciones de los Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal, y las utilizadas para el funcionamiento de los refugios, escuelas de adiestramiento, actividades deportivas y pensiones, deberán establecerse de acuerdo con los lineamientos establecidos en el presente ordenamiento para el debido cuidado y protección de los animales.

**Artículo 43.** Las instalaciones creadas para alojar temporal o permanentemente a los animales domésticos deberán contar con médico responsable y demás personal capacitado.

**CAPÍTULO IV**

**COMERCIALIZACIÓN DE MASCOTAS**

**Artículo 44.** Queda prohibida la venta de animales de compañía sin el permiso o licencia de la autoridad municipal competente. El comercio de animales se hará obligatoriamente en establecimientos autorizados y vigilados por el ayuntamiento. En el caso de que, además de la venta, se proporcione cualquier otro servicio, este deberá llevarse a cabo cumpliendo con lo dispuesto en el presente ordenamiento y demás aplicables en materia de bienestar animal.

**Artículo 45.** Queda estrictamente prohibido vender, rifar u obsequiar animales domésticos o de compañía, especialmente cachorros, en la vía pública, escuelas, mercados, tianguis, ferias o cualquier otro lugar en donde no se cumpla con las disposiciones del presente ordenamiento.

**CAPÍTULO V**

**ENTRENAMIENTO ANIMAL**

**Artículo 46.** El adiestramiento consiste en la alteración del comportamiento animal, con la finalidad de acondicionarlo para la realización de rutinas, con fines deportivos, de exhibición, terapéuticos, entretenimiento, para la seguridad de personas y bienes, auxilio a discapacitados o apoyo policiaco.

**Artículo 47.** Está prohibido el adiestramiento de un animal cuando tenga por finalidad prepararlo para hacerlo pelear, someterlo a actos de crueldad o causarle la muerte en actividades de entretenimiento públicas o privadas.

**Artículo 48.** Cuando se clausure un centro de adiestramiento por falta de licencia, la autoridad municipal tomará las medidas necesarias para el aseguramiento y protección de los animales.

**CAPÍTULO VI**

**ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA**

**Artículo 49.** Las personas físicas o jurídicas podrán organizar eventos en espacios abiertos o cerrados, públicos o privados, para promover la adopción de mascotas abandonadas, previa obtención del permiso de la autoridad municipal correspondiente, para lo cual contarán con el apoyo del ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, especialmente en la difusión de dichos eventos.

**Artículo 50.** Las personas físicas y jurídicas que organicen eventos para otorgar animales de compañía en adopción, deberán entregarlos estando vacunados, desparasitados y esterilizados, haciendo además el seguimiento de éstos para que, en el caso de que se detecte alguna forma de maltrato, sean recuperados de inmediato. Deberán entregar a los adoptantes un manual de cuidados específicos.

**CAPÍTULO VII**

**CENTROS DE CONTROL, ADOPCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**

**Artículo 51.** Las 38 cabeceras municipales del Estado de Coahuila contarán, en la medida de su capacidad, con sus respectivos Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal, haciéndose cargo de su operatividad técnica y administrativa, bajo los siguientes objetivos:

1. Funcionar como refugio temporal de animales de compañía abandonados o extraviados. Los animales enfermos o lesionados, las hembras gestantes y los animales que se encuentren en periodo de lactancia, deberán ser ubicados en un lugar diferente al que se encuentre el resto de los animales resguardados;
2. Llevar a cabo campañas periódicas de vacunación antirrábica. Cuando las instituciones, colegios o médicos acreditados oficialmente realicen trabajos de vacunación antirrábica, expedición de certificados de vacunación y entrega de placas de identificación, deberán notificarlo o turnar copias al Centro correspondiente;
3. Desarrollar un programa permanente de esterilización gratuita de animales de compañía, incluyendo en este a los que se encuentren en situación de calle;
4. Efectuar cruzadas de desparasitación de mascotas;
5. Proporcionar atención veterinaria a bajo costo, excepto los servicios que la autoridad otorgue a través de programas gratuitos;
6. Impartir periódicamente cursos, pláticas y talleres para fomentar, sobre todo entre los niños, el respeto, cuidado y protección de las mascotas;
7. Expedir cartillas y certificados de salud animal;
8. Contar con instalaciones para el servicio de sacrificio de animales, el cual sólo podrá practicarse por razones de carácter estrictamente humanitario o en casos extremos de insalubridad pública y grave deterioro ambiental;
9. Los Centros serán los responsables de recoger de manera diligente los animales abandonados, los cuales retendrán hasta que sean reclamados, adoptados o sacrificados, dentro de un plazo de cinco días naturales, así como del retiro de mascotas que, por cualquier causa, hayan fallecido en vía pública;
10. Dar en adopción a asociaciones protectoras de animales o a terceros las mascotas que no sean reclamadas por sus tutores o, en su defecto, sacrificarlas. Los animales reclamados serán esterilizados, servicio que pagarán los tutores, previo estudio socioeconómico;
11. Tratándose de perros y gatos, promover el uso obligatorio de elementos de identificación, como collares, placas y/o correas;
12. Poner a disposición de la autoridad competente, los animales de compañía diferentes a los caninos y felinos que hayan sido capturados en la vía pública en situación de abandono;
13. Proveer y fomentar un trato digno a los animales que se encuentren bajo su resguardo, conforme a lo dispuesto en la presente ley y lo previsto en los demás ordenamientos aplicables; y
14. Los demás que sean afines a los objetivos de esta ley.

**Artículo 52.** Por los servicios que preste el Centro de Control, Adopción y Bienestar Animal, el Gobierno Municipal cobrará el pago de los derechos correspondientes, previos estudios socioeconómicos a los tutores y tomando de referencia lo dispuesto en la Ley de Ingresos municipal.

**Artículo 53.** Para prestar los servicios a cargo del Centro de Control, Adopción y Bienestar Animal, el municipio podrá solicitar el apoyo de voluntarios, de agrupaciones ciudadanas afines a la procuración del bienestar animal o de prestadores de servicio social.

**Artículo 54.** Los Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal estarán bajo la dirección de un veterinario titulado, con cédula profesional registrada, y una experiencia mínima de cinco años en la atención a pequeñas especies.

**Artículo 55.** Los Centros de Control, Adopción y Bienestar Animal podrán ser patrocinados por casas comerciales o industriales que tengan relación con la comercialización o producción de bienes y servicios para el cuidado y atención de los animales.

**CAPÍTULO VIII**

**CUIDADOS A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA**

**Artículo 56.** El sometimiento de un animal a rutinas excesivas o en condiciones de maltrato será sancionado por la autoridad municipal, observando siempre el cumplimiento de lo siguiente:

1. El propietario, poseedor o encargado de animales de compañía que además sean sometidos a eventos de exhibición o competencias deportivas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes, alimentar y cuidar apropiadamente a sus animales; también mantendrá las instalaciones de guarda en estado higiénico y en condiciones adecuadas de espacio, y deberá cumplir con lo establecido en la presente ley y las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan;
2. Cualquier clase de vehículo que sea movido por animales, como trineos y objetos rodantes, no podrá ser cargado con un peso excesivo o desproporcionado, teniendo en cuenta las características y condiciones de los animales que se emplean para su tracción;
3. A ninguna mascota podrá dejársele sin alimentación, agua o descanso por un espacio prolongado de tiempo;
4. Los animales enfermos, heridos y/o desnutridos, así mismo, las hembras en el periodo próximo al parto y los ejemplares impedidos para realizar tareas agotadoras, debido a su poca o avanzada edad, por ningún motivo serán utilizados para deporte, concurso, exhibición o cualquier otra actividad que requiera grandes esfuerzos;
5. La exhibición y venta de animales será realizada por establecimientos debidamente autorizados, bajo supervisión médica y atendiendo a las Normas Oficiales Mexicanas;
6. En toda exhibición o evento público o privado, filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual y/o auditivo en el que participen animales vivos, deberá garantizarse su trato humanitario y respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización. Se permitirá la presencia de hasta tres representantes de alguna asociación protectora de animales, legalmente constituida y registrada, así como de un médico que certifique, por parte de la autoridad municipal, el estado de salud y el buen trato a los animales, a fin de poder desempeñar las actividades que se realicen; y
7. Durante el tiempo en el que los animales de compañía se encuentren pasivos, permanecerán en lugares techados, con agua y alimento suficientes, y deberán descansar por lo menos un día a la semana, no pudiendo ser empleados en ese periodo para ninguna labor.

**CAPÍTULO IX**

**SACRIFICIO DE MASCOTAS**

**Artículo 57.** El sacrificio humanitario de un animal de compañía, no sólo podrá realizarse en razón del sufrimiento extremo que le provoque una lesión letal, enfermedad incurable, incapacidad física o vejez muy avanzada, sino también cuando su comportamiento amenace seriamente el bienestar de otros animales, del ser humano, de la economía o el equilibrio ecológico.

Los animales que vayan a ser sacrificados no podrán ser inmovilizados, sino en el momento en que esta operación se realice. Se procurará en lo más posible que tampoco sean sometidos a otros actos previos que les generen ansiedad, inseguridad o estrés. La muerte necesaria del animal debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.

**Artículo 58.** Nadie puede sacrificar a un animal en la vía pública, salvo por motivos de peligro inminente para las personas o para evitar el sufrimiento innecesario del animal.

**Artículo 59.** El sacrificio de animales de consumo se realizará en locales específicamente diseñados y autorizados para esos fines y mediante los procesos regulados en las Normas Oficiales Mexicanas. En cualquier caso, los operadores de estas instalaciones serán responsables por el maltrato o crueldad que se infiera en contra de los animales.

**TÍTULO CUARTO**

**FAUNA SILVESTRE**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 60.** Las autoridades estatales y municipales deberán dar aviso a las autoridades federales competentes cuando tengan conocimiento del cautiverio ilegal de algún ejemplar de la vida silvestre, cuya posesión pudiere contravenir las leyes federales de la materia.

**Artículo 61.** Se procurará establecer convenios de colaboración en el rescate de animales silvestres por la autoridad federal o estatal, de modo que el ayuntamiento coadyuve en la recuperación de las especies se lleve en las mejores condiciones y se evite el maltrato de estas.

**Artículo 62.** Mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, Estado y ayuntamientos auxiliarán a las instancias competentes en la aplicación de regulaciones en materia de comercio y tenencia ilegal de animales silvestres, sobre todo si se utilicen como mascotas, y les reportarán las ventas de especímenes de fauna silvestre que no cuenten con las autorizaciones respectivas, poniendo especial atención en las prohibiciones en relación con la captura, tenencia, cautiverio, maltrato y comercialización de especies en peligro de extinción.

**TÍTULO QUINTO**

**DENUNCIAS Y SANCIONES**

**CAPÍTULO I**

**DENUNCIA DE MALTRATO ANIMAL**

**Artículo 63.** Toda persona podrá denunciar ante el Gobierno Municipal correspondiente todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente ley.

**Artículo 64.** Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del orden federal o sujetos a la jurisdicción de otra autoridad federativa, las autoridades deberán turnarla de inmediato a la autoridad competente.

**Artículo 65.** La denuncia ciudadana podrá presentarse por escrito, o bien, mediante comparecencia, vía telefónica o cualquier otro medio, siempre y cuando los actos denunciados, tanto como las circunstancias de tiempo y lugar en que sucedieron, se especifiquen de la manera más clara posible.

**Artículo 66.** Recibida la denuncia, la autoridad municipal procederá a verificar los hechos señalados por el denunciante.

**Artículo 67.** Cuando los animales estuvieren en condiciones de peligro para su salud, las autoridades municipales, fundando y motivando su resolución, podrán ordenar cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:

1. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta a que da lugar la imposición de la medida de seguridad;
2. La clausura temporal, en su caso, de establecimientos; y
3. Cualquier acción legal análoga que permita la protección de los animales.

**Artículo 68.** Cuando la autoridad ejecute algunas de las medidas de seguridad previstas en este capítulo, indicará al interesado las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.

**Artículo 69.** Si el rescate no fuere posible, por tratarse de animales abandonados en una finca deshabitada de propiedad privada, la autoridad municipal pedirá opinión a las autoridades sanitarias respecto del peligro que pudieren representar para la salud de las personas o de los animales, en cuyo caso, si el dictamen revela que efectivamente existe peligro para la salud, la autoridad municipal realizará las gestiones y operaciones necesarias para el desalojo y protección de los animales abandonados.

**CAPÍTULO II**

**INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIONES**

**Artículo 70.** En el ámbito de sus respectivas competencias y capacidades, los gobiernos municipales llevarán a cabo jornadas periódicas de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que deriven del mismo.

**Artículo 71.** El procedimiento administrativo de inspección y vigilancia podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada. Los ayuntamientos no podrán exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley.

**Artículo 72.** El Ayuntamiento, mediante sus órganos de inspección y vigilancia sanitaria o de bienestar animal, asentará en actas las conductas que contravengan disposiciones de esta ley. Las sanciones serán calificadas por la autoridad resolutora, por principio de proporcionalidad, y se harán efectivas a través de la tesorería municipal, sin menoscabo de las disposiciones penales estatales y federales establecidas para el caso.

**Artículo 73.** Las penas y sanciones serán fijadas y aplicadas en función de lo contemplado en las disposiciones municipales, en correlación con el Código Penal de la Entidad y demás ordenamientos relativos aplicables, tanto del orden estatal, como federal.

**Artículo 74.** Cuando la autoridad lo considere necesario, y de acuerdo con el acto realizado en contravención a la ley, la conducta podrá ser sancionada con arresto administrativo, clausura y/o revocación de la licencia, de conformidad con la reglamentación correspondiente.

**Artículo 75.** Cuando el infractor sea reincidente se le aplicará el doble de la multa que corresponda por la conducta reprochable, que se haya impuesto con anterioridad.

**CAPÍTULO IV**

**MEDIOS DE DEFENSA**

**Artículo 76.** Contra los actos de la autoridad municipal o estatal generados por la aplicación de esta ley, el afectado podrá hacer uso de los recursos administrativos previstos en el Código Penal estatal o en los medios de defensa jurisdiccionales establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, según sea procedente en derecho y convenga a sus particulares intereses.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.** Se concede un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para crear el reglamento de esta.

**TERCERO.** Se tiene el término de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para la conformación del Consejo Estatal para el Control, Adopción y Bienestar Animal, y de su respectivo reglamento.

**Dado en el Salón de Sesiones “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza**

**Saltillo, Coah., a 22 de junio de 2020**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA”**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL PUNTO 5, A LA FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE QUE SE BRINDE ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS ADULTOS MAYORES QUE CUENTEN CON ALGUNA DISCAPACIDAD, EN MATERIA DEL DERECHO DE ACCESO A SERVICIOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Berino Granados, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el punto 5, a la fracción IX, del Artículo 10, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una persona se considera adulta mayor, al cumplir los 60 años, este mismo criterio es considerado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), además de otras instancias gubernamentales como la Secretaría de Salud.

En México hay más personas mayores de 60 años que menores de 4 años, se tiene pronosticado que para el año 2050 las mujeres de 60 años y más representarían el 23.3% del total de la población femenina y los hombres constituirán 19.5%del total de la masculina.[[4]](#footnote-4)

La población adulta mayor ha crecido de manera acelerada, siendo que la esperanza de vida de la población mexicana fue duplicada entre 1930 y 2014, algunas de las consecuencias de este crecimiento, se verán reflejadas en el sistema de salud, además de los retos a la organización familiar y cargas adicionales de trabajo para sus cuidados.

Una de las cosas que vienen con la edad, es el deterioro funcional debido a edad avanzada, afectando directamente en la salud y calidad de vida de las personas mayores, comienzan a tener dificultades para realizar por sí mismos algunas actividades de la vida cotidiana, aumentando las posibilidades de dependencia de cuidado.

Mujeres y hombres viven de manera diferente el proceso de envejecimiento, tanto por cuestiones físicas como de género, teniendo una mayor expectativa de una larga vida las mujeres, no obstante, de acuerdo a estudios realizados por las autoridades en materia de salud, revela que en nuestro país, el número de mujeres mayores de 60 años que desarrollan alguna discapacidad con la edad es superior a la cifra de hombres

En adultos mayores, la discapacidad se puede medir cuando comienzan a presentarse limitaciones físicas, provocando dificultades para ejecutar actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse, levantarse de cama, comer, usar el baño, etc.

Es común que el nivel educativo y socioeconómico sea asociado con mayores niveles de discapacidad de la vejez, habiendo otros factores como la obesidad o bajo peso, enfermedades de pérdida de memoria, depresión, enfermedades crónicas; que aumentan el riesgo a padecer discapacidad en los adultos mayores.

Algunas de las recomendaciones emitidas por el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM)[[5]](#footnote-5), que trata de un programa que fue diseñado para evaluar el impacto de la enfermedad, sobre la salud, funcionalidad y mortalidad, obteniendo un estudio longitudinal de adultos mayores mexicanos con una amplia perspectiva socioeconómica; consisten en que los programas sociales deberían priorizarse para ayudar a los cuidadores de los adultos de las personas mayores, así como el mejoramiento de servicios de rehabilitación de programas para discapacidad de adultos mayores.

En tenor de lo anterior, consideramos que se debe fomentar un envejecimiento activo y saludable, que genere condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, así como crear condiciones para vivir una vejez digna, con cuidados afectivos y materiales que se requieren.

El deterioro natural a la salud debido a la vejez, causa enfermedades crónico-degenerativas, representando un gran reto para el sistema de salid, ya que se deben diseñar e implementar políticas públicas especialmente para el cuidado y atención de dichas enfermedades, con mayor énfasis cuando los adultos mayores además tienen alguna discapacidad que les impide realizar actividades que les permitan tener autonomía económica, siendo que, en nuestro país, según datos del INEGI, el 47% de las personas que tienen discapacidad tiene 65 años y más.

En los casos de personas con discapacidad, desafortunadamente hay poco interés por la accesibilidad a espacios públicos y privados a fin de que tengan diseños universales, o ajustes razonables; para avanzar a la solución es necesario dar voz a las personas adultas mayores para el diseño de normas y políticas públicas que den paso a un pleno ejercicio de sus derechos sin discriminación.

En virtud de lo anterior, se propone adicionar dentro de los derechos que la Ley reconoce a las personas adultas mayores, en materia de acceso a los servicios, la atención prioritaria a las personas adultas mayores que cuenten con alguna discapacidad, a fin de que se generen políticas públicas en los que adicional a la preferencia en los servicios y establecimientos que se le brinda a los adultos mayores, se priorice la atención cuando la persona presente alguna discapacidad.

En razón de lo anteriormente mencionado, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se adiciona el punto 5 a la fracción IX del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Artículo 10. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce y garantiza a las personas adultas mayores, los siguientes derechos:

I… a la VIII…

IX. …

1. al 4. …
2. **Se de atención prioritaria a las personas adultas mayores que cuenten con alguna discapacidad.**

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA EL PUNTO 5, A LA FRACCIÓN IX, DEL ARTICULO 10, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE QUE SE BRINDE ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS ADULTOS MAYORES QUE CUENTEN CON ALGUNA DISCAPACIDAD, EN MATERIA DEL DERECHO DE ACCESO A SERVICIOS.

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

**Juan Antonio García Villa, en mi carácter de diputado a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, conjuntamente con los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 59, fracción I, 65 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en ejercicio del derecho a que hacen referencia los artículos 21, fracción V y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, someto a la consideración de este Pleno, solicitando su aprobación, la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar dos párrafos -el octavo y el noveno- al artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso, al tenor de la siguiente:**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Uno de los derechos que la ley reconoce a quienes forman parte de este H. órgano legislativo es el de "presentar ante el Pleno y Comisiones proposiciones y denuncias", según se lee en la fracción IV del artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso.

Ahora bien, como tanto el Pleno como las Comisiones legislativas son cuerpos colegiados, corresponde a éstos resolver o decidir, aceptar o rechazar, lo que sus integrantes individualmente proponen, incluidas denuncias. Es parte del trabajo legislativo, especialmente importante cuando se trata de enmendar errores que los representantes populares observan en materia política, criticar políticas públicas erróneas o ineficaces, denunciar atropellos a los derechos humanos, malos manejos en los recursos públicos, etc.

Cuando se presentan ante el Pleno, ese tipo de propuestas se hacen del conocimiento de éste en los términos previstos por la fracción VII del artículo 39 de la ya citada Ley Orgánica del Congreso, precepto que dispone en qué punto del orden del día de las sesiones se presenten las "proposiciones de las diputadas y diputados y/o grupos parlamentarios"

Por lo general, quienes las presentan, por corresponder tales proposiciones a situaciones de coyuntura o porque la demora en su atención provoca mayores daños, suelen solicitar se les dé el trámite de urgente u obvia resolución, lo cual ordinariamente sucede en un buen número de casos. Pero en otros tal opción no se acepta, bien sea porque el planteamiento que se hace no es realmente de obvia resolución, o no necesariamente urgente, y se turna a la comisión de dictamen que por la materia corresponda, para que analice la proposición y posteriormente formule y presente a este Pleno un dictamen para su discusión y aprobación, en su caso.

Hasta aquí todo es razonable. El problema está en que las propuestas que se turnan a Comisiones éstas jamás las dictaminan. Les aplican lo que en el argot legislativo se conoce como "la congeladora". Es un truco grotesco y deleznable para evitar que los asuntos públicos verdaderamente importante se ventilen, se discutan y se resuelva sobre ellos lo que sea pertinente.

En un régimen democrático, cuyo Poder Legislativo se respete y se haga respetar, por su dignidad y categoría de auténtico Poder, esa innoble práctica no puede continuar. Los asuntos públicos no se pueden ni deben esconder sino discutirse de manera abierta y transparente, con argumentos y razones.

Lamentablemente esta argucia es muy socorrida --y justo en asuntos relevantes de nuestra vida pública estatal--, por lo que resulta imprescindible terminar con ella. Al efecto se presenta una fórmula de solución a esta cuestión, que degrada la vida legislativa de Coahuila. Consistente en conceder un plazo razonable para que las proposiciones con punto de acuerdo se dictaminen y presenten al Pleno, y de no suceder así éste las discuta directamente.

Por lo expuesto, se propone a este órgano colegiado el siguiente proyecto de

**DECRETO**

**ÚNICO.** Se adicionan los párrafos octavo y noveno al artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, para quedar como sigue:

**Artículo 129.- ....**

(párrafos uno a siete) ...

**Las Comisiones dispondrán de sesenta días naturales para dictaminar las proposiciones de punto de acuerdo que al ser presentadas al Pleno éste haya desechado darles el trámite de urgente u obvia resolución, o no se hubiere solicitado. Transcurrido este plazo sin haber dictamen, en cualquiera de las sesiones posteriores al mismo, el o los autores de las proposiciones podrán presentarlas y el Pleno entrará directamente a su discusión y aprobación, en su caso.**

**Cuando el término de los sesenta días a que se refiere el párrafo anterior ocurra estando en funciones la Diputación Permanente, la nueva presentación de las proposiciones se podrá hacer a partir de la segunda sesión que el Pleno celebre del nuevo periodo ordinario.**

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**ATENTAMENTE**

*“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA*

*Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”*

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

Saltillo, Coahuila, a 24 de junio de 2020.

|  |
| --- |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO** |  | **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DIP. BLANCA EPPEN CANALES** |  | **DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTÍNEZ** |
|  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  | **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** |
|  |  |  |
| **DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR DOS PÁRRAFOS -EL OCTAVO Y EL NOVENO- AL ARTÍCULO 129 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES EN CONJUNTO CON EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA DE COAHUILA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA FAMILIA Y DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO PARA REGULAR EL DOMICILIO DEL DEPÓSITO JUDICIAL DE MENORES DE EDAD Y DE QUIENES REQUIERAN ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.**

**C. Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del**

**H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente. –**

La que suscribe, Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, integrantes de este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 67 fracción I de la Constitución Política del Estado y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de decreto que **reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Familia y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado para regular el domicilio del depósito judicial de menores de edad y de quienes requieran asistencia y representación**, acorde a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

La legislación familiar actualmente vigente en el Estado de Coahuila regula en diversos procedimientos y materias la protección de los menores de edad o quienes requieran de asistencia o representación, específicamente en materia de protección de sus derechos humanos relativos a su bienestar, tales como la provisión de aspectos relativos a la provisión de medidas sobre su subsistencia. Las leyes, de forma general, proporcionan mecanismos para asegurarles a los menores derechos de forma especialmente protegida, con la finalidad de proteger su bienestar en los distintos aspectos que dichas leyes intervienen.

En este sentido, en diversas disposiciones es posible encontrar medidas encaminadas a asegurar para dichos menores de edad o quienes requieran de asistencia o representación la provisión de alimentos y sus distintas especies, tales como la prestación de un domicilio donde pueda asegurarse su bienestar ya sea de de forma provisional mientras se llevan a cabo diversos procedimientos, o de forma definitiva como parte de la prestación de dichos alimentos. En otras palabras, la determinación de un domicilio es parte de la determinación de alimentos.

En nuestra legislación, sin embargo, la regulación de dicho domicilio es inexistente. Así, aunque en los procedimientos y materias reglamentados por nuestras leyes locales nos encontramos con disposiciones que señalan, por ejemplo, que al admitirse una demanda de divorcio se proveerá sobre la guarda y custodia de los niños y las niñas y la separación de los cónyuges, o que para los efectos legales se entiende por alimentos, entre otras cuestiones, la habitación, esta es una cuestión distintivamente ignorada.

Estas omisiones, lamentablemente, permiten la posibilidad de que ocurran incidencias que, por un lado, no permitan garantizar adecuadamente ese derecho y, por el otro, permitan la ocurrencia de hechos que vayan en contra de la naturaleza de dicho derecho. Así, por ejemplo, su desregulación permite la posibilidad de que la autoridad judicial omita garantizar dicho derecho, así como las medidas inherentes al mismo. O, en otros casos, cabe la posibilidad de que ese derecho sea ejercido de forma inadecuada por quienes no son titulares de este, o incluso para fines que no le son propios.

De esta forma, entonces, la presente iniciativa busca eliminar dichas incidencias indeseadas. Es decir, busca disponer su garantía, contenido, alcance, y prohibiciones. Por tanto, el presente proyecto, dispone la necesidad de que cada que se determine judicialmente dicho derecho se establezcan una serie de cuestiones que tanto garantizan su existencia como señalan el alcance de este.

En general, se disponen medidas relativas a señalar las determinaciones relativas al domicilio provisional y definitivo del depósito judicial de las y los menores o quienes requieran de asistencia o representación en la resolución que fije la situación de las o los hijos menores de edad o mayores que requieran de asistencia o representación para el ejercicio de su capacidad jurídica, así como señalar en la propuesta de convenio la propuesta en relación al domicilio provisional y definitivo del depósito judicial.

De igual forma, por un lado, los juzgadores deberán disponer, en relación con el domicilio donde se determine el depósito judicial, aspectos como el lugar en el que se cumplirá con dicha obligación, la duración de la obligación de proporcionar dicho domicilio, las provisiones relativas a la ocupación, mantenimiento y uso del mismo, el régimen de convivencia que se realizará en el mismo, y los derechos y obligaciones de quienes proporcionan dicho domicilio con este y sus ocupantes.

Por otro lado, también se señalan cuestiones relativas a las prohibiciones respecto de dicho domicilio de depósito judicial. En específico, se determina la prohibición de usar éste como hogar conyugal por personas distintas de quienes proporcionan el domicilio, o realizar el aprovechamiento comercial del mismo, con excepción de si se realiza como cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, además de las que se señalen en las demás disposiciones aplicables.

Complementariamente, en la presente iniciativa se propone asimilar el domicilio de depósito judicial al domicilio conyugal para efectos de las medidas contenidas en las órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil señaladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado. De esta forma se procura que la protección que garantiza dicha legislación sea ampliada al domicilio del depósito judicial, con lo que se busca asegurar de mejor manera los derechos que dichas disposiciones establecen.

La garantía de los derechos de los menores de edad y de quienes requieren de asistencia o representación es una agenda prioritaria de nuestra legislación. Procurar dichas protecciones es una forma de asegurar su bienestar, desarrollo y subsistencia. Las leyes que expida este Congreso no pueden escatimar en la búsqueda de estos fines. Esta iniciativa busca ser un paso en esa dirección.

Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos someter a esa H. Legislatura para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO. –** Se reforma la fracción V del artículo 224, recorriendo la actual fracción V a ser la fracción VI, y se adicionan la fracción VII al artículo 235, un segundo párrafo al artículo 293, y el Capítulo Tercero denominado “Domicilio del depósito judicial”, que contiene los artículos 307 Bis, 307 Ter y 307 Quáter, al Título Quinto “Del parentesco y los alimentos”, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Articulo 224.** La resolución que fije la situación de las o los hijos menores de edad o mayores que requieran de asistencia o representación para el ejercicio de su capacidad jurídica, deberá contener las siguientes disposiciones:

**V. Las determinaciones relativas al domicilio provisional y definitivo del depósito judicial de las y los menores o quienes requieran de asistencia o representación, y**

**VI.** Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés de las hijas o hijos menores de edad.

**Artículo 235.** …..

La propuesta de convenio de divorcio deberá contener, por lo menos, los siguientes requisitos:

I. a VI. …..

**VII. La propuesta sobre el domicilio provisional y definitivo del depósito judicial de las y los menores o quienes requieran de asistencia o representación, en caso de haberlos.**

**Artículo 293.** …..

**El deber de proporcionar alimentos también se cumplirá proporcionando domicilio para efectos del depósito judicial provisional o definitivo de las y los menores o quienes requieran de asistencia o representación.**

**TÍTULO QUINTO  
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS**

**CAPÍTULO TERCERO**

**Domicilio del depósito judicial**

**Artículo 307 Bis. Las resoluciones en las que se determinen cuestiones sobre depósito judicial de menores de edad o quienes requieran de asistencia o representación deberán señalar lo relativo al domicilio provisional o definitivo donde se realizará dicho depósito.**

**Artículo 307 Ter. Las resoluciones sobre depósito judicial deberán señalar:**

**I. El domicilio en el que se cumplirá con dicha obligación;**

**II. La duración de la obligación de proporcionar dicho domicilio;**

**III. Las provisiones relativas a la ocupación, mantenimiento y uso de este;**

**IV. El régimen de convivencia que se realizará en el mismo, y**

**V. Los derechos y obligaciones de quienes proporcionan dicho domicilio en relación con este y con quienes lo ocupan;**

**Artículo 307 Quáter. Estará prohibido el uso del domicilio del depósito judicial para fines distintos de aquellos para los que fue determinado, tales como:**

**I. El uso u ocupación de este como hogar conyugal por personas distintas de quienes proporcionan el domicilio;**

**II. El aprovechamiento comercial del mismo, con excepción de si se realiza como cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos;**

**III. La realización de actividades prohibidas por la ley o en perjuicio de los titulares de dicho derecho, y**

**IV. Las que se señalen en las disposiciones aplicables.**

**ARTÍCULO SEGUNDO. –** Se reforman las fracciones I a III del artículo 21, las fracciones II a IV del artículo 23, y las fracciones II y III del artículo 24 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 21.** Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I.La desocupación de la persona probablemente responsable, del domicilio conyugal, **el domicilio del depósito judicial de menores o quienes requieran de asistencia o representación**, o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

II. La prohibición a la persona probablemente responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes, **del domicilio del depósito judicial de menores o quienes requieran de asistencia o representación** o cualquier otro que frecuente la víctima;

III. El reingreso de la víctima al domicilio **conyugal o al domicilio del depósito judicial de menores o quienes requieran de asistencia o representación**, una vez que se salvaguarde su seguridad;

IV a VI. …..

…..

**Artículo 23.** Son órdenes de protección preventivas las siguientes:

I. …..

II. El inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común **o de** **el domicilio del depósito judicial de menores o quienes requieran de asistencia o representación**, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;

III. El uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima **o en el domicilio del depósito judicial de menores o quienes requieran de asistencia o representación**;

IV. El acceso al domicilio en común **o el domicilio del depósito judicial de menores o quienes requieran de asistencia o representación**, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la víctima, para tomar sus objetos personales y documentos; previa orden de autoridad competente; y

V. ….

**Artículo 24.** Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:

I. …..

II. La prohibición a la persona agresora de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal **o el domicilio del depósito judicial de menores o quienes requieran de asistencia o representación**; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal;

III. La posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio conyugal **o el domicilio del depósito judicial de menores o quienes requieran de asistencia o representación**, hasta en tanto el órgano jurisdiccional determine lo conducente; y

IV. …..

**TRANSITORIOS**

**Primero. –** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Segundo. –** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México,

a 24 de junio de 2020.

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

Por un Gobierno de Concertación Democrática

Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila

“Brigido Ramiro Moreno Hernández”.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO C) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5º, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 28 BIS Y 28 BIS 1 A LA LEY PARA EL IMPULSO EMPRENDEDOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE IMPULSAR LOS APOYOS Y FINANCIAMIENTOS DIRIGIDOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito **Diputado Jesús Andrés Loya Cardona** conjuntamente con los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa mediante la cual se adiciona el inciso c) a la fracción I del artículo 5º, así como los artículos 28 bis y 28 bis 1 a la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de impulsar los apoyos y financiamientos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Las micro, pequeñas y medianas empresa tienen especial importancia para las economías de los países, al contribuir no sólo en la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por su gran potencial de generación de empleos, siendo un factor clave en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo.

Según los datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, este tipo de negocios, pertenezcan al sector formal o informal de la economía, representan más del 90% del total de empresas, generan entre el 60% y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial.[[6]](#footnote-6)

De manera particular en nuestro país, según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México había durante el año 2018 un total de 4 millones 169 mil 677 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), lo que representa el 97.6% de todas las unidades económicas existentes.[[7]](#footnote-7) Éstas son el motor que impulsa la creación de empleo del 78% de los puestos de trabajo y aportan los ingresos equivalentes al 42% del Producto Interno Bruto (PIB).[[8]](#footnote-8) Además, las micro, pequeñas y medianas empresas tienden a emplear a una gran proporción de trabajadores pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres, jóvenes y personas de hogares desfavorecidos. En muchas zonas son casi la única fuente de empleo.

En el año 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconociendo la necesidad de centrar la atención en la importancia de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la promoción de la innovación, la creatividad y el trabajo decente para todos, resolvió designar el 27 de junio como el Día de las Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas, para concienciar acerca de su contribución al desarrollo sostenible.

De acuerdo con este organismo internacional, las pequeñas empresas, incluidas las dirigidas por mujeres y jóvenes emprendedores, están siendo las más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. Las medidas de bloqueo sin precedentes promulgadas para contener la propagación del coronavirus han conducido a interrupciones de la cadena de suministro y una caída masiva de la demanda en la mayoría de los sectores.

Aunque su composición las hace sumamente flexibles y adaptables a los cambios que se suscitan, es también cierto que su tamaño las hace vulnerables. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan suele ser el acceso a la financiación. En muchos casos, tanto la identificación de oportunidades internacionales y locales, así como la gestión comercial suelen ser más difíciles para las pequeñas empresas que para sus competidores de mayor tamaño.

Para continuar desempeñando su papel crucial en la creación de empleos decentes y la mejora de las vías de subsistencia, las pequeñas empresas dependen más que nunca de un entorno empresarial propicio, incluido el apoyo para el acceso a la financiación, la información y los mercados.

Para apoyar a sostener la economía local y la liquidez necesaria para conservar los empleos que estas empresas producen, se presenta esta iniciativa de reforma a la Ley del Impulso Emprendedor para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de incorporar diversos criterios a considerar para la distribución del Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores, que contribuyan a acelerar la entrega de apoyos y financiamientos a este sector, a la vez que promueva una mayor participación de mujeres y jóvenes en el desarrollo económico del Estado.

Por todo lo anterior, en el marco del Día de las Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos someter a consideración de este Pleno para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se adicionan el inciso c) a la fracción I del artículo 5º, así como los artículos 28 bis y 28 bis 1, de la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.-** …

**I.** ...

a) …

b) …

c) **Fomentar la implementación permanente, en todos los municipios del Estado, de un sistema de apertura rápida de empresas**.

**II.** …

**III.** …

**Artículo 28 bis. En la aplicación del Fondo Estatal se deben considerar y razonar las decisiones de los apoyos en base a los siguientes criterios:**

**I. Promover una mayor participación de las mujeres y jóvenes en el desarrollo económico del Estado;**

**II. Contribuir a la creación, fortalecimiento, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la mejora de sus procesos;**

**III. Promover, capacitar y difundir los programas, instrumentos, productos, herramientas y acciones para elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresa, como estudios de factibilidad, capacitación de personal, fondos de garantía, entre otros;**

**IV. Fomentar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas;**

**V. Facilitar y fomentar la constitución de incubadoras de empresas, aceleradoras de negocios, empresas de reciente creación y formación de emprendedores, mediante la implementación de programas de apoyo dirigidos a mujeres jefas de familia y jóvenes;**

**VI. Facilitar y fomentar la integración de las micro, pequeña y medianas empresas a las cadenas globales de valor;**

**VII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnología en las micro, pequeñas y medianas empresas;**

**VIII. Fomentar la generación de empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado; y**

**IX. Apoyar a las incubadoras, aceleradoras y talleres especializados a través de mecanismos para vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas con las universidades, así como los centros de investigación científicos y tecnológicos del Estado.**

**Artículo 28 bis 1**. **La Secretaría de Economía, con la aprobación del Consejo General Ciudadano, generará una serie de estímulos y programas, en el marco de la política integral de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que facilite el financiamiento y otorgamiento de créditos para el fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.**

**La Secretaría deberá crear un esquema integral y de fácil acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas, donde se presente el conjunto de apoyos, actividades de fomento y estímulos dedicados a este segmento.**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |
|  |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL IMPULSO EMPRENDEDOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE HOMOLOGAR LA DENOMINACIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Josefina Garza Barrera, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman los artículos 9, 20, 24, 25 y 26 de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

En México contamos con la *Ley del Instituto Mexicano de la Juventud*, cuyo objeto es promover y fortalecer las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad y no discriminación, dirigido a la población de entre los 12 y los 29 años de edad.[[9]](#footnote-9)

Por lo que corresponde a Coahuila, se encuentra publicada la *Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado*, cuyo propósito primordial es dar reconocimiento a los derechos humanos que por naturaleza son inherentes a las y los jóvenes de Coahuila, sin distinción de ningún tipo, instrumentando políticas públicas buscando contar con elementos formativos que los conviertan en personas desarrolladas integralmente durante todas y cada una de sus etapas de maduración tanto físicas, psicológicas y sociales.

Dicha normatividad local cuenta con un *Sistema Estatal para la Participación Social de la Juventud*, el cual tiene como objetivos específicos establecer acciones para la difusión, promoción, fomento, investigación, práctica, supervisión y evaluación de las actividades de atención a la juventud.[[10]](#footnote-10)

Dicho Sistema se encuentra integrado por un Consejo Directivo, en el cual participan representantes de diversas dependencias del Gobierno del Estado, quienes fungen con una serie de atribuciones a favor del objeto de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud en el Estado.

Sin embargo, con las reformas que tuvo la *Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado*, en el 2017 y 2018 algunas Secretarías Estatales tuvieron algunos cambios tales como: la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la Secretaría de las Mujeres por el Instituto Coahuilense de las Mujeres, Secretaría de Economía y Turismo por Secretaría de Economía; y la Secretaría de Turismo por la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Por lo anterior es que consideramos importante armonizar el nombre de las dependencias que integran del Sistema Estatal para la Participación Social de la Juventud y con el objetivo de que el marco legal de la ley en comento, se encuentre homologada con las definiciones correctas de las Secretarías del ramo que participan en base a sus funciones dentro del Sistema Estatal para la Participación Social de la Juventud y no exista confusión alguna de los términos en la competencia de funciones a desempeñar.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se reforman los artículos 9, 20, 24, 25 y 26 de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 9.-** …:

**Presidente:** ...

**Secretario Técnico y Vocal Ejecutivo:** ...

**Vocal:** ...

**Vocal:** Titular de la Secretaría de **Inclusión y** Desarrollo Social.

**Vocal:** ...

**Vocal:** Titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

**Vocal:** Titular de la Secretaría de **Economía**.

**Vocal:** Titular de la Secretaría de Turismo **y Desarrollo de Pueblos Mágicos**.

**Vocal:** ...

**Vocal:** ...

**Vocal:** Titular **del** **Instituto Coahuilense** de las Mujeres.

**Vocal:** **Titular de la Fiscalía** General del Estado.

**Vocal: Titular** del Instituto Estatal del Deporte.

**Vocal:** ...

…

...

...

**Artículo 20.-** La Secretaría de **Economía,** podrá proponer actividades como las que a continuación se mencionan:

I. a la V. …

**Artículo 24.-** Corresponde a la Secretaría de **Inclusión y** Desarrollo Social,poder realizar las siguientes actividades:

I. a la IV. …

**Artículo 25.-** **El Instituto Coahuilense** de las Mujeres, impulsará, entre otras, actividades para:

I. a la IV. …

**Artículo 26.-** La Secretaría de Turismo **y Desarrollo de Pueblos Mágicos,** podrá proponer de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, propondrá acciones, como las siguientes:

I. a la II. …

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MA. ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE HOMOLOGAR LA DENOMINACIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 86 DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE COAHUILA Y LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL PROPÓSITO DE INCORPORAR LA CONCESIÓN DE LICENCIA POR CUIDADOS MATERNO-PATERNO PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE HIJOS ENFERMOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito **Diputado Jesús Andrés Loya Cardona**, conjuntamente con los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa mediante la cual se adiciona la fracción XVIII del artículo 86 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila y la fracción XVII al artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de incorporar la concesión de licencia por cuidados materno-paternos para el cuidado y atención de hijos enfermos, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El trabajo es un derecho humano reconocido y garantizado por múltiples instrumentos internacionales que establecen normas tendientes a la protección de quienes aplican su fuerza de trabajo en la producción de la riqueza; los llamados derechos humanos laborales, inherentes por el sólo hecho de ser persona y trabajar.

Los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social, al derecho a la permanencia en un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso de despido sin legal causa, a un salario, a una vivienda, a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a la seguridad social, al reparto de utilidades, entre otros.[[11]](#footnote-11)

La maternidad y paternidad en el trabajo son condiciones consideradas en el desarrollo de los derechos laborales fundamentales. El bienestar infantil y la protección de la maternidad son, en efecto, una de las preocupaciones principales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su creación en 1919. Más de 185 países, incluyendo México, cuentan con leyes sobre protección de la maternidad en el trabajo, mismas que se ocupan de la prevención de la exposición a riesgos de seguridad y salud durante el embarazo y después del mismo, del derecho a una licencia de maternidad, a servicios de salud materna e infantil y a interrupciones para la lactancia remuneradas, de la protección contra la discriminación y el despido en relación con la maternidad, así como de un derecho garantizado a reincorporarse al trabajo tras la licencia de maternidad.[[12]](#footnote-12)

En progresividad de este derecho se han incorporado medidas de apoyo a los trabajadores con responsabilidades familiares, incluidos los padres, generando así un balance fundamental para la igualdad de género en el trabajo y en el hogar. Datos de la Organización Internacional del Trabajo reflejan una evolución de la visión de paternidad, haciendo que las disposiciones relativas a la licencia de paternidad sean cada vez más habituales. Es así que el derecho obligatorio a la licencia de paternidad rige en 78 de 167 países estudiados por esta organización, lo que pone de manifiesto la tendencia a una mayor participación de los padres en torno al nacimiento.

En ese tenor, a nivel internacional se insta a los gobiernos a dar prioridad a la creación y aplicación de marcos normativos incluyentes, que propicien políticas exhaustivas de conciliación de la vida laboral y familiar. Un primer paso es evaluar las brechas en los marcos vigentes en cuanto a la protección de la maternidad y la conciliación de la vida laboral y familiar, en particular el cuidado infantil. Partiendo de este análisis, se observa una clara tendencia por parte del legislador coahuilense, de brindar una mayor protección a los trabajadores al servicio del Estado y los municipios.

Dentro del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado se observan de forma adicional a la licencia por maternidad y paternidad, disposiciones que refuerzan la búsqueda de equilibrio entre las responsabilidades laborales, personales y familiares, como lo es la concesión de un día de licencia al año para que la mujer trabajadora acuda a realizarse los exámenes médicos necesarios para la prevención y/o detección del cáncer;[[13]](#footnote-13) permisos para que trabajadores con alguna discapacidad se sometan al tratamiento médico o de rehabilitación,[[14]](#footnote-14) así como el conceder licencia para atender asuntos particulares o realizar alguna capacitación o posgrado.[[15]](#footnote-15)

La enfermedad de un hijo es una de las circunstancias que más impactan el ámbito familiar de padres y madres trabajadores. Esto fue considerado a nivel nacional al aprobarse que padres de niños con cáncer podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización, incluyendo el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado.[[16]](#footnote-16)

Considerando el estado de dependencia y vulnerabilidad que, de forma natural, tienen los hijos para con sus padres, es que estimamos necesario ampliar esta concesión dirigida a padres y madres trabajadores al servicio del Estado y los municipios de Coahuila, a fin de otorgar licencia para la prestación de cuidados maternos o paternos ante enfermedad de las hijas o hijos bajo la guarda y custodia del trabajador, de hasta quince días hábiles al año.

En ese tenor, si bien nuestra legislación contempla el cuidado y protección desde la maternidad y hasta dentro de los tres meses posteriores al nacimiento del menor, nada se prevé una vez pasado dicho tiempo. Lo anterior contrasta con la realidad de miles de madres y padres trabajadores, que se ven en dificultades cuando sus hijos tienen cualquier condición de salud, que puede ir desde una simple enfermedad hasta un padecimiento mayor, siendo objeto de suspensión o retiro de cualquier guardería o centro de cuidado infantil o escolar en el que se encuentren inscritos a efectos de no contagiar a los demás niños con los que conviven en dicho plantel.

Esta medida busca una equidad en derechos y obligaciones para con los hijos, que otorgue una cobertura que permita a las madres y padres, o a quien legalmente tenga Ia guarda y custodia de los menores, Ia oportunidad de estar presentes cuando éstos enferman y requieren de sus cuidados. Asimismo, la aprobación de esta iniciativa también impactaría de forma positiva en los derechos de niñas y niños, garantizándoles el pleno respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, al otorgarles el derecho al cuidado de sus padres.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se **adiciona**  la fracción XVIII al artículo 86 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, para quedar como sigue:

**ARTICULO 86.-** …

I.- a XVII. …

XVIII.- Otorgar licencia de cuidados maternos-paternos de hasta quince día hábiles al año con goce de sueldo a Ia madre, padre o a quien legalmente tenga Ia guarda y custodia de un menor de 12 años, debiendo exhibir en su Iugar de trabajo el acta de nacimiento respectiva que acredite Ia relación materna o paterna o, en su caso Ia sentencia emitida por el juez que otorga Ia guarda y custodia del menor, así como Ia constancia medica que acredite Ia enfermedad o incapacidad médica del mismo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se **adiciona** la fracción XVII al artículo 294 del Código Municipal Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 294.** …

I. a XVI. …

XVII. Otorgar licencia de cuidados maternos-paternos de hasta quince día hábiles al año con goce de sueldo a Ia madre, padre o a quien legalmente tenga Ia guarda y custodia de un menor de 12 años, debiendo exhibir en su Iugar de trabajo el acta de nacimiento respectiva que acredite Ia relación materna o paterna o, en su caso Ia sentencia emitida por el juez que otorga Ia guarda y custodia del menor, así como Ia constancia medica que acredite Ia enfermedad o incapacidad médica del mismo.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |
|  |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 86 DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE COAHUILA Y LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL PROPÓSITO DE INCORPORAR LA CONCESIÓN DE LICENCIA POR CUIDADOS MATERNO-PATERNO PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE HIJOS ENFERMOS.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, POR EL QUE SE** **REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 309, DE LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE MODIFICAR LOS REQUISITOS PARA SER TITULAR DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar las fracciones I y III del artículo 309, de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de modificar los requisitos para ser titular del Registro Público de Transporte, bajo la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

La Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, ordenar, regular, administrar y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes dentro de las vías públicas urbanas y metropolitanas del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de facilitar la movilidad, la accesibilidad, el respeto al medio ambiente, y contribuir a la cohesión de la red de transporte público en todas sus modalidades que operan en dicho ámbito.

Parte de los principios que rigen la aplicación de la ley, es el principio de igualdad, el cual es reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, en el que además establece el derecho a no ser discriminado por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual manera, a nivel internacional se protege el derecho a la igualdad y la no discriminación, teniendo diversos instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 24, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 26, así como la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, en la que precisa en su artículo 1°, que la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados.

Los Estados parte tienen la obligación de proteger y garantizar estos derechos para todas las personas, entendiéndose que el derecho a la igualdad y no discriminación, establece que no deben llevarse a cabo distinciones injustificadas para el acceso a los derechos sociales, económicos y culturales, por lo que, como parte de las obligaciones de los Estados, es establecer en sus legislaciones, medidas que no menoscaben el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas.

El derecho al trabajo forma parte de estos derechos protegidos por la Constitución Federal, teniendo todas las personas igualdad de oportunidad de acceder al trabajo en libertad y sin discriminación, debiéndose establecer en las legislaciones, las medidas menos restrictivas posibles que garanticen estos derechos, atendiendo a la consecución de los objetivos constitucionales.

Es así que, buscando siempre la protección más amplia de los derechos humanos, del análisis que se realiza a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se desprende la necesidad de reformar la disposición normativa que establece los requisitos que deberá cumplir el Titular del Registro Público de Transporte, quien conforme al artículo 309, deberá ser mexicano por nacimiento y no tener antecedentes penales.

Lo anterior, toda vez que por lo que corresponde al requisito de ser mexicano por nacimiento, se establece una distinción injustificada de aquellos mexicanos por naturalización, ya que conforme a lo que establece el artículo 34 constitucional, se considera ciudadanos mexicanos a quienes tengan esta calidad sin importar el origen de la misma, por nacimiento o naturalización, reconociéndose de manera indistinta todos los derechos y obligaciones que establece la Constitución Federal; aunado a lo anterior, el artículo 35 Constitucional señala el derecho de cualquier ciudadano mexicano a ocupar cargos en la función pública, siempre y cuando cumpla con los requisitos que para el mismo se señalen.

No pasa inadvertido que el artículo 32 Constitucional establece que el legislador federal puede determinar los cargos y funciones en los que se podrá imponer el requisito de ser mexicano por nacimiento, sin que las obligaciones que conforme a la Ley debe cumplir la persona titular del Registro Público de Transporte, se encuentren relacionadas a las reservas que señala dicha disposición de la Constitución Federal.

Por lo anterior, se reforma la fracción I del artículo 309 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento y estableciendo solamente el requisito de ser mexicano.

En este mismo sentido, la fracción III del artículo 309 de la citada ley, establece como requisito para ser titular del Registro Público de Transporte, no contar con antecedentes penales, lo cual genera un efecto discriminatorio para quien se encuentre en esta situación, al no poder participar de manera igualitaria de los derechos que como ciudadano mexicano se reconocen en la Constitución Federal.

Esta disposición normativa excluye a las personas que hayan sido condenadas penalmente de la posibilidad desempeñarse dentro de la función pública, sin hacer distinción del tipo de delito, inclusive culposos, por el cual se haya compurgado una pena privativa o no privativa de la libertad, además que dicha circunstancia forma parte de la vida privada del pasado de una persona y no debe ser excluida por motivo alguno, sin dejar de mencionar que el objetivo del sistema penitenciario en México es la reinserción social, por lo que una vez que una persona obtiene su libertad, se encuentra en posibilidad de reintegrarse a las actividades de la comunidad.

Es así, que para evitar la restricción al ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación, se debe reformar la disposición normativa que establece como requisito para ser titular del Registro Público de Transporte, entre otros, no tener antecedentes penales, para establecer como requisito, no haber sido condenado por delito doloso y/o inhabilitado como servidor público.

Es por eso, Diputadas y Diputados que se presenta ante este Honorable Pleno del Congreso el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforman las fracciones I y III del artículo 309, de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 309. ...**

1. Ser ciudadano mexicano, tener 25 años cumplidos y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
2. ...
3. No haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia ejecutoria y/o inhabilitado como servidor público.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 309, DE LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE QUE SE SANCIONE A QUIEN ADQUIERA, OCULTE O COMERCIALICE, PRODUCTOS OBTENIDOS DE ROBO A CENTROS EDUCATIVOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada María del Rosario Contreras Pérez, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 285, en la fracción IX, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

El derecho humano a la educación se encuentra reconocido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo la obligación de impartirla, el Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, por lo que además de esto, el lugar donde se imparte, es decir las instalaciones en las cuales se prestan los servicios educativos, son de gran relevancia, constituyendo un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Es necesario contar con la efectividad de que el derecho humano a la educación se brinde en condiciones de calidad, y que los docentes y administrativos, se comprometan con su labor, contar con la infraestructura necesaria, equipo, material que favorezcan el desarrollo adecuado de actividades para el correcto aprendizaje de los alumnos.

Sin duda alguna los elementos físicos, son indispensables para que nuestros niños, niñas y adultos puedan desarrollar sus conocimientos, siendo necesario que se implementen medidas para conservar los bienes que conforman las aulas educativas.

A principios del año 2020, en el mes de marzo, fueron suspendidas las clases debido a la emergencia sanitaria por la que el mundo atravesaba, y actualmente se ha dado a conocer que los robos a centros educativos han ido en aumento, desde mesas de trabajo, pupitres, sillas, archiveros, material didáctico, equipos de cómputo y muchos elementos más que conforman los planteles educativos, provocando detrimento no solo a instituciones, también a los estudiantes, que regresarán a las escuelas una vez se reciban indicaciones de las autoridades.

Estas limitaciones encausadas por las situaciones de robo, impedirá el desarrollo normal de las funciones educativas, poniendo en riesgo el pleno ejercicio del derecho humano a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.

La tipificación penal, sirve para inhibir y sancionar la comisión de conductas que resulten antisociales, para poder preservar o restituir en su caso bienes jurídicamente tutelados y de esta manera, se garantice y restablezca el orden y paz social.

El robo corresponde a una conducta antijurídica, culpable y punible, que sea cual sea su modalidad, afecta a las personas, causando un detrimento en el patrimonio, alterando de esta manera el orden y paz pública, y en este caso cuando se comente contra instituciones educativos, está lesionando el patrimonio de la sociedad y causando menoscabo en el desarrollo óptimo de nuestros estudiantes.

Las autoridades enmarcan dentro de sus competencias el establecer medidas para preservar bienes, creando herramientas jurídicas para que la autoridad responsable de la procuración de justicia cuente con el marco legal necesario, que coadyuve a inhibir la comisión de dicho acto ilícito, considerando que su daño, pérdida o deterioro causa un detrimento directamente al derecho a la educación, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación, previniendo, investigando y sancionando las conductas antisociales.

Esta iniciativa propone incluir dentro de la calificativa especial del robo, cuando se cometa no solo en contra de uno o más bienes de cualquier institución pública o privada que funcione como Centro Educativo, que ya está contemplado en el Código, sino también a quien adquiera, oculte o comercialice algún bien producto de dicho robo.

En razón de lo anteriormente mencionado, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma la fracción IX del artículo 285 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 285.** …

I. a VIII. …

lX. (Robo a centros educativos) Cuando se cometa en contra de uno o más bienes de cualquier institución pública o privada que funcione como Centro Educativo, o bien, **a quien adquiera, oculte o comercialice algún bien producto de dicho robo.**

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio del 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 285, EN LA FRACCIÓN IX, DEL CODIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE QUE SE SANCIONE A QUIEN ADQUIERA, OCULTE O COMERCIALICE, PRODUCTOS OBTENIDOS DE ROBO A CENTROS EDUCATIVOS.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE ARMONIZAR LAS CONDICIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS AL ADOLESCENTE, ESTABLECIDAS EN LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

La suscrita **Diputada Diana Patricia González Soto,** conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este H. Pleno del Congreso, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que **se reforma el artículo 1, la fracción IV y VI recorriendo las subsecuentes del artículo 230 de la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza**, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La reforma al artículo 18 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diciembre de 2015, establece que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se contará con *“un sistema integral de justicia aplicable a quienes tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años, y se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes penales”*.

Dicha reforma constituyó un cambio trascendental del sistema de justicia penal en menores o adolescentes, ya que el antiguo modelo tutelar era proteccionista, consideraba incapaces y penalmente imputables a los menores de edad, siendo objeto de tutela, lo cual originaba que el niño o adolescentes no fuera responsable o consciente de las consecuencias legales, así mismo el Poder Ejecutivo era quien fungía como autoridad responsable de la operatividad del modelo tutelar adoptando un papel paternalista, siendo la misma autoridad del Poder Ejecutivo la encargada de investigar y a su vez llevaba a cabo el proceso e imponía la sanción.

Con el fin de respetar y garantizar los derechos humanos, se consagró un modelo procesal penal aplicable a quienes tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años y se les atribuya la consumación de una conducta tipificada como delito en las leyes de la materia, se considera al niño y al adolescente como persona capaces de ser titulares de derechos y obligaciones limitadas, para ubicarse como tal frente al proceso penal y gozar de todos los derechos reconocidos a una persona adulta, respetando, protegiendo y garantizando en todo momento los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes por parte de los jueces.

En cuanto a los principios del sistema de justicia juvenil, partimos del interés superior del menor, siendo uno de los principios rectores y más importante del marco internacional de los derechos del niño, siendo invocado y señalado por los órganos internacionales encargados de aplicar las normas como lo son: la *Convención sobre los Derechos del Niño,* establecido que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deberán tener en cuenta de manera primordial el interés superior del niño, así mismo la *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, ha sostenido que el interés superior del niño *“es un punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potenciales”*. Por su parte el *Comité para los Derechos del Niño* establece que el interés superior del niño *“se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar”*. [[17]](#footnote-17)

Siendo el 16 de junio de 2016 cuando se creó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo cual cada entidad federativa se ajustará a esta Ley, armonizándose la normatividad secundaria al respecto.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tiene como objeto, establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana; garantizando los derechos humanos a quienes se les señale como responsable de la comisión de hechos tipificados como delito, establece los principios rectores del sistema, así como las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversia que se establecen para el sistema, se determinan las medidas de sanción, define a las instituciones y autoridades especializados, así como sus atribuciones y funciones para aplicarlos en las normas del sistema, también determina lo mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas de sanciones.[[18]](#footnote-18)

En Coahuila, contamos con una Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, cuyo objeto es establecer las bases del sistema de justicia para adolescentes en el Estado, mediante la organización y funcionamiento, a través de un proceso especializado y la ejecución de la medida impuesta, todo ello en el marco de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales celebrados y aprobados por el Estado Mexicano. [[19]](#footnote-19)

Es por ello que, al contar con la instauración de un Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, el cual se fundamenta en la Constitución y en la Ley General de la materia, propicia el rediseño de la normatividad estatal, a fin de garantizar y fortalecer los derechos a los que son acreedores los adolescentes en nuestro país aplicados en cada uno de los Estados.

El artículo décimo segundo transitorio de la ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que:

*En un plazo que no exceda de 200 días naturales después de publicado el presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de esta Ley.*

Así mismo en la Ley General se establece los *Medios para lograr la reinserción*, estableciendo varios principios que se deberán de adoptar para lograr la reintegración y reinserción de las personas adolescentes.

Es por ello que esta propuesta de iniciativa de reforma, se busca armonizar lo establecido en la Ley Nacional en el rubro de medios para lograr la reintegración y reinserción por lo que se propone adicionar y reformar lo referente al capítulo de protección y tratamiento en relación a las *condiciones para el logro de los objetivos de la ejecución*, reformando un principio ya establecido en la fracción IV del artículo 230, fortaleciendo su contenido en donde indica que deberá de *“ESCUCHAR, TOMAR EN CUENTA SU OPINIÓN E INVOLUCRAR activamente en la elaboración y ejecución de su programa personalizado de ejecución”*, así mismo consideramos primordial adicionar dentro de los objetivos de la ejecución el “*GARANTIZARLE EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS”*, contemplado de igual manera como parte de los derechos que establece la Ley Nacional en Materia de Justicia para Adolescentes.

Así mismo, se propone adicionar en el artículo primero de esta ley en comento y como parte del objeto en el marco de los derechos, lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, como principio legal y fundamento general en materia de justicia para adolescentes por ser de orden público y observancia general en toda la República Mexicana.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. –** Se **reforma** **el artículo 1**, **la fracción IV y el contenido de la fracción VI** recorriendo el texto actual y las subsecuentes fracciones del **artículo 230** de **Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 1.- OBJETO.** La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases del sistema de justicia para adolescentes aplicable en el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como su integración, organización y funcionamiento, el proceso especializado y la ejecución de medidas, en el marco de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales celebrados y aprobados por el Estado Mexicano, **así como lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.**

**ARTÍCULO 230.- …** :

**I.** a la **III. …**  ;

**IV.** **Escuchar, tomar en cuenta su opinión e involucrarla** activamente en la elaboración y ejecución de su programa personalizado de ejecución;

**V.** … ;

**VI.** **Garantizar el cumplimiento de sus derechos;**

**VII.** Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal, y

**VIII.** Promover los contactos abiertos entre el adolescente y la comunidad local.

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
|  | | |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** | | |

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE HOJA, FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, LA FRACCIÓN IV Y VI RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 230 DE LA LEY DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS PRINCIPIOS RECTORES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 2° de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza,conforme a lasiguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

El numeral 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que *“en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”*.

Si bien es cierto, nuestro país ratificó desde 1990, el texto de dicha Convención en la que se establece el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, fue hasta el año 2011 cuando este principio se incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer en el noveno párrafo del artículo 4° constitucional lo siguiente:

*“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”*

Este principio sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pretende priorizar el derecho de la niñez, propiciando no solamente satisfacer sus necesidades sino garantizar el respeto y la protección a su dignidad e integración física, psicológica, moral y espiritual, a través de normas de atención especial y acorde a su edad.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se tomaran las acciones y medidas con un enfoque integral, trasversal y con perspectiva de derechos humanos, considerando los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de las niñas, niños y adolescentes en todo aquello que le compete de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y establecerá mecanismos de seguimiento y evaluación en la implementación de políticas, programas, regulaciones y compromisos derivados de tratados internacionales.

Dicha Ley reconoce su carácter de titulares de derechos y establece que dicho principio debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niñas y adolescentes, y cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Así mismo establece que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento llevando a cabo el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior, a través de medios estructurales, legales, administrativos y presupuestales.

En nuestro Estado la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, de igual manera reconoce a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos acorde con los principios basados en nuestra Constitución, garantizando el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, con el fin de que el Estado garantice la protección, prevención y restitución de los derechos que hayan sido vulnerados.

Para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes se deberá seguir los principios rectores de respeto, derecho a la vida, no discriminación, prioridad, opinión y participación, protección de la familia, integralidad, trasversalidad, interdisciplinariedad, trasparencia y rendición de cuentas.

La Convención sobre los derechos del Niño, señala que el principio de interés superior tiene un concepto triple:

***Derecho sustantivo***. Al ser la consideración primordial, se deberá evaluar y tener en cuenta al valorar distintos intereses, para tomar una decisión sobre una cuestión debatida que afecte a una niña o niño, o a un grupo de ellas(os).

***Principio Jurídico interpretativo***. Cuando una disposición jurídica admita más de una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga el interés superior de la niña, niño o adolescente.

***Norma de Procedimiento***. Cuando se deba tomar una decisión que afecte a una niña, niño, adolescente, o a un grupo de ellas(os), es necesario realizar una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) sobre su vida y explicar por qué se tomó esa decisión.

Es por ello que este proyecto de iniciativa, plantea reformar la fracción III del artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado, en el cual se establece los principios rectores para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, siendo necesario armonizar en lo que respecta al Interés superior del niño o la niña, lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que a la letra dice: …

*El**interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.*

*Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.*

Por lo que es necesario establecer que el interés superior de la niñez deberá ser considerado *primordial* en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes en el estado, sino también en las medidas, actuaciones y procedimientos sobre una cuestión debatida que los involucre y con ello establecer dentro de los principios rectores de la ley citada para reforma, el prever que cuando se presente diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución, así como en los tratados de la materia de los que México forma parte, buscando en todo momento la opción que satisfaga de manera más efectiva el principio rector del interés superior a favor de las niñas, niños y adolescentes.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**I N I C I A T I V A C O N P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Se **reforma** la **fracción III** del **artículo 2** de la **Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

**Artículo 2.-** … :

I al II. …

**III.** Interés superior del niño o de la niña: Consiste en que el desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados **de manera primordial en la toma de decisiones, medidas, actuaciones y procedimientos sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, así** como criterios rectores para la elaboración de normas, políticas públicas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos de su vida. **Cuando se presentan diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia de los que México forma parte, eligiendo la opción que satisfaga de manera más efectiva este principio rector**;

IV. a la XI. …

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE HOJA, FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS PRINCIPIOS RECTORES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA EL INCISO J) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INCLUIR AL INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada María Esperanza Chapa García, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona el inciso j) a la Fracción I del Artículo 6 y se reforma la Fracción V del Artículo 12 de la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Coahuila, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El Instituto Coahuilense de las Personas Adultos Mayores es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio según la propia legislación estatal de dicho Instituto, este tiene por objeto:

I. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar el Programa Estatal de las Personas Adultas Mayores y las acciones encaminadas a mejorar sus condiciones de vida, su desarrollo integral y su plena participación en la vida económica, política, cultural y social del Estado.

II. Coadyuvar con las instancias que correspondan para promover el respeto a los derechos de las personas adultas mayores, así como la eliminación de toda forma de discriminación hacia las mismas y la erradicación de la violencia hacia ellas.

Una de las principales finalidades del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores consiste en diseñar estrategias tendientes a prevenir, atender y erradicar la violencia o el abuso hacia las personas adultas mayores, así como para combatir las prácticas de violación a los derechos de ellas.

Por otro lado, la Ley de Prevención Asistencia y Atención de la Violencia Familiar fue creada con la finalidad de establecer las bases y procedimientos para prevenir la violencia en las familias; asistir y atender integralmente a las personas receptoras de la violencia familiar y, en su caso, promover los tratamientos y las sanciones de las personas generadoras de la misma, de conformidad con las disposiciones jurídicas correspondientes, con el fin de erradicar la violencia familiar en el estado.

Además, señala que para llevar a cabo sus objetivos se debe considerar las circunstancias particulares de la diversidad de las familias, en la elaboración e implementación de las políticas públicas que se emprendan para la prevención, asistencia y atención de la violencia familiar, a efecto de proteger a todas y todos sus integrantes.

Para la Ley de Prevención Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, la unidad familiar, la igualdad de género, la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges o de la pareja, de las hijas y de los hijos; así como la protección de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, constituyen principios fundamentales para la aplicación de la misma.

Se establece en el Artículo 2 de dicha legislación que las autoridades de la administración pública estatal y municipal del Estado de Coahuila, deben instrumentar políticas públicas coordinadas, con un enfoque de derechos humanos, para la prevención, asistencia y atención de la violencia familiar como elemento indispensable para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.

Cabe señalar que el ámbito de competencia de la Ley de Prevención Asistencia y Atención de la Violencia Familiar corresponde al Ejecutivo del Estado a través de ciertas dependencias que se encuentran señaladas en el artículo 6 de dicha legislación, sin embargo, entre ellas encontramos a la Fiscalía General del Estado, al Instituto de las Mujeres, a la Procuraduría de las Niñas, Niños y Familia, pero no se incluye al Instituto Coahuilense de las Personas Adultos Mayores.

Lo mismo pasa en el artículo 12 correspondiente a la creación del Consejo Estatal para la Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar en el Estado, mismo que está conformado por representantes de diversas dependencias como las que se señalan en el artículo 6, mas no se incluye al Instituto Coahuilense de las Personas Adultos Mayores.

El Consejo Estatal para la Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, tiene como atribuciones las siguientes:

I. Aprobar el Programa General para la Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar en el Estado; así como el presupuesto necesario para su implementación, presentado por la Junta Directiva.

II. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información entre las Instituciones Públicas y Privadas que se ocupan de esta materia.

III. Establecer un sistema de comunicación y enlace interdisciplinario que permita a las y los servidores públicos de todos los niveles, mantener comunicación y trabajar en estrecha colaboración para mejorar los servicios de detección, atención, prevención, información y evaluación de la violencia familiar y enfrentarla de manera integral desde cualquier ámbito.

IV. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos que permitan afrontar eficazmente la violencia familiar en el Estado, así como los modelos de atención psicoterapéuticos y de salud más adecuados.

V. Solicitar, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que los órganos del Poder Judicial competentes analicen las prácticas jurídicas e interpretaciones legales que impidan que se imparta justicia a las personas receptoras de violencia familiar y se resuelvan los problemas que les ocasiona.

VI. Contar con sistemas de información estadística completos sobre la violencia familiar que incluyan causas, consecuencias, incidencias, etc., que permitan evaluar la eficacia de las medidas y reorientarlas en caso de que fuera necesario.

VII. Aprobar modelos de comunicación social masivos o por medios electrónicos, que lleven a la exclusión de la violencia como forma de resolver los conflictos familiares.

VIII. Contribuir a la difusión de la legislación en la que se establecen medidas para evitar la violencia familiar.

IX. Aprobar indicadores elaborados por las Unidades de Atención que permitan evaluar semestralmente los logros y avances del Programa General.

Por ello y cómo podemos darnos cuenta la participación del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores en el Consejo, en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas para la atención y prevención de la violencia familiar es de suma importancia pues como se señala en el cuerpo del presente el Instituto está encargado de crear estrategias tendientes a prevenir, atender y erradicar la violencia o el abuso hacia las personas adultas mayores, así como para combatir las prácticas de violación a los derechos de ellas.

Por lo anterior y con la finalidad de implementar todas las medidas indispensables para prevenir que en el seno familiar se produzca cualquier forma de maltrato que afecte a sus miembros y brindar especial atención a niñas, niños y adolescentes, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores, para evitar que sean víctimas de la violencia familiar es por lo que, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se adiciona el inciso j) a la Fracción I del Artículo 6 y se reforma la Fracción V del Artículo 12 de la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 6.** La aplicación de esta Ley en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. Al Poder Ejecutivo a través de:

Del a) al i) ...

**j) El instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores.**

**Artículo 12.** Se crea el Consejo para la Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar en el Estado, como órgano honorario de planeación, apoyo y evaluación.

El Consejo estará integrado por:

De la I. a la IV. …

V. **Dos vocalías**, **una** a cargo de la Directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres**, y una a cargo del o la titular del Instituto Coahuilense de las Personas Adultos Mayores**

De la VI. a la VIII. …

…

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO J) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción primera del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 del mes marzo del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción primera del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción primera del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Los Artículos 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen expresamente que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio, teniendo en todo tiempo el pueblo el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno.*

*Así mismo, en tales dispositivos se reconoce que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación, en donde el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.*

*Ahora bien, el artículo 32 de la Constitución Política de Coahuila de Zaragoza, prevé expresamente que el ejercicio del Poder Legislativo local, recae en una asamblea que se denominara Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de dicho ordenamiento, este Poder Público cuenta entre uno de sus órganos con la Diputación Permanente, la cual estará en funciones cuando el Congreso en Pleno no esté en actividad, Órgano Directivo y de decisión parlamentaria que tiene entre sus funciones las que expresamente se encuentran establecidas en el artículo 73 de nuestra Ley Fundamental, una de las cuales la de la Fracción I, explícitamente dispone que está facultada para llevar la correspondencia con los Poderes de la Federación y con la de los Estados, de ahí, que puede entenderse implícitamente que también está facultada para llevar la correspondencia con los otros Poderes del Estado de Coahuila, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como con los demás entes autónomos previstos en dicho ordenamiento.*

*Lo anterior es así, dado que por facultades explícitas deben de entenderse a aquellas otorgadas por la Constitución a un Órgano del Estado, de forma concreta y determinante respecto de alguna materia o asunto, y las facultades implícitas, son aquellas que se pueden desprender y utilizar como un medio necesario para ejercer alguna de las facultades explícitas, en donde para hacer uso de una facultad implícita se requieren reunir los siguientes requisitos; Primero, la existencia de una facultad explícita, que por sí sola no pudiera ejercerse, y Segundo, la relación de medio necesario entre la facultad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda.*

*Lo antes dicho, presupone que la facultad explícita quedaría inútil, estéril, o en calidad de letra muerta, si su ejercicio no se actualizara por medio de la facultad implícita; de lo que surge la relación de necesidad entre una y la otra, de lo anterior, claramente se debe de entender que con base a esas atribuciones, la Diputación Permanente de este Poder Legislativo, puede legítimamente recibir iniciativas de Ley o de Decreto y turnarlas para su estudio y dictamen a las comisiones que correspondan, facultad implícita de la cual ya se había hecho uso por tal órgano, pero que para no dejar tal tema a interpretaciones que pudieran llevar a discusiones parlamentarias innecesarias, es por lo que se pretende reformar la fracción I, del Artículo 73 de la Constitución Local, para el efecto de establecer como una facultad explícita de la Diputación Permanente, el de poder recibir y dar turno para estudio y dictamen de las comisiones correspondientes las iniciativas de Ley o de Decreto que se reciban en este Recinto Legislativo durante los periodos de receso del Pleno.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa, verificando que la misma tiene por objeto el de establecer como una facultad explícita de la Diputación Permanente, recibir y dar turno para estudio y dictamen de las comisiones correspondientes las iniciativas de Ley o de Decreto que se reciban en este recinto legislativo durante los periodos de receso del Pleno.

El promovente sustenta su propuesta en que *“este Poder Público cuenta entre uno de sus órganos con la Diputación Permanente, la cual estará en funciones cuando el Congreso en Pleno no esté en actividad, Órgano Directivo y de decisión parlamentaria que tiene entre sus funciones las que expresamente se encuentran establecidas en el artículo 73 de nuestra Ley Fundamental, una de las cuales la de la Fracción I, explícitamente dispone que está facultada para llevar la correspondencia con los Poderes de la Federación y con la de los Estados, de ahí, que puede entenderse implícitamente que también está facultada para llevar la correspondencia con los otros Poderes del Estado de Coahuila, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como con los demás entes autónomos previstos en dicho ordenamiento”* en el mismo orden de ideas estima que *“con base a esas atribuciones, la Diputación Permanente de este Poder Legislativo, puede legítimamente recibir iniciativas de Ley o de Decreto y turnarlas para su estudio y dictamen a las comisiones que correspondan, facultad implícita de la cual ya se había hecho uso por tal órgano, pero que para no dejar tal tema a interpretaciones que pudieran llevar a discusiones parlamentarias innecesarias, es por lo que se pretende reformar la fracción I, del Artículo 73 de la Constitución Local, para el efecto de establecer como una facultad explícita de la Diputación Permanente, el (…) recibir y dar turno para estudio y dictamen de las comisiones correspondientes las iniciativas de Ley o de Decreto que se reciban en este Recinto Legislativo durante los periodos de receso del Pleno.*

Aunado a lo anterior, a manera de referencia revisamos el contenido del artículo 78 de la Constitución Federal concerniente a la conformación y atribuciones de la Comisión permanente, observando que la fracción tercera establece la facultad de:

*Resolver los asuntos de su competencia;* ***recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas****, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;*

En este sentido, una vez que hemos agotado el estudio y análisis de la iniciativa la consideramos procedente.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma la fracción I, del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 73. …**

1. Llevar la correspondencia con los Poderes de la Federación y con los de los Estados, así como para recibir iniciativas de Ley o de Decreto, y turnarlas para su estudio y dictamen a las comisiones que correspondan.
2. a **VIII.** …

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII y se recorre la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 01 del mes de abril de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 14 de abril del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII y se recorre la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII y se recorre la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró una alerta mundial por el esparcimiento de un nuevo tipo de coronavirus conocido como Covid 19. Hasta este momento, la pandemia que inició en China y se ha propagado rápidamente por todo el mundo ha contagiado a un aproximado de 684,139 personas en 177 países, de las cuales, han fallecido alrededor de 32.091.*

*En nuestro país hasta el momento se han detectado 717 casos, de los cuales 12 han sido fatales .Desde que se declaró la pandemia, el gobierno mexicano ha recomendado a la ciudadanía tomar las medidas de higiene necesarias para evitar más contagios, evitar salir de casa e incluso interrumpir las actividades no esenciales en el sector público y privado. De la misma forma se han suspendido actividades que impliquen la aglomeración de personas, así como el cierre temporal de escuelas, bares, antros y parques entre otros.*

*No obstante, el problema más grave al que se han tenido que enfrentar los ciudadanos en los últimos días, es el aumento injustificado de los productos e insumos necesarios para enfrentar el brote del Covid 19. El jabón, los cubrebocas, las toallitas desinfectantes, el gel antibacterial, el alcohol así como las materias primas para poderlos hacer en casa se han disparado de forma inusitada, de la misma forma se ha detectado un incremento injustificado de los productos de la canasta básica.*

*Gran parte del aumento se debe a las compras de pánico, pero también a los acaparadores y comerciantes que aprovechan el miedo y la necesidad de las personas para su beneficio personal, subiendo deliberadamente los precios para obtener más ganancias a costa de la pandemia. Desde luego los más afectados resultan ser las personas que menos tienen pues no pueden acceder a los insumos básicos al no contar con los recursos suficientes, generando así un grave problema de vulnerabilidad ante la enfermedad.*

*Mientras tanto la autoridad permanece pasiva ante los precios abusivos e injustificados, como señala una investigación realizada por el sitio de noticias Animal Político en la cual sostiene que “La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no está realizando ningún operativo especial de vigilancia respecto a los precios de productos como cubrebocas, gel antibacterial o toallitas desinfectantes con alta demanda al ser insumos de higiene contra el coronavirus”.*

*Hasta la semana pasada, la PROFECO reconoció haber iniciado procedimientos en contra de 22 establecimientos por casos de sobreprecios, lo cual, consideramos un número muy reducido dada la magnitud del problema. La justificación de la autoridad es que sólo pueden hacer revisiones cuando existen denuncias, sin embargo la fracción XIII del artículo 24 de la Ley Federal del Consumidor, le da la facultad expresa de vigilar los precios sin necesidad de que existan denuncias.*

*El texto normativo citado sostiene que son facultades de la Procuraduría: “Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor”.*

*Asimismo, la fracción XX del artículo citado sostiene que la PROFECO debe: “Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores”.*

*Desde nuestra perspectiva, tales normas jurídicas son suficientes para poder llevar a cabo las revisiones de oficio correspondientes, sin embargo, y en ánimo de dotar a la autoridad de facultades expresas para que puedan atender de manera efectiva futuras crisis humanitarias, proponemos una adición al artículo 24 de la Ley Federal del Consumidor para que en casos de emergencia derivados de crisis humanitarias, como las pandemias, endemias, pestes, o cualquier otra enfermedad que obligue a los ciudadanos a ponerse en cuarentena, la autoridad pueda de oficio revisar los costos e insumos de productos con el fin de evitar y sancionar el sobre precio.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la propuesta de iniciativa que adiciona la fracción XXVII, recorriendo la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de erradicación de las prácticas de sobreprecio y acaparamiento.

Los integrantes de esta dictaminadora, podemos observar que la iniciativa objeto del presente dictamen, encuentra motivación en un fenómeno que se ha venido presentando a raíz de la emergencia sanitaria del Covid-19, y es que al haberse declarado el país en un estado de emergencia y aislamiento social ante esta pandemia, se han despertado una serie de prácticas comerciales que afectan negativamente a la sociedad, como lo es la especulación de precios en el mercado de los productos para la protección de la higiene y salud, así como los de la canasta básica.

Es ante esta situación, que coincidimos con la promovente de la propuesta de iniciativa, en razón de que se debe proteger a la ciudadanía para que los precios de dichos productos se mantengan dentro de los límites establecidos por el mercado, evitando así abusos por parte de los comercios, tiendas de autoservicio y farmacias, en la venta de los productos que los consumidores requieran adquirir, de tal manera que la economía de los mexicanos no se vea afectada aún más ante situaciones como la que nos está tocando vivir.

Es por ello, que nos manifestamos a favor de la iniciativa, para que se adicione como otra atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo siguiente: *“en caso de pandemia, endemia, epizootia, peste o cualquier otra enfermedad análoga que afecte a gran parte de la población, la procuraduría revisará de oficio y de manera periódica los precios y la disponibilidad de los medicamentos, utensilios, productos o insumos, o cualquier otro haber necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, así como todos aquellos productos que pertenezcan a la canasta básica, con el objeto de evitar el acaparamiento y los sobreprecios injustificados, sancionando además a quienes realicen estas prácticas en los términos que determinen las normas aplicables”*.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII, al artículo 24 y se recorren las subsiguientes de la Ley Federal de Protección al Consumidor; para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se adiciona la fracción XXVII, al artículo 24 y se recorren las subsiguientes de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 24.** La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

**I.** a **XXVI.** …

**XXVII.** En caso de pandemia, endemia, epizootia, peste o cualquier otra enfermedad análoga que afecte a gran parte de la población, la procuraduría revisará de oficio y de manera periódica los precios y la disponibilidad de los medicamentos, utensilios, productos o insumos, o cualquier otro haber necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, así como todos aquellos productos que pertenezcan a la canasta básica, con el objeto de evitar el acaparamiento y los sobreprecios injustificados, sancionando además a quienes realicen estas prácticas en los términos que determinen las normas aplicables.

**XXVIII.** Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

**TRANSITORIO**

**Único.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona la fracción I, VI y VII del artículo 42, así como la fracción I del artículo 43, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, asimismo se agrega una nueva fracción II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 del mes de marzo del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el 23 de mayo del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona la fracción I, VI y VII del artículo 42, así como la fracción I del artículo 43, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona la fracción I, VI y VII del artículo 42, así como la fracción I del artículo 43, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El presente planteamiento se inspira en el garantismo de los instrumentos de participación y organización ciudadana y comunitaria que se expresan en el artículo 6º de la citada Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza que, textualmente, reza lo siguiente:*

*Los gobiernos estatal y municipal, en los ámbitos de sus competencias, establecerán las garantías necesarias para que los instrumentos de participación y organización ciudadana y comunitaria sean reales, efectivos y democráticos.*

*Dicho artículo también establece que, para tal efecto, (ambos niveles de gobierno en la Entidad) removerán los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio del derecho de las personas a participar en la vida política, económica, cultural y social del estado.*

*Congruente con estos principios, y mediante importantes adecuaciones al merco legal respectivo, este Honorable Congreso no ha dejado de fomentar la participación ciudadana, particularmente en materia legislativa.*

*Partimos de que, como afirma el politólogo e investigador del Conacyt y del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México, Jason Alexis Camacho Pérez, “la gobernanza es un marco formal e informal que da cabida a diferentes actores dentro de las instituciones de gobierno. Es importante destacar al actor más importante en la toma de decisiones públicas: el ciudadano”.*

*En efecto, al ciudadano se le puede considerar “como el más importante en varios sentidos, puesto que el ciudadano, de manera individual y organizada, es quien define el rumbo y naturaleza de las acciones del gobierno”.*

*Por otra parte, “el ciudadano no lo es por habitar en un lugar...; ni tampoco lo son necesariamente los que disfrutan de derechos jurídicos como para entablar juicio o ser juzgados... El ciudadano... se define mejor por su participación en la justicia y en el gobierno.” (Aristóteles).*

*De ahí la preocupación del de la voz, tanto como la del resto de esta Honorable LXI Legislatura, de seguir trabajando en mejorar el marco normativo correspondiente, así como en la designación y uso de medios que faciliten la participación del gobernado, en este caso, en la tarea legislativa.*

*No pocas veces, nos hemos encontrado con que en las minucias legales está la clave para generar cambios importantes y positivos. Un ejemplo de ello es la fracción I del artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a los requisitos de la iniciativa popular, donde se indica que el proponente deberá presentar su planteamiento por escrito.*

*Para tal efecto, considero pertinente establecer que el interesado haga uso del programa computacional más usual en el procesamiento de textos, como es Office Word, que permite un tratamiento más rápido y eficiente del contenido de la iniciativa, esto último, sin menoscabo de que esta se presente en otro formato, pero en todo caso impresa y firmada, como se indica en la fracción V de dicho artículo, en vigencia.*

*Bajo el referido propósito de agilizar y mejorar la calidad del proceso legislativo posterior a la presentación de la iniciativa popular, se propone que, para su formulación, el ciudadano siga los principios y reglas de técnica legislativa, para lo cual podrá solicitar asesoría a la autoridad competente, concretamente, a la Oficialía del Congreso del Estado.*

*Por otra parte, para proyectos legislativos de mayor envergadura, como los que abordan temas muy sensibles o que planteen un fuerte impacto social, por ejemplo, la creación, derogación o abrogación de leyes o decretos, el ciudadano deberá contar con un amplio respaldo comunitario, derivado de foros o consultas a entidades públicas y/o agrupaciones de la sociedad civil, que concuerden con el planteamiento respectivo.*

*Obviamente, esto propiciará la participación de especialistas, autoridades públicas, organizaciones sociales reconocidas y líderes de opinión calificados, tanto en la orientación, como en lograr un mayor sustento y, por ende, en elevar la certeza y viabilidad de la iniciativa popular.*

*Por lo demás, se propone, mediante las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tanto como la Ley Orgánica que rige a este Honorable Poder Legislativo, sean más específicas en lo referente a indicar el órgano interno al que el Congreso del Estado o la Diputación Permanente debe turnar las iniciativas populares para determinar si son o no son procedentes, como es la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión legislativa, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente dictamen, observando que la misma tiene por finalidad la de modificar los artículos 42 y 43 de la Ley de Participación Ciudadana y el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso a efecto de:

1. ***Establecer que el interesado haga uso del programa computacional más usual en el procesamiento de textos, como es Office Word, que permite un tratamiento más rápido y eficiente del contenido de la iniciativa, esto último, sin menoscabo de que ésta se presente en otro formato, pero en todo caso impresa y firmada, como se indica en la fracción V de dicho artículo, en vigencia.***
2. ***Bajo el referido propósito de agilizar y mejorar la calidad del proceso legislativo posterior a la presentación de la iniciativa popular, se propone que, para su formulación, el ciudadano siga los principios y reglas de técnica legislativa, para lo cual podrá solicitar asesoría a la autoridad competente, concretamente, a la Oficialía del Congreso del Estado.***
3. ***Por otra parte, para proyectos legislativos de mayor envergadura, como los que abordan temas muy sensibles o que planteen un fuerte impacto social, por ejemplo, la creación, derogación o abrogación de leyes o decretos, el ciudadano deberá contar con un amplio respaldo comunitario, derivado de foros o consultas a entidades públicas y/o agrupaciones de la sociedad civil, que concuerden con el planteamiento respectivo. Estableciéndose para tal efecto que* deberá anexar a su iniciativa escritos en donde se exprese el respaldo de por lo menos tres instituciones y/u organizaciones, sean gubernamentales o de la sociedad civil, legalmente constituidas.**
4. ***Por lo demás, se propone, mediante las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tanto como la Ley Orgánica que rige a este Honorable Poder Legislativo, sean más específicas en lo referente a indicar el órgano interno al que el Congreso del Estado o la Diputación Permanente debe turnar las iniciativas populares para determinar si son o no son procedentes, como es la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.***

En este orden de ideas las modificaciones analizadas en el presente dictamen consisten en lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENTE** | **PROPUESTA DE REFORMA** |
| **ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.** Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:  I. Presentarse por escrito.  II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.  III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.  IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.  V. Nombre y firma de quien la presenta.  El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular. | ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR. Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:   1. Presentarse por escrito**, preferentemente mediante el uso del programa informático Word, tanto como en versión impresa.** 2. ... a la V. ... 3. **En su elaboración y redacción, la iniciativa deberá apegarse a los principios y reglas convencionales de técnica legislativa, para lo cual el interesado(a) podrá solicitar asesoría oportuna a la autoridad competente.** 4. **Para la creación, derogación o abrogación de leyes o decretos, el o la proponente(s) deberá anexar a su iniciativa escritos en donde se exprese el respaldo de por lo menos tres instituciones y/u organizaciones, sean gubernamentales o de la sociedad civil, legalmente constituidas, cuyos fines y/o quehacer se relacionen en forma directa con el asunto central del planteamiento.**   El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular. |
| **ARTÍCULO 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA.** Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente:  I. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a una comisión que se integrará con siete diputados.  El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  II. La comisión resolverá sobre la procedencia de la iniciativa, bajo las reglas siguientes:  1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo anterior.  2. En caso de que falte alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, se notificará al solicitante para que en un plazo no mayor de quince días hábiles presente la información requerida.  3. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para la iniciativa popular, la comisión resolverá, en su caso, sobre la procedencia de la misma.  4. Si el solicitante no cumple con lo previsto en el numeral 2 de esta fracción, la comisión declarará la improcedencia de plano en los términos previstos por la ley.  5. La comisión notificará al solicitante o, en su caso, a su representante la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la iniciativa popular.  6. La iniciativa que se declare procedente se sujetará al proceso legislativo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  7. En la discusión de la iniciativa, podrán participar con voz hasta tres personas autorizadas por los solicitantes ciudadanos.  III. Toda omisión, acto o resolución del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente que viole el trámite de la iniciativa popular, podrá ser impugnada en los términos de la ley de la materia.  IV. (DEROGADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2008) | ARTÍCULO 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA. Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente:   1. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a **la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.**   El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado**.**   1. **a IV. …** |
| **LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO VIGENTE** | **PROPUESTA** |
| **ARTÍCULO 90.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia conocerá de los asuntos relacionados con:  **I.** Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado, iniciativas para la expedición o reforma de códigos en materia municipal y de leyes, iniciativas en materia de acceso a la información pública, e iniciativas de decretos relacionados con las materias y aspectos que sean o se consideren de su competencia; así como de las omisiones legislativas y errores plasmados en los ordenamientos que ya han sido promulgados;  **II.** División territorial y organización política y administrativa del Estado y de los Municipios, y la modificación de límites intermunicipales;  **III.** Creación, fusión, supresión y cambio de denominación de Municipios;  **IV.** Suspensión y desaparición de Ayuntamientos o Concejos Municipales y suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos de sus integrantes, así como la designación de quienes deban desempeñar los cargos vacantes;  **V.** Designación de Concejos Municipales y de quienes deban suplir las faltas temporales o absolutas de los miembros de los Ayuntamientos o Concejos Municipales;  **VI.** Licencias o renuncias del gobernador y de los integrantes de los Ayuntamientos y demás servidores públicos que señalen la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, cuando esto no sea competencia de otra Comisión;  **VII.** Nombramiento de gobernador interino o provisional, así como nombramiento o elección de quienes deban sustituir a servidores públicos que renuncien o soliciten licencia para separarse de su cargo, en los casos que sea procedente;  **VIII.** Nombramiento de los servidores públicos que señalen la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, cuando esto no sea competencia de otra Comisión;  **IX.** Cambio de residencia de los Poderes del Estado o del Recinto Oficial del Congreso;  **X.** Otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo;  **XI.** Otorgamiento de facultades al Ejecutivo, para celebrar convenios sobre límites territoriales con las Entidades Federativas vecinas y para la ratificación de estos convenios.  **XII.** Ratificación o negación para que se erijan nuevos estados, dentro de los límites de los existentes;  **XIII.** Adaptación y readaptación social  **XIV.** Protección civil;  **XV.** Legislación civil y penal;  **XVI.** Leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público;  **XVII.** Nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios así como del Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos;  **XVIII.** Renuncias y licencias de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios así como del Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos;  **XIX.** Nombramiento o elección de quienes deban sustituir a los servidores públicos mencionados en la fracción anterior;    **XX.** Nombramiento del Fiscal General del Estado;  **XXI.** El otorgamiento de amnistías;  **XXII.** Convenios de asociación entre Municipios del Estado y de otras Entidades Federativas; y  **XXIII.** Otros asuntos que sean o se consideren de la competencia de esta comisión. | **ARTÍCULO 90.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia conocerá de los asuntos relacionados con:  I. ...  **II. Iniciativas populares, a fin de dictaminar en torno a la procedencia de estas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y turnarlas, en su caso, a las comisiones competentes.**  III. a la XXIV. ... |

Una vez efectuado el estudio del objeto, contenido y motivos en los que se sustenta el proyecto de reforma quienes integramos la presente Comisión Dictaminadora, coincidimos con el promovente en que las modificaciones que se realicen a la ley de participación ciudadana deben partir de *“las garantías necesarias para que los instrumentos de participación y organización ciudadana y comunitaria sean reales, efectivos y democráticos”.*

Para este Congreso promover los mecanismos de participación ciudadana y de parlamento abierto, ha sido una tarea preponderante, cobrando especial relevancia, en este proceso las iniciativas ciudadanas, las cuales debemos destacar, en esta legislatura se ha presentado un número de ellas sin precedentes en la historia del Poder Legislativo de Coahuila, superando las 100 propuestas ciudadanas.

En este orden de ideas, consideramos al igual que el promovente en la necesidad de seguir trabajando en mejorar el marco normativo correspondiente, así como en la designación y uso de medios que faciliten la participación del gobernado, en este caso, en la tarea legislativa.

Como sabemos por disposición de las leyes General y Local en materia de transparencia, todos los proyectos normativos que se presentan ante esta Soberanía tienen la naturaleza de públicos, y se encuentran considerados entre los documentos que conforman la información pública de oficio, en este sentido, siendo uno de los parámetros que se utilizan para evaluar el acceso a la información de los particulares, el que estos documentos se encuentren disponibles en formatos de datos abiertos, resulta entonces para nosotros adecuado, el establecer que las iniciativas ciudadanas, además de presentarse en la forma escrita, ya prevista en la ley vigente, se presenten preferentemente en formato electrónico, ya sea en un C.D o memoria, en la que se encuentre el documento en un formato editable, como WORD, o algún equivalente.

Esta dictaminadora también considera, a efecto de garantizar una representación real y efectiva de la población, no establecer como requisito, en los casos en que se trate de expedición de nuevas leyes o decretos o extinción de los mismos, el contar con el respaldo de por lo menos tres organizaciones de sociedad civil relacionadas con el tema que expresen su respaldo a la propuesta, puesto que pudiera constituir un obstáculo para que los ciudadanos realicen propuestas de este tipo.

Por lo que hace a fijar como requisito de procedencia de las iniciativas populares que en su elaboración y redacción, deberán apegarse a los principios y reglas convencionales de técnica legislativa, para lo cual el interesado(a) podrá solicitar asesoría oportuna a la autoridad competente, si bien estimamos que es una propuesta que persigue la finalidad de abonar a la elaboración y presentación de iniciativas ciudadanas más completas y adecuadas, al tratarse cuestiones de forma, pudiera resultar excesivo el desechar alguna propuesta ciudadana que no se ajustara a tales reglas, o pudiere resultar restrictivo a los derechos de participación de los ciudadanos que las desconozcan, por tanto no se incluyó este aspecto en el proyecto de Decreto, contenido en el presente dictamen.

Finalmente esta dictaminadora realizó algunos ajustes de técnica legislativa, estableciéndose una adición de una fracción segunda al artículo 42, en lugar de la reforma a la fracción I, originalmente planteada.

Por lo que hace a las modificaciones propuestas al artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana y 90 de la Ley Orgánica, los integrantes de esta comisión legislativa, coincidimos en que los mismos son congruentes con nuestro marco normativo.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO.-** Que adiciona la fracción II, recorriéndose las ulteriores al artículo 42, y se reforma la fracción I del artículo 43, de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la manera siguiente:

**ARTÍCULO 42.** …

1. …
2. Procurar acompañar a su escrito la iniciativa en versión electrónica, en un procesador de texto, en memoria USB o CD.
3. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.
4. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.
5. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.
6. Nombre y firma de quien la presenta.

…

**ARTÍCULO 43.** …

1. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado**.**

1. a IV. …

**SEGUNDO.-** Se adiciona una nueva fracción II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, recorriéndose las fracciones subsecuentes de dicho artículo, para quedar de la manera siguiente:

**ARTÍCULO 90.-** …

1. **…**
2. Iniciativas populares, a fin de dictaminar en torno a la procedencia de estas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y turnarlas, en su caso, a las comisiones competentes;
3. División territorial y organización política y administrativa del Estado y de los Municipios, y la modificación de límites intermunicipales;
4. Creación, fusión, supresión y cambio de denominación de Municipios;
5. Suspensión y desaparición de Ayuntamientos o Concejos Municipales y suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos de sus integrantes, así como la designación de quienes deban desempeñar los cargos vacantes;
6. Designación de Concejos Municipales y de quienes deban suplir las faltas temporales o absolutas de los miembros de los Ayuntamientos o Concejos Municipales;
7. Licencias o renuncias del gobernador y de los integrantes de los Ayuntamientos y demás servidores públicos que señalen la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, cuando esto no sea competencia de otra Comisión;
8. Nombramiento de gobernador interino o provisional, así como nombramiento o elección de quienes deban sustituir a servidores públicos que renuncien o soliciten licencia para separarse de su cargo, en los casos que sea procedente;
9. Nombramiento de los servidores públicos que señalen la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, cuando esto no sea competencia de otra Comisión;
10. Cambio de residencia de los Poderes del Estado o del Recinto Oficial del Congreso;
11. Otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo;
12. Otorgamiento de facultades al Ejecutivo, para celebrar convenios sobre límites territoriales con las Entidades Federativas vecinas y para la ratificación de estos convenios;
13. Ratificación o negación para que se erijan nuevos estados, dentro de los límites de los existentes;
14. Adaptación y readaptación social;
15. Protección civil;
16. Legislación civil y penal;
17. Leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público;
18. Nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios así como del Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos;
19. Renuncias y licencias de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios así como del Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos;
20. Nombramiento o elección de quienes deban sustituir a los servidores públicos mencionados en la fracción anterior;
21. Nombramiento del Fiscal General del Estado;
22. El otorgamiento de amnistías;
23. Convenios de asociación entre Municipios del Estado y de otras Entidades Federativas; y
24. Otros asuntos que sean o se consideren de la competencia de esta comisión.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÈRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 13 del mes de mayo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 15 de mayo del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El principio del bien común se refiere a la razón de ser de la sociedad, la cual existe para crear, mantener y promover un conjunto de condiciones que permitan y favorezcan el desarrollo de sus miembros. Así, el bien común se logra con el esfuerzo de todos y para servir y ayudar a todos; luego entonces el bien común es un estado o situación de la sociedad en la que existe y se desarrolla toda clase de bienes.*

*Ahora bien, toda vida social combina en distinta proporción el bien y el mal común, y destaca la obligación de promover el bien común como razón de ser de la vida social, de tal suerte que la insuficiencia del bien común altera para muchos el significado de la vida social y hace que, por el hecho de vivir en una sociedad con graves deficiencias de bien común, la vida social sea más destrucción y retraso de muchas personas y familias que oportunidad positiva y alentadora de desarrollo para ellas.*

*Para lograr lo anterior, es decir el bien común, se requiere la autoridad social, que es ante todo un órgano o instancia con derecho de mandar, este derecho claro destinado a lograr precisamente, el bien común. Esta es la autoridad jurídica, que debería ser acompañada de la autoridad moral e intelectual. Así, una autoridad completa debería tener no solo el derecho de mandar, sino la capacidad y preparación para hacerlo, además de calidad y ejemplo moral en el ejercicio del poder.*

*Ahora bien, históricamente han preocupado que primen aspectos del mal común en cuanto al ejercicio del poder por parte del Estado, en lo que respecta a la Administración Pública, entendida ésta como el proceder del Estado orientado a lograr el bien común en la sociedad.*

*En ese contexto, como medida de contención, dentro de los delitos que se conocen como de conducta antisocial, existen los que afectan y ofenden a la Administración Pública que el Estado pretende llevar adelante en forma lo más eficiente posible, todo en aras de lograr el bien común. Así, en nuestro Código Penal del Estado se encuentra el Título Undécimo relativo a los “delitos contra la honestidad en el servicio público”.*

*Y es que un proceder deshonesto, del servidor público cuyo servicio va encaminado precisamente a lograr el bien común, viene a afectar substancialmente la esencia del desenvolvimiento social y con ello la dinámica del Estado, por la cual, se pretende la buena marcha de los órganos y servicios que vienen a ser los realizadores de los fines jurídicos y sociales, los que fincan el cimiento de la verdadera Administración Pública.*

*Así, el servicio público, enfocado al mantenimiento del desarrollo de los órganos estatales para la consecución de bien común, requiere estar jurídicamente protegido, sobre todo contra los que formalmente ejercen una función pública pero que materialmente, en un notorio abuso de la confianza en ellos depositada, no sólo denigran negativamente la función encomendada, sino, además, afectan económicamente al Estado, promoviendo por supuesto, el mal común.*

*La convivencia social, por la cual el ciudadano vive en paz, depende de la buena observancia del trabajador estatal, por lo que es importante revisar nuestro marco jurídico para determinar de forma eficaz como perseguir y castigar, a aquel servidor público que, teniendo en su poder en calidad de custodia, bienes en depósito de confianza que se otorgaron, los desvía ilícitamente de su fin, cometiendo el delito conocido como peculado.*

*Así pues, la presente iniciativa de adición pretende aumentar las penas para el delito de peculado, en los casos en que los recursos que fueren desviados indebidamente estuvieren destinados para fines de salud pública, programas de apoyo o inclusión social. Y es que resulta inaceptable el que, siendo los recursos del Estado escasos, sobre todo ante la crisis económica que atravesamos, éstos, en el caso particular de los destinados a cubrir los programas más esenciales para garantizar el derecho humano a la salud, y a una vida digna, sean desviados de sus fines, dañando no solo a la hacienda pública en lo particular, sino a la sociedad en general.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en las que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto adicionar dentro del Código Penal del Estado un párrafo tercero dentro del artículo 453, con el fin de aumentar la penalidad del tipo penal de peculado, en los casos en que éste se cometa sobre recursos destinados para fines de salud pública, programas de apoyo o inclusión social.

La palabra peculado se puede definir como la estafa o fraude del patrimonio público. Este delito consiste en la utilización indebida de recursos pertenecientes al estado por parte de quienes son los responsables de su resguardo y supervisión, a fin de obtener un beneficio propio.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003 y suscrita por México el 11 de diciembre del mismo año, contempla que “*La corrupción tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”*.

*Este fenómeno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.*

Dentro del articulado de la citada convención, considerando el tema que nos ocupa, se manifiesta que:

*Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público.*

***Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado****, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.*

*Artículo 65. Aplicación de la Convención*

*1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.*

*2.* ***Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción.***

Aunado a lo anterior, nuestra legislación penal federal tipifica el delito de peculado en su artículo 223, describiendo las conductas y sanciones a imponer sobre el servidor público que incurra en el supuesto jurídico señalado, el cual se enuncia al tenor literal siguiente:

***Artículo 223****.- Comete el delito de peculado:*

***I.-*** *Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;*

***II.-*** *El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;*

***III.-*** *Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y*

***IV.-*** *Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.*

*Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:*

*Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.*

*Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.*

*Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.*

Por su parte el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, tipifica el mencionado delito en su artículo 453, el cual alude que:

***Artículo 453 (Peculado)***

*Comete el delito de peculado, el servidor público que:*

***I.*** *(Disposición de recursos públicos)*

*Por sí o por interpósita persona, fuera de los casos en que la ley lo permita, disponga con ánimo de apropiación para sí, para otro, o para cualquiera de las personas señaladas en el párrafo segundo del artículo 452 de este código, de dinero, valores o fondos del erario del Estado o de cualquiera de sus municipios.*

***II.*** *(Disposición de bienes públicos)*

*Por sí o por interpósita persona, fuera de los casos en que la ley lo permita, disponga con ánimo de apropiación para sí, para otro, o para cualquiera de las personas señaladas en el párrafo segundo del artículo 452 de este código, de bienes muebles o inmuebles, pertenecientes a cualquier entidad oficial del Estado o de cualquiera de sus municipios.*

*A quien realice cualquiera de las conductas de peculado previstas en este artículo, se le impondrán las penas siguientes:*

***1)*** *(Peculado de cuantía mínima)*

*De cien a doscientos días multa, cuando el monto del peculado no exceda de cien veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito, o no sea posible determinar el valor de las cosas muebles.*

***2)*** *(Peculado de cuantía menor)*

*De uno a tres años de prisión y de doscientos a mil días multa, cuando el monto del peculado exceda de cien, pero no de quinientas veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito.*

***3)*** *(Peculado de cuantía media)*

*De dos a cuatro años de prisión y de quinientos a mil días multa, cuando el monto del peculado exceda de quinientos, pero no de mil veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito.*

***4)*** *(Peculado de cuantía intermedia)*

*De cuatro a ocho años de prisión y de mil a dos mil días multa, cuando el monto del peculado exceda de mil, pero no de diez mil veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito.*

***5)*** *(Peculado de cuantía mayor)*

*De cinco a doce años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, cuando el monto del peculado exceda de diez mil veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito.*

Si bien, de lo anterior se desprende que el delito de peculado se encuentra ampliamente penado, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos con el iniciador en la importancia de sancionar de manera más estricta cuando éste se cometa en el desvío de recursos destinados específicamente para el sector público de salud, así como a cualquier programa de apoyo encaminado a la obtención de una vida digna y a una inclusión social adecuada.

Ello tomando en consideración que, en el caso del derecho a la salud, éste constituye uno de los derechos humanos fundamentales para el adecuado desarrollo de la sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que quienes conformamos la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, conscientes de que el delito de peculado quebranta el patrimonio del Estado y restringe la posibilidad de implementar acciones y recursos a favor del desarrollo social, consideramos que resulta indispensable vigilar y proteger el adecuado cumplimiento del derecho a la salud y a una vida digna, a través de mecanismos de seguridad que permitan disminuir esta problemática.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se **adiciona un tercer párrafo al artículo 453** del Código Penal de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 453 (Peculado)**

…

…

Cuando los recursos materia del peculado estuvieran destinados a fines de salud pública, programas de apoyo o inclusión social, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 del mes de octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 17 de octubre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por nuestra sola condición de personas, tenemos el derecho a una vida digna y rodeada de los elementos necesarios para el desarrollo.*

*Esta prerrogativa debe ser garantizada por la legislación, sin embargo, la obligación de proporcionar dichos elementos también corresponde a aquellas personas entre las cuales existen vínculos de parentesco.*

*En la actualidad la desintegración familiar, ocasiona que sus integrantes enfrenten diversas situaciones con mayor dificultad, esta circunstancia afecta notablemente el desarrollo de las hijas e hijos, los cuales pueden caer en conductas antisociales, así como afectaciones emocionales.*

*Las causas que motivan la desintegración familiar no deben de ser omisas en alguna legislación, ya que en ocasiones sus causas se generan por el incumplimiento de la obligación alimentaria.*

*Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el 67.5% de madres solteras no reciben pensión alimenticia, 3 de 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia; el 91% de los casos los acreedores son los hijos; mientras que el 8.1% son esposas e hijos.*

*La convención sobre los Derechos del Niño garantiza en su artículo 27, fracción IV, las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres. Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres y madres proporcionárselo. Es obligación del Estado adaptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario, mediante el pago de la pensión alimenticia.*

*En este orden de ideas, es oportuno señalar que, sobre el derecho de alimentos, en sesión celebrada el pasado 21 de agosto de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en amparo directo en revisión número 6605/2017, sostuvo lo siguiente:*

*“El derecho a los alimentos tiene origen en el deber de solidaridad que existe entre familiares, razón por la cual dicha obligación suele derivarse del parentesco. En virtud del derecho de alimentos una persona puede exigirle a otra el suministro de los bienes necesarios para su subsistencia que la misma no puede proveerse por cuenta propia, de tal manera que puede afirmarse que la obligación alimentaria es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra.*

*El derecho de alimentos abarca obligaciones que van más allá de la estricta alimentación. Así se ha recogido en los ordenamientos jurídicos y en los diversos tratados doctrinales que sobre la materia existen. De este modo, el derecho de alimentos incluye todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, pero también comprende –en el caso de los menores– la educación e instrucción*

*Asimismo, es doctrina de esta Sala que los elementos de la obligación alimentaria es posible derivarlos del artículo 4º constitucional, ya que cuando en su párrafo octavo determina que los niños y las niñas tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, está delineando los elementos esenciales del derecho de alimentos, que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores.*

*Esta Suprema Corte en diversas resoluciones ha sostenido que los alimentos son materia de orden público e interés social, hasta el punto de conceder la suspensión contra el pago de alimentos, entre otras razones, porque de no otorgarse se impediría al acreedor alimenticio recibir la protección necesaria para su subsistencia.*

*Aunado a lo ya dicho, es importante enfatizar que la obligación de suministrar alimentos no sólo incluye los bienes indispensables para la subsistencia del menor, sino aquellos necesarios para su desarrollo integral armónico, de tal manera que todos estos son aspectos deben ser evaluados por el juzgador al momento de determinar el monto de la cuota alimentaria.*

*Sin menoscabo de lo ya señalado, es claro que el contenido último de la obligación alimentaria es económico pues se traduce en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal: aunque patrimonial es el objeto de la prestación, la obligación se encuentra conexionada con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. En otras palabras, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera.*

*La obligación alimentaria puede consistir en una obligación de dar o de hacer, ya que se cumple mediante la asignación de una pensión o la realización de actividades determinadas con la finalidad de proporcionar una vida digna al acreedor alimentista. En el caso de los menores, también implica el brindarles la educación y capacitación para que posteriormente puedan valerse por sí mismos.*

*Tomando en cuenta lo anterior, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos del acreedor alimentista.*

*Una vez expuestos los rasgos generales del derecho de alimentos, debe señalarse que la obligación de los alimentos se da, en primer lugar, en la relación paterno-materno-filial, de ahí que los alimentos sean normalmente considerados como un derecho de los hijos y como un deber de los padres, independiente de que ostenten o no la patria potestad, y sin que importe si los hijos han nacido fuera o dentro del matrimonio: la obligación de los progenitores de prestar alimentos a sus hijos queda integrada en la relación de patria potestad, pero la fuente no es la patria potestad sino la paternidad y/o maternidad, de tal manera que esa situación comienza para el menor desde el instante que marca el inicio de su vida. Sobre este aspecto conviene precisar que la obligación alimentaria recae no sólo sobre el progenitor que convive con su hijo menor de edad, sino también sobre el progenitor no conviviente, porque –como ya se dijo– el origen es el vínculo paternomaterno-filial.*

*A diferencia de los alimentos entre parientes, la obligación alimentaria de los padres para con los hijos reviste una fisonomía particular y se rige por normas específicas que contemplan su singularidad, como es el que no debe acreditarse la necesidad del alimentado, pues ésta se presume: el menor no necesita probar el elemento de necesidad para pedir alimentos, configurándose así una situación especialísima que marca una nítida diferencia con la obligación entre parientes; es decir, tratándose del derecho de alimentos cuyo titular es un menor de edad no se requiere la conformación del requisito de necesidad, sino que basta la mera existencia del vínculo familiar.*

*Por otra parte, la obligación alimentaria posee características especiales que la diferencian de las obligaciones originadas por la voluntad negocial, lo que hace que las normas que la regulan se aparten de los principios generales del derecho netamente crediticio y se rijan por normas específicas, lo cual debe tenerse siempre presente, especialmente cuando se trata de resolver situaciones que involucren el derecho de alimentos de un menor.*

*La obligación alimentaria ineluctablemente nace desde el momento del nacimiento del menor. Por consiguiente, la obligación alimentaria, en virtud de su causa y naturaleza, así como por ser de orden público, no puede renunciarse ni ser delegada, sino que recae directamente y en primerísimo lugar en los padres: pesa tanto en el padre como en la madre, porque de esa manera se garantiza el máximo desarrollo posible del menor, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención, que reconoce el deber de ambos progenitores en el cuidado y la crianza de los menores de edad, quienes deben asegurarle, dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo.*

*Por último, y no por ello menos importante, la cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose como un derecho humano. Si bien es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4º constitucional y en diversas disposiciones legales: los niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral.*

*En otras palabras, el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que integran el derecho a los alimentos se corresponden con varios de los derechos consagrados en el artículo 4º de la Constitución.*

*Por ello, no es de extrañar que el derecho de alimentos haya sido comprendido en diversos instrumentos internacionales. En concreto, el artículo 18, inciso 1, de la Convención es específico en ordenar a los Estados poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio por el que ambos padres tiene obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, enfatizando que su preocupación fundamental será el interés superior del niño.*

*Sentado lo anterior, esta Primera Sala, empleando como pauta hermenéutica el artículo 4º constitucional, considera que el pago de alimentos retroactivos a favor de una niña, niño o adolescente, a diferencia de la pensión alimenticia, debe fijarse en el juicio de origen en cantidad líquida y no en un porcentaje, para garantizar así de manera más amplia e integral el derecho de alimentos del menor y preservar la certeza y seguridad jurídicas, tanto del deudor como del acreedor alimentario.*

*En este sentido, el juez de la causa debe valorar el material que obra en autos y tomar en cuenta distintas cuestiones que permitan emitir una cantidad adecuada, pues ciertamente la cuantificación exige de ciertas pruebas y análisis de condiciones particulares. Por ello, el juzgador debe atender a los elementos que tradicionalmente han servido como marco de referencia para su determinación, esto es, la capacidad económica del deudor y la necesidad del acreedor alimentista, asumiendo que por tratarse de un menor de edad opera la presunción de necesidad. Esto implica que el Juez, si es preciso, debe recabar de oficio las pruebas necesarias para que la cantidad resulte proporcional.*

*Indubitablemente, en la fijación del monto de la pensión alimenticia debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso.*

*En este sentido cobra vigencia lo señalado por esta Sala, en el sentido de que, para modular el monto retroactivo de la pensión alimenticia, de tal forma que sea razonable y no llegue a ser abusivo, debe considerarse i) si existió o no conocimiento previo de su obligación; y, ii) la buena o mala fe del deudor alimentario.*

*Por lo que se refiere al conocimiento previo, el juzgador debe ponderar si el deudor alimentario tuvo o no conocimiento del embarazo o del nacimiento del menor, ya que el conocimiento del hecho generador es una condición esencial al ponderar el quantum, en tanto que si el padre no tuvo conocimiento de la existencia del menor, y ese desconocimiento no es atribuible a él, no podrá asumirse que quiso incumplir con las obligaciones alimentarias, sino que, al desconocer su existencia, no podía cumplir con una obligación que ignoraba.*

*Dicho de otro modo, el juez debe tomar en cuenta si el embarazo y/o nacimiento del menor no le fueron ocultados, restringiéndose con ello los derechos tanto del menor como del padre y así, una vez delimitado si existió o no conocimiento previo, el juzgador debe considerar la actuación del deudor alimentario en el transcurso del proceso para determinar la filiación y los alimentos, y si ha actuado con buena o mala fe durante la tramitación del proceso; si siempre se ha mostrado coadyuvante y con afán de esclarecer la situación o si, por el contrario, se ha desempeñado negligentemente o se ha*

*Ciertamente, la fijación del monto de los alimentos tomando en cuenta el estándar señalado no implica que se deje de lado la proporcionalidad que rige la materia de alimentos, ni que la obligación deba cumplirse en una sola exhibición. En cada caso el juez deberá valorar las circunstancias particulares y determinar lo conducente, pero lo que no es acorde con el interés superior del menor y con el principio de seguridad jurídica de acreedor y deudor alimentario es que la deuda permanezca indeterminada en su cuantificación”.*

*Una vez puntualizado lo anterior, debe señalarse que actualmente el artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, establece que la obligación de dar alimentos en los juicios de paternidad, debe retrotraerse a la fecha de nacimiento de la niña o niño, si se acredita que el padre tuvo conocimiento del embarazo de la madre y se negó a reconocer a su hijo o hija; o bien, si la madre actuó de mala fe o impidió que el padre reconociera a su hijo o hija, la pensión alimenticia de meses vencidos se pagará a partir de la presentación de la demanda correspondiente; sin establecer la fórmula aritmética que debe emplearse.*

*En por esto que resulta necesario reformar el artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, donde se contemple que la pensión alimenticia que se aplique de manera retroactiva en los juicios de paternidad deberá fijarse en una cantidad líquida, a favor del interés superior del menor; atendiendo además, al criterio adoptado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto regular la determinación retroactiva de pensiones alimenticias en los casos de reconocimiento de paternidad, garantizando con ello el interés superior de la niñez.

La obligación alimentaria, surge como consecuencia de la necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la imposibilidad para procurarse de los medios necesarios para su subsistencia física y su mejor desarrollo humano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece lo siguiente:

***Artículo 4o.*** *El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

*Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.*

***Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.***

*Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.*

*Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.*

*Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.*

*Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.*

*Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.*

***En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.***

***Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.***

*El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.*

*Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.*

*Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.*

En base a ello, podemos acentuar la importancia del derecho que tiene el menor de edad de que el estado vele por su protección y adecuado desarrollo, otorgándole a los padres o tutores la obligación de colmarlos de las atenciones necesarias para garantizar el interés superior de niñas y niños en nuestro país.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989, obliga a los estados firmantes a reforzar el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo, destacando dentro de sus bases el deber que recae sobre los representantes legales del menor en cuanto a su efectiva crianza y desarrollo, manifestándolo en su artículo 18, al tenor literal siguiente:

***Artículo 18***

*1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.*

*2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.*

*3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.*

En este contexto, la promovente de la presente propuesta de reforma, se enfoca en la importancia de que las niñas y niños reciban un apropiado desarrollo, a través de una pensión alimenticia digna, enfatizando en el hecho de que “*en la actualidad la desintegración familiar, ocasiona que sus integrantes enfrenten diversas situaciones con mayor dificultad, esta circunstancia afecta notablemente el desarrollo de las hijas e hijos, los cuales pueden caer en conductas antisociales, así como afectaciones emocionales.*

*Las causas que motivan la desintegración familiar no deben de ser omisas en alguna legislación, ya que en ocasiones sus causas se generan por el incumplimiento de la obligación alimentaria”.*

En este orden de ideas, resulta conveniente señalar que en sesión de 1 de febrero de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 1388/2016, determinándose que el pago retroactivo de los alimentos que se generaron en la niñez, pueden ser solicitados por el acreedor alimentario mayor de edad, mediante los criterios que, entre otros, a continuación se exponen:

*La Sala señaló que, de acuerdo con la doctrina sustentada por el Máximo Tribunal, el derecho a los alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir, siendo así que los alimentos tienen como fundamento la solidaridad que se deben las personas que llevan una vida familiar, ya sea formal o de hecho.*

*Asimismo, se indicó que dado que su cumplimiento resulta ser de interés social y orden público, la procuración de los alimentos trasciende más allá de los integrantes del grupo familiar, por lo que el Estado tiene el deber de vigilar que se procuren los medios de vida suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carece de los mismos y se encuentra en la imposibilidad real de obtenerlos.*

*Del mismo modo, se destacó que el acceso al derecho de los alimentos se rige por distintos principios que deben ponderarse al momento de fijar la pensión alimenticia, tal es el caso del principio de proporcionalidad, el cual refiere que tratándose de los alimentos debe atenderse a la capacidad económica del deudor alimentario y a las necesidades de quien deba recibirlos.*

*La Primera Sala indicó que en tal asunto, se concluyó que si el derecho de los menores a recibir alimentos por parte de sus progenitores surge desde su nacimiento, entonces puede sostenerse que la deuda alimenticia también se origina desde ese momento y, por lo tanto, resulta posible retrotraer la obligación del derecho a los alimentos al momento del nacimiento del menor, siendo así que esta obligación puede ser exigida en cualquier tiempo por el acreedor.*

*La Sala resaltó que la posibilidad de reclamar el pago de los alimentos no se circunscribe a la esfera de la minoría de edad, dado que una persona mayor de edad puede reclamar dicho pago de manera retroactiva, no en cuanto a su derecho a los alimentos en la actualidad, sino respecto de aquellas necesidades alimenticias que se actualizaron y no se subsanaron cuando era menor de edad, esto es, debe distinguirse entre el ámbito de protección del derecho (alimentos por minoría de edad) y el momento en que dicho derecho puede ser exigible (cualquier tiempo).*

*En esa tesitura, la Sala refirió que la obligación alimenticia persiste incluso cuando el acreedor haya adquirido la mayoría de edad, por lo que no existe una razón para negarle la posibilidad de exigir su cumplimiento, de tal manera que asiste la razón al Tribunal Colegiado al reconocer que la acreedora mayor de edad pueda reclamar el pago de las necesidades alimenticias que se originaron durante su infancia.*

*No obstante, la Primera Sala modificó la sentencia recurrida sólo para que se tomaran en cuenta los elementos necesarios a fin de cuantificar el monto de los alimentos retroactivos, dado que el órgano colegiado omitió establecer que para evaluar el quantum indemnizatorio derivado del pago de los alimentos que le correspondían a la actora cuando era menor, se debían tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) si existió o no conocimiento previo del embarazo o del nacimiento de la reclamante; b) la buena o mala fe del deudor alimentario durante el procedimiento; c) considerar que en el progenitor recae la carga de probar la existencia de razones justificadas por las que deba ser relevado de la obligación de contribuir al sostenimiento del menor a partir de la fecha de nacimiento; y d) los demás elementos que tradicionalmente han servido como marco de referencia para su determinación, tal es el caso de la capacidad económica del deudor alimentario.*

En virtud de lo anterior, el artículo 279 de la Ley para la Familia del Estado, establece que en los juicios de paternidad, la pensión alimenticia debe retrotraerse a la fecha de nacimiento de la niña o niño, si se acredita que el padre tuvo conocimiento del embarazo de la madre y se negó a reconocer a su hijo o hija. Si la madre actuó de mala fe o impidió que el padre reconociera a su hijo o hija, la pensión alimenticia de meses vencidos se pagará a partir de la presentación de la demanda correspondiente.

Por consiguiente, la presente iniciativa propone la reforma del artículo anteriormente citado, con el fin de que se puntualice que la pensión alimenticia que se otorgue de manera retroactiva en los juicios de paternidad, deberá fijarse de manera líquida, favoreciendo en interés superior de las niñas y los niños, y atendiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de expediente 6605/2017, manifestado en la presente exposición de motivos.

Es en este contexto, que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y Justicia, coincidimos con la iniciadora en la necesidad imprescindible de salvaguardar el derecho de percibir pensión alimenticia de manera adecuada, considerándose este como de orden público e interés social, procurando en todo momento la protección y el adecuado desarrollo de la niñez y así poder lograr un mejor entorno social en nuestra entidad.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 279.** …

En cualquiera de los casos señalados en el párrafo anterior, la pensión alimenticia que se aplique de manera retroactiva deberá fijarse en una cantidad líquida.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**ÚNICO.-** El presente decreto, entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de noviembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 02 de diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Por todos conocidos, fue el accidente ocurrido en la kermés realizada dentro de una institución de educación de esta localidad, el cual puso en riesgo la vida de la pequeña Marian L.*

*Por lo que vemos necesario llevar a cabo una reforma en la Ley en comento, similar a la que nuestro Grupo Parlamentario en su momento propuso en relación con los cursos o campamentos de verano, ya que ambas iniciativas tienen un objetivo común, la protección al interés superior de los menores de edad, quienes son los protagonistas de estos tristes sucesos.*

*La finalidad de esta reforma es que se determinen los mecanismos para la celebración de las ferias eventuales o kermés, donde se contemple la instalación y funcionamiento de juegos mecánicos, garantizando que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad de la población, ni se ponga en riesgo la integridad de sus participantes y asistentes.*

*Dentro de la Ley de Protección Civil de nuestro Estado, no se contempla la definición de kermés, fiestas populares que incluyen puestos de juegos de destreza, juegos mecánicos, puesto de comida y bebida, sorteos y números artísticos, que se utilizan más comúnmente en las escuelas o en las iglesias, para recaudar fondos a favor de distintas causas benéficas, artísticas o sociales, por lo que como primer punto está su inclusión en la norma, al ser está una actividad que implica un riesgo a las personas que asisten a ella.*

*Si bien, no es una regla general, que en todos estos eventos suceda un incidente como el que mencione anteriormente, sí es vital dado los tiempos en los que vivimos, que se regule en relación a este tema, con el objeto de minimizar cualquier tipo de accidente, así como fomentar la participación activa de las autoridades y la sociedad para deslindar las responsabilidades que se generen.*

*Así mismo incluimos como una facultad de la Subsecretaria de Protección Civil, la elaboración de protocolos de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos dentro de una feria eventual o kermés.*

*Lo anterior independientemente de que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro, y en su caso, aplicar las medidas y/o sanciones, que considere adecuadas, protocolos que deben cumplir los promotores, organizadores o responsables de la realización de dichos eventos, así como los que instalan y ponen en operación los juegos mecánicos.*

*Es indispensable que dichos protocolos especiales contengan indicaciones precisas con el objeto de prevenir o en su caso atender cualquier tipo de eventualidad.*

*Deseamos que dentro estos mecanismos de regulación que se contemplen las medidas de prevención encaminadas a proteger el interés público y evitar daños a las asistentes.*

*Que se contemplen y revisen las condiciones físicas y materiales de los lugares donde se pretendan llevar a cabo dichos eventos.*

*Que se establezcan las condiciones de seguridad pública, tránsito y protección civil, esto en coordinación con las autoridades competentes en la materia.*

*Que se especifiquen los supuestos que generen la suspensión de dichos eventos.*

*Que se presente el documento o bitácora en donde se constate el mantenimiento que se les ha dado a los juegos mecánicos instalados.*

*Asimismo que pueda ser fácilmente visible, las condiciones bajo las cuales se puedan subir los menores de edad a dichos juegos.*

*De igual manera que se pueda contemplar en la medida de las posibilidades, la presentación de una carta responsiva por parte de los organizadores y de quienes instalan los juegos mecánicos, para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir los asistentes y/o los operadores de dichos juegos.*

*Sabemos que en el proceso de elaboración de estos protocolos, surgirán muchos más supuesto, las menciones anteriores son para nosotros el inicio de lo que estamos seguros, será un excelente mecanismo que minimizara los accidentes en las ferias eventuales o kermés.*

*Deseamos que la diversión sana y segura de nuestros pequeños, sea nuestro principal foco de atención, ya que el desarrollo de una niñez feliz, dará como resultado una etapa de adultez más tolerante y abierta a los cambios como los que hoy estamos viviendo.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis del contenido y alcances de la iniciativa y de las consideraciones en las que se motiva, de lo cual se desprende que a través de la misma se pretende establecer en la Ley de Protección Civil “*los mecanismos para la celebración de las ferias eventuales o kermés, donde se contemple la instalación y funcionamiento de juegos mecánicos, garantizando que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad de la población, ni se ponga en riesgo la integridad de sus participantes y asistentes”.*

En este sentido, la promovente observa que *“*[d]*entro de la Ley de Protección Civil de nuestro Estado, no se contempla la definición de kermés, fiestas populares que incluyen puestos de juegos de destreza, juegos mecánicos, puesto de comida y bebida, sorteos y números artísticos, que se utilizan más comúnmente en las escuelas o en las iglesias, para recaudar fondos a favor de distintas causas benéficas, artísticas o sociales, por lo que como primer punto está su inclusión en la norma, al ser ésta una actividad que implica un riesgo a las personas que asisten a ella”.*

Quienes dictaminamos compartimos la preocupación de la promovente por prevenir accidentes y situaciones de riesgo en eventos en donde habitualmente asisten menores de edad, y como los que lamentablemente se han presentado en nuestro país y nuestro Estado.

Así, tanto la omisión en la norma como las situaciones y percances que se han venido presentando alrededor de este tipo de fiestas en las que están presentes juegos mecánicos,hacen indispensable la emisión de medidas legislativas como la presente, que tiene el objeto de “*minimizar cualquier tipo de accidente, así como fomentar la participación activa de las autoridades y la sociedad para deslindar las responsabilidades que se generen”.*

En este sentido, se prevén las modificaciones que a continuación se precisan:

***Artículo 5.-*** *…*

*I a XXXVII. …*

***XXXVII BIS. Kermés:*** *Es una fiesta popular que habitualmente se desarrolla en escuelas y templos o edificios destinados al culto, en el que incluyen puestos de comida y bebida, sorteos o rifas, presentaciones artísticas, juegos de destreza y juegos mecánicos, cuyo objetivo es la recaudación de fondos a favor de distintas causas benéficas.*

***XXXVIII. a la LVII. …***

***Artículo 12.-*** *…*

***I. a XXXVI. …***

***XXXVII.*** *Emitir protocolos especiales de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos dentro de una kermés, independientemente que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro, y en su caso, aplicar las medidas y/o sanciones, que considere adecuadas; y*

***XXXVIII.*** *Las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables.*

***ARTÍCULO 26.- …***

***I a XV…***

***XVI.-*** *Cuando se trate de una kermés, deberán presentar previo a su realización, el protocolo especial de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos, ante las autoridades de protección civil que corresponda, para su revisión y en su caso aprobación, conforme a las atribuciones contempladas en los artículos 12 y 13 de esta Ley. El contenido del protocolo estará previsto en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan*.

Como se observa, la propuesta incluye dentro de las facultades de la Subsecretaría de Protección Civil, la elaboración de protocolos de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos dentro de una feria eventual o kermés, independientemente de que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro.

Una vez efectuado el estudio y análisis de la iniciativa, quienes dictaminamos estimamos conducente promover la emisión de lineamientos de seguridad para los juegos mecánicos fijos e itinerantes, que operen en el Estado, puesto que ello es necesario para garantizar la seguridad de las niñas y los niños coahuilenses.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se adiciona la fracción XXXVII BIS al artículo 5; se adiciona la fracción XXXVII recorriéndose la ulterior del artículo 12 y se adiciona la fracción XVI recorriéndose la ulterior del artículo 26 de la Ley de Protección Civil de Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 5.-** …

**I.** a la **XXXVII. …**

**XXXVII BIS. Kermés:** Es una fiesta popular que habitualmente se desarrolla en escuelas y templos o edificios destinados al culto, en el que incluyen puestos de comida y bebida, sorteos o rifas, presentaciones artísticas, juegos de destreza y juegos mecánicos, cuyo objetivo es la recaudación de fondos a favor de distintas causas benéficas.

**XXXVIII.** a la **LVII. …**

**ARTÍCULO 12.-** …

**I.** a la **XXXVI. …**

**XXXVII.** Emitir protocolos especiales de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos dentro de una kermés, independientemente que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro, y en su caso, aplicar las medidas y/o sanciones, que considere adecuadas; y

**XXXVIII.** Las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 26.- …**

**I.** a la **XV…**

**XVI.** Cuando se trate de una kermés, deberán presentar previo a su realización, el protocolo especial de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos, ante las autoridades de protección civil que corresponda, para su revisión y en su caso aprobación, conforme a las atribuciones contempladas en los artículos 12 y 13 de esta Ley. El contenido del protocolo estará previsto en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan.

**XVII.** Las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil en el Estado deberá emitir dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, el protocolo especial de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por la Presidenta Municipal de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un bien inmueble identificado como fracción del lote número 11 de la manzana 15, con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle del Campestre” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Club de Leones de San Buenaventura A.C.”, con objeto de llevar a cabo la construcción de un Plantel Educativo de Nivel Preescolar.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 08 del mes de mayo del año 2019 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, según consta en acta de Cabildo, de fecha 14 de febrero de 2019, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle del Campestre” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Club de Leones de San Buenaventura A.C.”, con objeto de llevar a cabo la construcción de un Plantel Educativo de Nivel Preescolar.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción del lote número 11 de la manzana 15 con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en la calle Avena entre calles Manuel Acuña y Sabinas en el Fraccionamiento Valle del Campestre, de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 30.42 metros y colinda con Prolongación de la calle Sabinas.

Al Sur: mide 30.50 metros y colinda con Prolongación de la calle Manuel Acuña.

Al Oriente: mide 108.50 metros y colinda con calle Avena.

Al Poniente: mide 109.80 metros y colinda con propiedad privada de la colonia 16 de abril.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de San Buenaventura, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Monclova del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 67372, Libro 674, Sección I de fecha 13 de abril de 2011.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel preescolar. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de San Buenaventura, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para poder cubrir la necesidad de llevar a los habitantes de esa colonia formación educativa con la construcción de un plantel educativo de nivel preescolar, el cual otorgara beneficio social a los habitantes de ese municipio.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle del Campestre” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Club de Leones de San Buenaventura A.C.”.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción del lote número 11 de la manzana 15 con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en la calle Avena entre calles Manuel Acuña y Sabinas en el Fraccionamiento Valle del Campestre, de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 30.42 metros y colinda con Prolongación de la calle Sabinas.

Al Sur: mide 30.50 metros y colinda con Prolongación de la calle Manuel Acuña.

Al Oriente: mide 108.50 metros y colinda con calle Avena.

Al Poniente: mide 109.80 metros y colinda con propiedad privada de la colonia 16 de abril.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de San Buenaventura, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Monclova del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 67372, Libro 674, Sección I de fecha 13 de abril de 2011.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel preescolar. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción de área vial de la Calzada Xochimilco con una superficie de 77.07 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. Daniel Garza González, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 16 del mes de octubre del año 2019 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, según consta en acta de Cabildo, de fecha 14 de noviembre de 2019, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, una fracción de área vial de la Calzada Xochimilco con una superficie de 77.07 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. Daniel Garza González.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de área vial de la Calzada Xochimilco de la colonia Carolinas, de esa ciudad, con una superficie de 77.07 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 13.13 metros y colinda con Lote 92, manzana “N” SMZ. XII.

Al Suroeste: mide 13.13 metros y colinda con Calzada Xochimilco.

Al Sureste: mide 5.87 metros y colinda con fracción de área vial de la Av. Xochimilco.

Al Noroeste: mide 5.87 metros y colinda con calle Pirámides del Sol.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para dar certeza jurídica al predio y regularizar la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, una fracción de área vial de la Calzada Xochimilco con una superficie de 77.07 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. Daniel Garza González.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de área vial de la Calzada Xochimilco de la colonia Carolinas, de esa ciudad, con una superficie de 77.07 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 13.13 metros y colinda con Lote 92, manzana “N” SMZ. XII.

Al Suroeste: mide 13.13 metros y colinda con Calzada Xochimilco.

Al Sureste: mide 5.87 metros y colinda con fracción de área vial de la Av. Xochimilco.

Al Noroeste: mide 5.87 metros y colinda con calle Pirámides del Sol.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para celebrar un contrato de comodato, con vigencia hasta el año 2030, de un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.”, con objeto de llevar a cabo la instalación de un módulo de Servicios Amigables contemplado en el programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 6 del mes de noviembre de 2019, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 301, 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *”Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en certificación del acta de Cabildo de fecha 06 de septiembre de 2019, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, celebrar un contrato de comodato, con vigencia hasta el año 2030, de un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.”.

La superficie antes mencionada se identifica como un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 17.34 metros y colinda con área municipal.

Al Sur: mide 17.34 metros y colinda con calle 22.

Al Oriente: mide 30.00 metros y colinda con área municipal.

Al Poniente: mide 30.00 metros y colinda con área municipal.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 5535, Folio 2468, Libro 56, Sección I, de fecha 09 de agosto de 1993.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la instalación de un módulo de Servicios Amigables contemplado en el programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindido el contrato de comodato y el predio será reintegrado al Municipio.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Saltillo, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia del contrato de comodato de acuerdo a la superficie en mención, logrando así la posibilidad de llevar a cabo los fines de dicho Organismo para ofrecer el programa anual de actividades para la Prevención de embarazo no planeado en los adolescentes, así como trabajar paralelamente con la estrategia estatal y nacional, esto debido al incremento de embarazos en adolescentes en el estado, el cual otorgará un beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para celebrar un contrato de comodato, con vigencia hasta el año 2030, de un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.”.

La superficie antes mencionada se identifica como un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 17.34 metros y colinda con área municipal.

Al Sur: mide 17.34 metros y colinda con calle 22.

Al Oriente: mide 30.00 metros y colinda con área municipal.

Al Poniente: mide 30.00 metros y colinda con área municipal.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 5535, Folio 2468, Libro 56, Sección I, de fecha 09 de agosto de 1993.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la instalación de un módulo de Servicios Amigables contemplado en el programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindido el contrato de comodato y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la celebración del contrato de comodato correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice el contrato de comodato que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de la operación realizada con el contrato de comodato, del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos e impuestos que se ocasionen con motivo de la formalización del Contrato de Comodato, así como de reubicación de servicios públicos serán tramitados y cubiertos por el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en el contrato correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación, con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel primaria.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 13 del mes de noviembre del año 2019 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, según consta en certificación de acta de Cabildo, de fecha 24 de junio de 2019, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación.

El inmueble antes mencionado se identifica como área municipal, con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento Fundadores V Sector, de esta ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 104.09 metros y colinda con calle Río Tula.

Al Sur: mide 90.56 metros y colinda con calle Río Usumacinta.

Al Este: mide 43.00 metros y colinda con calle Juan Navarro.

Al Oeste: mide 45.02 metros y colinda con propiedad privada.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Saltillo, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el Folio Real N° 633423. de fecha 02 de mayo de 2019.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel primaria. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Saltillo, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para poder dar cumplimiento a las funciones de dicha Secretaria, el cual pretenden beneficiar a toda la comunidad, brindando un espacio digno para otorgar educación nivel primaria a los residentes de esa colonia.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación.

El inmueble antes mencionado se identifica como área municipal, con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento Fundadores V Sector, de esta ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 104.09 metros y colinda con calle Río Tula.

Al Sur: mide 90.56 metros y colinda con calle Río Usumacinta.

Al Este: mide 43.00 metros y colinda con calle Juan Navarro.

Al Oeste: mide 45.02 metros y colinda con propiedad privada.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Saltillo, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el Folio Real N° 633423. de fecha 02 de mayo de 2019.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel primaria. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 161.70 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor del C. Antolín Pozos Zaragoza, con objeto de que se destine a uso de casa habitación y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual fue desincorporado con Decreto número 528 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de septiembre de 2016.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso, de fecha 05 de febrero de 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 14 de noviembre de 2019, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 161.70 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor del C. Antolín Pozos Zaragoza, el cual fue desincorporado con Decreto número 528 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de septiembre de 2016.

La superficie antes mencionada se identifica como Lote 4 de la manzana C del Fraccionamiento Lucio Cabañas, con una superficie de 161.70 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 20.00 metros y colinda con Lote 2 y 3.

Al Sur: mide 20.00 metros y colinda con Lote 5.

Al Oriente: mide 8.05 metros y colinda con calle Ricardo Flores Magón.

Al Poniente: mide 8.12 metros y colinda con Lote 19.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 1869, Libro 22-B, Folio 220, Sección I, de fecha 10 de noviembre de 1989 por adquisición. Y bajo la Partida 41367, Libro 414, Sección I, de fecha 27 de abril de 2005 por lotificación.

**TERCERO.** El objeto de esta operación es única y exclusivamente para que se destine a uso de casa habitación y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, logrando así garantizar certeza jurídica al predio y con esto se lleve a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 161.70 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor del C. Antolín Pozos Zaragoza, el cual fue desincorporado con Decreto número 528 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de septiembre de 2016.

La superficie antes mencionada se identifica como Lote 4 de la manzana C del Fraccionamiento Lucio Cabañas, con una superficie de 161.70 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 20.00 metros y colinda con Lote 2 y 3.

Al Sur: mide 20.00 metros y colinda con Lote 5.

Al Oriente: mide 8.05 metros y colinda con calle Ricardo Flores Magón.

Al Poniente: mide 8.12 metros y colinda con Lote 19.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 1869, Libro 22-B, Folio 220, Sección I, de fecha 10 de noviembre de 1989 por adquisición. Y bajo la Partida 41367, Libro 414, Sección I, de fecha 27 de abril de 2005 por lotificación.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El objeto de esta operación es única y exclusivamente para que se destine a uso de casa habitación y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 22,327.706 m2., de la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano” en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor del Organismo Público Descentralizado, Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 21 del mes de mayo del año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.**  Que estaComisión de Finanzas, con fundamento en los artículos 91, 116, 117 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.** Que la iniciativa se sustentó en la siguiente exposición de motivos.

**TERCERO.**  Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es concertar la realización de planes, programas y acciones previstas en el **“PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2023”**, que dentro de su Eje Rector 4, referente al Desarrollo Social Incluyente y Participativo, se encuentra el tema de Salud y Seguridad Social, mediante el cual, se pretende contar con un sistema de salud eficiente que impulse la participación y corresponsabilidad de las y los Coahuilenses, basado en la prevención, equidad y calidad en la atención, teniendo como objetivo, lograr el acceso universal a los servicios de salud de calidad, a través de la mejora de la infraestructura física en salud, mediante acciones focalizadas en base a las necesidades reales de cada Región, optimizando todos los recursos disponibles, y que para lograrlo, se realizarán las gestiones necesarias ante las autoridades federales en materia de salud para el mejoramiento de la infraestructura médica, en beneficio de sus derechohabientes, con la ampliación y en su caso, construcción de nuevas unidades.

Por lo que solicito la autorización del poder legislativo para enajenar a título gratuito a favor del Organismo Público Descentralizado Instituto Mexicano del Seguro Social, el inmueble ubicado en la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, ubicado en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que se construya un Hospital General.

Que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, es propietario y poseedor, con pleno dominio, del inmueble conocido como Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, del cual, se han segregado diversas áreas, siendo objeto del presente Decreto de Donación una extensión de 22,327.706 m² de la Manzana 27, ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, cuya titularidad se acredita con el Primer Testimonio de la Escritura Pública N° 35, de fecha 30 de septiembre de 1998, inscrita en la Oficina de Saltillo, Coahuila, del Registro Público del Estado bajo las Partidas 60968 y 5, Libros 610 y 1, Secciones I S.C. y IX S.C., de fechas 02 y 18 de febrero de 1999, respectivamente.

Conforme a la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila, le corresponde al Titular del Ejecutivo disponer de los bienes del Dominio Público y Privado del Estado.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que se han cubierto los requisitos necesarios para la enajenación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de coadyuvar con las instituciones para abatir el rezago médico, proporcionando los medios necesarios para satisfacer la demanda de servicio médico con la instalación de un Hospital, en este Municipio, el cual se otorgará seguridad y beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, las integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE DESINCORPORE UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 22,327.706 M² DE LA MANZANA 27 DEL FRACCIONAMIENTO “NUEVO CENTRO METROPOLITANO”, EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE LO ENAJENE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que desincorpore, un bien inmueble con una superficie de **22,327.706 m²**,ubicado en la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de **22,327.706 m²**,ubicado en la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a favor del Organismo Público Descentralizado, Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que lo destine a la construcción de un Hospital General y se identifica con el siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | |
| **LADOS** | | **DISTANCIA** | **RUMBO** | **V** | **COORDENADAS** | |
| **EST** | **PV** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **9.478** | **N 23°48’34” W** | **2** | **302903.018** | **2812762.229** |
| **2** | **3** | **262.979** | **S 67°37’44” W** | **3** | **302659.831** | **2812662.138** |
| **3** | **4** | **14.998** | **S 73°11’27” E** | **4** | **302674.188** | **2812657.801** |
| **4** | **5** | **45.04** | **S 40°23’37” E** | **5** | **302703.375** | **2812623.497** |
| **5** | **6** | **40.842** | **S 33°12’55” E** | **6** | **302725.748** | **2812589.328** |
| **6** | **7** | **230.765** | **N 67°37’44” E** | **7** | **302939.164** | **2812677.166** |
| **7** | **8** | **40.115** | **N 22°55’57” W** | **8** | **302923.533** | **2812714.11** |
| **8** | **1** | **42.832** | **N 22°55’57” W** | **1** | **302906.844** | **2812753.557** |
| **SUPERFICIE 22,327.706 M².** | | | | | | | |

Dicho inmueble, es propiedad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, según consta en la Escritura Pública número 35, de fecha 30 de septiembre de 1998, inscrita en la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la ciudad Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO TERCERO. -** Se faculta al Titular del Ejecutivo, para que por sí o por conducto de quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Finanzas, otorgue la Escritura correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO. -** El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en el Título de Propiedad respectivo.

**ARTÍCULO QUINTO. -** Los trámites y gastos que se generen para el proceso de Escrituración y registro de la enajenación autorizada, correrán a cargo del Organismo donatario.

**ARTÍCULO SEXTO. -** El donatario tendrá un plazo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la publicación de este Decreto, para que formalice la escritura en la que deberá expresar en su clausulado esta condición, y concluya la construcción de la Unidad de Medicina Familiar objeto de la donación.

Transcurridos los 24 (veinticuatro) señalados en el párrafo anterior sin que la construcción haya concluido, el donatario podrá solicitar de forma justificada, por única vez, al Ejecutivo del Estado, la ampliación hasta por otros 12 (doce) meses, dando vista de dicha solicitud al Congreso del Estado para su consideración, discusión, y en su caso aprobación.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por **la cual** **se reforma diverso contenido de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza**; cuya propuesta **confirmar la adopción de las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres a través de políticas integrales de protección de los derechos humanos de las mujeres**; suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Y;

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-** Que en Sesión celebrada por el Pleno el día 29 de noviembre del año 2019, se acordó turnar a la Comisión de Igualdad y no Discriminación la iniciativa de decreto con el objetivo ya descrito en el proemio de la presente”.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la mencionada iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen, en fecha 10 de diciembre del mismo año.

**TERCERO.-** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís y las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, se basa en establecer en el ordenamiento  **en cita una mayor certeza y precisión en las medidas, acciones y políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de mujeres y hombres en condiciones de igualdad; promoviendo para ello políticas integrales de derechos humanos para las mujeres.**

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**Exposición de Motivos**

Si bien los derechos humanos son atributos de la persona por su propia naturaleza, las acciones lacerantes y las continuas violaciones a los derechos de las mujeres, ha marcado la necesidad de otorga un carácter también específico al reconocimiento y a la protección de sus derechos.

Esto ha provocado una constante y amplia lucha de organizaciones de mujeres en todo el mundo, entre cuyos logros más importantes se cuenta el haber contribuido a la adopción de instrumentos internacionales e interamericanos que consagran y protegen sus derechos; y haber colocado la igualdad de género como un componente indispensable del trabajo sobre derechos humanos y democracia, en todas sus fases.

La comunidad internacional, en el seno de la Organización de Naciones Unidas de 1979, se adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés y adoptó, su Protocolo Facultativo en 1999, con el fin de fortalecer sus mecanismos de exigibilidad hacia los estados parte, así como asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades.

En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, en 1994 se creó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”, la cual constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas.

En este sentido, también puede citarse como instrumentos que reconocen los principios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres a lo largo de todo el siglo XX y durante los años de este siglo XXI, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1919), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), los Convenios y Recomendaciones de la OIT (convenios N° 100, de 1951, y N° 111, de 1958) que se ocupan de la materia, así como diversas Directivas, Recomendaciones y Decisiones de la Organización de los Estados Americanos y otras muchas iniciativas de diverso signo.

A esta relación de normas, hay que sumar que en el año 2015, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas se transforma en el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030, donde todos los Estados parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidieron que ese objetivo debía tenerse en cuenta y hacerlo efectivo al trabajar cada uno de los objetivos.

América Latina y el Caribe han construido la Estrategia de Montevideo, que contribuye a hacer posible en nuestra región, que la perspectiva de género sea transversalizada en todos los objetivos de desarrollo sostenible, la propuesta de ambos documentos se enmarca en diversos instrumentos del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

Latinoamérica es la región en la que, por primera vez en todo el mundo, se adoptaron leyes para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres en la representación parlamentaria, con la pionera ley de cupos en la Argentina en 1991.

En estos últimos veinte años, hemos sido testigos de la ampliación sostenida de derechos y libertades fundamentales de las mujeres; de la elaboración o modificación de constituciones que garantizan el principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres; de la adopción generalizada de leyes de igualdad y sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencia, incluyendo el feminicidio; de la institucionalización de mecanismos para el adelanto de las mujeres y de sistemas de coordinación interinstitucional para la formulación e implementación de políticas públicas sensibles al género en distintas esferas del desarrollo; de la creciente asignación de recursos públicos para promover la igualdad; y, de manera particular, hemos presenciado la adopción de medidas especiales de carácter temporal, también conocidas como acciones afirmativas o medidas de acción positiva, como las leyes de cuotas, para garantizar una mayor participación política de las mujeres, principalmente en los puestos de representación popular y de toma de decisiones.

En México, desde el 3 de diciembre de 1974 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 4º constitucional, que estableció la igualdad entre mujeres y hombres, un punto de partida que permitió concretar instrumentos normativos fundamentales como la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001 , que dio pie la creación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proequidad) , así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto del 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2007 .

Esta evolución legislativa, la vemos reflejada en el reconocimiento que se plasma al considerar a la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico, que obliga a los poderes públicos a otorgar un trato a las personas, acorde a su igual dignidad y que no puede ser diferenciado en atención a sus características subjetivas, salvo que tengan una relevancia objetiva y razonable que justifique esa diferencia, así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que: “no toda desigualdad de trato es discriminatoria, sino sólo aquella que, afectando a situaciones sustancialmente iguales desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de una justificación objetiva y razonable” .

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha señalado que las y los legisladores deben evitar, dentro del proceso legislativo, que una norma pueda crear una situación de discriminación en los hechos o en el derecho (de jure o de facto).

En este sentido el principio de igualdad entre mujeres y hombres, va tomando una impostergable importancia en el ámbito internacional y nacional, la cual queda puesta de relieve a partir de las normas que se van modificando y creando para incorporar esta igualdad entre el hombre y la mujer en sus contenidos, y es así como se va adoptando la llamada “perspectiva de género”.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, son ahora universalmente reconocidos como los objetivos fundamentales para lograr un desarrollo humano efectivo y sostenible, basado en la noción de la igualdad de oportunidades, esto significa, que la acción pública puede y debe garantizar que las personas tengan acceso a un conjunto equitativo de opciones de vida, sin importar las limitaciones individuales o del contexto, y con ello, la posibilidad de elegir con el mismo poder para dar forma a sus propias vidas y contribuir a sus comunidades.

Con este objetivo y con el fin de evitar actos de discriminación y garantizar el derecho a la igualdad, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, esta tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Dicha norma, cuyos principios rectores son la equidad y la no discriminación, define una serie de medidas concretas para avanzar hacia la construcción de una sociedad igualitaria en nuestro país.

Uno de los elementos fundamentales de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es la creación de una política nacional que ha permitido coordinar las metas, objetivos y acciones de la administración pública federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, entes autónomos, así como de las entidades federativas y municipios, a fin de garantizar a las mujeres el pleno goce de derechos humanos.

En el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 31 de mayo de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual establece, que el hoy Instituto Coahuilense de las Mujeres tiene la atribución de velar por el progreso legislativo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislación local con los estándares internacionales en la materia.

Los avances en materia legislativa son fundamentales para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y para alcanzar la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, pero no garantizan la igualdad sustantiva, la igualdad de facto.

Es por ello, que en el Gobierno del Estado de Coahuila ha sido necesario generar políticas públicas integrales, que respondan a los marcos normativos permitiendo

con esto, el desarrollo de acciones encaminadas a lograr la igualdad en los hechos, teniendo como objetivo primordial reducir las disparidades de género en el acceso de las oportunidades y los servicios económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, así como también, reducir la violencia por motivos de género y mitigar sus efectos nocivos sobre las personas y las comunidades, empoderando económica y socialmente a las mujeres, adolescentes y niñas coahuilenses para aumentar sus capacidades, y promoviendo el ejercicio de los derechos que les permita determinar su plan de vida y potenciar la toma de decisiones.

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, en el eje rector 4. Desarrollo Social Incluyente y Participativo, establece en su Objetivo 4.2 Inclusión e Igualdad de Oportunidades, el cual busca ampliar, mejorar y focalizar los programas de atención para asegurar la inclusión de todos los grupos de población y garantizar el disfrute de sus derechos sociales, comprometiéndose a reforzar las políticas públicas orientadas a lograr el avance de las mujeres en cuanto a su posicionamiento político, económico y social.

Así mismo, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene su bases en este ámbito en el marco el Programa Especial de Igualdad de Género 2017-2023, el cual es el principal instrumento de la planeación estatal en la materia y el cual, contribuye a la generación de políticas públicas equitativas que garanticen el desarrollo pleno de los derechos y capacidades de todas las mujeres y niñas coahuilenses, por lo que en la línea 3.14 sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el Gobierno de Coahuila de Zaragoza deberá fortalecer la política pública en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En el Gobierno del Estado de Coahuila, estamos convencidos y convencidas que todos los esfuerzos deben ir encaminados a la consecución de la igualdad de forma real y efectiva, por lo que la propuesta conmina a todos las instituciones públicas responsables y a toda la sociedad, de forma general e individual, para que se impulse y consolide la igualdad, como principio fundamental en el desarrollo integral de cada persona, todo esto dentro del marco jurídico que nos determina como un estado social y democrático de derecho.

En este tenor, y con el objeto de continuar ejerciendo como fuerza catalizadora para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, contribuyendo a la visión de un mundo en el que todas las personas están igualmente preparadas para asegurar una vida mejor para sí mismos, sus familias y sus comunidades, presentamos esta iniciativa que tiene como objeto confirmar la adopción de las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres a través de políticas integrales de protección de los derechos humanos de las mujeres, dignos por tanto de la máxima protección.

El Gobierno del Estado, preocupado por lograr la materialización de la igualdad de todas las mujeres y niñas, promovió la realización de foros en las distintas regiones del Estado, en los que se trataron aquellos temas que representan una problemática para las mujeres en la vida cotidiana, así como las propuestas para eliminar esta brecha de desigualdad y fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres.

En estos foros se tuvo la participación destacada de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que cuentan con la experiencia en temas de derechos de las mujeres, muchas de ellas por haber vivido circunstancias personales que las han llevado a luchar por ellas mismas y por otras mujeres que se encuentran en su misma situación, estas mujeres representan también, la voz de las mujeres que de alguna manera no han logrado superar los obstáculos que les impiden alcanzar el disfrute pleno de sus derechos humanos, así como también representantes de la administración pública del estado, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Congreso del Estado de Coahuila y del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Es así que durante los foros que se realizaron en diferentes municipios del Estado, como Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Sabinas y Monclova, se presentaron las propuestas y se lograron los acuerdos que ayudaron a la elaboración de esta iniciativa.

La presente iniciativa reafirma el papel vinculatorio que las instituciones públicas tienen para garantizar el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para la igualdad de género, ampliando sus atribuciones en el sistema estatal para favorecer la institucionalización de las buenas prácticas de igualdad en la administración pública estatal y contribuir al adelanto y empoderamiento económico y social de las mujeres, a través de un sistema de información para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.

Se incluye la paridad de género como principio rector y de reconocimiento constitucional que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política, al ser parte esencial de los derechos de las mujeres.

En el ámbito municipal, se incluyen diversas atribuciones necesarias, como lo son: Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres; Fomentar la participación social, política y ciudadana, tanto en las áreas urbanas como en las rurales; Fortalecer la formación, capacitación y certificación de las y los servidores públicos en materia de igualdad de género; Fomentar actividades reglamentarias con perspectiva de género; Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en cargos públicos; así como diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización y programas de desarrollo de acuerdo a la región.

Se establecen diversos objetivos y acciones de la política de igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica, como instituir medidas que fortalezcan el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y de no discriminación respecto de las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, así como el derecho fundamental a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Se crea el capítulo sexto bis, en el que se incluye lo relativo a la igualdad en el acceso a la justicia y la seguridad pública que incluye los objetivos de la política estatal, que garanticen desde un enfoque diferencial, especializado, transformador, de igualdad y no discriminación el acceso a la justicia, así como promover el conocimiento e impulsar, el diseño de políticas públicas que favorezcan la igualdad de hombres y mujeres en este sentido, propiciando la formación en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos en los operadores de los sistemas de justicia, así como el favorecer la instalación de sistemas de información con indicadores desagregados por sexo.

Por último, se crea el capítulo sexto ter, en el que se establecen los objetivos y acciones para promover la igualdad en los pueblos y comunidades indígenas, teniendo como objetivo principal, garantizar los derechos de las mujeres que habitan estas comunidades en relación a su participación activa y directa en la toma de decisiones de la vida comunitaria, la protección de las mujeres titulares de los derechos sobre tenencia de la tierra que se encuentren en otros supuestos que pudieran generar discriminación, promover la igualdad en derechos y obligaciones para la mujer para elegir o ser elegida como autoridad o representante de su comunidad, conforme a sus propias formas de gobierno y garantizar el acceso a bienes y servicios en igualdad de oportunidades.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa, procedimos a realizar las siguientes consideraciones:

I.- La desigualdad entre mujeres y hombres es una realidad ancestral, que ha vulnerado un abanico muy amplio de prerrogativas y condiciones que deberían haber disfrutado las mujeres desde existen los gobiernos modernos y democráticos; incluso desde el nacimiento mismo de lo que conocemos como derechos humanos; sin embargo no fue ni es así; las mujeres han debido transitar un arduo, sufrido y doloroso camino de mil batallas para hacer realidad victorias como el derecho al voto, el derecho a acceder a cargos gubernamentales y la paridad en la conformación de los poderes públicos.

II.- Los pendientes en materia de igualdad son muchos, destacando la igualdad de salarios y prestaciones para trabajos iguales, y el acceso a oportunidades de desarrollo económico y profesional en las mismas condiciones que los hombres, por citar lo menos. Como lo señalan los promoventes, durante los últimos 20 años, hemos presenciado el desarrollo de nuevos tratados, leyes y reformas constitucionales nacionales para erradicar la violencia contra las mujeres, garantizar la paridad en los cargos de elección popular, implementar políticas públicas sensibles al género, y en los años más recientes, el diseño de presupuestos públicos con perspectiva de género.

III.- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene por objeto, de acuerdo a su artículo 1, “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.”

IV.- La Ley General antes mencionada, así como las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres en los estados y en la Ciudad de México, deben ser constantemente revisadas y actualizadas para que respondan en sus contenidos a las necesidades y demandas en la materia, y sean instrumentos que traduzcan los avances, logros y luchas en pro de la igualdad en una realidad.

Es así que las propuestas que los autores hacen en esta iniciativa son muy acertadas, destacando:

1. Se reafirma el papel vinculatorio que las instituciones públicas tienen para garantizar el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para la igualdad de género, ampliando sus atribuciones en el sistema estatal para favorecer la institucionalización de las buenas prácticas de igualdad en la administración pública estatal.
2. Se incorpora la paridad de género como principio rector y de reconocimiento constitucional para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a cargos públicos.
3. Se incorporan atribuciones municipales para diseñar, formular y promover campañas de concientización que conlleven al logro de los objetivos de la igualdad entre mujeres y hombres; así como fomentar la capacitación de los servidores públicos en la materia.
4. Se establecen objetivos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito económico y laboral.
5. Se crea el capítulo sexto bis, en el que se incluye lo relativo a la igualdad en el acceso a la justicia y la seguridad pública que incluye los objetivos de la política estatal, que garanticen desde un enfoque diferencial, especializado, transformador, de igualdad y no discriminación el acceso a la justicia.
6. Y se establecen los objetivos y acciones para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en las comunidades indígenas, para proteger el derecho de las mujeres de dichas comunidades a participar de manera activa en la toma de decisiones de la vida comunitaria, protegiendo, además, sus derechos sobre la tierra; garantizando a la vez que pueden acceder a los cargos de autoridad de sus comunidades en igualdad de circunstancias con respecto a los hombres.

Estas propuestas aportan un significativo avance modernizador al marco legislativo de nuestra entidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres; y nos permiten estar a la vanguardia con las demandas y necesidades de actualización de nuestra Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, las integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

**Proyecto de Decreto**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se reforma el párrafo tercero del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 3, el artículo 4, las fracciones III y IV del artículo 18, las fracciones XII y XIII del artículo 20, las fracciones XII y XIII del artículo 29, las fracciones IX y X del artículo 30; la fracción IV del artículo 40, las fracciones XIII y XIV del artículo 41; se adiciona el párrafo tercero del artículo 3, la fracción XIX del artículo 8, las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 18, las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 20, las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 29, las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 30; las fracciones XV y XVI del artículo 41, el Capítulo Sexto Bis, denominado De la Igualdad en el Acceso a la Justicia con los artículos 50 bis y 50 ter y el Capítulo Sexto Ter, denominado Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Pueblos y Comunidades Indígenas y Rurales, con los artículo 50 quáter y 50 quintus, del Título IV, de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 1. Naturaleza de la ley.**

…

…

Tiene como eje principal, que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana y homogéneos en derechos y deberes, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo, con respeto entre las personas y sus culturas.

**Artículo 3. Ámbito de aplicación.**

...

Las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentren en territorio del Estado de Coahuila, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia y que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, creencia religiosa, opinión, preferencias sexuales o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja.

La aplicación y debida observancia de esta ley será en los ámbitos público y privado y corresponde a la Administración Pública Estatal y Municipal, de conformidad con sus respectivas competencias, debiendo tomar las medidas presupuestales y administrativas que permitan garantizar la igualdad entre mujeres y hombres sin discriminación de cualquier tipo.

**Artículo 4. Principios rectores.**

Son principios rectores de la presente ley, la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación, la igualdad de género, la perspectiva de género, la paridad de género, contenidos en los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables en la materia.

**Artículo 8. Glosario.**

…

**I. a la XVIII.** …

1. **Paridad de género.** Principio que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política, asegurando la participación igualitaria en la definición de candidaturas.

**Artículo 18. Atribuciones de los municipios.**

…

**I. a la II.** …

1. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo que promuevan los contenidos de la presente ley;
2. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales;
3. Fortalecer la prestación de los servicios públicos de la administración municipal, a través de la formación, capacitación y certificación de las y los servidores públicos en materia de igualdad de género;
4. Fomentar actividades reglamentarias con perspectiva de género;
5. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en cargos públicos; y
6. Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta ley le confiere.

**Artículo 20. Lineamientos de la política estatal.**

…

**I. a la XI.** …

1. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres;
2. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud;
3. La transversalización de las políticas públicas;
4. Propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso y aprovechamiento de sus propiedades para su beneficio; y
5. Alcanzar la paridad de mujeres y hombres en el liderazgo y toma de decisiones.

**Artículo 29. Atribuciones del Instituto Coahuilense de las Mujeres en el sistema estatal.**

…

**I. a la XI.** …

1. Establecer medidas para la erradicación del acoso sexual;
2. Favorecer la institucionalización de las buenas prácticas de igualdad en la Administración Pública Estatal;
3. Contribuir al adelanto y empoderamiento económico y social de las mujeres;
4. Contar con un sistema de información para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia en el Estado para lo que podrá:
   1. Solicitar y recibir información sobre medidas y actividades que pongan en marcha los sectores público y privado en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
   2. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad;
   3. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;
   4. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres; y
5. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del sistema estatal y las que determinen las disposiciones aplicables.

**Artículo 30. Integración del sistema estatal.**

…

**I.** **a la** **VIII.** …

**IX.** Dos representantes del sector empresarial;

**X.** Dos representantes de los medios de comunicación;

1. Titular de la Secretaría de Finanzas;
2. Titular de la Secretaría de Economía;
3. Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural;
4. Titular de la Secretaría de Medio Ambiente;
5. Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad;
6. Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
7. Titular de la Secretaría de Cultura;
8. Titular de la Secretaría del Trabajo;
9. Titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial; y
10. Titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

**Artículo 40. Objetivos de la política de igualdad en la vida económica.**

…

**I. a la III.** …

1. Instituir medidas que fortalezcan el acceso de las mujeres al empleo y a la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y de no discriminación respecto de las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, así como el derecho fundamental a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

**Artículo 41. Acciones para la igualdad en la vida económica.**

…

**I. a la XII.** …

1. Difundir, previo consentimiento de las personas físicas o morales, los planes que apliquen estas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
2. Establecer estímulos y certificados de igualdad, los cuales se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la expedición del certificado a empresas se observará lo siguiente:
3. La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación de género y establezca sanciones internas por su incumplimiento.
4. Que en la integración de la plantilla laboral, que ésta se componga de al menos el cuarenta por ciento de personas de un mismo sexo, y que el diez por ciento del total de la plantilla corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos.
5. La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplando desde la publicación de sus vacantes hasta el ingreso del personal.
6. Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la desigualdad en el ámbito laboral;
7. Establecer medidas para asegurar la corresponsabilidad en el trabajo y en la vida familiar y personal de las mujeres y hombres; y
8. Fomentar el acceso al trabajo de las madres jefas de familia.

**CAPÍTULO SEXTO BIS**

**DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA**

**Y A LA SEGURIDAD PÚBLICA**

**Artículo 50 bis. Igualdad en el Acceso a la Justicia.**

Serán objetivos de la política estatal de Igualdad en materia de acceso a la justicia y seguridad pública:

1. Diseñar los lineamientos que garanticen desde un enfoque diferencial, especializado, transformador, de igualdad y no discriminación el acceso a la justicia;
2. Promover el conocimiento y aplicación de la legislación en materia de igualdad y violencia de género; e
3. Impulsar las reformas legislativas y el diseño de políticas públicas que favorezcan la igualdad;

**Artículo 50 ter. Igualdad en las Instituciones de Justicia.**

Para los efectos del artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

1. Asegurar que los operadores del sistema de procuración y administración de justicia en el Estado, cuenten con formación, capacitación y sensibilización en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos;
2. Garantizar el respeto de los derechos humanos de las partes; y
3. Favorecer la instalación de sistemas de información con indicadores desagregados por sexo.

**CAPÍTULO SEXTO TER**

**IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN**

**LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES**

**Artículo 50 quáter. Política de Igualdad de Pueblos y Comunidades Indígenas.**

Serán objetivos de la Política de Igualdad en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas:

1. Garantizar los derechos de las mujeres indígenas para garantizar su participación activa y directa en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria;
2. Proteger a las mujeres titulares de los derechos sobre tenencia de la tierra que sean mayores de 60 años, se encuentren en situación de embarazo o lactantes, tengan alguna discapacidad o incapacidad médica, para que no sean obligadas a realizar faenas en el campo, ni trabajos que excedan su capacidad física o pongan en riesgo su salud e integridad;
3. Eliminar cualquier práctica discriminatoria en contra de las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas que obstaculice la igualdad en el ejercicio de sus derechos y obligaciones para elegir o ser elegida como autoridad o representante, de acuerdo a sus propias formas de gobierno; y
4. Garantizar el acceso a bienes y servicios en igualdad de oportunidades.

**Artículo 50 quintus. Acciones para promover la igualdad en los pueblos y comunidades indígenas.**

Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se promoverán las siguientes acciones:

1. Asegurar que las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas gocen en igualdad, los derechos y oportunidades que la legislación les otorga;
2. Establecer acciones para transversalizar la perspectiva de género en los pueblos y comunidades indígenas, con acciones específicas que sean medibles y evaluables;
3. Vigilar que se garantice la participación e integración de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en la toma de decisiones en el ámbito comunitario, de tal forma que contribuyan a lograr su realización y superación, así como el reconocimiento y respeto a su dignidad humana;
4. Establecer sinergias y estrategias de sororidad entre los grupos feministas y de mujeres organizadas;
5. Establecer metodologías y formas de trabajo participativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;
6. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres para acceso, tenencia y herencia de la tierra;
7. Difundir información en medios de comunicación escritos, electrónicos, radio y televisión sobre igualdad de género en los pueblos y comunidades indígenas;
8. Desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la violencia en todas sus formas y en todos sus espacios, ejercida contra las mujeres indígenas; y
9. Garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras y del derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria.

T R A N S I T O R I O S

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, a los 17 días del mes de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| BLANCA EPPEN CANALES |  |  |  |
| ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES |  |  |  |
| DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por **la cual** **se modifica el contenido de la fracción X del artículo 8 y; así como el contenido de la fracción IV del artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza**; cuya propuesta es  **ampliar los conceptos de violencia mediática, laboral y escolar**; planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel ”. Y;

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-**  Que en Sesión celebrada por el Pleno el día 23 de octubre del año 2019, se acordó turnar a la Comisión de Igualdad y no Discriminación la iniciativa de decreto con el objetivo ya descrito en el proemio de la presente”.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la mencionada iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen

**TERCERO.-** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta del autor se basa en establecer en el ordenamiento  **en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza un concepto más amplio de violencia mediática, así como realizar un ajuste al concepto de violencia laboral y escolar.**

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**Exposición de Motivos**

La violencia de género es un problema generalizado que se encuentra en casi todas las sociedades, y que no es exclusiva de personas con cierto nivel social o de algunos países, adopta muchas formas y aparece en todos los ambientes: como en el trabajo, en el hogar, en la calle y en la comunidad en su conjunto.

Durante mucho tiempo, la violencia comunitaria se manifestaba al discriminar a mujeres y hombres de ciertas ocupaciones, carreras u oficios, por ejemplo, a muchas mujeres no se les permitía estudiar carreras consideradas “de hombres” y viceversa, o bien, como en el caso de la joven, a la que se le niega un servicio a menos que tenga el respaldo de un hombre porque se le considera una persona incapaz de asumir responsabilidades sólo por el hecho de ser mujer, por ello, el Estado a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se compromete a promover una educación donde las niñas y los niños aprendan que sus capacidades no tienen nada que ver con ser mujeres u hombres.

La violencia en los espacios comunitarios es un grave problema, las agresiones pueden ir desde insultos o expresiones ofensivas hasta violaciones, suelen ocurrir en calles, fiestas, cines, centros comerciales, etc…; Éstas son algunas de las múltiples manifestaciones de violencia contra la mujer por el sólo hecho de serlo.

El artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia comunitaria como “los actos individuales o colectivos que trasgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, marginación o exclusión en el ámbito público”

Este problema, si bien, es complejo, puede tener solución, el artículo 17 de la ley antes mencionada, dice que el “Estado debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad a través de: La reeducación libre de estereotipos y la información alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria, el diseño de un sistema del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, y el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias”.

Es innegable que las mujeres viven bajo el riesgo diario de recibir agresiones físicas, psicológicas y sexuales, en forma que no tienen paralelo para los hombres: la violencia o la amenaza de violencia limita las opciones de que disponen las mujeres en todas las esferas de la vida, en el hogar, en la escuela, en el lugar de trabajo y en la mayoría de los espacios comunitarios.

Todas estas formas de violencia impiden la cabal participación de la mujer en la sociedad.

Históricamente, los espacios de las mujeres han sido equiparados con los privados, y los públicos o comunitarios prácticamente exclusivos para los hombres, en este sentido, hay una oposición simbólica entre la casa y el resto del mundo: lo femenino es la esfera opuesta a lo masculino, por tanto, la reciente o posible incorporación de ellas a este espacio simbólico de por si masculino, podría ser considerada como una subversión y, como consecuencia, detonar violencia.

La violencia que se ejerce en los espacios públicos sobre las mujeres adquiere expresiones similares a la de aquella que se comete puertas adentro, pues además e avasallar el cuerpo y la mente de la mujer, se inscribe y define en estereotipos de género, discriminación hacia las mujeres, cuenta con un alto grado de tolerancia social y se termina culpabilizando a las víctimas

Es necesario trabajar desde una perspectiva de género en todos los ámbitos de actuación, para convertir en visibles todas las formas de violencia, en general, y en particular aquellas que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, pensando en cómo las afecta y, por lo tanto, también a toda la sociedad. La violencia contra las mujeres, en sus variantes física, emocional, económica o sexual puede tener lugar dentro de la familia o unidad doméstica, pero también en la comunidad, y puede ser perpetrada por cualquier persona.

En Coahuila, 24.7% de las mujeres mayores de 14 años han sido víctimas de agresión en espacios públicos; de las cuales, 90.1% sufrieron intimidación, 26.3 fueron abusadas sexualmente, y 9.2% fueron agredidas físicamente. También en lugares públicos la violencia infligida contra las mujeres puede llegar a alcanzar niveles extremos, tal es el caso de las violaciones y el sometimiento con el fin de obligarlas a ejercer la prostitución, la información derivada de la ENDIREH 2011 indica que en el país 357,121 mujeres fueron forzadas a prostituirse o declararon haber sido víctimas de este hecho; en la entidad, 5850 mujeres declararon haber sufrido estas agresiones.

Otro espacio público en donde se focaliza la violencia contra la mujer son los centros educativos, en el ámbito escolar la presencia de este fenómeno alcanza altas cuotas; esta modalidad de maltrato, sea entre los propios alumnos o de autoridades y maestros hacia los educandos, a fuerza de repetirse ha llegado a volverse común, y a tolerarse como parte de la socialización de niños y jóvenes, al convertirse en un ejercicio sistemático de agresión por parte de los más fuertes sobre los más débiles. La violencia escolar se refiere a las situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual, experimentadas en los planteles educativos a donde han asistido a lo largo de su vida las mujeres entrevistadas, así como en las interacciones y relaciones generadas en este ambiente.

En el espacio educativo la información de la encuesta revela que en ámbito nacional, de quienes padecieron esta situación en la escuela, 70.6% han vivido humillaciones, o han sido denigradas e ignoradas, y 43.7% sufrieron agresiones y daño físico, o propuestas de tipo sexual a cambio de calificaciones, o fueron objeto de contactos obscenos u obligadas a tener relaciones sexuales. En Coahuila de Zaragoza, 64.0% han sido humilladas, denigradas o ignoradas; y, 45.3% han padecido agresiones físicas o situaciones de carácter sexual.

Por otra parte, producto del estudio se sabe que en el país, 43.5% de las mujeres víctimas de violencia en la escuela en el ámbito nacional, señalan a los maestros o a otras autoridades del centro educativo como responsables, y en 65.1% de los casos son los propios compañeros quienes tienen actitudes hostiles hacia ellas.

En la entidad, 40.2 %de las mujeres declararon haber sufrido agresiones por parte de las autoridades escolares, y 68.8% fueron agredidas por compañeros. Entre las diversas formas de menoscabo a la dignidad de la mujer cometida en el país, la practicada de manera frecuente, y en la mayoría de las ocasiones, impunemente, se manifiesta en el contexto de las relaciones de trabajo, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas.

La violencia laboral en sus diferentes formas tiene efectos graves sobre su salud física y mental, productividad y rendimiento. Esta modalidad de violencia generadora de condiciones negativas, consiste en actitudes y comportamientos claramente agresivos, hostiles, humillantes o discriminatorios hacia las mujeres insertas en el medio laboral; perpetrados por jefes inmediatos, superiores jerárquicos, compañeros de trabajo y, en ocasiones, hasta por personal que labora bajo el mando de ellas mismas, a este tipo de maltrato se suman también los de connotación sexual.

En esta dinámica laboral, es importante destacar cuando los agresores tienen una posición privilegiada de poder formal o autoridad, situación ventajosa utilizada para presionar a las mujeres, sobre todo a aquellas más vulnerables dada su calidad de jefas de familia, y que, por lo tanto, cargan con la responsabilidad de mantenerla, factor aprovechado por estos victimarios.

Los dos tipos de violencia laboral destacados en la encuesta son el acoso (relacionado con cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual, tanto física como verbal, no deseada por quien la sufre, y da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y un condicionamiento de las oportunidades de empleo de la mujer perseguida), y la discriminación, que implica menores opciones, promociones y prestaciones; En el país, 22.6% de aquellas con 15 y más años de edad ocupadas, en algún momento durante el año anterior a la entrevista han sufrido violencia de un colega o de un superior en su ámbito laboral, y de ellas, 91.3% han sido víctimas de discriminación y 19.3% de acoso. Por su parte, en el estado, 26.5% de las mujeres ocupadas mayores de 14 años, padecieron violencia por parte de un superior o compañeros en su lugar de trabajo, en el año anterior a la entrevista; de las cuales, 94.6% sufrieron discriminación y 10.6% de acoso laboral.

Dichas reformas a los apartados Decimo (X) y Cuarto (IV), de los artículos 8° y 9°, respectivamente, de la “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Coahuila de Zaragoza” se basan en la demanda de las mujeres al sentirse objetizadas y utilizadas bajo un contexto sexual, al bailar y exhibirse al público como medio de publicidad para “atraer clientes”, “aumentar ganancias” e intentar “posicionarse en un mercado especifico.”

Estas reformas a los apartados antes mencionados, surgen con la finalidad de prohibir en el estado de Coahuila de Zaragoza, las llamadas “edecanes”. Esto sin duda va a generar, más allá de problemáticas, que estos establecimientos y/o negocios empiecen a invertir en publicidad de calidad, publicidad mejor y más creativa y más inversión en servicios de publicidad y marketing, además de buscar nuevas estrategias de ventas, detonando actividades económicas y académicas especificas en temas y estrategias de publicidad y marketing.

Por último, comparto esta reflexión con usted, dejando un poco el formalismo de la petición, siendo sinceros, cuantas personas se detienen en algún establecimiento y/o comercio a comprar “lo que sea” solo porque vio a alguna de estas mujeres bailando, con vestimentas que probablemente están siendo forzadas a utilizarlo, muchas veces sin protección a la radiación ultravioleta, etc…, la respuesta es ninguna, al contrario, se torna en un tipo de acoso y/u hostigamiento al conductores verlas y pitarles o gritarles cosas, o detenerse a solo tomarse una foto y ni siquiera adquirir nada en estos establecimientos y/o negocios.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa, se aprecia que las reformas que propone son las siguientes:

*Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres son:*

*I…, II…, III…, IV…, V…, VI…, VII…, VIII…, IX…*

*X. Violencia Mediática o Publicitaria. Aquella difusión, publicación de imágenes estereotipadas, mensajes a través de anuncios publicitarios* ***y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios y/o servicios que estén*** *en exhibición al público en general, que de manera directa o indirectamente promueven la explotación de la mujer en imágenes y/o acciones sexistas que injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen y atenten contra la dignidad humana, legitimando la desigualdad de trato o construya parámetros sociales generadores de violencia contra la mujer.*

*2.- Artículo 9. Las modalidades de violencia son:*

*I…, II…, III…*

*IV. Violencia en el ámbito laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, escolar o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad* ***y/o dignidad****. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso y hostigamiento laboral* ***y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios y/o servicios.***

La propuesta contiene algunos problemas de técnica legislativa, de concordancia de contenidos, y de armonía con los contenidos actuales (vigentes) de ambas fracciones a reformar; estas son nuestras consideraciones:

Las columnas siguientes comparan los contenidos de la ley vigente y la reforma propuesta. No leeremos el contenido de las columnas, ya que al final se detalla el problema:

LAMVLVC Vigente Propuesta

|  |  |
| --- | --- |
| Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  X. Violencia Mediática o Publicitaria: Aquella difusión o publicación de imágenes estereotipadas y mensajes a través de anuncios publicitarios en exhibición al público en general, que de manera directa o indirectamente promueven la explotación de la mujer en imágenes sexistas que injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen y atenten contra la dignidad humana, legitimando la desigualdad de trato o construya parámetros sociales generadores de violencia contra la mujer. | Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  I…, II…, III…, IV…, V…, VI…, VII…, VIII…, IX…  X. Violencia Mediática o Publicitaria. Aquella difusión, publicación de imágenes estereotipadas, mensajes a través de anuncios publicitarios **y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios y/o servicios que estén** en exhibición al público en general, que de manera directa o indirectamente promueven la explotación de la mujer en imágenes  **y/o acciones sexistas** que injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen y atenten contra la dignidad humana, legitimando la desigualdad de trato o construya parámetros sociales generadores de violencia contra la mujer. |

El autor basa su reforma en insertar las frases “y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios o servicios.” “Y/o acciones sexistas”.

Si analizamos la redacción actual de esta fracción, la reforma propuesta es totalmente innecesaria, ya que se contempla la fracción vigente “anuncios publicitarios en exhibición al público en general, que de manera directa o indirectamente promueven la explotación de la mujer en imágenes sexistas”

Así como el respeto a su dignidad. Por lo que la adición es redundante e innecesaria, y el contenido actual colma en sí mismo la pretensión del autor de la iniciativa.

La fracción IV del artículo 9, refiere:

*IV. Violencia en el ámbito laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, escolar o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.*

*Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso laboral o el hostigamiento laboral….*

Mientras que el promovente plantea la siguiente reforma:

*Artículo 9. Las modalidades de violencia son:*

*I…, II…, III…*

*IV. Violencia en el ámbito laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, escolar o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad* ***y/o dignidad.*** *Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso y hostigamiento laboral* ***y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios y/o servicios.***

Esta fracción se refiere a la violencia que comete un patrón o compañero de trabajo hacia la víctima, que de “origen” ya trabaja ahí. Ya es empleada o trabajadora. Y sufre acciones que atentan contra su dignidad.

En cambio, el planteamiento de usar las mujeres para promover negocios, se refiere en todo caso, atendiendo a la temporalidad, a contratos que aún no se realizan, y donde la potencial víctima tiene todo el derecho y libertad de decidir si lo hace o no. Es decir, hablamos de supuestos que aún no se cumplen, pero que pueden realizarse en el futuro. Mientras que la fracción IV se refiere más bien a relaciones laborales estables y continúas.

Y el mismo caso es para la violencia escolar, presupone una relación previa, actual y de trato reiterado en el tiempo entre el docente o compañero de escuela y la víctima.

Por técnica legislativa, al realizar reformas a una ley son diversos los aspectos que se debe considerar: constitucionalidad, viabilidad, necesidad de la reforma propuesta, etc. Uno de los aspectos más importantes es que no se trate de una adición redundante, que no haga más que reiterar una situación que ya está regulada en la ley.

Otro aspecto es el respeto a la estructura del ordenamiento, es decir, respetar sus componentes y partes que la integran, para que las adiciones o reformas se realicen en los capítulos y artículos correctos.

Es así que la iniciativa analizada presenta los problemas que ya hemos detallado oportunamente.

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, las integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

Dictamen

Único: Se considera inviable y, por ende, no aprobada la iniciativa analizada en el presente dictamen.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, a los 17 días del mes de Junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| BLANCA EPPEN CANALES |  |  |  |
| ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES |  |  |  |
| DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Segundo Párrafo del Artículo 107, el Primer Párrafo del Artículo 111 y se adicionan los Artículos 113 BIS 4 y 133 BIS 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 18 de marzo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, mediante la cual propone reformar el Segundo Párrafo del Artículo 107, el Primer Párrafo del Artículo 111 y se adicionan los Artículos 113 BIS 4 y 133 BIS 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir en las comisiones permanentes y obligatorias, la de Salud Pública y la de Seguridad Pública y Tránsito.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto en la que se propone reformar el Segundo Párrafo del Artículo 107, el Primer Párrafo del Artículo 111 y se adicionan los Artículos 113 BIS 4 y 133 BIS 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir en las comisiones permanentes y obligatorias, la de Salud Pública y la de Seguridad Pública y Tránsito, se basa en la siguiente

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, al hablar que el estado adoptará para su régimen interior, una forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, marca la pauta para que a su vez en su división territorial y su organización política y administrativa, rija el régimen de un municipio libre, conforme a las bases que estable dicho artículo, que de manera breve enuncio a continuación:*

1. *En la fracción primera se menciona que el Ayuntamiento es quien gobierna el municipio y los representantes son elegidos mediante elecciones populares directas;*
2. *La fracción segunda menciona que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio conforme a la ley, establece las bases para que sea el municipio con aprobación de ese Congreso, el que emita la normatividad que será su marco legal para desarrollar sus funciones;*
3. *En la fracción tercera se enumeran las funciones y los servicios públicos que le corresponden;*
4. *La fracción cuarta reitera la administración libre de la hacienda y su composición;*
5. *En la fracción quinta se menciona las facultades con que cuenta el municipio en relación con el desarrollo urbano municipal;*
6. *La fracción sexta trata del desarrollo de los centros urbanos que involucran a varios municipios de distintas entidades federativas;*
7. *La fracción séptima cita que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal, y por último la*
8. *Fracción octava menciona el principio de representación proporcional en las elecciones de los ayuntamientos y alude el artículo 123 de este mismo ordenamientos, sobre el cual se fundamenta la relación de trabajo entre los municipios y sus trabajadores.*

*Bajo este marco general, nuestra Constitución Política del Estado integra el Título Sexto, el Municipio Libre, el cual cuenta con 2 Capítulos, Primero Bases Fundamentales, Segundo Gobierno Municipal, este segundo cuenta con 3 secciones: La división territorial y El Ayuntamiento y el Consejo Municipal, y La Competencia Municipal; esta última sección se subdivide en 3 apartados: Bases generales, La Hacienda Municipal y Las Funciones y Servicios Municipales.*

*En este orden de normas, se integra a este marco normativo de referencia, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que tiene como objeto normar el gobierno, la estructura orgánica y el funcionamiento de los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de lo dispuesto en los dos ordenamientos antes citados.*

*Mi exposición de motivos inicia de esta manera para conceptualizar el objeto de nuestra iniciativa, ya que es trascendental recordarlo y tenerlo presente para apoyar el análisis del proyecto de decreto aquí expongo.*

*Como vemos al municipio libre, por mandato de ley, se le respeta su libertad y autonomía para gobernar en su circunscripción territorial, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, administran su hacienda pública, eligen a sus autoridades, emiten su normatividad en congruencia con las esferas jurídicas a nivel federal y estatal.*

*Asimismo la administración pública municipal, tiende a satisfacer las necesidades de su comunidad, a través de la prestación de bienes y servicios, garantizando con ello los derechos de su población.*

*El éxito de una buena administración municipal, se logra gracias a la credibilidad en las autoridades municipales, a la participación de la sociedad en la planeación y ejecución de obras, así como en la calidad en la prestación de los servicios públicos.*

*Quien lleva a cabo la administración municipal en los municipios es el ayuntamiento; “Ayuntamiento” según su significado etimológico que viene del latín “adiunc-tum” supino de adjungere, juntar, es la unión de dos o más individuos para formar un grupo, el Ayuntamiento se integra por tres actores fundamentales, un presidente municipal, los regidores y el síndico, estos dos últimos variaran en su número dependiendo de los habitantes del municipio y de lo que determine la ley, cuidando en todo momento el cumplimiento al principio de paridad.*

*El ayuntamiento por lo tanto, es un órgano colegiado, que forman el Pleno del Honorable Cabildo, el cual sesiona periódicamente, en estas sesiones se delibera sobre las propuestas que presenta el Presidente Municipal, los regidores y/o los síndicos, en relación con temas trascendentes que impactaran directamente a la comunidad.*

*Si bien es cierto, que la gran mayoría de los asuntos presentados en las sesiones del Cabildo son resultas en ese mismo acto, existen alguno asuntos que por su naturaleza son turnados a las comisiones para su análisis.*

*Ahora bien, omito mencionar por razones obvias las facultades con que cuenta el Presidente Municipal y de los síndicos, ya que nuestro tema principal en esta iniciativa es la función que desarrollan los regidores dentro de la administración pública municipal a través de las comisiones de las cuales forman parte.*

*Los regidores son una figura que permite un mayor acercamiento del Gobierno Municipal con la comunidad, donde se abren importantes espacios para que los ciudadanos acuden a presentar su problemática, y con ello los regidores de manera individual o a través de una comisión presenten una estrategia, un plan de trabajo o un programa para dar solución a la problemática planteada, convirtiéndose así en la voz de nuestra comunidad.*

*Con fundamento en el artículo 34 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los regidores son considerados miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio, es decir como persona individual no está dotado con facultades decisorias dentro del Gobierno Municipal, pero cuando es miembro del Cabildo, su voz y voto cuenta para tomar decisiones trascendentales.*

*Dicho precepto legal establece que en lo individual son consejeros y auxiliares del presidente municipal y deben cumplir con las comisiones que le asigne el Ayuntamiento.*

*Sumando a lo anterior, una más de las maneras activas de los regidores de participar dentro del Gobierno Municipal es a través de las comisiones, que tienen como objetivo conformar grupos de trabajo que puedan analizar más a fondo los temas fundamentales para el Gobierno Municipal, y que una vez dictaminados por sus miembros se llevan ante el Pleno H. Cabildo para su consideración y aprobación, si así se amerita.*

*Dentro del artículo 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se establecen como de forzosa conformación las siguientes comisiones:*

1. *De Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;*
2. *De Planeación, Urbanismo y Obras Públicas;*
3. *De Transparencia y Acceso a la Información;*
4. *De Reglamentación, y*
5. *De Igualdad de Género.*

*Por lo que dilucidamos con todo lo anteriormente expuesto que es vital incluir dentro de estas comisiones, que son de forzosa conformación, la Comisión de Salud Pública y a la Comisión de Seguridad y Tránsito, así mismo pretendemos que se les dé carácter de permanentes y obligatorias, como se menciona en el artículo 111 del mismo ordenamiento legal citado.*

*La comisión de Salud Pública, habla por sí sola, siendo un tema fundamental para el mejor desarrollo de una comunidad.*

*Esta comisión tendría dentro de sus objetivos, mejorar las condiciones de salud de la comunidad, por ejemplo a través de la colaboración con las autoridades federales y estatales, así como con el área administrativa municipal encargada del tema salud, desarrollando políticas públicas favorables para la población; impulsar las campañas para la prevención y tratamiento de adicciones; supervisar la prestación de los servicios médicos para los trabajadores del ayuntamiento; y vigilar la protección y el trato digno que deben tener en los centros antirrábicos hacía los animales, entre otras obligaciones y atribuciones que le confiera el Ayuntamiento.*

*En cuanto a la formación de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, esta tendría entre otros objetivos, los siguientes: contribuir al mejor desempeño de las acciones que en este tema realiza la dependencia municipal competente; elaborar propuestas de programas o planes que generen y preserven el orden público y la paz social, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía; proponer estrategias para la máxima difusión de las campañas de prevención de delitos, así como la difusión de los operativos de tránsito y prevención de accidentes viales; emitir opinión en relación con los programas de seguridad pública y tránsito y proponer acciones de prevención de la violencia con perspectiva de género para la elaboración de políticas públicas municipales.*

*En ambos casos, los objetivos son solo enunciativos, no limitativos, lo que queremos es marcar la pauta y las bases para que Ayuntamiento, una vez que vaya observando la utilidad de estas Comisiones, dentro de su marco normativo interior, puedan ampliar las funciones y atribuciones de dichas comisiones.*

*Tanto la salud, como la seguridad pública, son temas de gran relevancias dentro de la administración pública, construyamos municipios más saludables y más seguros, involucrando de manera más activa a los ediles que forman parte de nuestros Ayuntamientos.”*

**TERCERO.-** En efecto el Ayuntamiento ejerce su trabajo gubernativo mediante las Comisiones las cuales son órganos de atención, dictamen y representación del ayuntamiento en las diferentes ramas del gobierno y la administración municipal. En algunas legislaciones de nuestro país se definen como órganos que se integran por Ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como de las dependencias.

Algunas de sus características son que no cuentan con facultades ejecutivas, son órganos de seguimiento, vigilancia y control, actúan como instancias de dictamen de diversos asuntos, representan el interés del ayuntamiento en una materia, garantizan que las decisiones del cabildo se cumplan, tienen atribuciones para la propuesta y resolución de asuntos, tanto el Presidente Municipal, como los síndicos y regidores pueden formar parte de más de una comisión

Las comisiones tienen por objeto distribuir entre los regidores la vigilancia del buen funcionamiento de la administración municipal. Y en efecto dentro de las comisiones de forzosa conformación se deben de encontrar las relativas a Seguridad Pública y la de Salud, ya que coincidimos con la promovente en que son temas de suma importancia que deben encontrarse inmersos dentro de las Comisiones Municipales. Reconocemos que en muchos de los Ayuntamientos estas comisiones ya se encuentran operando, sin embargo, consideramos necesario que se encuentren contemplado en el Código Municipal para que esto permee en todas las administraciones municipales.

Es por ello que la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, está de acuerdo con la Iniciativa planteada toda vez que nos queda claro que actualmente la sociedad requiere de Gobiernos Municipales fuertes en lo institucional, y efectivos en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias sociales que traen los nuevos tiempos. Requiere que se realicen mejores prácticas, que se busquen nuevas formas de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la solución de los problemas del entorno municipal.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**UNICO.-** Se reforma el segundo párrafo del artículo 107, primer párrafo del artículo 111 y se adiciona los artículos 113 bis 4 y 113 bis 5, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 107.** …

Las comisiones a las que refieren los artículos 112, 113, 113 BIS, 113 BIS-1, 113 BIS-2, 113 BIS-4 y 113 BIS-5 serán de forzosa conformación por los ayuntamientos, justificándose mediante la importancia que dichas ramas requieren. De igual manera, será libertad de cada ayuntamiento la integración de comisiones bajo libre criterio.

**ARTÍCULO 111.** Las comisiones podrán ser individuales o colegiadas y permanentes o transitorias, y su materia y funciones serán establecidas en el Reglamento Interior o por acuerdo del Ayuntamiento, siempre de conformidad con las necesidades municipales, teniendo el carácter de permanentes y obligatorias las de hacienda, patrimonio y cuenta pública; la de planeación, urbanismo y obras públicas; la de transparencia y acceso a la información, la de reglamentación, la de Igualdad de Género; la de Ciencia, Tecnología e Innovación; la de Salud Pública y la de Seguridad Pública y Tránsito.

...

**ARTÍCULO 113 BIS-4.** La Comisión de Salud Pública tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

1. Colaborar con las autoridades del sector salud a nivel federal y estatal, de manera conjunta con la unidad administrativa municipal de salud, con el objetivo de desarrollar las políticas públicas en materia de salud;
2. Contribuir al mejor desempeño de las funciones de la unidad administrativa municipal del sector salud, proponiendo, analizando y dictaminando el plan de acción propuesto para mejorar la salud pública en el municipio;
3. Plantear estrategias para impulsar las campañas para la prevención y tratamiento de las adicciones;
4. Supervisión de la prestación de los servicios médicos para los trabajadores del ayuntamiento;
5. Vigilar la protección y el trato digno que deben tener en los centros antirrábicos hacía los animales, y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura cívica de protección, responsabilidad y trato digno a los animales, y
6. Las demás que le señale el Ayuntamiento, este código u otras disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 113 BIS-5.** La Comisión de Seguridad Pública y Tránsito tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

1. Contribuir al mejor desempeño de las acciones que llevan a cabo las dependencias municipales con funciones de seguridad pública y tránsito;
2. Elaborar propuestas de programas o planes que generen y preserven el orden público y la paz social, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía;
3. Proponer estrategias para la máxima difusión de las campañas de prevención de delitos, así como la difusión de los operativos de tránsito y prevención de accidentes viales;
4. Emitir opinión en relación con los programas de seguridad pública y tránsito;
5. Proponer acciones de prevención de la violencia con perspectiva de género para la elaboración de políticas públicas municipales,
6. Las demás que le señale el Ayuntamiento, este código u otras disposiciones aplicables.

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN(SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el contenido de los párrafos primero y tercero del artículo 208 del Código Municipal para Estado de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 6 de mayo de año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la **Diputada Blanca Eppen Canales**,conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, mediante la cual propone reformar el primer y tercer párrafo del Artículo 208 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación a Contralor Municipal, como primer frente para prevenir la corrupción en la administración municipal, debe tener un papel más claro y preciso, y que sea parte de su deber informar al cabildo de manera precisa sobre las adquisiciones realizadas por el municipio.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto en la que se propone reformar el primer y tercer párrafo del Artículo 208 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación al Contralor Municipal, como primer frente para prevenir la corrupción en la administración municipal, debe tener un papel más claro y preciso, y que sea parte de su deber informar al cabildo de manera precisa sobre las adquisiciones realizadas por el municipio, se basa en la siguiente

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“En fecha 04 de febrero del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, una reforma al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, producto de una iniciativa de nuestro compañero diputado, Gerardo Abraham Aguado Gómez, que se refiere a establecer atribuciones concretas para los contralores municipales en diversos temas; concretamente, las adecuaciones fueron las siguientes:*

*ARTÍCULO 132…*

*El titular de la contraloría municipal deberá rendir un informe cada cuatro meses de su trabajo al Cabildo, conforme a sus atribuciones.*

*ARTÍCULO 133. Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal:*

*…*

*XV. Verificar que los Servidores Públicos Municipales cumplan con su obligación de presentar la declaración de situación patrimonial; así como el manifiesto de no conflicto de intereses de los proveedores y contratistas del municipio, verificando su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes en los términos de las leyes aplicables.*

*Vigilando también que los servidores públicos municipales con cargos directivos, así como los integrantes del Cabildo no intervengan o participen indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios.*

*Estas adiciones representaron un gran avance en el combate a la corrupción, gracias al apoyo de todas y todos los diputados de esta legislatura, quienes también han realizado muy importantes aportaciones por medio de reformas a diversos ordenamientos en materia de prevención y combate a la corrupción gubernamental.*

*Al revisar las atribuciones del Contralor Municipal, plasmadas en el artículo 133, podemos apreciar que solo en dos fracciones se hace alusión clara al régimen de adquisiciones del municipio, y son las siguientes:*

*X. Intervenir, para efectos de verificación y control, en los contratos que emanen de la celebración de convocatorias y licitaciones, y vigilar el cumplimiento de dichos contratos.*

*XI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la Administración Pública Municipal.*

*Derivado de este contenido, deseamos concatenar el mismo con lo dispuesto en el artículo 208 de este ordenamiento (Código Municipal):*

*ARTÍCULO 208. En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.*

*Las adquisiciones que realice el municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.*

*La Contraloría Interna Municipal, verificará que las adquisiciones públicas se realicen conforme a los ordenamientos legales estatales y municipales.*

*El primer párrafo del artículo 208, contiene una definición de adquisiciones públicas que no es del todo completa y concordante con la que está plasmada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual refiere lo siguiente:*

*Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:*

*I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;*

*II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren las Dependencias y Entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras;*

*III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles de las Dependencias y Entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación;*

*IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;*

*V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia;*

*VI. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles;*

*VII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de honorarios, y*

*VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las Dependencias y Entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma específica por otras disposiciones legales.*

*Por otra parte, consideramos que el Contralor Municipal, como primer frente para prevenir la corrupción en la administración municipal, debe tener un papel más claro y preciso, similar al que se le otorgó en materia de combate al nepotismo, en la reforma del 04 de febrero del presente año, y que sea parte de su deber informar al cabildo de manera precisa sobre las adquisiciones realizadas por el municipio.”*

**TERCERO.-** Nos queda claro que una de las principales funciones de la Contraloría Municipal como órgano de control interno es encargarse de vigilar y supervisar los recursos Municipales, Estatales y Federales así como supervisar la aplicación de los mismos conforme al presupuesto aprobado, con apego a programas, normatividad y leyes aplicables al Municipio.

Cabe señalar que es un órgano que debe planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos

La Contraloría es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los bienes del patrimonio municipal, así como también del desempeño y actuación de los servidores públicos; el cual debe siempre promover con estricto apego al marco jurídico, acciones preventivas que permitan maximizar los recursos a fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios y efectividad del Gobierno Municipal.

Ante ello quienes aquí dictaminamos apoyamos y coincidimos con la Iniciativa planteada, buscando siempre que se asegure la transparencia y la honestidad de los Municipios en la conducción del patrimonio y el ejercicio de la administración pública, que permita maximizar los recursos a favor de la ciudadanía, para lograr una mayor credibilidad y confianza de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el contenido de los párrafos primero y tercero del artículo 208 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 208**. En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán **todas las señaladas en el artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza**, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

…

La Contraloría Interna Municipal, verificará que las adquisiciones públicas se realicen conforme a los ordenamientos legales estatales y municipales, **dando cuenta de forma detallada al cabildo sobre estas operaciones, dentro del informe previsto en el segundo párrafo del artículo 132 de este Código.**

**T R A N S I T O R I O S**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN(SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, “Con objeto de que se exhorte atentamente a los 38 Ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respectivos organismos, operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, ante el inicio de la temporada de calor, pero, sobre todo, en vista de la actual pandemia por coronavirus” planteado por el Diputado Benito Ramírez Rosas.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 23 de abril de año en curso, se trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” “con objeto de que se exhorte atentamente a los 38 ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respetivos organismos operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, ante al inicio de la temporada de calor, pero, sobre todo, en vista de la actual pandemia por coronavirus, así mismo, se envíe un enérgico extrañamiento a la administración del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por la suspensión, de hasta cuatro días de la semana antepasada, del abasto de agua potable a decenas de colonias de la ciudad, en plena cuarentena por coronavirus, y se le exhorte, por las razones expuestas, a que en lo consecutivo el organismo operador Aguas de Saltillo (Agsal) se abstenga de volver a interrumpir el suministro del vital”, y en virtud de que no fue considerada como de urgente y obvia resolución se dispuso que fuera turnada a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a lo anterior, la Oficialía Mayor de este H. Congreso turnó a esta Comisión, la Proposición con Punto de Acuerdo a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, señala que existe la urgente necesidad de impulsar las acciones que estén al alcance para contrarrestar en especial en Coahuila, la pandemia COVID-19.

Señala que además de seguir las indicaciones del sector salud relacionadas con el uso de cubre bocas y la sana distancia, consiste en el lavado de manos, sin embargo, se desprende del documento en cuestión que, según diversas versiones periodísticas, desde el pasado miércoles 18 de marzo, y hasta por cuatro días, a miles de saltillenses se les privó del suministro de agua potable, lo que afectó a por lo menos 37 colonias.

Se desprende de la Proposición con Punto de Acuerdo que expertos en la materia han señalado que la solución al crónico problema de escasez y desabasto de agua potable no se resuelve con la sobreexplotación de los mantos acuíferos o abriendo nuevos pozos, pues gran parte de estos se encuentran prácticamente colapsados, sino invirtiendo también en la reparación y/o reposición de la red de distribución, cosa que Aguas de Saltillo se niega a realizar.

Se invoca en el documento en cuestión que el párrafo sexto del Artículo 4º, comprendido en el Capítulo de los Derechos Humanos y Garantías, establece, de manera muy clara, lo siguiente: *Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines*.

En virtud de ello, solicita a esta soberanía se exhorte a los 38 municipios para que por medio de los organismos operadores, implementen estrategias para prevenir los problemas de escases y desabasto de agua, así como enviar un enérgico extrañamiento al Alcalde de Saltillo por la suspensión del abasto de agua potable a decenas de colonias de la ciudad.

**TERCERO.-** Una vez analizado las solicitudes a que hace referencia en la Proposición con Punto de Acuerdo, los integrantes esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas coincidimos en la necesidad de que los organismos operadores de agua de los municipios, implementen estrategias para prevenir eventuales problemas de escasez o desabasto de agua potable, pues es indispensable para la vida diaria, mayormente en temporada de calor y obviamente por la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia.

Sin embargo, y en relación a hacer un “enérgico extrañamiento” a la administración del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por la suspensión de agua potable que hubo en el mes de marzo, debemos precisar que Aguas de Saltillo es una empresa paramunicipal, que cuenta con inversión pública y privada, en la que el Alcalde no decide la reparación, mantenimiento, suspensión o restablecimiento del servicio de agua potable.

En la página oficial de Aguas de Saltillo, así como en sus diversas redes sociales y en diversos medios de comunicación, podemos constatar que se informó puntualmente y advirtió con días de anticipación a los usuarios, que dicha empresa estaría realizado trabajos de mejora y mantenimiento a diversas redes de agua, por lo que se vería afectado temporalmente el servicio de agua en varias colonias y se dio a conocer, el tipo de trabajo que estarían realizando, así como el tiempo estimado de las mismas y las colonias que verían interrumpido el servicio y cuando estaría solucionado el problema, todo ello con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad.

De igual manera se informó sobre los trabajos de interconexión en la línea de conducción sur, que estarían realizando como parte de las acciones para la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas.

Con dichas obras realizadas (dos interconexiones de tubería) se avisó oportunamente que se suspendería el servicio de abastecimiento de agua potable desde el 17 de marzo y se estaría normalizando durante el día 18 de marzo, siendo las colonias afectadas las ubicadas al sur, poniente y centro de la ciudad de Saltillo.

Si bien es cierto, este tipo de suspensiones, ocasionan inconvenientes en la población, muy entendible, debemos comprender que son obras necesarias para posteriormente poder garantizar el abasto de agua potable en la ciudad.

Además, previamente se informa a la población a efecto de que realicen acopio de agua suficiente en sus tinacos, aljibes o cualquier otro método que utilicen para resguardar agua para los días en los que se realizan las obras, por parte de la empresa Agsal.

Asimismo, se informó que no fue posible reestablecer el agua en los sectores sur, poniente y centro, hasta el 19 de marzo, debido a que una válvula colapsó por lo que tuvieron que realizar los trabajos de reparación.

Entendemos que por la situación que estamos viviendo a causa de la pandemia, la desesperación sea mayor por contar con este vital líquido, sin embargo, no se pueden realizar obras de reparación, mantenimiento, interconexión, sin suspender el suministro de agua, es materialmente imposible, y quizá el postergar esas reparaciones, provocaría mayores problemas a la posterioridad.

En ese sentido, esta Comisión estima que la Proposición con Punto de Acuerdo puede aprobarse en un sentido positivo, en lo relacionado a exhortar a los Ayuntamientos de nuestro Estado que a través de sus organismos operadores implementen estrategias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, durante este periodo de cuarentena a causa del coronavirus. En cuanto al extrañamiento al alcalde de Saltillo, ya hemos hecho referencia que no es un asunto de su competencia, en todo caso se haría un exhorto a la empresa Agsal, para que al igual que los demás organismos operadores de agua, eviten en la medida de lo posible suspender el suministro de agua potable, durante este periodo de cuarentena a causa del coronavirus.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO. -** Se exhorta atentamente a los 38 Ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respectivos organismos operadores implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, ante el inicio de la temporada de calor y sobre todo por la actual pandemia por coronavirus, que amenaza con prolongarse, resultando necesario contar de manera permanente con agua, elemento indispensable dentro de las medidas para prevenir dicho virus.

**SEGUNDO. -** Se exhorta a Aguas de Saltillo (Agsal) evite en la medida de lo posible suspender el suministro de agua potable, durante este periodo de cuarentena a causa del coronavirus.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN(SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 225, segundo párrafo; y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 17 del mes de junio del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 18 de junio del año 2020 se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 225, segundo párrafo; y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 225, segundo párrafo; y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*Uno de los principios básicos de las normas jurídicas es que son determinantes o susceptibles de determinación, es decir, que el texto contenido en ellas debe de ser perfectamente entendible y que, si en su caso, requiere de alguna interpretación, esta deberá ser realizada por el juzgador para determinar su alcance y contenido.*

*Así, la configuración del andamiaje jurídico de cualquier país, particularmente en México, debe de encontrarse perfectamente armonizado, definidos sus alcances y su contenido, así como las sanciones por la contravención mediante alguna acción o el incumplimiento por medio de la omisión de alguna norma jurídica.*

*Los principios de la norma jurídica son elementos permanentes, pues independientemente de si se trata de normas civiles, administrativas, laborales, penales, fiscales o cualquier otra, los referidos principios son inherentes a cualquier norma jurídica.*

*Sin embargo, cada rama o especialidad del derecho implica diversos principios que le son propios, mismos que pueden o no ser aplicables a otras materias, pero que no son permanentes en todo el derecho; entre ellos, se encuentra el derecho penal.*

*El derecho penal implica una serie de principios características particulares, y su importancia radica en que es considerado la última razón para imponer sanciones por aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes para la sociedad. En ese sentido, Sergio García Ramírez explica que “no hay duda sobre la misión que incumbe al derecho penal, con su arsenal de medios aplicativos, en un Estado de derecho, comprometido con el respeto al ser humano y la conducción democrática del poder público. El régimen penal es el último recurso del control social.”[[20]](#footnote-20)*

*Dicho lo anterior y en el entendido de que el derecho penal constituye la herramienta del Estado de Derecho para imponer, como último recurso, las sanciones para el control social, el derecho penal contiene ciertos principios que lo diferencian del resto de las ramas del derecho de forma bastante clara.*

*Al respecto, Gissela Morales Nuño, considera la existencia de, por lo menos, los siguientes principios: legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, prescripción, non bis in ídem, in dubio pro reo, defensa, oportunidad, igualdad, entre otros[[21]](#footnote-21). En ese sentido, el principio de legalidad y el principio de tipicidad se encuentran unidos indisolublemente por el principio de taxatividad.*

1. ***Principio de legalidad (nullum crimen nulla poena sine lege)***

*El principio de legalidad es fundamental en cualquier rama del derecho, sin embargo, en el derecho penal cobra especial sentido pues tiene implicaciones sobre la libertad de las personas, las sanciones suelen ser más severas que en otras materias del derecho y, por ende, debe entenderse que, por principio de legalidad, no puede imponerse una pena derivada de una conducta si no existe una ley previa.*

*Así, Moisés Moreno Hernández considera que, “conforme al principio de legalidad, plasmado en el artículo 14 constitucional, el Estado en ningún caso podrá imponer pena o medida de seguridad alguna si no es por la realización de una conducta que previamente ha sido descrita en la ley como delito o sin que la sanción esté igualmente establecida en la ley, expresada en la fórmula latina nullum crimen, nulla poena sine lege.[[22]](#footnote-22)*

1. ***Principio de tipicidad***

*El principio de tipicidad es característico del derecho penal y no es encontrado en otras ramas del derecho, ni mucho menos****,*** *en el caso de que así fuera, tendría la misma relevancia que en esta rama del derecho. El principio de tipicidad tiene una estrecha relación con el de taxatividad, pero no puede decirse que son propiamente lo mismo, pues tienen distintas implicaciones.*

*Para Moisés Moreno Hernández, el principio de tipicidad, al igual que el principio de legalidad que tiene la función de describir el la materia de regulación de las normas penales, este, “para poder hablar de pena, uno de sus primeros y necesarios presupuestos lo es precisamente la tipicidad, o sea, la concretización de los elementos del tipo penal, que exige que el órgano encargado de aplicar la ley, acredite la existencia de tales elementos típicos y considere únicamente como delito al hecho que reúna dichos elementos señalados en la descripción legal y así poder concretizar la amenaza penal”.[[23]](#footnote-23)*

*Ahora bien, derivado del principio de tipicidad y el de legalidad, el principio de taxatividad en la ley penal se consagra en la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.*

*Así mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, establecido que “el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.”[[24]](#footnote-24)*

*La taxatividad es el principio que determina la exacta aplicación de la ley penal, lo que otorga en último sentido, la garantía de seguridad y certeza jurídica para el gobernado.*

*En ese contexto, en cumplimiento al referido principio y a fin de dar certeza jurídica de las penas a las que son susceptibles las personas que incurren en la comisión de un tipo penal, se propone modificar el artículo 225, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que se aplicará de siete a doce años y multa al que cometa la conducta típica contenida en dicha disposición, a efecto de que se precise expresamente que dicha sanción corresponde a prisión, es decir, de siete a doce años de prisión.*

*En ese mismo sentido, se modifica la fracción II del artículo 229 establece para que, en la parte que se señala “…se impondrá de siete a doce años y multa…”, se precise de manera expresa que los años que se contemplan como sanción son como pena de prisión.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en las que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto dotar de una adecuada certeza jurídica los delitos establecidos por los artículos 225 y 229 del Código Penal del Estado.

Dentro de la presente exposición de motivos se manifiesta que “*uno de los principios básicos de las normas jurídicas es que son determinantes o susceptibles de determinación, es decir, que el texto contenido en ellas debe de ser perfectamente entendible y que, si en su caso, requiere de alguna interpretación, esta deberá ser realizada por el juzgador para determinar su alcance y contenido”.*

De ello también se desprende que “*los principios de la norma jurídica son elementos permanentes, pues independientemente de si se trata de normas civiles, administrativas, laborales, penales, fiscales o cualquier otra, los referidos principios son inherentes a cualquier norma jurídica”.*

Los principios básicos del derecho penal buscan no solo consagrar penas como castigos a aquellos que violen las normas jurídicas, sino que de estas penas establecidas se obtengan fines preventivos y se consideren como la última razón para imponer una sanción, es por ello que respecto a este ámbito penal deben existir principios especialísimos como lo son el principio de legalidad, de tipicidad, de proporcionalidad, entre otros.

Así, resulta indispensable aludir que especialmente en materia penal al legislador le es exigible la emisión de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito y los supuestos de justificación de una conducta típica y antijurídica.

Para determinar la tipicidad de una conducta el legislador debe tener en cuenta como derivación del principio de legalidad el de taxatividad o exigencia de un contenido concreto u unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.

Tales exigencias para la emisión de normas penales tienen su base en el respeto al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal y el derecho a la seguridad jurídica, mismos que constituyen prerrogativas fundamentales de las personas que rigen las relaciones entre el actuar del Estado en su posición de garante de derechos y los particulares.

Estas garantías de seguridad y certeza de la norma, dan pauta a que el aplicador de la ley pueda ejercer su labor sin arbitrariedad alguna, y además, a que el destinatario de la norma tenga certeza sobre a quien se dirige la disposición, qué conductas efectivamente son consideradas antijurídicas, las consecuencias de las mismas, y los supuestos de exclusión del delito, tal y como se plasma en la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 1a./J. 54/2014 (10a).

***PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.***

*El artículo* [*14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*](javascript:AbrirModal(1))*, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia* ***penal*** *al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo* ***penal****, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del* ***principio*** *de* ***legalidad****, al de* ***taxatividad*** *o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de* ***taxatividad*** *supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el* ***principio*** *de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo* ***penal****, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del* ***principio*** *de* ***taxatividad*** *es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El* ***principio*** *de* ***taxatividad*** *no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.*

De igual manera resulta conveniente hacer alusión a la siguiente Tesis Aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

***EXACTA APLICACION DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTIA DE SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIEN A LA LEY MISMA.***

*La interpretación del* [*tercer párrafo del artículo 14 constitucional*](javascript:AbrirModal(1))*, que prevé como* ***garantía*** *la* ***exacta******aplicación*** *de la* ***ley*** *en* ***materia******penal****, no se circunscribe a los meros actos de* ***aplicación****, sino que* ***abarca*** *también a la propia* ***ley*** *que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su* ***aplicación*** *o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la* ***ley*** *que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la* ***garantía*** *indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.*

Es por todo lo anteriormente expuesto que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos con el iniciador en el hecho de que el contenido sancionador del ordenamiento penal debe expresarse de modo preciso, claro y unívoco; a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14.

Por ello, resulta indispensable reformar los artículos 225 párrafo segundo y 229 fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de dar cumplimiento al principio de taxatividad, así como otorgar una adecuada certeza jurídica de las penas establecidas dentro de dichas disposiciones, precisando expresamente que las sanciones corresponden de siete a doce años de prisión y multa y de siete a doce años de prisióny multa, respectivamente.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma el artículo 225, segundo párrafo y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 225 …**

…

Se aplicará de siete a doce años de prisióny multa, a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene, por la vía anal o vaginal a persona que por cualquier causa no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o posibilidad de resistir la conducta delictuosa.

…

**Artículo 229 …**

**I.** …

**II.** …

Se considera violación impropia y se impondrá de siete a doce años de prisióny multa, a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene, por la vía anal o vaginal a persona menor de quince años de edad.

**III.** …

…

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se propone reformar los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV y VII y 118, y derogar los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembre del 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la iniciativa planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; para reformar los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV y VII y 118, y derogar los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, la Oficialía Mayor del Congreso turnó a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública es competente para emitir el presente dictamen, conforme a los artículos 94, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; mediante la cual propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*“El su artículo 67, fracción XXXIV, la Constitución Política del Estado de Coahuila señala que es atribución del Poder Legislativo, es decir, de este Congreso, “Revisar… en los términos previstos en las leyes, la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos públicos autónomos” así como de cualquier entidad o persona “que gestione recursos públicos, con objeto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda, y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas”.*

*La responsabilidad pues de “revisar las cuentas públicas” corresponde esencial y originariamente al Congreso, como expresamente lo vuelve a señalar el párrafo tercero de la citada fracción XXXIV del artículo 67 constitucional, al indicar que el “Congreso concluirá la* ***revisión*** *de las cuentas públicas” en la fecha que ahí se señala.*

*Es cierto, como lo dice el precepto invocado, que el Congreso no revisa directamente las cuentas públicas sino “por conducto de la entidad de fiscalización superior denominada Auditoría Superior del Estado”, pero la responsabilidad política, histórica, ética y constitucional corresponde enteramente al Poder Legislativo y no a esta entidad llamada Auditoría Superior del Estado, la cual es un órgano técnico de la Legislatura ciertamente dotado de “autonomía técnica, presupuestaria y de gestión” pero todo ello* ***“en los términos que disponga la ley”****, según claramente reza el artículo 74-A de la Constitución local de Coahuila.*

*El vigente ordenamiento en la materia, denominado Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de septiembre de 2017, entró en vigor el día siguiente al de su publicación y vino a abrogar la ley del mismo nombre, cuya duración fue de menos de tres años, toda vez que fue publicada en el Periódico Oficial el 11 de noviembre de 2014.*

*Pues bien, la vigente ley prácticamente margina al Congreso del Estado y a la Comisión legislativa que es jurídicamente el enlace entre éste y la Auditoría Superior del Estado, de aspectos fundamentales como son, entre otros, la elaboración y aprobación del programa anual de auditorías y visitas, la modificación de éste en el curso del ejercicio y la expedición de su Reglamento Interno, proceso en el cual –apenas parece creíble- el Congreso tiene un papel absolutamente pasivo.*

*A la luz de lo que ha ocurrido –cuando menos en los últimos tres lustros- en las finanzas públicas del estado en sus diversas dependencias, que han sido objeto de monumental saqueo sin que nada, absolutamente nada suceda; y lo que es peor, quienes son responsables y beneficiarios de tan gigantesco daño al patrimonio público estatal se pasean tan campantes, como si nada, protegidos por una total y absoluta impunidad, ante la manifiesta ineficacia del órgano encargado de realizar las auditorías, señalar irregularidades y determinar las responsabilidades que correspondan, no puede menos que llegarse a la conclusión de que las cosas no deben continuar como hasta ahora, so pena de que como legisladores no sólo toleremos lo que sucede sino que nos convirtamos en cómplices del actual estado de cosas.*

*Por lo expuesto, se hace absolutamente necesario incorporar a la Ley de la materia los cambios necesarios tanto para que el Congreso del Estado ejerza de mejor manera sus atribuciones constitucionales relativas a la presentación y revisión de las cuentas públicas, como para terminar con el mal manejo de la gestión financiera estatal de los últimos lustros, ”*

**TERCERO.-** Una vez analizada la iniciativa planteada, por parte de los integrantes de esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la mayoría consideramos que no es procedente aprobarla en los términos que plantea el promovente, por varias razones que abordaremos en este dictamen.

En cuanto a la propuesta que hace el Diputado García Villa de derogar el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se establece que la interpretación administrativa de este ordenamiento legal estará a cargo de la Auditoría Superior del Estado, consideramos que no es conveniente derogar dicha facultad ya que habría un vacío legal al no establecerse a quien le corresponde la interpretación de dicha ley, la cual es necesaria incluso para las entidades sujetas a fiscalización y para el mejor desempeño de sus funciones de fiscalización.

Además, conforme al artículo 2 de dicha ley, ese órgano superior de fiscalización goza de autonomía técnica, presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones y por ende tiene la capacidad de interpretar esta ley.

Respecto a la propuesta planteada por el promovente de la iniciativa, referente a reformar el tercer párrafo del artículo 17 de la referida Ley de Rendición de Cuentas, para que el *Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones*, sea sometido a la revisión y autorización de la Comisión, consideramos que esto atenta contra la autonomía de gestión en el ejercicio de sus funciones, que la Constitución y la propia ley le otorgan a la Auditoría Superior.

En la legislación federal sobre la materia, en el artículo 17 párrafo segundo de la fracción I, al igual que en el Estado, únicamente se da a conocer a la Comisión el PAAVI y la razón es precisamente el respeto irrestricto a la autonomía del órgano fiscalizador.

Es por ello que no estamos de acuerdo con dicha propuesta, pues esto implica quitarle autonomía de gestión a la Auditoría Superior del Estado y esto sería un retroceso legal.

En ese mismo tenor, consideramos que no es procedente reformar los párrafos primero y segundo del artículo 22, propuestos en la iniciativa objeto de este dictamen, respecto a que la Auditoría Superior del Estado someta a la revisión y autorización de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública el *Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones*, o PAAVI como se le conoce por sus siglas, pues sería quitarle la autonomía de gestión que este órgano superior de fiscalización posee por mandato constitucional; la Comisión no debe autorizar el PAAVI, sería volver al sistema anterior, no sería objetivo y parcial, pues los intereses políticos pueden interferir al momento de autorizar qué auditorías practicar, en cambio la función de la Auditoría Superior es técnica y debe abocarse estrictamente a lo que la ley le establece.

El texto actual de nuestra legislación estatal coincide con el de la federación, sobre el particular, ya que de acuerdo con el artículo 81 fracción IV Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Comisión le corresponde solo analizar el programa anual de fiscalización y evaluar su cumplimiento, en ningún momento lo autoriza, hay un respeto al principio de autonomía, que no debemos atentar.

En cuanto a la propuesta de reformar el primer párrafo del artículo 60 y derogar el segundo párrafo, a efecto de que sea la propia Auditoría Superior del Estado la que determine la procedencia de las revisiones por situaciones excepcionales y no la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, consideramos que esta es una de las principales funciones de esta comisión legislativa que le concede la ley, por lo que consideramos necesario conservar esa facultad.

Cabe señalar que las revisiones por situaciones excepcionales es una excepción a la regla general, de que se revisa una vez que la Auditoría Superior recibe la cuenta pública de las entidades sujetas a fiscalización, es decir, posterior al cierre del ejercicio anterior, de ahí que la excepción sea, adelantar la revisión por causas excepcionales, es decir, durante el ejercicio en curso. En este caso, es la Comisión quien determina en base a un análisis si reúne los requisitos que establece la propia ley.

La Auditoría Superior como quiera va a revisar, ya sea durante el ejercicio, cuando proceda alguna razón excepcional, o posteriormente una vez que reciba la cuenta pública de la entidad del ejercicio anterior.

Quienes aquí dictaminamos, consideramos que es importante conservar dicha facultad de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, pues evalúa si procede o no anticipar una revisión por una causa excepcional y la propia ley determina los parámetros y requisitos.

Respecto a la propuesta de reformar las fracciones I, VIII y XVIII del Apartado B del artículo 94 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a las facultades indelegables del Auditor Superior del Estado, con el propósito de que el Reglamento Interior, el *Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones*, y el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior del Estado que le corresponde expedir, aprobar y emitir respectivamente al Auditor Superior, sea sometido a la autorización de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y se publiquen no solo en la página de internet del propio órgano superior de fiscalización, sino en el Periódico Oficial del Estado, insistimos quienes aquí dictaminamos, en que la Auditoría Superior del Estado tiene autonomía de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, por lo que no podemos ir en contra de esa autonomía, pues esto sería un retroceso.

Respecto a la publicación de los documentos mencionados en dichas disposiciones, cabe señalar que esta se efectúa tanto en el Periódico Oficial como en la propia página oficial de la Auditoría Superior del Estado.

De igual forma, como lo hemos señalado con antelación, también en la legislación federal, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, según el artículo 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al igual que nuestra legislación vigente, aprueba el programa anual y envía a la Comisión para su conocimiento. Esto es así por respeto a su autonomía.

Con ello queremos insistir que tanto nuestra legislación estatal, como la federal y como la del resto de las entidades federativas, acogen el principio de autonomía de sus órganos de fiscalización, por lo que no debemos retroceder al viejo esquema.

Sobre la propuesta de derogar el artículo 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece que el Auditor Superior no podrá ser reconvenido por las opiniones emitidas en el ejercicio de su función, ni por el sentido de sus informes, observaciones, recomendaciones, acciones o resoluciones, consideramos que debe continuar vigente en la ley, toda vez que este artículo fortalece la autonomía de las funciones que el titular de la Auditoría Superior del Estado realiza, esto no lo exime del cumplimiento de sus responsabilidades como servidor público. Consideramos importante que permanezca este artículo, pues su opinión avala su trabajo contable y la imparcialidad del mismo.

En cuanto a la propuesta de reformar el segundo párrafo del artículo 111 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, a efecto de cambiar el termino de podrá evaluar por el de evaluará cuando se refiere al desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, a través de mecanismos e indicadores que resulten aplicables, consideramos que es innecesario pues es una facultad potes que ya tiene la Comisión, y que la puede hacer valer en cualquier momento.

Tocante a la propuesta de reformar las fracciones IV, VII y XVIII recorriéndose la fracción actual a la siguiente, del artículo 112 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, para otorgarle a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de autorizar el *Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones*, el Reglamento Interior y el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior del Estado, en vez de solo recibir y conocer dichos documentos, reiteramos que no podemos ir en contra de la autonomía de gestión que por orden constitucional y legal tiene la Auditoría Superior del Estado, no podemos retroceder al viejo esquema de la extinta Contaduría Mayor de Hacienda.

El propósito de la ASE fue ser un órgano técnico autónomo, pues lo que se pretende es que la revisión de las cuentas públicas sea objetiva e imparcial y para ello se requiere de autonomía en su funcionamiento, presupuesto y estructura, por lo que no coincidimos con lo propuesto por el promovente.

Finalmente, respecto a la propuesta de reformar el artículo 118 de la referida Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, a efecto de establecer que las peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública reciba de la sociedad civil, una vez que procedan serán turnadas a la Auditoría Superior del Estado para su inclusión en el PAAVI, al respecto consideramos que la redacción de esta propuesta es ambigua, pues no es claro en qué casos la Comisión determinaría su procedería, lo que deja en estado de indefensión a los particulares que presenten su solicitud, además la Comisión no posee facultades para decidir sobre lo que se incluye y no en el PAAVI, esa facultad le corresponde a la ASE por la autonomía de sus funciones, como lo hemos venido reiterando.

Por todas estas razones, la mayoría de los integrantes de esta Comisión, consideramos improcedente la iniciativa aquí analizada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora emitimos el siguiente:

**ACUERDO**

**ÚNICO.-** Por las razones expuestas en el Considerando Tercero del presente Dictamen, es improcedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; para reformar los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV y VII y 118, y derogar los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

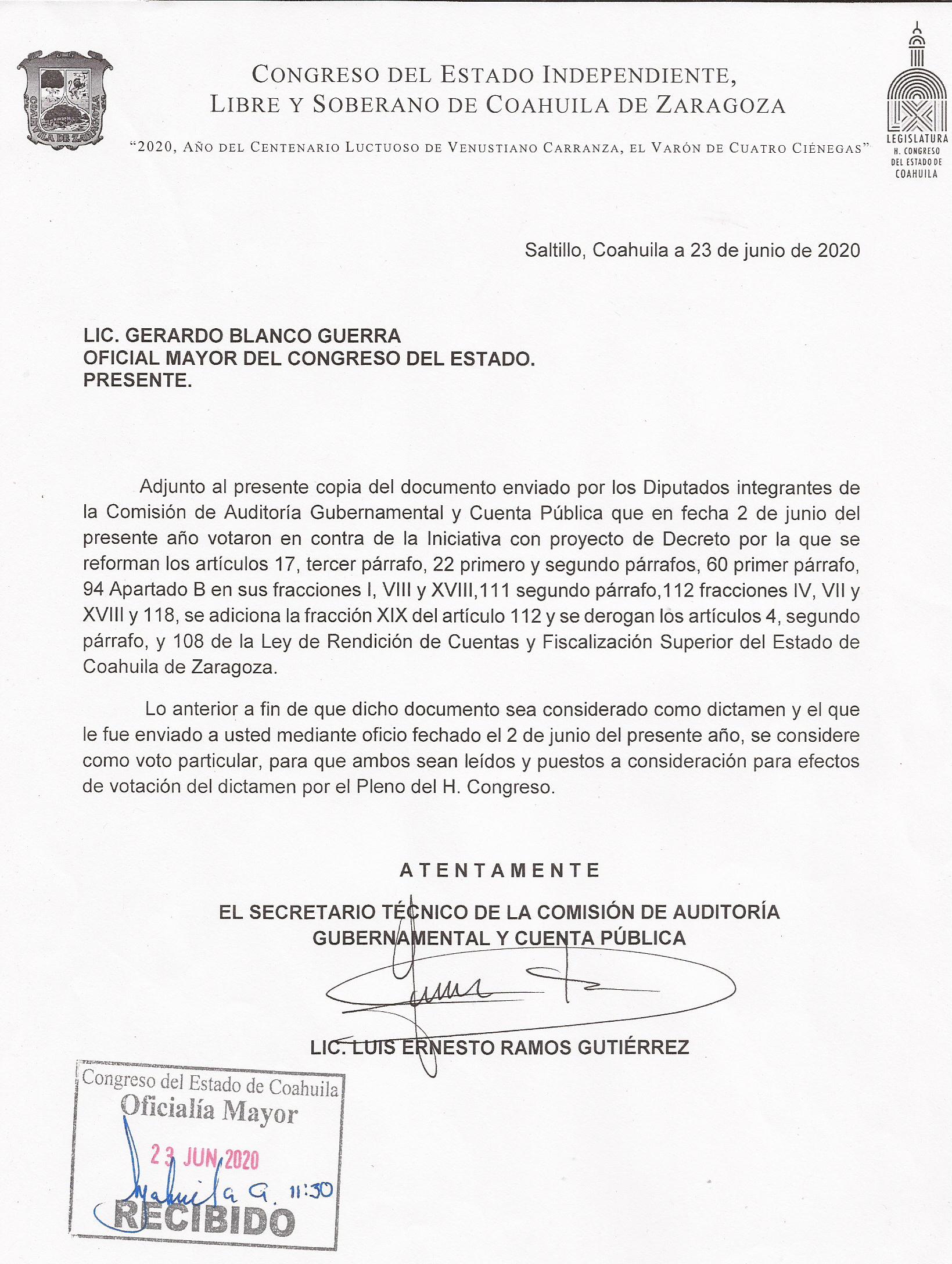
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Juan Antonio García Villa, (Coordinador), Dip. Lilia Isabel Gutierrez Burciaga (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. Jaime Bueno Zertuche.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de junio de 2020.

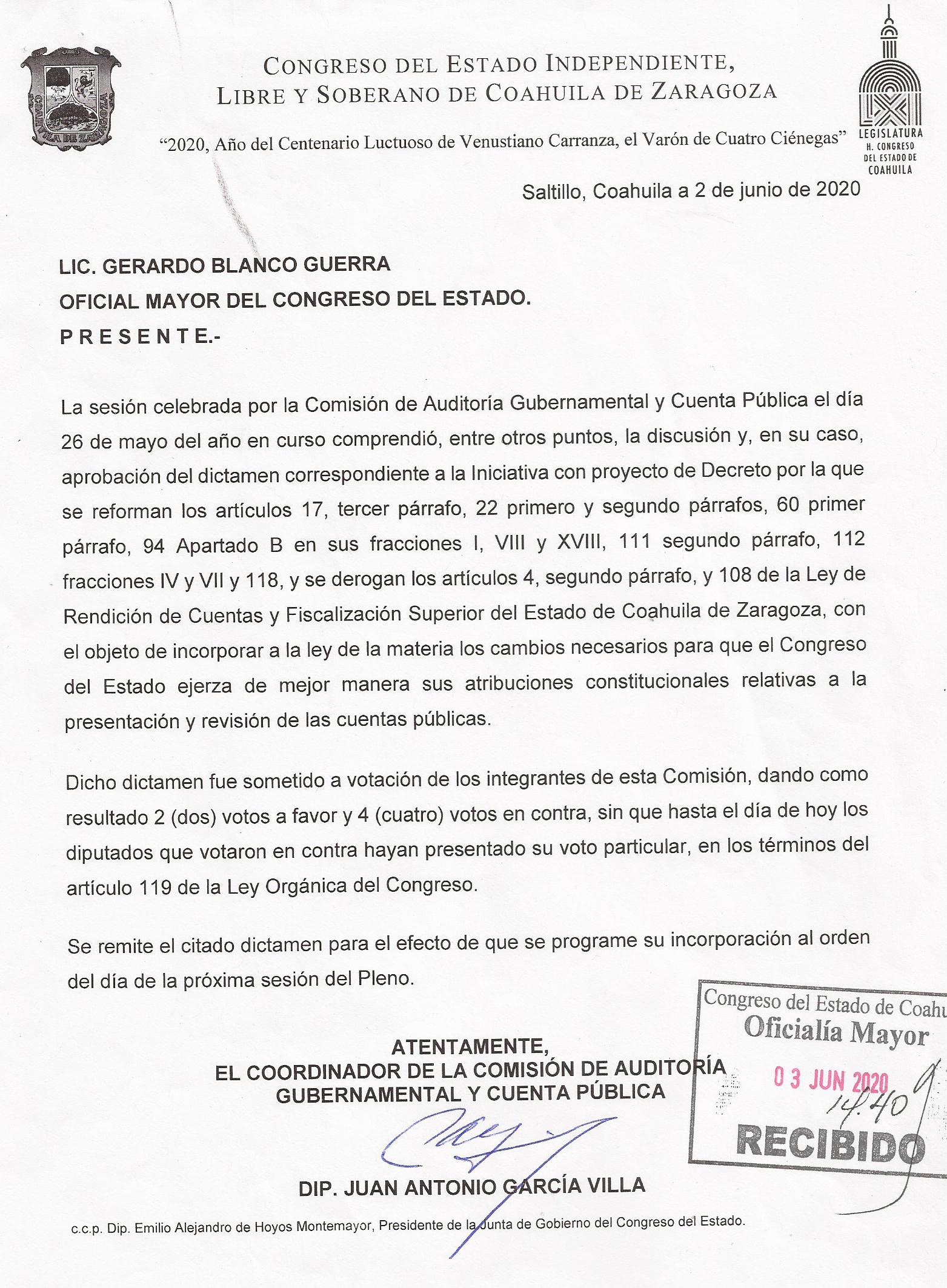
**POR LA COMISION DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**Y CUENTA PÚBLICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**  **(COORDINADOR)** |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA (SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  |  |  |

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 17, TERCER PÁRRAFO, 22 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS, 60 PRIMER PÁRRAFO, 94 APARTADO B EN SUS FRACCIONES I, VIII Y XVIII, 111 SEGUNDO PÁRRAFO, 112 FRACCIONES IV Y VII Y 118, Y DEROGAR LOS ARTÍCULOS 4, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 108 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

****

****

**Dictamen** de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 4 de diciembre del 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 94, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

La fiscalización, esencialmente consiste en revisar, auditar y vigilar con el propósito de comprobar el cumplimiento de los programas establecidos, la utilización adecuada de los recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios. Ahora bien, la fiscalización superior, es aquella de más alto rango y nivel, cuyo ejercicio es complejo desde el punto de vista técnico, por ello, el Congreso no revisa directamente las cuentas públicas, sino que delega estas funciones en un órgano fiscalizador (Auditoría Superior), dotado de autonomía técnica y de gestión.

El artículo 67, fracción XXXIV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila señala que es atribución del Poder Legislativo, es decir, de este Congreso, “Revisar… en los términos previstos en las leyes, la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos públicos autónomos” así como de cualquier entidad o persona “que gestione recursos públicos, con objeto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda, y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas”.

La responsabilidad de revisar las cuentas públicas corresponde esencial y originariamente al Congreso, como expresamente lo vuelve a señalar el párrafo tercero de la citada fracción XXXIV del artículo 67 constitucional, al indicar que el “Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas” en la fecha que ahí se señala.

Sin embargo, la vigente ley prácticamente margina al Congreso del Estado y a la Comisión legislativa que es jurídicamente el enlace entre éste y la Auditoría Superior del Estado, de aspectos fundamentales como son, entre otros, aprobación del programa anual de auditorías y visitas como sí se lleva a cabo en entidades como la Ciudad de México y Tamaulipas, la modificación del citado programa en el curso del ejercicio y la expedición de su Reglamento Interno, instrumentos legales en los que deben de quedar claros los objetivos de la fiscalización, tales como: la apropiada y eficaz utilización de los fondos públicos, la búsqueda de una gestión rigurosa, la regularidad en la acción administrativa y la información, proceso en el cual el Congreso tiene un papel absolutamente pasivo.

La iniciativa de mérito pretende incorporar a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, las modificaciones para que el Congreso del Estado ejerza de mejor manera sus atribuciones constitucionales relativas a la presentación y revisión de las cuentas públicas.

Con lo anterior se busca que exista un verdadero acto de control, indispensable para mantener el equilibrio entre los poderes que dan paso al estado de derecho, comprobando el buen uso de los recursos públicos, evitando la discrecionalidad y contribuyendo al mejor desempeño de la función pública.

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, realizamos el análisis de la presente iniciativa, mediante la cual se propone reformar, adicionar y derogar diversos preceptos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, estima que a la presente Iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa, que además de lo planteado, se reforme la fracción XVIII y se adicione la fracción XIX al artículo 112 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de hacer compatibles los preceptos jurídicos con otros que buscan el mismo objetivo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que la mencionada Iniciativa de Decreto reúne los elementos necesarios para elaborar el presente dictamen, por lo que estimamos pertinente emitir y poner a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.** Se reforman los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV, VII y XVIII y 118, se adiciona la fracción XIX del artículo 112 y se derogan los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 4.**

…

Derogado

**Artículo 17.**

…

…

Asimismo, la Auditoría Superior podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en las cuentas públicas. Una vez que le sean entregadas las cuentas públicas, podrá realizar, para el mejor cumplimiento de sus funciones, las modificaciones que considere necesarias al programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y las someterá a la revisión y autorización de la Comisión.

**Artículo 22.**

Durante el primer bimestre del año, la Auditoría Superior someterá a la revisión y autorización de la Comisión el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, el cual una vez autorizado tendrá carácter público y deberá difundirse a través de la página de internet de la Auditoría Superior, así como publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, programa en el que se mencionará a la totalidad de las entidades que serán objeto de fiscalización.

Dicho programa anual podrá modificarse cuando la Auditoría Superior lo considere necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones, debiéndose someter las modificaciones a la revisión y autorización de la Comisión, y en su caso, publicarlas en su página de internet, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Artículo 60.**

Cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse la presunta recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación o ejercicio irregular de recursos públicos o de su desvío, la Auditoría Superior realizará las revisiones que procedan, durante el ejercicio fiscal en curso, de conceptos específicos vinculados de manera directa a las denuncias o circunstancias, o requerir a las entidades para que a través de sus órganos internos de control lleven a cabo dichas revisiones. El requerimiento deberá aportar indicios probatorios razonables mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasionó un daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades.

**Artículo 94.**

…

1. …

I. a XIX. …

1. Indelegables:
2. Elaborar, de conformidad con lo establecido en esta ley, el proyecto de Reglamento Interior de la Auditoría Superior, en el que se distribuirán las atribuciones de sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que habrán de ser suplidos en sus ausencias, el cual someterá a la autorización de la Comisión, debiendo ser publicado dicho reglamento interior en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página de internet de la Auditoría Superior;
3. a VII. …

VIII. Elaborar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones durante el

primer bimestre del ejercicio y remitirlo a la Comisión para su autorización;

una vez que lo sea, se publicará en la página de internet de la Auditoría Superior, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;

IX. a XVII. …

XVIII. Elaborar el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera, el cual someterá a

la autorización de la Comisión previamente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página de internet de la Auditoría Superior;

**Artículo 108.**

Derogado

**Artículo 111.**

…

Para los efectos del párrafo anterior, la Comisión evaluará bajo los principios de objetividad, transparencia y máxima publicidad, el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, a través de mecanismos e indicadores que resulten aplicables.

**Artículo 112.**

I. a III. …

IV. Autorizar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones que para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones elabore la Auditoría Superior, así como sus modificaciones;

V. a VI. …

VII. Autorizar el Reglamento Interior de la Auditoría Superior.

VIII. a XVII. …

XVIII. Autorizar el estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera.

XIX. Las demás que establezca esta ley y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 118.**

La Comisión recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por parte de la sociedad civil, las que en caso de proceder serán turnadas a la Auditoría Superior para su inclusión en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, y cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su caso, en el Informe Anual de Resultados. Dichas propuestas también podrán ser presentadas por conducto del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, debiendo el Auditor Superior informar a la Comisión, así como a dicho Consejo, sobre las determinaciones que se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** La Auditoría Superior deberá presentar a la Comisión para su autorización, los proyectos de Reglamento Interior y de Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera, a que hacen referencia las fracciones I y XVIII del Apartado B del artículo 94 de la presente ley, a más tardar 120 días después de la entrada en vigor de este decreto.

**TERCERO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Juan Antonio García Villa, (Coordinador), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Jaime Bueno Zertuche y Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de mayo de 2020.

**COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA DE LA LXI LEGISLATURA, DE FECHA DEL 26 DE MAYO DE 2020.

**ACUERDO** de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “por el que solicita al Ejecutivo del Estado desarrollar programas que fortalezcan la creación de escuelas municipales para fortalecer el apoyo a talentos deportivos y la cultura del deporte”.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “A través del cual se solicita al Ejecutivo del Estado desarrollar programas que fortalezcan la creación de escuelas municipales para fortalecer el apoyo a talentos deportivos y la cultura del deporte”.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó a la Coordinadora de esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “A través del cual se solicita al Ejecutivo del Estado desarrollar programas que fortalezcan la creación de escuelas municipales para fortalecer el apoyo a talentos deportivos y la cultura del deporte”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

*“Por primera vez en la historia reciente de México los académicos e investigadores de la cultura física se pronuncian con recomendaciones a favor del desarrollo de este ámbito; el Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte (CIICUFIDE) se pronuncia en favor de un resolutivo por la Cultura Física Nacional.*

*Uno de los acuerdos de la más reciente reunión del Comité, en 2018, fue el que se hiciera un pronunciamiento en el que se expresen una serie de recomendaciones que deben tomarse en cuenta para instrumentar las políticas públicas en materia de cultura física en los próximos años, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo del deporte en México.*

*De entre las recomendaciones que emiten se encuentran, solo por mencionar algunas:*

1. *Realizar el diagnóstico nacional del deporte, en observancia de:*

*Estado de salud y nivel de desarrollo físico de la población.*

*Cantidad de especialistas en las distintas ramas de la cultura física y el deporte.*

*Número de profesionistas en educación física.*

*Número de profesionistas en recreación física.*

*Número de profesionistas entrenadores deportivos.*

*Número de profesionistas en ciencias aplicadas.*

*Número de deportistas adheridos – afiliados a las federaciones deportivas nacionales.*

1. *Revisión de la Normatividad que rigen el deporte municipal, estatal y nacional. Planes Estatales y Municipales de Desarrollo del Deporte.*
2. *Cantidad de Instituciones formadoras y colegios de profesionistas en el ámbito de la cultura física y el deporte.*

*Número de escuelas formadoras de licenciados en educación física.*

*Número de escuelas formadoras de otras ciencias del deporte.*

*Número de centros de investigación y difusión del área.*

1. *Contribuir en la independencia económica, material y de recursos humanos de los institutos estatales del deporte.*

*La Organización Mundial de la Salud señala que la actividad física regular de intensidad moderada como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte, tiene considerables beneficios para la salud. En todas las edades, los beneficios de la actividad física contrarrestan los posibles daños provocados, en algunas ocasiones por accidentes.*

*La actividad física regular y en niveles adecuados, mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio, mejora la salud ósea y funcional, reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, diferentes tipos de cáncer (como el cáncer de mama y el de colon) y depresión; reduce el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de cadera; y es fundamental para el equilibrio energético y el control de peso.*

*Aunado a lo anterior, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los niños y jóvenes, dándoles la oportunidad de expresarse, fomenta la autoconfianza, la interacción e integración social; sin dejar de mencionar por supuesto que los jóvenes activos generan comportamientos saludables y así evitan el consumo de tabaco, alcohol y drogas, además de un mejor rendimiento escolar.*

*Coahuila cuenta con un marco jurídico que fortalece las acciones de la sociedad civil, gobierno estatal y municipios en favor del deporte.*

*Entre ellos un plan Estatal de Deporte que, de acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberá incluir las acciones, programas y proyectos que tengan como fin promover las actividades deportivas y de cultura física.*

*Como es un documento con el que todavía no contamos y, seguramente esta en proceso, es importante incluir acciones que permitan anexar, las recomendaciones de los expertos del Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte y aprovechar instalaciones o edificios municipales como centros comunitarios, canchas deportivas, como escuelas municipales de fomento deportivo y de vincularse con organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas para que se fortalezcan estas actividades de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.*

*Hoy Coahuila merece impulsar la actividad del deporte y la educación física en cada rincón de los 38 municipios porque, finalmente, fortalece una herramienta formativa de desarrollo integral en la niñez y juventud de nuestro estado; respaldar las actividades deportivas bien planeadas y con seguimiento permitirá enriquecer el tejido social a través de los valores que se practican dentro del deporte y generar una cultura orientada a la activación física y a una sana convivencia social.*

*Compañeras y compañeros legisladores:*

*Para nadie es novedad que la inclusión del deporte y la cultura en el fortalecimiento del entorno comunitario permite contar con sociedades sanas, seguras y en paz.*

*El deporte permitirá contrarrestar la tasa creciente de problemáticas relacionadas con la salud en menores de edad y aprovechar de manera más eficiente los espacios públicos. Además de prevenir problemas como las adicciones y la violencia, entre otros.*

*Si bien existe el Instituto Estatal del Deporte que opera en toda la entidad, la cobertura que se tiene no es suficiente en todos los municipios. La propuesta es trabajar de forma articulada con los municipios ampliando y fortaleciendo la oferta deportiva.*

*De acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 8, los municipios, en la esfera de su competencia, tendrán las siguientes atribuciones:*

*I. Fomentar y promover la cultura física y la práctica de las actividades deportivas entre los habitantes de su municipio; y celebrar convenios con instituciones públicas, privadas, sociales y recreativas, con objeto de patrocinar la realización de eventos deportivos y la conformación de ligas y equipos de las distintas disciplinas físicas más aceptadas por los habitantes de cada municipio.*

*II. Crear una unidad administrativa responsable y especializada en materia de cultura física y deporte, cuya titularidad, cualquiera sea la denominación de ésta, deberá recaer en una persona de amplia y comprobada experiencia en la promoción y difusión del deporte.*

*III. Asignar una partida presupuestal anual que permita ejecutar los programas en materia de cultura física y deporte; la cual deberá quedar debidamente especificada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda.*

*IV. Participar en la planeación de la infraestructura del deporte y presentar a las autoridades estatales, las recomendaciones que consideren pertinentes. Asimismo, administrar las instalaciones deportivas de su competencia y promover la participación de la comunidad, para que, de forma organizada, subsidiaria y corresponsable pueda participar en la construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de las instalaciones deportivas; quedando establecidas las reglas y bases de esta participación en el reglamento que corresponda.*

*V. Convocar a la sociedad en general y, en particular, a los deportistas y sus asociaciones, a formar parte del Sistema Municipal del Deporte;*

*Además de promover y fomentar la cultura física y el deporte en la población del Estado, así como la difusión, investigación y la participación social, definir e instrumentar la aplicación de la política pública del Estado en materia deportiva; alentar entre la sociedad, la constitución y entrega de reconocimientos y estímulos a los deportistas y elaborar, en coordinación con los municipios y sociedad civil, los programas que conformen el Plan Estatal del Deporte, entre otros.*

*La propuesta que planteamos es que, a la brevedad, en el marco de la integración del Plan Estatal de Deporte, el Ejecutivo considere la creación de escuelas de deporte municipales en coordinación con los Direcciones municipales de las áreas afines al tema que nos ocupa a fin de que se le dé mayor y directa atención a la implementación de la cultura física y el deporte.*

*Estas escuelas municipales permitirán entre otras cosas, generar atletas y entrenadores de alto rendimiento mejor capacitados, incentivarán la activación física creando una mayor oferta de opciones deportivas, expandirán la oferta deportiva a todas las zonas de nuestro estado y crearán redes de jóvenes y padres de familia de integración.*

*Las familias coahuilenses requieren opciones sobre las diferentes rutas que existen para seguir desarrollándose dentro del deporte. (Becas deportivas, centros de alto rendimiento, olimpiadas, etc.)*

*Y esto llevará a un círculo virtuoso de generar semilleros de deportistas, crear una atmosfera deportiva en la que la generación de mayor antigüedad sirva de ejemplo para la generación que viene detrás y dotar a niños y jóvenes de escasos recursos la oportunidad de integrarse a un grupo u organización.****”***

**TERCERO. –** Una vez analizada la Proposición con Punto de Acuerdo planteada, es importante señalar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2023 dentro del eje rector relativo al Desarrollo Social Incluyente y Participativo, se encuentran los objetivos específicos para fomentar el deporte en nuestro Estado, y conseguir la inclusión para todos los sectores de la población, entre los cuales podemos destacar los siguientes:

* Fomentar la práctica del deporte y la activación física como una medida fundamental para el desarrollo personal, el entrenamiento y el cuidado de la salud.
* Renovar el marco jurídico del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila para modernizar y focalizar los aspectos legales que fundamenten las acciones del mismo para fortalecer la cultura del deporte en el estado
* Mejorar la infraestructura deportiva especializada y la de convivencia social, particularmente en sectores marginados.
* Propiciar la integración de los diferentes estratos de la sociedad para integrarlos en programas de activación física y combate al sedentarismo.
* Intensiﬁcar el apoyo al deporte de alto rendimiento, tanto con instalaciones, como con entrenadores y equipos.
* Instrumentar un esquema transparente de asignación de becas de acuerdo con la importancia del evento deportivo.
* Aumentar la participación de deportistas coahuilenses en las competencias estatales, regionales, nacionales e internacionales.
* Diseñar un programa de capacitación y certificación de entrenadores deportivos.
* Crear un programa de escuelas de iniciación y especialización deportiva.
* Fortalecer la integración de personas con discapacidad a programas de desarrollo deportivo.
* Implementar el Registro Estatal del Deporte.
* Impulsar un programa deportivo que fomente la cohesión social y participación ciudadana para el desarrollo comunitario.
* Fortalecer el programa de deporte paralímpico y de adultos mayores.

Además de lo anterior es importante señalar que se encuentra publicado el Programa Especial de Deporte y Activación Física 2017-2023, mismo que fue elaborado coordinadamente por la Secretaría de Educación, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo del Estado, siendo el instrumento que guíe la acción gubernamental, tendiente a lograr que el deporte y la activación física sean medios que favorezcan el desarrollo integral y eleven la calidad de vida de los coahuilenses.

El objetivo general de dicho programa es lograr que el deporte y la cultura física estén al alcance de todos los sectores de la población.

Sin embargo, ante la pandemia que se vive actualmente desde el mes de marzo se estableció dentro del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID 19, la suspensión de eventos masivos de todo tipo entre ellos los deportivos, y ante el creciente número de contagios que se está generando, existe la incertidumbre de la fecha en que se podrán retomar estas actividades.

De lo anterior esta Comisión estima pertinente replantear la solicitud propuesta por el Diputado Emilio de Hoyos Montemayor, en el sentido de que una vez que pase la contingencia sanitaria y se retomen las actividades escolares presenciales y deportivas, el Instituto Estatal del Deporte coordine acciones necesarias para desarrollar las actividades que favorezcan el fortalecimiento de la cultura y oferta del deporte en cada municipio del Estado de Coahuila, en base a los objetivos establecidos en el Programa Especial de Deporte y Activación Física 2017-2023.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se estima procedente enviar un atento exhorto al Instituto Estatal del Deporte con el objeto de que una vez que las actividades deportivas sean reactivadas en nuestro Estado, coordine las acciones necesarias para establecer un programa que permita la creación de escuelas deportivas en los 38 Ayuntamientos del Estado, que favorezcan el fortalecimiento de la cultura y oferta del deporte en cada localidad del Estado de Coahuila, en base a los objetivos establecidos en el Programa Especial de Deporte y Activación Física 2017-2023.

**SEGUNDO.-** Se estima procedente exhortar al Instituto Estatal del Deporte a celebrar una reunión de trabajo con la Comisión de Deporte de este H. Congreso del Estado a fin de escuchar las propuestas en materia de infraestructura y fomento deportivo para el 2020 y la inclusión del deporte como política pública para el desarrollo social e inclusión.

**TERCERO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS**

**Y ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA LXI LEGISLATURA.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**COORDINADORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **SECRETARIO** |  | **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

**ACUERDO** de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, relativo a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2019, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta a las autoridades educativas a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares y el presupuesto para la operación de los USAERS en todo el Estado y la Región Carbonífera”.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó a la Coordinadora de esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta a las autoridades educativas a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares y el presupuesto para la operación de los USAERS en todo el Estado y la Región Carbonífera”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

*“Coahuila es fuerte por enfrentar de forma propositiva los problemas que se le presentan. Para nadie es desconocida la problemática a nivel estatal respecto a problemas de salud mental y los vemos en casa, en la escuela y en la comunidad.*

*Recientemente aprobamos una legislación para dotar de herramientas al estado y la ciudadanía en materia de prevención del suicidio.*

*Hoy retomo el tema de la salud mental como fundamental para el desarrollo humano de todos nosotros.*

*Hace algunos meses planteaba la necesidad de fortalecer la cobertura de psicólogos con especialidad educativa en todo el sistema educativo estatal, con la finalidad de atender a la comunidad escolar de Coahuila.*

*“¿Qué define específicamente a un psicólogo educativo respecto a otros profesionales del ámbito escolar o educativo? Ya que la Psicología es la ciencia del comportamiento, consecuentemente, el psicólogo educativo es el profesional que analiza, evalúa e interviene, desde el conocimiento de los principios y de la evidencia científica psicológica, los problemas educativos actuales. Por tanto, es el profesional que trabaja con conocimientos y modelos científicos explicativos a la hora de evaluar e intervenir. Es el especialista que ha sido formado en los procesos de desarrollo (Psicología del desarrollo) y del aprendizaje humano (Psicología del aprendizaje), así como, en los procesos de enseñanza (Psicología de la instrucción). Además, su ámbito profesional de trabajo son los contextos educativos formales (escuela), no formales (familia, organizaciones) e informales (tiempo libre, TV, cine, internet, asociaciones…) para favorecer la salud mental y el bienestar psicológico”, plasma el catedrático de Psicología Evolutiva en España, Jesús De la Fuente Arias en su artículo “Relevancia del psicólogo educativo como profesional especializado: funciones específicas”.*

*El artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Coahuila en su fracción XVII establece que se tienen como obligaciones:*

*X VII. Fomentar las medidas necesarias para la protección y cuidados de las y los alumnos, para preservar su integridad física, emocional, psicológica y social, propensas a detectar, prevenir y evitar conductas violentas entre ellos, que atente en contra de su desarrollo y competencias; individuales, sociales e integridad física, sobre una base de respeto y dignidad.*

*XVIII.- Promover, fomentar e impulsar en los educandos una cultura de paz, a través de técnicas de mediación y prácticas restaurativas para la solución de conflictos derivados del ámbito escolar.*

*El artículo 36 de la Ley de Educación establece: La educación básica tiene como propósito formar y desarrollar en los educandos las competencias necesarias para favorecer el desarrollo armónico e integral de su personalidad, su comprensión del medio ambiente e incorporación a la vida social.*

*La Secretaría de Educación del Estado diseñará las estrategias necesarias para articular pedagógicamente los niveles educativos que comprende la educación básica tomando en consideración la normatividad aplicable que en este rubro señale la autoridad federal. En el servicio educativo destinado a menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su persona y la aplicación de la disciplina escolar compatible con su edad.*

*Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos y la obligación que tienen al estar encargados de la custodia de los menores educandos, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.*

*De acuerdo con información de profesores de las Escuelas Primarias y Secundarias de la Región Carbonífera, cada vez son más los casos donde los maestros solicitan la participación de psicólogos para la valoración de los diferentes casos que se presentan en las escuelas. Entre ellos violencia, bullying, hiperactividad o déficit de atención.*

*Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) es una instancia técnico operativa de apoyo a la atención de alumnos de necesidades educativas y/o discapacidad integrados a las escuelas de educación básica mediante la orientación personal y docente.*

*Su misión ha sido favorecer el acceso y la permanencia de las niñas, los niños y jóvenes que presentan necesidades especiales en el Sistema Educativo dando prioridad a aquellos que tienen alguna discapacidad.*

*El punto es que los USAER tienen una carga de trabajo excesiva, en primer lugar porque atienden a la población objetivo para quienes fueron creados y segundo porque están atendiendo problemas de salud mental comunes en los niños y jóvenes de educación básica como el hiperactividad, violencia y algunos casos esquizofrenia.*

*“En el mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un alto costo social que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico o cultura. La enfermedad mental participa del 13% de la carga global de enfermedad, constituye una de las tres primeras causas de mortalidad de personas entre 15-35 años, esto último influido por el suicidio”, destaca el informe de Salud Mental en México*

*El suicidio es la segunda causa de muerte a escala mundial más común entre los jóvenes. Y de acuerdo al informe una influencia mutua entre los trastornos mentales y otras enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la infección por el VIH y el SIDA.*

*“Asimismo, también hay una importante aparición conjunta de los trastornos mentales y los trastornos por abuso de sustancias. Considerados en conjunto, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias suponen un costo elevado para los resultados en materia de salud”, explica.*

*En el caso de niños y adolescentes según los reportes epidemiológicos en el mundo, la prevalencia de enfermedad mental es 20%, de este porcentaje, entre el 4 y 6% requiere intervención clínica, pero pocos tienen acceso a servicios, y aunque la falta de servicios especializados es un fenómeno mundial, la región de las Américas muestra una brecha del 26% en los servicios de salud mental para niños y adolescentes.*

*Recientemente el Gobierno Federal destacó que urgente fortalecer acciones preventivas en materia de salud mental. Si bien las instituciones de salud en todo el país están haciendo esfuerzos preventivos dando cobertura y atención psicológica, es necesario fortalecer la acción preventiva.*

*De acuerdo con un estudio realizado por especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, uno de cada cuatro mexicanos, entre 18 y 65 años, ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco, de los que lo padecen recibe tratamiento. Entre las enfermedades mentales más comunes está la depresión, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima.*

*Es importante centrarnos en lo que sucede en el mundo para tomar acciones*

*Locales, en Coahuila.*

*De acuerdo con la OMS, más de 800 mil personas se suicidan al año a nivel mundial, lo que equivale a una muerte por suicidio cada 40 segundos. Según las estadísticas de mortalidad de Inegi, durante 2016, Coahuila registró 171 casos de suicidios, cifra que posicionó al estado dentro de las 15 entidades con mayor número suicidios en el país.*

*Fuente:*[*https://newsweekespanol.com/2018/10/datos-y-retos-de-la-salud-mental-en-coahuila/*](https://newsweekespanol.com/2018/10/datos-y-retos-de-la-salud-mental-en-coahuila/) *Publicado por: NWCOAHUILA.*

*En el caso de nuestra entidad el Sistema Educativo Estatal en Educación básica se tiene una matrícula estimada de 900 mil alumnos en 5201 planteles de acuerdo al Programa Estatal de Educación.*

*Los USAER que atienden en las cinco regiones de Coahuila son insuficientes para una cobertura adecuada.*

*Aunque el Sistema Educativo Estatal hace esfuerzos por capacitar a docentes y trabajadores de la educación en orientación tanto a alumnos y padres de familia a veces son insuficientes, de la misma manera el personal de psicólogos adscritos a las zonas escolares.*

*Sabemos el sistema educativo será siempre socorrido para actuar de manera proactiva en la detección y análisis de la problemática social. Sin embargo en la mayoría de los casos es en la comunidad escolar dónde se pueden detectar problemas que como autoridades podemos prevenir.****”***

**TERCERO. –** Una vez analizada la Proposición con Punto de Acuerdo planteada, es importante señalar que en el mes de diciembre el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una iniciativa a la Ley Estatal de Educación, misma que fue dictaminada en esta Comisión, y cuyo objetivo principal es la prevención desde los centros escolares del problema del suicidio.

En la misma se aprobó que los trabajadores sociales especialistas en psicología sean quienes en primera instancia dentro de los centros educativos presten la atención debida y el seguimiento al avance que pueda ir reportando un alumno con ideas suicidas.

La actual Legislatura ha coincidido en todo momento en apoyar aquellas acciones que representen el fortalecimiento del sistema educativo y que garanticen el bienestar de todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos.

Por ello tal como fue planteado en la Iniciativa a la Ley Estatal de Educación que presentó el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, las y los profesores y trabajadores sociales especialistas en psicología son esenciales para la prevención del suicidio ya que son junto a la familia quienes conviven la mayor parte del tiempo con las niñas, niños y adolescentes en su desarrollo.

Con dicha iniciativa quedo estipulado dentro del Artículo 36 de la Ley Estatal de Educación que “todas las escuelas de educación básica dentro del Sistema Educativo Estatal, podrán contar, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, con un trabajador social especialista en psicología, o bien, con un área especializada en la materia, con el objetivo de cuidar, atender e informar a los educandos, a fin de que estos puedan ejercer y desarrollar sus habilidades intelectuales, sociales y emocionales”.

De lo anterior podemos advertir que con dicha iniciativa existe la posibilidad de que las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), no se vean sobrepasadas en su capacidad de atender a la población.

Sin embargo y ante la contingencia sanitaria que se ha dado en lo que va de este año las clases escolares presenciales han sido suspendidas, por lo que no es posible detectar los problemas de salud mental que pudiesen surgir en el alumnado dentro de los centros escolares.

De lo anterior esta Comisión estima pertinente replantear la solicitud propuesta por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, en el sentido de que una vez que pase la contingencia sanitaria y los centros escolares retomen las clases presenciales la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, coordinen acciones en la medida de sus posibilidades para prevenir y atender problemas de salud mental en los centros escolares de educación básica de todo el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se estima procedente enviar un atento exhorto a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud del Estado con el objeto de que una vez que los centros escolares retomen las clases presenciales, coordinen acciones en la medida de sus posibilidades para ampliar el personal de psicólogos que atienden los centros escolares, con la finalidad de prevenir y atender problemas de salud mental en las instituciones educativas de educación básica de todo el Estado.

**SEGUNDO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS**

**Y ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA LXI LEGISLATURA.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**COORDINADORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **SECRETARIO** |  | **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

**ACUERDO** de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa”.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 23 de abril de año en curso, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa”.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó a la Coordinadora de esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

*“Como ya sabemos, durante este periodo, en el cual se ha declarado una pandemia, se han implantado distintas estrategias encaminadas a prevenir y garantizar que los niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estén protegidos e informados respecto el Covid-19.*

*Por su parte la Secretaría de Educación Pública Federal, a fin de evitar la propagación del virus, siendo el principal objetivo cuidar la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ha optado por decretar un receso escolar, comprometiéndose a recuperar el aprendizaje de los contenidos para lograr cumplir con los planes y programas establecidos durante dichos días.*

*Evidentemente toda la sociedad se ha esforzado para acatar todas las medidas y recomendaciones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, a fin de contener las afectaciones de dicho virus.*

*Al inicio de la propagación del virus, el Titular de la Secretaría de Educación Pública solicitó se instalara una comisión de salud dentro de los consejos de Participación Escolar, con el objetivo de que se acataran las indicaciones sanitarias, se establecieran filtros en escuelas y contrarrestar la propagación de la pandemia.*

*Luego en el Acuerdo número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación, se tomó la decisión de suspender clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública*

*Consecuentemente la SEP estableció que, para lograr contener el impacto masivo, la comunidad educativa que es conformada por diversos sectores en materia de investigación y enseñanza a nivel nacional implementaría un sistema de educación a distancia electrónica y digital, para la recuperación de contenidos de aprendizaje.*

*Sin embargo, además de los cierres de las escuelas, necesitamos implementar nuevas estrategias para mitigar los efectos negativos al aprendizaje y bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en consecuencia de dichas medidas, haciendo posible efectuar algunos métodos de aprendizaje a distancia, ya sea estableciendo estrategias de educación en línea o emitir radialmente contenido académico, siempre tomando en cuenta que dichos receptores cuenten con los servicios básicos para poder obtener dicha información.*

*La UNICEF ha exhortado a escuelas, para proporcionar educación a distancia, pero sobre todo un apoyo integral, en el cual se les instruya información vital sobre la prevención de dicho virus, pero también ha considerado necesario otras medidas para facilitar el apoyo a la salud mental de la familia.*

*Debido a lo anteriormente señalado, consideramos necesario hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública Federal para que en su página oficial publique material digital, ya sea libros, o material didáctico, a fin de fortalecer y facilitar el aprendizaje desde casa, ya que es imprescindible efectuar planes sólidos para que garantizar la continuidad del aprendizaje, implementando métodos de educación a distancia, pero sobre todo se garantice el derecho a la educación, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México.*

*Actualmente hay muchos niños, que no se les ha dado algún programa o tipo de seguimiento a su educación por falta de recursos para utilizar internet, ante ello requerimos se garantice la educación mediante estrategias, no solo en línea sino diversos medios de comunicación, durante esta contingencia sanitaria, hasta que los centros educativos sean reabiertos.****”***

**TERCERO. –** Esta Comisión de Educación está de acuerdo con el planteamiento realizado por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, sin embargo, una vez que analizamos lo vertido por la promovente, hemos verificado que en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública Federal ya se encuentran actualizados los contenidos, programas, libros de texto y diversos materiales disponibles para los alumnos de los diferentes niveles escolares.

No dudamos que al momento que se elaboró la Proposición con Punto de Acuerdo que ahora nos ocupa, la página oficial quizá no contaba con la totalidad del material para cada grado escolar.

Sin embargo, estamos conscientes que para el nuevo ciclo escolar 2020-2021, se deberá redoblar esfuerzos, ya que debido a la pandemia aún prevalece la incertidumbre de cuando se podrá retomar las clases presenciales en cada uno de los niveles educativos, por ello se considera pertinente modificar la solicitud vertida en el documento en cuestión, para que se solicite atentamente a la Secretaría de Educación Pública Federal continúe reforzando los programas de educación en línea, con la finalidad de que se encuentren actualizados al momento de iniciar el nuevo ciclo escolar.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se envíe un atento exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal a efecto de que se continúen realizando las acciones necesarias para reforzar la educación en línea y sean actualizados los programas y materiales digitales ante el inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021, con la finalidad de garantizar la educación en cada uno de los niveles escolares durante la pandemia.

**SEGUNDO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS**

**Y ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA LXI LEGISLATURA.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**COORDINADORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **SECRETARIO** |  | **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, RECONSIDERE LA CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DE COMPRA DE CARBÓN A PROVEEDORES MINEROS DE LA REGIÓN CARBONÍFERA DE NUESTRO ESTADO, A FIN DE EVITAR EL DESPIDO MASIVO DE TRABAJADORES Y UNA DESESTABILIZACIÓN ECONÓMICA EN COAHUILA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

La actividad minera representa para Coahuila una de las principales fuentes económicas, siendo el motor que impulsa el desarrollo de las regiones centro, norte y carbonífera del Estado.

La región carbonífera del Estado, integrada por los municipios de Sabinas, Juan de Sabinas, Muzquiz, Juárez y Progreso, basa su actividad económica en la producción, explotación y comercialización del carbón mineral, cuyas reservas representan el 95% del total de este mineral en México.

De ahí una parte muy importante de las fuentes de empleo están directa e indirectamente relacionadas con la extracción del carbón mineral. Esta actividad es el eje fundamental de la economía regional en nuestro Estado.

Este fin de semana, con preocupación nos enteramos de la terminación anticipada y de forma unilateral realizó la CFE a contratos de suministros de carbón que tenía celebrados con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila, S.A de C.V. (CICSA), filial de Altos Hornos de México (AHMSA), cuya vigencia de acuerdo con los comunicados eran de 3 años, de 2019 a 2021, para la compra de un total de 14.7 millones de toneladas de carbón.[[25]](#footnote-25)

Las reacciones en diversos medios y comunicados de las partes contratantes involucradas no se hicieron esperar, hemos visto la postura del corporativo Altos Hornos de México[[26]](#footnote-26) con respecto a su filial CICSA y las consecuencias que traerá la cancelación de estos contratos, anunciando el posible despido masivo de trabajadores y las acciones legales que podrían emprenderse; y por otro lado, los comunicados oficiales de la Comisión Federal de Electricidad[[27]](#footnote-27), dando a conocer a la opinión pública las razones legales y económicas que se consideraron para la toma de esta lamentable decisión.

**De acuerdo con las cifras dadas a conocer en diversos medios de comunicación**[[28]](#footnote-28)**, esta cancelación de los contratos de CFE con las subsidiarias de AHMSA para el abasto de carbón llevará al despido de más de dos mil trabajadores,** esto sin contar con los despidos de otras empresas proveedoras.

En este año, todos hemos sido testigos y hemos padecido en mayor y menor medida las consecuencias que, en todos los ámbitos de nuestra vida, ha impactado la pandemia ocasionada por el Covid19, y los habitantes de las regiones centro y carbonífera de nuestro Estado no son ajenos a estos estragos.

La ya mermada economía de esta parte del territorio Coahuilense se verá seriamente afectada aún más, por esta decisión de cancelación unilateral de contratos de suministro de carbón.

Sin entrar al fondo de esta controversia y sin que esto pretenda ser una defensa legal a una empresa particular, apelamos a la política social que el Gobierno Federal ha venido anunciando desde sus inicios, respecto a la protección de los menos tienen y el cuidado de fuentes de empleo para los más necesitados.

Es por ello, por lo que exhortamos al Gobierno de la República a través de la Comisión Federal de Electricidad para que se reconsidere su decisión de cancelar los contratos previstos de compra de carbón a proveedores del Estado, pues esto traerá graves consecuencias para la economía de nuestro Estado, pues representaría la pérdida de más de 25 mil empleos, considerados los directos, indirectos por bienes y servicios, los de las propias plantas de la CFE que en mediano plazo se cerrarán y los de las empresas medianas y pequeñas de la Región Carbonífera que ya no podrán surtir, esta situación de no encontrarse una solución, resultará sería catastrófico para la economía de Coahuila.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.- ESTE H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, RECONSIDERE LA CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DE COMPRA DE CARBÓN A PROVEEDORES MINEROS DE LA REGIÓN CARBONÍFERA DE NUESTRO ESTADO, A FIN DE EVITAR EL DESPIDO MASIVO DE TRABAJADORES Y UNA DESESTABILIZACIÓN ECONÓMICA EN COAHUILA.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2020.**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

|  |
| --- |
|  |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, RECONSIDERE LA CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DE COMPRA DE CARBÓN A PROVEEDORES MINEROS DE LA REGIÓN CARBONÍFERA DE NUESTRO ESTADO, A FIN DE EVITAR EL DESPIDO MASIVO DE TRABAJADORES Y UNA DESESTABILIZACIÓN ECONÓMICA EN COAHUILA.

**H. PLENO CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la diputada Gabriela Garza Galván conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 179, 180, 181, 182 de la LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA, con objeto de que este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, exhorte al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para que agilicen los trámites correspondientes, para la liberación y distribución a estados y municipios del fondo de Estabilización la cantidad de ***60 mil millones de pesos***, ya anunciado, Coahuila le corresponderían poco más de ***1,400 millones de pesos*** y de estos, ***280 millones*** corresponderían a los municipios, ya que dichos recursos son necesarios para implementar las acciones para atender la pandemia en el momento más álgido de la contingencia, de igual forma, se envié un atento exhorto al Lic. Blas José Flores Ávila, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para hacer suya esta petición, y sumar de esfuerzos por un objetivo común; lo anterior con base en la siguiente:

**Exposición de Motivos**

En diversas ocasiones durante nuestro encargo, he acudido ante esta Tribuna, y ante este Honorable Congreso, buscando soluciones a los problemas que aquejan a nuestra entidad, y en el tema de las finanzas públicas de nuestro estado, a través de pronunciamientos, múltiples puntos de acuerdo, y la participación activa en la comisión de Finanzas de este Congreso del estado a la cual pertenezco he sido insistente al señalar y criticar las malas acciones realizadas por pasadas administraciones y señalando puntualmente algunos puntos del rumbo que va tomando esta administración, he exhortado al secretario de Finanzas a cambiar el rumbo de su actuar, a reorientar el gasto y demostrar con acciones la intención de eficientar y sanear las finanzas Públicas de Coahuila.

He traído ante esta tribuna y ante este Honorable Congreso, postura que busca eficientar el gasto, prever la difícil situación económica que enfrentaremos no solo por la pandemia de COVID 19, sino además por las variables económicas mundiales con el precio del petróleo, y la situación que ha prevalecido en el gobierno federal.

El 2019, fue definitivamente un año difícil para las entidades federativas y municipios, en Coahuila, los ajustes negativos a las Participaciones Federales del Ramo 28 sumaron la cantidad de ***1,399 millones de pesos***, de los cuales ***1,119 millones*** correspondieron al estado y ***280 millones*** a los 38 municipios del estado.

Del total de los ***1,399 millones***, ***229 millones*** se descontaron ya en este año de las participaciones 2020, afectando con esto de manera importante los ingresos del estado y municipios en el presente Ejercicio Fiscal 2020.

La pandemia del Coronavirus, no solo ha afectado al estado y municipios en el tema de la Salud, también se están viendo afectados en sus recursos propios y que ante la inamovilidad por la contingencia, la actividad económica, la recaudación de impuestos por parte del gobierno federal, será complicado cumplir con las metas en la ministración de recursos federales, que para el estado representan hasta el ***85 por ciento*** de sus ingresos totales y entre el ***60*** y **97 por ciento**, en el caso de los municipios.

Aunado a lo anteriormente comentado, el pasado mes de Abril el Gobierno Federal informo que llevaría a cabo una reducción en las Participaciones federales por ***89 mil millones de pesos***, con lo que Coahuila se vería afectado en 2 mil 100 millones de pesos aproximadamente, incluidos los poco más ***420 millones*** que afectarían de igual forma a los 38 municipios.

Ante todo esto, El Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, el 27 de Mayo pasado, en su conferencia matutina, informo que el gobierno federal dispondrá del fondo de Estabilización la cantidad de 60 mil millones de pesos, para distribuirlos a estados y municipios, recursos que según la norma se entregan trimestralmente, pero indico, que Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaria de Hacienda, modificaría las reglas para que se entregara en una exhibición, y que esto fuera lo más pronto posible.

La distribución se llevaría a cabo bajo las mismas fórmulas para la ministración de las Participaciones Federales, por lo que a Coahuila le corresponderían poco más de **1,400 millones** de pesos y de estos, ***280 millones*** corresponderían a los municipios.

Por tanto, con el conocimiento que los recursos en mención se encuentran disponibles, exhortamos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez para que agilicen los trámites correspondientes, toda vez que la necesidad de recursos que están demandando las acciones para atender la pandemia en el momento más álgido de la contingencia, además de la baja en la recaudación de recursos propios y federales. De igual forma, exhortamos al Lic. Blas José Flores Ávila, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para hacer suya esta petición, y sumar de esfuerzos por un objetivo común

Insisto en mi postura y en mi obligación como legisladora no solo señalar y criticar si no, en lo que sea benéfico para el pueblo de Coahuila apoyar y contribuir al manejo eficiente de los recursos, marcar la pauta para el rescate financiero del estado, a la transparencia y realidad de las finanzas públicas, desde mi trabajo legislativo. Tenemos un deber permanente, tenemos un deber histórico.

Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:

**Proposición con Puntos de Acuerdo**

Que, por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.

**PRIMERO**. Que este Congreso del estado de Coahuila envié un atento exhorto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para que agilicen los trámites correspondientes, para la liberación y distribución a estados y municipios del fondo de Estabilización la cantidad de **60 mil millones de pesos**, ya anunciado, Coahuila le corresponderían poco más de **1,400 millones de pesos** y de estos, **280 millones** corresponderían a los municipios, ya que dichos recursos son necesarios para implementar las acciones para atender la pandemia en el momento más álgido de la contingencia.

**SEGUNDO**. - Se envíe un atento exhorto al Lic. Blas José Flores Ávila, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para hacer suya esta petición, y sumar de esfuerzos por un objetivo común.

Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**ATENTAMENTE**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 2A DE JUNIO DE 2020**

DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON OBJETO DE QUE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EXHORTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, AL SECRETARIO DE HACIENDA, ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, PARA QUE AGILICEN LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, PARA LA LIBERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A ESTADOS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN LA CANTIDAD DE *60 MIL MILLONES DE PESOS*, YA ANUNCIADO, COAHUILA LE CORRESPONDERÍAN POCO MÁS DE *1,400 MILLONES DE PESOS* Y DE ESTOS, *280 MILLONES* CORRESPONDERÍAN A LOS MUNICIPIOS, YA QUE DICHOS RECURSOS SON NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA ATENDER LA PANDEMIA EN EL MOMENTO MÁS ÁLGIDO DE LA CONTINGENCIA, DE IGUAL FORMA, SE ENVIÉ UN ATENTO EXHORTO AL LIC. BLAS JOSÉ FLORES ÁVILA, SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA HACER SUYA ESTA PETICIÓN, Y SUMAR DE ESFUERZOS POR UN OBJETIVO COMÚ.**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA POR EL QUE** **SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y AL SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, DISPONGAN DE UN PLAN QUE GARANTICE MEJORES CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS DEL PERSONAL DE SALUD PÚBLICO O PRIVADO QUE VALIENTEMENTE HA ENFRENTADO LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN EL PAÍS.**

**DIPUTADO PRESIDENTE.**

**H. Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura**

**PRESENTE.**

El Suscrito Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Partido Unidad Democrática de Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Las y los médicos y enfermeros, así como todos aquellos que laboran en los servicios de salud pública, representan una parte esencial en la columna vertebral de nuestra sociedad. En ellos depositamos lo más preciado que tenemos; nuestra vida y su motor diario, la salud. ¿Quién de nosotros no tiene una experiencia basada en el agradecimiento a un médico o enfermera? Cuando nuestra vida o las de nuestros seres queridos están en juego, no hay dinero que valga. El valor que le damos a su servicio es incalculable, no se paga con dinero. No cabe duda, debemos de reconocer en los servidores públicos del sector salud un sacrificio extraordinario. La carga de trabajo nunca es proporcional con el ingreso que perciben.

Hoy en día son ellos y ellas el primer frente de la batalla ante la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Lo son frente a la pandemia misma y ante el resto de los padecimientos y necesidades que se agravan por la presencia del coronavirus. Auténticos héroes y heroínas que arriesgan su vida por lo demás, por nosotros, por ti y por mí.

Y ¿Cómo pagamos este servicio? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad por la carga de trabajo, los desvelos, la exposición a la enfermedad, la propia y la de sus familiares?

A más de tres meses de la contingencia sanitaria en nuestro país, resulta preocupante ver como en algunos centros de salud nuestros médicos y enfermeras no cuentan con el equipo mínimo indispensable para protegerse y hacer frente al enemigo, y sin embargo eso no es un pretexto para que ellos dejen de hacer su tarea en el primer frente de batalla arriesgando la propia vida para salvar la de los demás.

A pesar de los desvelos y riesgos de nuestros héroes, ellos apenas reciben como respuesta social un depósito bancario que apenas alcanza para lo necesario y que está lejos de reflejar la especialización del servicio, los años de educación intensa y el servicio otorgado. Además de mal pagados, estos mexicanos se ven obligados a practicar la caridad, por ser ellos los primeros que enfrentan la realidad de una familia o persona sin los recursos mínimos para adquirir los medicamentos que requieren.

Cada hospital, clínica y consultorio a lo largo y ancho de la República está lleno de estas historias. A todo ello se suma la adversidad que presentan las finanzas públicas, por el inevitable horizonte negativo que en materia económica afecta a todo el mundo. Todo ello en medio de una pandemia con repercusiones negativas históricas.

México tiene personal de salud de clase mundial. Estos además son los servicios más demandados en el mundo entero, particularmente en el mundo en desarrollo. De manera urgente nos urge poner manos a la obra. Basta de administrar la adversidad, basta de apostarle a la resignación. La responsabilidad es nuestra y es ahora. No hacerlo es traicionar nuestra responsabilidad como representantes populares.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo en la vía de urgente y obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

**ÚNICO. La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, exhorta respetuosamente al Presidente de la República, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Director del Instituto de Salud para el Bienestar y al Secretario de Salud Federal, para que, en uso de sus facultades dispongan de un plan que garantice mejores condiciones laborales y económicas, así como bienestar para las familias del personal de salud público o privado que valientemente ha enfrentado la emergencia sanitaria del COVID-19 en el país de manera que:**

**1. Se les otorgue incapacidad inmediata cuando presenten un cuadro respiratorio agudo.**

**2. Se les otorgue una indemnización económica suficiente, pensión y becas a los deudos de quienes lamentablemente perdieron y pudieran perder la vida en el frente de batalla combatiendo el virus COVID-19.**

**3. Que todo aquel personal que haya prestado sus servicios durante la contingencia sanitaria y que no cuente con una base, se haga acreedor a la misma y de ser el caso, se les otorgue pase automático al Sistema Nacional de Residencias Médicas a fin de realizar su curso de especialización médica correspondiente en el Sistema Nacional de Salud.**

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 24 DE JUNIO DE 2020**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A PROMOVER, PROTEGER, RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED), ASÍ COMO A NO REALIZAR NINGUNA ACCIÓN QUE TIENDA A DESAPARECERLO O DISMINUIR SU PRESUPUESTO, FUNCIONES Y/U OPERATIVIDAD.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 21 fracciones VI y VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través de la que se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal Lic. Andrés Manuel López Obrador a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a través del fortalecimiento y la conservación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) así como a no realizar ninguna acción que tienda a desaparecerlo o disminuir su presupuesto, funciones y/u operatividad.

**MOTIVOS DE ESTA PROPOSICIÓN.**

Desde su creación en el año de 2003, el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, CONAPRED, se ha convertido en un órgano de suma importancia para promover la igualdad y prevenir la discriminación tanto en el ámbito público como el privado.[[29]](#footnote-29)

El Consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, el CONAPRED, se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones y desarrollar acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En la actualidad, el consejo depende de la Secretaria de Gobernación y cuenta con autonomía técnica y de gestión así como la independencia necesaria para ejecutar sus actos y resoluciones. Esta independencia y autonomía se ha venido fortaleciendo a través de la participación de ciudadanos libres y comprometidos con la igualdad y la no discriminación.

Si de algo goza el CONAPRED es justamente de credibilidad entre la ciudadanía, pues en ningún momento y a pesar de haber estado bajo el control de cuatro gobiernos de tres partidos diferentes, el consejo nunca ha dejado de ser imparcial, objetivo y trabajar más allá de las posturas y posiciones políticas.

Es por eso que en la actualidad sorprenden las críticas y cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que muchos de ellos son gastos innecesarios o bien se crearon para dar empleo a cercanos de los gobiernos anteriores. Entendemos que en muchos organismos exista o haya existido corrupción, y que se quiera limpiar la misma, pero las medidas deben ser proporcionales y adecuadas.

No se puede desaparecer de un plumazo a un organismo que ha sido fundamental en la lucha contra la discriminación en México, al que miles de personas sobre todo en situación de vulnerabilidad, marginalidad o de grupos minoritarios han acudido para ejercer y exigir sus derechos como lo son las mujeres, las personas indígenas y la comunidad LGBTTTIQ+.

Desde esta tribuna hacemos un atento exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para rectificar sus comentario acerca del CONAPRED y le hacemos un respetuoso llamado para que desde el gobierno federal se promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de todas y todos, a través de acciones que fortalezcan a los organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Desde luego que la corrupción debe combatirse, los recursos deben transparentarse y fiscalizarse, y así tener un mejor cuidado de las instituciones públicas y de quienes las conforman, pero en ningún caso la lucha contra la corrupción debe tomarse como una bandera para retroceder en el avance los derechos humanos sobre todo de las minorías, que son las principales beneficiadas con la existencia del CONAPRED.

Es por estas razones que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar ante esta H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

Misma que solicitamos sea tramitada como de urgente y obvia resolución.

**ÚNICO.-** Se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal Lic. Andrés Manuel López Obrador a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a través del fortalecimiento y la conservación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), así como a no realizar ninguna acción que tienda a desaparecerlo o disminuir su presupuesto, funciones y/u operatividad.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de junio de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 5 SUBCOMITÉS TÉCNICOS REGIONALES COVID-19, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD, LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO, EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE IR ABRIENDO MÁS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS, PARA ACELERAR LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE NUESTRO ESTADO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Graciela Fernández Almaraz, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

A partir del primero de junio se dio por terminada la Jornada Nacional de la Sana Distancia, y con ello se da pasó a la implementación de la Nueva Normalidad, en la que se sigue respetando la sana distancia y garantizando la máxima seguridad sanitaria posible, con ello se continúa exhortando a las personas consideradas como vulnerables, a quedarse en casa.

Sabemos que no se han terminado las medidas de vigilancia sanitaria, ahora pasó a manos de cada entidad federativa la responsabilidad y con ello a las autoridades municipales para una mayor eficacia, respetando la notificación de los niveles de riesgo a través del semáforo que a nivel federal se vigilará, y como lo mencionó el Subsecretario de Salud en una conferencia de prensa:

*“El semáforo está diseñado exprofeso para tener la máxima seguridad sanitaria en el primer momento del desconfinamiento. No queremos tener criterios suaves en este momento. Sí tenemos criterios bajos, laxos, suaves, permisivos, entonces tendríamos un desconfinamiento demasiado acelerado”, (Hugo López Gatell).*

Un elemento clave en esta nueva normalidad o como mencionan algunos, la fase 4 de la epidemia, es que las medidas que se implementan y adoptan se definirán por las autoridades locales y estatales, siempre y cuando se respeten las mencionadas por las del Gobierno Federal.

La nueva normalidad implica que las microempresas, comercios, negocios familiares, empresas nacionales y transnacionales se vean afectados económicamente, algunos de ellos tuvieron que suspender temporalmente sus actividades durante el momento crítico de la emergencia sanitaria, con ello desencadenando una serie de afectaciones para las personas que por dicho cierre han estado perdiendo su empleo.

Es lamentable esta situación, la zona de la Laguna de Coahuila, solo en el mes de abril se han perdido alrededor de 5 mil empleos directos, más de la mitad de los impactados en el empleo se concentran en actividades como la industria de la construcción, servicio de apoyo a negocios y empresas, y en el transporte.

Esto en números de empleados con trabajos fijos, sin tomar en cuenta las personas que se autoemplean y emplean según sea su giro en el entretenimiento y esparcimiento social, así como dueños de salones de fiestas, eventos sociales, quintas, entre otros.

La reapertura económica se ha estado llevando acabo satisfactoriamente, pero nos topamos aún con establecimientos o giros que aún están siendo relegados con dicha activación, tal es el caso de los músicos, de los antros, los bares, los cines, los complejos deportivos, gimnasios y canchas dedicadas a algún deporte. Sabemos que es un gran desafío, pues aún sigue en aumento los índices del COVID-19, pero es distinto en cada región y algunos negocios y comercios pueden reabrir bajo ciertas medidas preventivas o de seguridad.

Nuestra perspectiva es siempre positiva, dado a que se ha empezado a reanudar nuestra economía y algunos comercios, lo cual vislumbra una luz en medio de toda esta turbulenta crisis económica que se ha desencadenado a raíz de la pandemia.

El regreso a nuestra vida normal, tal vez ya no se podrá llevar a cabo como lo realizábamos anteriormente, posiblemente ya no nos volvamos a encontrar con algún evento repleto de personas, o a su 100 por ciento de capacidad, como en los gimnasios y los complejos deportivos, o bien en centros sociales y salones de fiestas con muchos invitados, por eso creemos y tenemos plena confianza de que nuestra sociedad ira respetando y acatando las indicaciones de nuestras autoridades locales, que por región irán habilitando cada vez más espacios para una sana convivencia.

Depende indudablemente de nosotros, como sociedad, el cuidarnos, los unos a los otros, seguir con las indicaciones, utilizar cubre bocas, el lavado constante de manos, evitar el contacto de nuestras manos con el rostro, hemos demostrado una vez más como sociedad mexicana y coahuilenses que sabemos afrontar todos los retos con la cabeza en alto.

Es por eso que atendiendo a innumerables solicitudes recibidas en mi Distrito, solicitamos respetuosamente a las autoridades encargadas de evaluar la posibilidad de reactivar las actividades, para que analicen la factibilidad de que se empiece a reactivar otras actividades, siguiendo en todo momento los lineamientos para la reactivación de las actividades comerciales, económicas y de servicios, y se contemple a los antros, bares, gimnasios, comercios y giros del entretenimiento como lo son payasos, músicos, salones de eventos sociales, quintas, así como toda aquella actividad que hasta el momento no han reactivado sus actividades.

Sabemos que cada región de nuestro Estado cuenta con sus particularidades, es por eso que exhortamos a cada uno de los 5 Subcomités Técnicos Regionales COVID-19, para que en la medida de sus posibilidades, puedan acelerar el avance de la reactivación económica en sus regiones, siempre en coordinación con las autoridades estatales competentes, así como en las diversas cámaras de comercio en su región.

El tema económico, es un factor muy importante, los que se dedican a este tipo de negocios o giros antes mencionados, no han podido realizar su trabajo o emplearse desde el inicio del confinamiento el día 16 de marzo del año en curso, casi ya 3 meses de una inactividad económica, lo que ha perjudicado indudablemente a su economía familiar.

Se han registrado pérdidas económicas que rebasa el millón de pesos por comercios o empleos del giro artístico y del entretenimiento, mismas que duraran meses y en ocasiones hasta años, el lograr recuperarse de esta crisis.

Además de no poder pagar a quienes con ellos conjuntamente desarrollaban sus funciones, en especial los músicos, aquellos que se ganan el pan diario en sus presentaciones, en los diversos lugares de la región, así como en los antros, bares, cantinas y lugares públicos de nuestros municipios del Estado.

El regreso va a depender de lo que determinen las autoridades, es claro, nuestra intención es que se refuercen las acciones que han venido tomando en cada Subcomité Técnico, y me gustaría ir más allá, aunque sabemos que la mayoría de los municipios de nuestro Estado ya lo han hecho, quisiéramos que en la medida de lo posible reforzarán los programas para la inyección de capital de los microempresarios y empresas familiares de nuestro Estado, que ayude a afrontar los problemas económicos, que han obligado a cientos de comercios al cierre total de su establecimiento o negocio, o bien simplemente para su reactivación económica con mercancías indispensables para la comercialización de sus productos, pago de rentas y servicios básicos, o una inyección de capital para poder implementar todos las medidas de higiene y sanitarias que sean necesarias, además de evitar una clausura por el incumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno municipal, estatal y federal.

Ayudados además por los planes y estrategias que hasta el momento ha implementado nuestro gobernador del Estado el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, lograremos y podremos afrontar esta afectación a las familias y negocios de nuestro estado, se reactivará la economía, vigilaremos y respetaremos la salud de nuestra ciudadanía.

Y todo esto será por el bien de Coahuila, por la reactivación económica de miles de familias que han sido perjudicadas por este virus, sabemos que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta epidemia, y estamos seguros que lo estamos haciendo bien, y lo seguiremos haciendo convencidos de que lo más valioso que existe que es la vida.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 5 SUBCOMITÉS TÉCNICOS REGIONALES COVID-19, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO, EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE IR ABRIENDO MÁS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS, PARA ACELERAR LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE NUESTRO ESTADO.**

**A T E N T E M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Junio 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 5 SUBCOMITÉS TÉCNICOS REGIONALES COVID-19, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO, EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE IR ABRIENDO MÁS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS, PARA ACELERAR LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE NUESTRO ESTADO.

**H. PLENO DEL CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que este H. Pleno, solicite al Fiscal General de Estado que, a la brevedad, inicie de oficio las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad del ex gobernador Jorge Torres en la probable comisión de delitos de índole financiero en perjuicio de la administración pública, de acuerdo a su confesión en Estados Unidos; lo anterior con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

Este grupo parlamentario ha cuestionado en diversas ocasiones la falta de voluntad de las autoridades locales para investigar y procesar al ex gobernador Jorge Torres. Cuando fue detenido para ser extraditado a Estados Unidos, los cuestionamientos fueron entre otros, los siguientes:

En todo el tiempo que estuvo preso en México ninguna autoridad del estado de Coahuila se apersonó en la Fiscalía General de la República para entrevistarlo, tomarle declaración, conocer los motivos por los que los norteamericanos le iniciaron proceso, etc. Nada. Ni siquiera les dio “curiosidad”, y eso que se trata de un ex gobernador del estado, es decir, hasta de oficio lo deberían investigar en Coahuila. Las razones para hacer sobran, destacando:

I.- Se le vincula a Javier Villarreal y los múltiples delitos que se imputan a este, incluyendo lavado de dinero, tráfico de dinero en efectivo entre naciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros.

II.- Está vinculado no solo a los delitos antes mencionados, sino a la megadeuada. Es decir, vinculado a dos temas totalmente distintos: Los delitos que imputan en Estados Unidos y los que se refieren al pasivo ilegalmente contratado por el estado.

III.- El afán de las autoridades del estado queriendo dar a entender que su fortuna es legítima no concuerda con la realidad, no se han dado a conocer de forma pública la o las investigaciones que hayan determinado lo legal de su fortuna, y en el mejor de los casos, son simples afirmaciones sin fundamento de las autoridades locales.

IV.- Decir que su fortuna es legítima, por eso nadie lo busca en Coahuila, es la más absurda de las contradicciones; puesto que, de ser legítima su fortuna, entonces no estaría siendo procesado en Estados Unido por todos los delitos ya señalados.

Hace días, el ex gobernador del estado se declaró culpable del delito de lavado de dinero en Estados Unidos, con la finalidad, se dice, de lograr ciertos beneficios penitenciarios, por medio de acuerdos con la fiscalía del caso.

De acuerdo a diversas fuentes, el fiscal Ryan K. Patrick informó que Torres admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila.

Este tema cierra una etapa, una primera etapa, de algo que ha sido de gran oscuridad para los coahuilenses, un verdadero himno a la impunidad y a la corrupción. El caso de Jorge Torres, desde el primer día dejó en claro la total falta de voluntad de las autoridades de la pasada administración para investigarlo y sancionarlo. Nadie se explica cómo es que un ex gobernador del estado, con ficha roja de Interpol desde 2014, recibía trato de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de “aquí no pasa nada”. Y lo mismo de parte de la PGR.

Incluso se llegó al colmo de afirmar que Jorge Torres su fortuna era legítima por haber recibido una herencia de tres millones de dólares de parte de su padre.

Los delitos cometidos por el ex gobernador y por Javier Villarreal en Estados Unidos se basan en que son delitos que se iniciaron en México, pues acá es donde obtuvieron el dinero mal habido, y continuaron en territorio estadounidense, ya que allá realizaron las conductas siguientes:

A) Cruzaron dinero en efectivo por la Frontera, sin declararlo, tráfico de dinero en efectivo.

B) Invirtieron dinero en grandes sumas en bancos norteamericanos, y a vez triangularon inversiones a paraísos fiscales como las Bermudas, sin acreditar su legal procedencia, con lo que se configura, de acuerdo a las leyes de ellos, la probable comisión de delitos como: lavado de dinero, fraude a la banca (americana), operaciones con recursos de procedencia ilícita, simulación de empresas e inversiones y otros.

C) Se trata de delito continuos y conexos, al ser conductas que empezaron en México, y se consumaron en Estados Unidos.

El hecho de aceptar sobornos para asignar contratos de obra pública implica la comisión de diversos delitos, atendiendo a la legislación penal de la época, hablamos de: Tráfico y Uso de Influencias, Enriquecimiento Ilícito, Peculado grave y Negociación Ilícita.

Aún faltan por saberse muchas cosas, pero, estamos limitados como siempre a la distancia y a la negativa de las autoridades locales y federales para actuar en consecuencia; sin embargo, esta vez ya no tienen pretexto al existir el reconocimiento explícito del exgobernador.

Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:

**Proposición con Puntos de Acuerdo**

**Que, por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**Único. - Este H. Pleno, solicita al Fiscal General de Estado que, a la brevedad, inicie de oficio las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad del ex gobernador Jorge Torres en la probable comisión de delitos de índole financiero en perjuicio de la administración pública, de acuerdo a su confesión en Estados Unidos.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 párrafo segundo de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

*ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de junio de 2020**

DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACIERDO CON OBJETO DE QUE ESTE H. PLENO, SOLICITE AL FISCAL GENERAL DE ESTADO QUE, A LA BREVEDAD, INICIE DE OFICIO LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DEL EX GOBERNADOR JORGE TORRES EN LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS DE ÍNDOLE FINANCIERO EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A SU CONFESIÓN EN ESTADOS UNIDOS.**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES Y EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRÍGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”, DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA; CONJUNTAMENTE CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; Y “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”; ASÍ COMO LA DIPUTADA INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO”, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EL DIPUTADO INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO”, Y EL DIPUTADO INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”, PARA EXHORTAR A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL CARBÓN DE PEQUENOS PRODUCTORES DE COAHUILA.**

**DIPUTADO PRESIDENTE. –**

**H. Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura**

**PRESENTE. -**

Su servidora Zulmma Verenice Guerrero Cázares con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

La política energética de nuestro país se encuentra en una etapa de transición con el gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta transición ha generado cambios, pero también ha llevado a incertidumbre y expectativa a todo el sector energético.

Y aunque el primer mandatario del País ha rechazado el modelo económico de sexenios anteriores y advirtió en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que tendría un enfoque de rescate de empresas nacionales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apenas se están dando algunas definiciones.

*“En ese espíritu, resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable situación de abandono y saqueo, la construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisará sus cargas fiscales”*, destaca el Plan de Nacional de Desarrollo en materia energética.

Coahuila no puede estar ajeno a las decisiones que toma el Gobierno Federal respecto a la política energética, debido a que somos un estado productor de energía de diversas fuentes a través de carboeléctricas o parques eólicos, por mencionar algunas.

Es importante también insistir que de acuerdo al Panorama Minero de Coahuila, publicado por la Secretaría de Economía Federal de ésta administración, el valor de la producción minera estatal en el 2017 ascendió a $18 mil 021 millones 329 mil 309 pesos, participando con el 3.13 % del valor total nacional que fue de $575 mil 019 millones 674 mil 673 pesos. ((Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2017 edición 2018)

También nos indica el valor de la producción del Carbón en el 2017 fue de 4 mil 108 millones 934 mil 954.82 pesos. Más que el oro, el fierro y el sulfato de sodio. Existiendo así 1967 títulos 11% concesionado, un millón 688 mil 469 hectáreas ocupadas.

Por otro lado, nos queremos referir a la decisión que tomó el pasado viernes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto a la cancelación de los contratos de suministro de carbón para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, localizadas en Nava, Coahuila.

*“Esta decisión llevará a Minera del Norte a la liquidación de la plantilla de personal de la Unidad MICARE, que comprende 2 mil obreros y empleados en México, y 400 en Texas, de su empresa Dos Repúblicas Coal Partnership, principalmente mexicanos residentes, además de afectar a 5 mil trabajadores de empresas proveedoras de diferentes bienes y servicios”, advierte* el comunicado de Altos Hornos de México (AHMSA).

Por lo anterior y lo que hemos venido insistiendo es importante tener certeza de qué pasará con el sector minero de Coahuila, a las empresas de Coahuila como AHIMSA y sobre todo lo que respecta a los productores del carbón en la región carbonífera. Todos estos temas deben quedar claro para las y los ciudadanos coahuilenses.

Apenas semanas pasadas recibimos una nota informativa de la CFE derivado de los puntos de acuerdo que aprobamos en esta Tribuna en el mes de marzo del presente año, donde nos explican lo siguiente:

*“La CFE ha tenido toda la voluntad y disposición para atender el compromiso del presidente de la República con los pequeños productores de carbón de la región carbonífera, de Coahuila, sin embargo, está empresa se ha visto limitada por las restricciones impuestas por la reforma energética del 2013, sus leyes secundarias, la normatividad que se ha derivado de ellas y que rige el sector eléctrico en México”.*

En otra parte de la nota informativa expedida a principios de mayo destaca:

*“Adicionalmente, la CFE ha emprendido al interior de la empresa estrategias que por un lado permiten reducir costos de operación de estas centrales y por otro lado ejecuta un plan de mantenimientos que permite recuperar las unidades de generación para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista. Así mismos se diseña un nuevo esquema de compras de carbón que permite asegurar que los pequeños y medianos productores de carbón tengan una participación igualitaria en el suministro del carbón a las centrales de la CFE instaladas en el norte del país”.*

En el contexto de los pequeños productores de carbón es importante mencionar que la relación de consumo de carbón de las Centrales Termoeléctricas por los últimos 20 años es del 67% carbón de la Cuenca de Río Escondido y 33% carbón de la Cuencas de la Región Carbonífera, a esto los técnicos de la CFE le llamaron la Mezcla ideal. Mezcla que funcionó perfectamente durante todos esos años ya que en esa proporción la mezcla de carbones se vuelven más eficientes para generación de electricidad. (Estos datos se obtienen de los reportes y estadísticos de compras y consumo por la CFE en los últimos 20 años)

Sin embargo, con las nuevas reformas y modificaciones la CFE pretende modificar dichos porcentajes a un 80% carbón de la Cuenca de Río Escondido y un 20% de la Cuenca de la región carbonífera, ocasionando una disminución considerable al carbón de los municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Juárez y Progreso.

La Región Carbonífera ha demostrado que tiene una capacidad de producción de 4 millones de toneladas de carbón por año, donde 3 millones se destinaban a la CFE y 1 hacia AHMSA para la producción de acero.

En estos momentos de definiciones de las autoridades federales es necesario que insistir que comuniquen los tiempos exactos para el inicio de la comercialización de carbón de la región carbonífera a través de los Pequeños y Medianos Productores.

No está por demás que citar que la incertidumbre que viven y experimentan los pequeños empresarios mineros hace cada vez más difícil la toma de decisiones y debido a ello los despidos de trabajadores y los paros técnicos que hemos venido experimentando en la región en estos últimos 4 meses, por el simple hecho de no saber cuándo la CFE adquirirá carbón de la región carbonífera.

Hay que recordar que desde hace más de dos años la Región Carbonífera vive en una constante zozobra respecto a su futuro económico. Como hemos citado las tres asociaciones de productores de carbón en la región: Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC), Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC), Unión Nacional de Auténticos Mineros (UNAM) han manifestado que la situación en la que se encuentran y la necesidad de contar con información fidedigna que les permita salir adelante y también tomar decisiones.

Por otro lado, existe el compromiso de trabajar bajo las condiciones que estipule la CFE para garantizar la calidad del producto, pero es necesario que las condiciones de operación sean en absoluta transparencia y de conformidad con las autoridades estatales y también lo antes posible para atender el problema.

Reiteramos es necesario contar con toda certeza respecto a si la actividad minera continuará y hasta que punto, porque no solo es la economía de los productores sino de las familias que dependen del carbón.

**Es por lo anteriormente expuesto que solicitamos a este Honorable Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura aprobar el presente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución:**

**PRIMERO: Que este Honorable Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura solicite respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informe sobre el futuro en el entorno energético respecto a las plantas termoeléctricas y el papel que juegan en la generación de energía en este sexenio.**

**SEGUNDO.- Que el Honorable Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura exhorte al Gobierno de México a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que informe respecto a las estrategias que desarrollo para la comercialización del carbón de pequeños y medianos productores de la región carbonífera de Coahuila y los esquemas de operación que tendrán, así como las fechas de inicio y su permanencia.**

**TERCERO. Que el Honorable Pleno del Congreso del Estado solicite respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Promotora de Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) informe de manera puntual y precisa la fecha en que se realizará la nueva licitación para la compra de carbón de pequeños y medianos productores de la región carbonífera.**

**CUARTO. Que el Honorable Pleno del Congreso del Estado solicite respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una reunión con pequeños y medianos productores de la región carbonífera para establecer un canal de comunicación y así conocer de manera directa las acciones que realizará dicha institución para la comercialización del carbón en Coahuila durante los próximos meses.**

**DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO**

**"BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 24 DE JUNIO DE 2020**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ**

**DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA**

**DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**

**DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA DIP. JESÚS BERINO GRANADOS**

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ**

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**

**POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO”,**

**DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

**DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA**

**POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO”,**

**DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA**

**POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

**DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA QUE SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Y A SU PRESIDENTE MUNICIPAL JORGE ZERMEÑO INFANTE, PARA QUE INSTRUYAN A LAS CORPORACIONES SE SEGURIDAD PÚBLICA A SU CARGO A QUE ACTÚEN CON TOTAL APEGO AL ORDEN JURÍDICO Y CON ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANÍA SOBRE TODO EN LOS CASOS RELACIONADOS CON MARCHAS, MANIFESTACIONES Y PROTESTAS PÚBLICAS, COMO LA SUCEDIDA EL PASADO 7 DE JUNIO EN LA PLAZA MAYOR DE ESA CIUDAD.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 21 fracciones VI y VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través de la que se exhorta al Ayuntamiento de Torreón y a su presidente municipal Jorge Zermeño Infante, para que instruyan a las corporaciones se seguridad pública a su cargo a que actúen con total apego al orden jurídico y con absoluto respeto a los derechos humanos de la ciudadanía sobre todo en los casos relacionados con marchas, manifestaciones y protestas públicas, como la sucedida el pasado 7 de junio en la plaza mayor de esa ciudad.

**MOTIVOS DE ESTA PROPOSICIÓN.**

El domingo 7 de junio pasado un grupo de jóvenes torreonenses salieron a manifestarse en contra de la violencia policial ejercida en Jalisco en contra de Giovanni López un trabajador de la construcción detenido y torturado por elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el 5 de mayo así como otros casos de violencia que se han registrado en el país.

La protesta de los jóvenes de Torreón incluía un performance en el que se pegaron algunas calcomanías en la plaza y se pintaron las manos con color rojo simulando sangre[[30]](#footnote-30), las cuales algunos de ellos plasmaron en una pared como símbolo de violencia que se vive en el país y en especial en Torreón que hasta la fecha continua siendo una de las ciudades más inseguras de Coahuila.

Ante estos hechos, elementos de la policía municipal arrestaron a varios de los manifestantes haciendo uso excesivo de la fuerza pública. De acuerdo con un comunicado del colectivo Ciudadanos Organizados contra la Violencia Policial[[31]](#footnote-31):

El grupo de ciudadanos que se manifestaron decidieron organizar una protesta justo en el día de la libertad de expresión, en donde se llevaría a cabo un mitín de concientización y después un “performance” alusivo a la violencia policial a través de la exposición de huellas con pintura roja lavable, cuando los manifestantes se disponían a retirarse, un numeroso grupo de policías llegaron para “simular un diálogo” que terminó en la detención de siete personas, incluidas dos menores de edad.

Una de las detenidas además menciona que: “Al terminar el acto y cuando todos los participantes nos disponíamos a retirarnos del lugar, en pocos minutos nos vimos rodeados por una cantidad exagerada de elementos de la policía, mismos que después de simular un diálogo en el que lo único que había eran acusaciones e imposiciones, además de nulo respeto a la libertad de expresión, se dispusieron a tomarnos por la fuerza y con violencia para llevarnos detenidos, violencia que no se limitó al arresto, si no que se intensificó dentro de las unidades móviles y posteriormente en las instalaciones de la policía municipal.” De los videos se puede desprender como los policías empujan a los manifestantes incluso en algunos casos son policías hombres los que están jaloneando a algunas manifestantes mujeres.

De las personas detenidas por la policía municipal dos eran menores de edad, uno fue llevado al juez calificador y tres al ministerio público mismo que los liberó de forma inmediata al considerar que no había delitos por los cuales se les pudiera perseguir, esto último es lo que nos lleva a cuestionar si tal detención era necesaria y proporcional dado que las autoridades ministeriales tuvieron que liberarlos.[[32]](#footnote-32)

Por otro lado, el alcalde Jorge Zermeño Infante, de manera poco empática y despreocupada, se limitó a decir “que no exageren”[[33]](#footnote-33) y negó que hubiera represión a los manifestantes pese a la condena casi unánime de las organizaciones de la sociedad civil que se volvieron a manifestar el martes siguiente, en respuesta a las declaraciones de Jorge Zermeño y la actuación de la policía.

Reprobamos categóricamente cualquier forma de represión y uso excesivo de la fuerza en contra de quienes ejercen su libertad de expresión, hay que saber distinguir entre grafitti y un performance de protesta perfectamente protegido por el derecho a libre expresión. Como bien lo dijo una manifestante, “Dura más la sangre sobre el pavimento que la pintura en las manifestaciones” y en Torreón ha corrido mucha sangre, pues basta con mencionar a la maestra que fue asesinada en pleno desfile de la revolución.

Celebramos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya iniciado una investigación sobre los hechos a fin de determinar si existieron violaciones a los derechos de los manifestantes o abuso de poder. Desde esta legislatura, estaremos pendientes de las recomendaciones que emita la autoridad, pero desde ahora queremos hacer un llamado al presidente municipal de Torreón Jorge Zermeño Infante para que en futuras manifestaciones se eviten actos que puedan constituir abuso policial o excesivo uso de la fuerza pública.

Desde esta tribuna parlamentaria, hacemos un llamado también a todos los municipios del Estado para que instruyan a sus elementos policiales a que actúen con estricto apego al orden jurídico y con total respeto a los derechos humanos pues sólo así los ciudadanos volverán a confiar en las instituciones de seguridad pública que hoy por hoy desgraciadamente tienen un bajo nivel de confianza entre la población.

Es por estas razones que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar ante esta H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

Misma que solicitamos sea tramitada como de urgente y obvia resolución.

**PRIMERO.-** Se exhorta al Ayuntamiento de Torreón y a su presidente municipal Jorge Zermeño Infante, para que instruyan a las corporaciones se seguridad pública a su cargo a que actúen con total apego al orden jurídico y con absoluto respeto a los derechos humanos de la ciudadanía sobre todo en los casos relacionados con marchas, manifestaciones y protestas públicas, como la sucedida el pasado 7 de junio en la plaza mayor de esa ciudad.

**SEGUNDO.-** Se solicita respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que pongan en conocimiento de esta Soberanía los resultados y conclusiones de la investigación realizada con motivo de los actos sucedidos en el municipio de Torreón, referentes a las detenciones de manifestantes en la plaza mayor de ese municipio el 7 de junio de 2020.

**TERCERO.-** Se exhorta a los 38 municipios del Estado de Coahuila a que dentro de sus respectivas competencias realicen las acciones conducentes para prevenir y sancionar cualquier forma de represión o abuso policial.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17de junio de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS QUE GARANTICEN EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD DE LOS PACIENTES CON CÁNCER, ASEGURANDO EL ACCESO ININTERRUMPIDO A LOS TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NECESARIOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito **Diputado Jesús Andrés Loya Cardona**, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con **Punto de Acuerdo**, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Han pasado más de seis meses desde la desaparición del Seguro Popular. El primero de enero de este año empezó formalmente a funcionar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado por iniciativa del gobierno federal actual para, supuestamente, ofrecer atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para 69 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social.

Se alegaba que la atención a pacientes del Seguro Popular no sería interrumpida en ningún momento  y que se seguirían atendiendo las enfermedades que generan gastos catastróficos, como el cáncer o el VIH, pero ahora financiadas con el recién creado Fondo de Salud para el Bienestar. Estas premisas han estado muy lejos de constituirse en realidad.

Desde su puesta en marcha, el Insabi se volvió un caos para autoridades, directivos de hopitales y pacientes. Se carecía de reglas de operación, de información y de lineamientos que rigieran la operatividad de hospitales federales y estatales. Lamentablemente no ha mejorado mucho en este periodo, dejando en la incertidumbre y sin abasto de medicamentos a las familias más vulnerables.

Es sumamente alarmante la situación por la que atraviesan quienes padecen cáncer. Niños, jóvenes, mujeres y hombres que no pueden acceder actualmente a sus quimioterapias y tratamientos por falta de reglas claras, perdiendo tiempo valioso e irrecuperable que pone seriamente en riesgo su vida.

En días pasados uno de los diarios de mayor circulación del Estado denunció que, desde la desaparición del Seguro Popular, de entre 10 y 15 mujeres han dejado de recibir quimioterapias en la capital de Coahuila; esto según lo dicho por el director del Hospital General de Saltillo.[[34]](#footnote-34)

Ante estos casos, muchas asociaciones civiles están en franca solidaridad con las pacientes, solventando sus tratamientos; pero su buena voluntad no alcanza para cubrir a todas las que necesitan apoyo. Es sorprendente que, después del mal trato que también se les ha dado a las organizaciones de la sociedad civil por parte de la Administración Federal, éstas tengan que seguir cubriendo la obligación primaria de protección a la salud que tiene el gobierno. Pero esta situación se da en todo el país.

Constantemente se denuncia públicamente en distintas partes de la República, la falta de atención y tratamiento a personas con cáncer. Las organizaciones civiles han hecho un llamado de alerta ante la escasez de medicamentos y falta de anteción para pacientes con cáncer en México, que se ha acentuado ante la falta de reglas de operación del Insabi y la emergencia por el coronavirus COVID-19.

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua se informa que niños con cáncer no tienen acceso a sus quimioterapias por el Hospital Infantil de dicha ciudad;[[35]](#footnote-35) en Jalisco se informa de un desabasto de medicamentos oncológicos y de la postergación de citas médicas por parte de las instituciones de seguridad social, dejando en desamparo a 1500 pacientes sólo en esa entidad.[[36]](#footnote-36) Lo mismo ha acontecido en Oaxaca y Michoacán.[[37]](#footnote-37)

Ante esta situación, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, hacemos un atento llamado a la Secretaría de Salud Federal para que garanticen el derecho constitucional a la salud y que no se interrumpan los tratamientos oncológicos debido al desabasto de medicamentos, falta de insumos o personal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este Honorable Pleno del Congreso, solicitando sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.-** Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a implementar acciones inmediatas que garanticen el derecho constitucional a la salud de los pacientes con cáncer, asegurando el acceso ininterrumpido a los tratamientos y medicamentos oncológicos necesarios.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de junio de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÑUS ANDRÉS LOYA CARDONA, CON EL OBJETO DE EXHORTAR ALA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS QUE GARANTICEN EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD DE LOS PACIENTES CON CÁNCER, ASEGURANDO EL ACCESO ININTERRUMPIDO A LOS TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NECESARIOS.

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que en la Vía de Urgente y Obvia Resolución presenta la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Fiscalía General del Estado para que continúe con las investigaciones sobre la filtración y venta de fotografías íntimas de jovencitas de la región centro del estado, ya que aún permanecen páginas en redes sociales que las publican y/o comercializan.**

En días pasados, Coahuila fue referente a nivel nacional al dictar la primera sentencia por el delito de violación a la intimidad en contra de un joven acusado de la filtración, publicación, venta o intercambio de fotografías íntimas de jovencitas de la región centro.

El acusado recibió una pena de 3 años de prisión o libertad condicional mediante el pago de poco más de 56 mil pesos de multa por la filtración de fotografías de 5 jovencitas que interpusieron denuncia, cuando se estima que tenía fotografías de al menos un centenar de mujeres que iban de los 18 a los 27 años de edad.

Según la información que se desahogó en la audiencia contra el acusado, éste operaba diferentes páginas en redes sociales con un listado de las jóvenes de las que tenía sus fotografías, el comprador solicitaba las fotografías de alguna de ellas mediante el depósito a una tarjeta bancaria de 50 a 250 pesos por fotografía.

Al recibir el comprobante del depósito, el acusado enviaba al comprador las imágenes privadas de las jovencitas. Este “modus operandi” lo empleó durante varios meses, redituándole importantes cantidades de dinero.

La gran mayoría de las jovencitas decidieron no denunciar, unas por vergüenza, otras por no contar con recursos económicos y otras para evitar un largo proceso legal que a su parecer solo empeoraría la situación en la que se encontraban.

Después de un largo proceso legal, el joven acusado que operaba esta red, finalmente fue detenido y sancionado, sin embargo el material lo distribuyó entre decenas o quizás cientos de personas que también incurrieron en una falta al ser partícipes de esta red.

Es indispensable que la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado mantenga un constante monitoreo de las páginas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas, procurando que sean inhabilitadas a la mayor brevedad posible, así como que se investigue exhaustivamente para identificar y sancionar tanto a las personas que comercializan las fotografías como a quien paga por obtenerlas, ya que, sin demanda, no habría oferta.

Es importante proteger, garantizar y salvaguardar la integridad física y emocional de las niñas, jóvenes y mujeres de nuestro estado, pero, sobre todo, sentar un precedente de sanción ejemplar a quienes incurren en este tipo de conductas ilícitas.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.

ÚNICO. Este H. Pleno envíe una atenta solicitud a la Fiscalía General del Estado para que continúe con las investigaciones sobre la filtración y venta de fotografías íntimas de jovencitas de la región centro del estado, ya que aún permanecen páginas en redes sociales que las publican y/o comercializan.

**ATENTAMENTE**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 24 DE JUNIO DEL 2020.**

DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON EL OBJETO DE QUE ESTA SOBERANÍA ENVÍE UNA ATENTA SOLICITUD A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA QUE CONTINÚE CON LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA FILTRACIÓN Y VENTA DE FOTOGRAFÍAS ÍNTIMAS DE JOVENCITAS DE LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO, YA QUE AÚN PERMANECEN PÁGINAS EN REDES SOCIALES QUE LAS PUBLICAN Y/O COMERCIALIZAN.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía le haga un respetuoso exhorto a los 38 Municipios del Estado de Coahuila, para que, en sus Cabildos puedan hacer un merecido reconocimiento a los trabajadores de las áreas de limpieza, mantenimiento, y recolección de basura en nuestro Estado, porque aún en medio de esta Pandemia del Covid-19, gracias a su importante y noble labor han mantenido limpias nuestras ciudades, haciéndoles patente la manifestación de gratitud pública por parte de la sociedad Coahuilense, porque a la par de los Médicos, Enfermeras, y otros servicios de emergencias, no obstante los riesgos para su salud y de sus familias, hacen una labor valiente y dedicada en beneficio de todos nosotros, de ahí, que éste sea el momento oportuno para hacerles patente el respaldo y el apoyo tanto del Gobierno y de la sociedad en su conjunto, a su indiscutible vocación de servicio dado que su labor ha resultado clave para la protección sanitaria de todos los ciudadanos, lo anterior con base en las siguientes:**

**CONSIDERACIONES:**

Los trabajadores de la recolección de basura, ordinariamente inician sus labores horas antes de que salga el sol de cada día, muchos de esos empleados de la limpieza pública, tienen años y hasta décadas desempeñando ese noble y arduo oficio de la recolección de la basura que cada individuo, familia, empresa y otros organismos generamos, ellos enfrentan día a día, no obstante las inclemencias del sol, del frío, la lluvia, o ahora en esta emergencia sanitaria, esa ardua labor de tener limpias las ciudades, honroso trabajo que muchas veces es denigrado y poco reconocido.

Tales personas dedicadas a la limpieza de nuestras comunidades, muchas veces han enfrentado panoramas adversos de desprecio y hasta de ofensas por parte de la comunidad a la que indistintamente le sirven, ya que su importante labor abarca todos los estratos y clases sociales, pero lamentablemente son muy pocas las personas que se permiten ser amables y considerados con ellos, para ofrecerles siquiera un vaso de agua que les refresque su ardua tarea de recoger nuestra basura, de barrer y limpiar las calles de nuestras ciudades, así como las avenidas que diariamente circulamos.

Ahora bien, si antes de la emergencia sanitaria, la vida de un trabajador de la recolección de la basura era de por si dura y sufrida, ahora con la Pandemia del Covid-19, su labor es aún más riesgosa, pero aun así, y no obstante la mirada despectiva que lamentablemente se tiene por parte de la comunidad hacia ese noble oficio, ellos siguen realizando su ardua, pesada y excelente labor de limpieza e higiene pública en aras de nuestra salud, motivo por el cual, ahora es justo reconocerles mediante un homenaje público, sus buenos oficios de limpieza y recolección de la basura por parte de esos humildes trabajadores, cuya labor ha resultado clave para la protección sanitaria de todos los ciudadanos.

Cabe resaltar que las tareas de la limpieza de una ciudad, de nuestras calles, domicilios y empresas, así como de la consecuente recolección de la basura que generamos, para ellos es de por si complicado, pero su desempeño se ve aún más agravado por los accidentes a los que están expuestos, pues es de todos conocido aquellos hechos de como tales trabajadores han sido perseguidos y hasta mordidos por algún perro, o han sufrido cortaduras por vidrios y pinchazos de jeringas que han puesto en riesgo su salud, todo debido a la negligencia de nosotros los ciudadanos de no tomarnos el tiempo para separar y aislar la basura que depositamos, ya que ellos tienen que recogerla con sus propias manos, resultando necesario tener más cuidado sobre el manejo de nuestras mascotas, y de la forma en que embolsamos los residuos de basura que dejamos para su recolección.

Ahora bien, ese comportamiento por parte de la ciudadanía, de pensar en proteger la salud de los trabajadores de la recolección de la basura, y de facilitarles su trabajo mediante el mejor manejo y depósito de los residuos que desechamos, ese sería el mejor reconocimiento que la comunidad puede hacerles por la excelente labor de dichos trabajadores, dado que es de todos sabido que sus salarios son poco redituables, y su trabajo puede estarse desempeñando en condiciones no óptimas, y por dicha razón, es que podamos reconocerles y agradecerles su desempeño, actividad que también se pudiera equiparar a la de verdaderos héroes anónimos, porque ante esta emergencia sanitaria que lleva más de 100 días, estas personas sin descanso, y aún a costa de poner en riesgo su salud por contagiarse ante la epidemia que estamos padeciendo, ellos siguen laborando y demuestran honrosamente su orgullo de coadyuvar en este esfuerzo de mantener a la población saludable, por lo que, es ahora justo y debido, que tanto el gobierno como la ciudadanía reconozcamos esa actividad, y por tal motivo, se presente a esta Soberanía en la Vía de Urgente y Obvia Resolución la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. Que esta Soberanía le haga un respetuoso exhorto a los 38 Municipios del Estado de Coahuila, para que, en sus Cabildos puedan hacer un merecido reconocimiento a los trabajadores de las áreas de limpieza, mantenimiento, y recolección de basura en nuestro Estado, porque aún en medio de esta Pandemia del Covid-19, gracias a su importante y noble labor han mantenido limpias nuestras ciudades, haciéndoles patente la manifestación de gratitud pública por parte de la sociedad Coahuilense, porque a la par de los Médicos, Enfermeras, y otros servicios de emergencias, no obstante los riesgos para su salud y de sus familias, hacen una labor valiente y dedicada en beneficio de todos nosotros, de ahí, que éste sea el momento oportuno para hacerles patente el respaldo y el apoyo tanto del Gobierno y de la sociedad en su conjunto, a su indiscutible vocación de servicio dado que su labor ha resultado clave para la protección sanitaria de todos los ciudadanos.**

*ATENTAMENTE,*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de junio de 2020**

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON EL OBJETO DE QUE ESTA SOBERANÍA LE HAGA UN RESPETUOSO EXHORTO A LOS 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA, PARA QUE, EN SUS CABILDOS PUEDAN HACER UN MERECIDO RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN NUESTRO ESTADO, PORQUE AÚN EN MEDIO DE ESTA PANDEMIA DEL COVID-19, GRACIAS A SU IMPORTANTE Y NOBLE LABOR HAN MANTENIDO LIMPIAS NUESTRAS CIUDADES, HACIÉNDOLES PATENTE LA MANIFESTACIÓN DE GRATITUD PÚBLICA POR PARTE DE LA SOCIEDAD COAHUILENSE, PORQUE A LA PAR DE LOS MÉDICOS, ENFERMERAS, Y OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIAS, NO OBSTANTE LOS RIESGOS PARA SU SALUD Y DE SUS FAMILIAS, HACEN UNA LABOR VALIENTE Y DEDICADA EN BENEFICIO DE TODOS NOSOTROS, DE AHÍ, QUE ÉSTE SEA EL MOMENTO OPORTUNO PARA HACERLES PATENTE EL RESPALDO Y EL APOYO TANTO DEL GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, A SU INDISCUTIBLE VOCACIÓN DE SERVICIO DADO QUE SU LABOR HA RESULTADO CLAVE PARA LA PROTECCIÓN SANITARIA DE TODOS LOS CIUDADANOS.**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,** **POR LA QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO, A QUE CONVOQUE A SESIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON LA FINALIDAD QUE LA MISMA COADYUVE CON LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL Y A LOS SUB COMITÉS TÉCNICOS DE SALUD, PARA QUE EVALUEN Y AUTORICEN LA APERTURA GRADUAL DE PARQUES, CENTROS ECOLÓGICOS Y TURÍSTICOS, LIBERAR EL ACCESO A LAS PISCINAS Y/O ALBERCAS EN HOTELES Y CENTROS DE ALQUILER, Y QUE ESTOS, CUENTEN CON PROTOCOLOS Y LLEVEN A CABO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA QUE AFECTA AL SECTOR ECONÓMICO Y TURÍSTICO DE LA ENTIDAD. ESTA PETICIÓN LA FUNDAMOS CON BASE EN LA SIGUIENTE**

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

En México, el turismo aporta anualmente el 8.7 del PIB, según cifras del año 2018. Conforme a los datos proporcionados por el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, tan solo en el fin de semana largo del 1 al 3 de febrero, se registró en el país una derrama económica de 4 mil millones de pesos y se movilizaron un millón 600 mil turistas.

Por su parte, el Estado de Coahuila, cuenta con riqueza cultural que lo convierte en un lugar atractivo para visitar y hacer turismo, ya que existen, por ejemplo, La Ruta del Vino, que comprende un recorrido por las vinícolas más importantes del país, como Casa Madero, viñedos Don Leo, Cuatro Ángeles, Ferriño entre otras; el Museo del Desierto ubicado en Saltillo, que cuenta con una amplia colección de fósiles de dinosaurios, animales y plantas prehistóricas; la reserva natural protegida de Cuatro Ciénegas, que conserva diversas especies animales endémicas; la cuna de la Revolución Mexicana que es San Pedro de las Colonias, donde se llevó a cabo la famosa batalla del 12 de abril de 1914 en la que Francisco Villa venció al ejército federal dirigido por Victoriano Huerta; la Zona del Silencio, lugar que ha sido investigado en numerosas ocasiones, ya que es un sitio enigmático donde es improbable trasmitir ondas de radio por su alta concentración de magnetismo; y además, cabe destacar, que la LXI Legislatura, declaró a la Cocina Tradicional Coahuilense como Patrimonio Cultural intangible del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Geográficamente, la entidad se encuentra dividida en 5 regiones donde, el Gobierno del Estado, ha implementado políticas públicas que han fortalecido a su economía, su oferta turística, el cuidado del ambiente y la seguridad. Todo esto con la finalidad de lograr el más alto nivel de calidad hospitalaria, gastronómica, de negocios y de atractivos naturales que nos permite ser competitivos y ser de los destinos más importantes del país, a fin de que tanto coahuilenses como visitantes, puedan disfrutar de los bienes tangibles e intangibles con los que se cuentan. Habremos de referirnos en específico a lugares al aire libre, ya que existe una amplia diversidad de espacios de esparcimiento en el Estado y los encontramos en todas las regiones, y a estos, se puede acudir para disfrutar del contacto con la naturaleza, tanto población local como turistas y visitantes.

Es claro que, ante la pandemia por COVID-19, el Consejo Estatal de Turismo junto con la Secretaría de Salud y los Sub Comités Técnicos, deberán ser un pilar importante en la toma de decisiones en materia de salubridad en los distintos comercios de la entidad, verificando que los mismos se encuentren en condiciones para operar. La reactivación económica depende de la apertura gradual de restaurantes, supermercados, hoteles, plazas comerciales, clubes deportivos, centros recreativos y mercados al aire libre, siempre y cuando, cuenten con un protocolo que permita el ingreso de los ciudadanos con las medidas de prevención que evitarán nuevos contagios.

Ahora bien, otro espacio de entretenimiento muy solicitado en nuestro Estado es el acuático, tanto en balnearios como en ríos y albercas. Sobre esto, es trascendental que cuenten con los protocolos que permitan su operatividad, y depende, en gran medida, al mantenimiento de sus instalaciones para garantizar la higiene, tanto de los usuarios como de las albercas o áreas acuáticas.

Tratándose de espacios al aire libre como Parques Ecológicos y Atractivos naturales, así como albercas dentro de hoteles y centros recreativos formales, es trascendental la participación del Consejo Estatal de Turismo y los Consejos Regionales de Salud, ya que estos dictarán e implementarán las medidas de prevención necesarias para procurar que no se afecte el bienestar y la salud de sus visitantes ni del personal que en ellos laboran. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hacemos el llamado a las autoridades en materia de Salud, para que actúen en consecuencia ante la declaratoria de pandemia con motivo del Covid-19, ya que el comercio y el turismo se ha visto afectado en nuestra entidad.

**Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción VI del artículo 21, en los artículos 172, 179, 180, 181 y 182 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como en lo estipulado en la fracción IV del artículo 16 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos ante esta Soberanía la siguiente**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**Que por las características del caso, solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**ÚNICO. -** **SE SOLICITA A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO, A QUE CONVOQUE A SESIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON LA FINALIDAD QUE LA MISMA COADYUVE CON LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL Y A LOS SUB COMITÉS TÉCNICOS DE SALUD, PARA QUE EVALUEN Y AUTORICEN LA APERTURA GRADUAL DE PARQUES, CENTROS ECOLÓGICOS Y TURÍSTICOS, LIBERAR EL ACCESO A LAS PISCINAS Y/O ALBERCAS EN HOTELES Y CENTROS DE ALQUILER, Y QUE ESTOS, CUENTEN CON PROTOCOLOS Y LLEVEN A CABO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA QUE AFECTA AL SECTOR ECONÓMICO Y TURÍSTICO DE LA ENTIDAD.**

***ATENTAMENTE***

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 24 DE JUNIO DE 2020.**

DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

Fuentes:

1. <https://www.lugaresturisticos.org/coahuila/>
2. <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>
3. <https://www.milenio.com/estados/coahuila-reapertura-economica-supervisaran-protocolos-sanitarios>

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO, A QUE CONVOQUE A SESIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON LA FINALIDAD QUE LA MISMA COADYUVE CON LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL Y A LOS SUB COMITÉS TÉCNICOS DE SALUD, PARA QUE EVALUEN Y AUTORICEN LA APERTURA GRADUAL DE PARQUES, CENTROS ECOLÓGICOS Y TURÍSTICOS, LIBERAR EL ACCESO A LAS PISCINAS Y/O ALBERCAS EN HOTELES Y CENTROS DE ALQUILER, Y QUE ESTOS, CUENTEN CON PROTOCOLOS Y LLEVEN A CABO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA QUE AFECTA AL SECTOR ECO.ÓMICO Y TURÍSTICO DE LA ENTIDAD.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Rosa Nilda González Noriega conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que adopte algunas consideraciones en la suspensión del servicio eléctrico a los usuarios que durante esta contingencia sanitaria no han cumplido con sus pagos, tomando en cuenta que muchas personas vieron interrumpido su fuente de ingresos a consecuencia de la pandemia; lo anterior en base a lo siguiente:**

Durante la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio a 543 mil 128 mexicanos que no pudieron pagar el recibo durante el periodo del 1 de abril al 12 de mayo, y además de esto, obtuvo millonarios recursos por las re conexiones del servicio.

Entre abril y mayo, cuando la contingencia sanitaria escaló a una fase más alta, aumentó el aislamiento social y crecieron los despidos y los recortes de salarios.

La CFE cobró 47 millones 38 mil pesos para reconectar a usuarios que se quedaron a obscuras al no poder cumplir con el pago de su recibo de luz durante esta contingencia.

Esta situación contribuyó a que la empresa aumentara sus ingresos por reconexión del servicio en los primeros cinco meses del año en 10.1%, al alcanzar 130 millones 877.5 mil pesos, 12 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

La documentación más reciente entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha del 16 de junio, muestra que en el bimestre abril-mayo reconectó a 687 mil 919 servicios que se habían quedado sin luz por falta de pago.

Cada usuario desembolsó en promedio 86.42 pesos por volver a contar con el servicio, además de cumplir con el pago del adeudo correspondiente.

En su página web, la CFE indica a sus clientes que para proporcionar nuevamente el servicio de energía eléctrica después del corte, sobre todo por falta de pago, deberá acudir a sus oficinas o realizar el trámite en línea, pagar el saldo, así como el pago por reconexión.

La cuota se encuentra entre 58 y 91 pesos, más 16% de IVA, dependiendo del número de hilos o cables con corriente eléctrica contratada, si la facturación es mensual o bimestral.

Al recibir el pago el servicio se reanuda en el transcurso del día, si es en ciudad, y en no más de tres días, si es área rural.

La lista de entidades federativas en donde los ciudadanos se vieron obligados a pagar sus adeudos y el costo por la reconexión del servicio durante los meses que se decretó la fase 3 de la contingencia sanitaria del Covid-19 la encabezó Jalisco, que en los meses de abril y mayo reportó 69 mil 351 reconexiones.

De cada 10 reconexiones llevadas a cabo por la CFE en los meses de abril y mayo se concentraron en 12 entidades federativas.

El pasado 28 de mayo, se dio a conocer que medio millón de mexicanos se quedaron sin el servicio al no poder pagar su recibo, cuando se decretó la fase 3, porque no pudieron pagar sus facturas en el periodo del 1 abril al 12 de mayo.

Al cierre de mayo aproximadamente 110 mil 677 servicios, entre hogares, comercios, prestadores de servicios e industria se quedaron sin energía eléctrica.

A la CFE, solo por las reconexiones de los servicios de energía eléctrica le representan ingresos del orden de 314 millones de pesos anuales.

En los primeros cinco meses del presente año, la CFE realizó un millón 852 mil 326 reconexiones, por lo que pudo captar 130 millones 887 mil pesos.

En el mismo periodo de 2019, reconectó a un millón 739 mil 332 servicios, por lo que recibió 118 millones 844 mil pesos.

Esto representa casi 113 mil reconexiones más en este año de pandemia.

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. Túrnese la presente a la Comisión de Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos, para efectos de su análisis y, en su caso, dictamen o acuerdo que corresponda.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 110, Fracción IX, 179, 180 y 182 Párrafo segundo de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**ATENTAMENTE**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 24 de junio de 2020**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON EL OBJETO DE QUE ESTA SOBERANÍA ENVÍE UNA ATENTA SOLICITUD A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) PARA QUE ADOPTE ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO A LOS USUARIOS QUE DURANTE ESTA CONTINGENCIA SANITARIA NO HAN CUMPLIDO CON SUS PAGOS, TOMANDO EN CUENTA QUE MUCHAS PERSONAS VIERON INTERRUMPIDO SU FUENTE DE INGRESOS A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA**

Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, por el que se solicita no desaparezcan las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor en la región Sureste, Centro, Desierto, Cinco Manantiales y Norte de nuestro Estado, pues causara grandes perjuicios a miles de consumidores, que necesitan diariamente de los servicios de estas oficinas para hacer valer sus derechos.

**H. Pleno del Congreso del**

**Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

El Suscrito Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a este pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982 la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. Según la página oficial del Gobierno de la República señala, que en la actualidad PROFECO cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, lo cual suma un total de 51 oficinas en toda la República.

**La Profeco tiene por objetivos:**

* Proteger y defender los derechos de las y los consumidores.
* Generar una cultura de consumo responsable.
* Proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo.
* Implementar métodos de atención pronta y accesible a la diversidad de consumidoras y consumidores mediante el uso de tecnologías de la información.

**Como Visión la Profeco busca:**

Ser una Institución cercana a la gente, efectiva en la protección y defensa de las personas consumidoras, reconocida por su estricto apego a la ley, con capacidad de fomentar la igualdad, la no discriminación, la participación ciudadana, y la educación para un consumo responsable.

**Por Misión la Profeco pretende:**

Empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población.

Por otro lado, la Profeco, señala que en caso de que un ciudadano note cualquier anomalía en algún bien o servicio puede presentar una queja y/o denuncia por cualquier acto u omisión de cualquier establecimiento que afecte sus intereses.

En lo personal considero que esta institución ha sido sobre todo en los últimos años de gran ayuda para las y los mexicanos, pues muchos prestadores o vendedores de servicios pretenden abusar aumentando sus precios, costos o no proporcionando el servicio en la manera en que fue ofertado dicho servicio, y quienes se ven afectados pueden acudir ante esta dependencia con el fin de prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas.

Muestra de la utilización y prestación de los servicios de la Profeco, lo podemos observar cada año al inicio del ciclo escolar, en las fiestas decembrinas, o ahora en estos momentos de pandemia, donde los vendedores se aprovechan de la demanda de sus productos o servicios (productos de la canasta básica, útiles escolares, uniformes, entre otros.) para incrementarlos de manera desproporcionada sin ninguna justificación de por medio.

Llama nuestra atención que no obstante desde el año 1882 nuestro Estado, había contado con una delegación y varias subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, en una decisión totalmente errónea hecha desde la comodidad del escritorio, el Gobierno de la República, el pasado 30 de enero del presente año, emitió un decretó el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, mismo que entró en vigor al día siguiente, es decir el 31 de ese mismo mes y año, en el que señala que derivado de la publicación del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor y en base al artículo 13 fracción XXXII que la oficina de la Defensa del Consumidor (ODECO) con sede en Saltillo Coahuila desaparece, y que ahora se denominará Zona metropolitana de Torreón y su circunscripción será:

“Zona Metroplitana de Torreón: con sede en el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Con circunscripción territorial en todos los municipios del **estado de Coahuila de Zaragoza,** exceptuando los siguientes: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza; y del **estado de Durango,** los siguientes municipios: General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Santa Clara, San Juan de Guadalupe y Tlahualillo.”

Así mismo señala el decreto en mención, ..“ Por lo que a partir de la entrada en vigor del Estatuto, todos los asuntos que correspondan a los municipios de: **Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza**, se atenderán en la Oficina de Defensa del Consumidor **ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY** ubicada en Av. Profesor Moisés Sáenz, N°602, Col. Mitras Centro, C.P. 64460, Monterrey Nuevo León.

Asimismo, todos los asuntos que correspondan a los municipios del estado de Coahuila, con excepción de: **Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza,** se atenderán en la Oficina ubicada en Av. Matamoros N° 1285 Pte., Col Centro, C.P. 27000, Torreón Coahuila.””

El Partido Verde Ecologista de México, rechaza contundentemente la determinación señalada con anterioridad, por parte de las autoridades del Gobierno de la República, pues carecen de toda lógica, además de permear una inequidad y desigualdad en trato para las y los Coahuilenses.

En primer lugar, como podemos ver los municipios de **Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza**, serán atendidos en la Oficina con sede en Monterrey Nuevo León, como si el traslado de esos municipios a esa dependencia fuera de 10 a 15 minutos, quienes diseñaron esta nueva subdivisión de funciones de la Profeco, no tienen ni la más remota idea de lo distante que están los municipios antes referidos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Solo para que nos demos una idea de todas las vicisitudes que tendrán que pasar miles de consumidores que diariamente necesitan de los servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor la distancia entre la ciudad de Monterrey Nuevo león y los siguientes municipios de Coahuila es la siguiente:

Acuña 482 km,

Allende 382 km,

Guerrero 354 km,

Hidalgo 270 km,

Jiménez 438 km,

Juárez 290 km,

Morelos 386 km

Nava 420 km,

Piedras Negras 393 km,

Sabinas 312 km,

San Juan de Sabinas 336 km

Villa Unión 395 km y

Zaragoza 396.9 km

Como podemos ver será prácticamente imposible que los consumidores de los municipios de nuestro estado arriba mencionados, que necesiten interponer una queja por haber sido objeto de algún abuso de un vendedor o prestador de servicios, acudan a las oficinas de la Ciudad de Monterrey nuevo León, no solo por el tiempo que necesitan para trasladarse, sino por lo costoso que resultará acudir a interponer una queja, por tanto muy seguramente al saberse de esta resolución se detonaran los abusos por parte de los comerciantes y prestadores de servicios en contra de cientos de miles de coahuilenses.

Por otro lado, algo muy similar sucederá para los municipios de la región sureste, desierto y centro de nuestro estado, pues también tendrán que trasladarse en promedio de entre dos horas y media a tres a la ciudad de Torreón, Coahuila, para poder ser atendidos ante una irregularidad que debe ser atendida por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Compañeras y compañeros diputados, el Partido Verde Ecologista de México por mi conducto, rechaza categóricamente el nuevo Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación pues deja en desamparo a cientos de miles de coahuilenses que requieren los servicios de esa dependencia.

Solo para corroborar lo extremadamente erróneo de esa determinación del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, el propio encargado de Profeco en esta ciudad capital, en diversas ocasiones al ser entrevistado por algunos medios de comunicación ha declarado ..” Es muy difícil que el consumidor de Saltillo se tenga que trasladar hasta Torreón..”.

Por último deseo señalar que la semana pasada de manera muy atinada nuestros compañeros diputados del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentaron conjuntamente una proposición con punto de acuerdo solicitando a la Procuraduría Federal del Consumidor que no se dejara sin una oficina receptora de esa dependencia al municipio de Acuña Coahuila, por la gran necesidad que existe de los usuarios de esa dependencia en esa ciudad así como municipios aledaños. La situación es que en esta propuesta que hoy presentamos, exponemos la gran necesidad que se va a generar al eliminar la delegación y subdelegaciones de la Profeco, no solo en el municipio de acuña, sino en todas las regiones del estado (Norte, Desierto, Centro, Carbonífera y Sureste), inclusive en la región laguna pues los habitantes del municipio de San Pedro tendrán que recorrer más de 60 kilómetros para poder interponer una queja.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a este H. Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

**Primero.-** Que ésta LXI Legislatura, envíe un exhorto al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, expresándole nuestra inconformidad en la publicación del Estatuto Orgánico de fecha 30 de enero del presente año, pues se dejó a casi la totalidad de los 38 municipios del Estado de Coahuila, en total estado de indefensión para ser atendidos ante los abusos que continuamente realizan los comerciantes o prestadores de servicios. Por tanto, le solicitamos diseñe una nueva subdivisión de funciones a manera que en nuestra entidad federativa, exista un equilibrio justo y equitativo en el que cientos de miles de coahuilenses, puedan tener acceso con mucho menores costos de traslado y gasto, a los servicios de una Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO), a donde puedan acudir en caso de requerir dichos servicios.

**Segundo.-** Que ésta LXI Legislatura, envíe un exhorto al Delegado del Gobierno Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Licenciado Reyes Flores Hurtado, a efecto de solicitarle realice las gestiones correspondientes ante el gobierno de la república, a efecto de que los 38 municipios del estado, puedan tener en mejores condiciones de cercanía, una Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO), pues tal y como quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de enero del presente año, el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, se deja a cientos de miles de coahuilenses, prácticamente sin tener acceso a esa oficina en caso de sufrir un cobro injusto o un mal servicio por parte de algún vendedor o prestador de servicios.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 22 de Junio de 2020.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

Fuente.-

<https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos>

<http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/inquieta-a-usuarios-que-cierren-profeco-saltillo>

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE PARRAS RAMIRO PÉREZ ARCINIEGA A TENDER PÚENTES DE DIÁLOGO CON LAS Y LOS TRABAJADORES JUBILADOS DE AQUEL MUNICIPIO PARA ENCONTRAR A LA BREVEDAD UNA SOLUCIÓN JUSTA PARA ELLOS.**

**DIPUTADO PRESIDENTE.**

**H. Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura**

**PRESENTE.**

El Suscrito Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Partido Unidad Democrática de Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Con la revolución y su producto más acabado, la Constitución promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917, nuestra Constitución, México se convirtió en país pionero en el mundo en elevar a rango constitucional los derechos sociales, resultado de las aspiraciones más legítimas del pueblo mexicano que fueron el motor y corazón del movimiento armado desde inicios del siglo XX.

Producto de estas aspiraciones vueltas realidad fueron sin duda las normas reguladoras del trabajo y de la seguridad social, las cuales nacen de ese espíritu revolucionario que entendía al Estado como agente privilegiado del desarrollo y del bienestar de los grupos sociales y de sus integrantes, estableciendo reglas de protección al trabajo personal, a la organización colectiva de los trabajadores y a los mecanismos de seguridad social indispensables para lograr la superación y mejora de sus condiciones de vida.

Así, el pueblo mexicano después del movimiento revolucionario que concluye con nuestra actual Carta Magna decidió condensar lo político a lo jurídico, y transitando del poder constituyente al poder constituido, el soberano, que es el pueblo de México, se autolimitó a través de la Constitución y hoy la ejerce dentro de sus límites. Y ese es el papel fundamental de una constitución, la de garantizar jurídicamente la soberanía popular para autodeterminarse, regulando el poder, estableciendo reglas para su ejercicio, de tal suerte la voluntad popular no se suplantada.

Entonces la Constitución, positiviza un momento revolucionario, asegurando el derecho de la revolución del pueblo, así como el derecho de las conquistas alcanzadas por la revolución, que son los derechos y libertades fundamentales, entre ellos los derechos sociales, y claro, el derecho a una pensión digna para los trabajadores.

Paradójicamente, vemos como en Parras, Coahuila, que fuera lugar de nacimiento de Francisco I Madero, artesano de la democracia, y también cuna del inspirador movimiento antirreeleccionista y por lo tanto de la Revolución Mexicana, génesis de nuestra Constitución Política, hoy se encuentra en un conflicto porque la autoridad ha sido enérgicamente señalada por no respetar uno de los derechos mas esenciales de los trabajadores como es el derecho a una pensión digna.

Al día de hoy son ya múltiples ocasiones en las que ante este Honorable Congreso han acudido grupos de trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Parras, expresando su inconformidad por la suspensión arbitraria por parte del Alcalde de ésa ciudad en sus derechos laborales, particularmente el del acceso a una pensión digna. Aunado a lo anterior, existe también la inconformidad de los trabajadores por haber sido afectados a través de amenazas por parte de funcionarios del Ayuntamiento.

Nuestra obligación como representantes ciudadanos es naturalmente escuchar y levantar la voz de aquellos a quienes de alguna u otra forma se les vean atropellados sus derechos más esenciales.

Por ello, desde esta tribuna hacemos un llamado al Alcalde de Parras a escuchar a quienes nos han manifestado su inconformidad, y a tender puentes de diálogo para buscar una pronta solución a ésta problemática que afecta directamente no solo a los trabajadores sino a familias enteras que hoy más que nunca requieren una pronta solución.

No omito mencionar, que esta Sexagésima Primera Legislatura se ha caracterizado por legislar y velar por aquellos grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como hoy es el caso de trabajadores, la mayoría adultos mayores que llevan meses sin recibir su pensión, lo que representa su única fuente de ingreso. Esta no será la excepción y de ser el caso, habremos de actuar en el marco de la ley pero en uso de nuestras facultades constitucionales, que nos han sido otorgadas precisamente para velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de las y los coahuilenses.

Hay que recordar que no basta con tener derecho de mandar, hay que tener en verdad la capacidad intelectual y profesional de ejercer bien ese puesto, y la rectitud moral necesaria para hacerlo, es decir, el respeto fundamental a la dignidad y a los derechos humanos, mediante la justicia como mínimo, y el amor al prójimo como plenitud,

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

**ÚNICO. SE EXHORTA AL ALCALDE DE PARRAS RAMIRO PÉREZ ARCINIEGA A TENDER PÚENTES DE DIÁLOGO CON LAS Y LOS TRABAJADORES JUBILADOS DE AQUEL MUNICIPIO PARA ENCONTRAR A LA BREVEDAD UNA SOLUCIÓN JUSTA PARA ELLOS.**

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 24 DE JUNIO DE 2020**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, por el que se solicita se inicie Juicio Político en contra del Alcalde de Parras de la Fuente Coahuila.

**H. Pleno del Congreso del**

**Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

El Suscrito Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a este pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

En Coahuila cuatro de 38 ayuntamientos electos en 2018 para el periodo 2019-2021 son gobernados por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente. Por desgracia los últimos tres municipios, adolecen del factor político más importante para un grupo en el poder: gobernabilidad.

No se trata de cualquier desacuerdo propio de la función pública. En las comunas de Matamoros y Madero, encabezadas por Horacio Piña y Jonathan Ávalos respectivamente, hay diferencias irreconciliables entre regidores y síndicos contra alcaldes y viceversa. Lo anterior nada tiene qué ver con la pandemia, ya que son anteriores a esta, y suponen una parálisis gubernamental al no existir acuerdos mínimos para tomar decisiones básicas como aprobar un presupuesto de ingresos anual. Eso arrojará, por consecuencia, trienios perdidos.

Pero el municipio de Parras de la Fuente va más allá, pues desde el 30 de agosto de 2019, no hay secretario del Ayuntamiento ni consenso para que el Alcalde, Ramiro Pérez Arciniega, proponga una persona para el cargo pues el anterior, Esteban Sebastián Zul Núñez, fue depuesto por usurpación de funciones. En la sesión de Cabildo del 6 de marzo de 2020, cabe señalar, los ediles aprobaron por mayoría calificada un punto de acuerdo para manifestar públicamente que, como órgano colegiado, “se deslinda totalmente de los malos manejos de los recursos públicos, tanto municipales, estatales y federales, que esté haciendo de los mismos el Presidente Municipal”.

Y la historia sigue, pues el 18 de marzo el Edil envió un oficio al Congreso del Estado para solicitarle que no se publiquen en el Periódico Oficial las actas de Cabildo de las sesiones encabezadas sin su presencia. Por su parte, el 18 de mayo y el 17 de junio, los diputados locales recibieron sendos oficios para solicitar juicio político –el máximo recurso legal contra un funcionario en nuestra legislación– en contra de Pérez Arciniega, firmados por nueve ediles de Parras de la fuente.

Así mismo, el 30 de octubre el munícipe Pérez Arciniega les devolvió la cortesía y amenazó con presentar una demanda de juicio político en contra de ocho regidores y los dos síndicos (del PRI, Verde y Morena, su mismo partido) por usurpación de funciones y obstaculizar el trabajo del Ayuntamiento. Situación que solo quedó en eso en una simple amenaza.

Por si fuera poco, existen en contra del alcalde de Parras de la Fuente, una denuncia penal por nueve delitos diversos ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, la cual se había deliberado en sesión de Cabildo –sin la presencia del Alcalde– el 28 de enero. Inclusive el exlegislador de Morena, hoy diputado independiente, nuestro compañero Benito Ramírez, presentó el 12 de febrero un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía que atienda dicha denuncia contra el edil y su tesorera.

De igual forma, en fecha, 14 de octubre de 2019, regidores y síndicos de Parras de la Fuente, enviaron a la Legislatura un oficio para exponer “actos de nepotismo y otras irregularidades” en ese municipio como un desvío de recursos hacia la Feria de la Uva –el evento anual más importante del Municipio– por casi 5 millones de pesos, sin aprobación previa.

En ese sentido, el 4 de diciembre la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia dio vista del expediente a la Auditoría Superior del Estado, a fin de que investigue tales señalamientos, investigación que sabemos sigue en curso.

Aunque el alcalde manifieste continuamente a medios de comunicación que en Parras de la Fuente todo se “transparenta”, esto solo es un decir, pues en realidad si uno verifica los sitios oficiales de la presidencia municipal, no hay donde ubicar la información pública de oficio, obligación legal que se funda en los artículos 21 y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado, ya que un supuesto vínculo de su página web hacia el apartado transparencia no conduce a ninguna parte. Es simplemente fachada donde no se encuentra ningún tipo de información mínima como lo marca la ley de acceso a la información Pública.

Compañeras y compañeros diputados, el municipio de Parras de la Fuente, aparte de ser uno de los siete pueblos mágicos de nuestro Estado, es un territorio que cuenta con 50 mil habitantes y un presupuesto anual nada despreciable de 187 millones de pesos para 2020. Donde 77.6% de sus habitantes padecen algún tipo de pobreza y/o vulnerabilidad, de acuerdo con el Coneval. Dicha estadística es importante, entre otras razones, por su vinculación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Y es ahí donde precisamente la actual administración comandada por Ramiro Pérez Arciniega, está realizando el desvió a su favor de los dineros públicos de la hacienda municipal, es decir en la aplicación de los recursos que se destinan a rubros de infraestructura social como electrificación en ejidos, construcción de cuartos, piso firme o techos, obras que supuestamente se ejecutan o se realizan con precios muy por encima de su valor real.

Compañeras y compañeros diputados, por desgracia la administración municipal comandada por Ramiro Pérez Arciniega en el municipio de Parras de la Fuente Coahuila, es representativa de subdesarrollo, opacidad, robo, conflictos pero sobre todo parálisis gubernamental que solo daña a las y los habitantes de dicho municipio.

Por ultimo no omito comentarles toda la serie de irregularidades que se han cometido por parte del alcalde de parras de la fuente Coahuila, Ramiro Pérez Arciniega, que en esta misma tribuna hemos denunciado y cuyas evidencias se encuentran en el diario de debates así como en la gaceta parlamentaria de este poder legislativo, mismas que servirán de prueba para el proceder mediante juicio político en contra del alcalde antes mencionado.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a este H. Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

**Único.-** Que la presente Proposición con punto de acuerdo sea turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, a efecto de que inicie un procedimiento de juicio político en contra del alcalde de Parras de la Fuente Coahuila Sr. Ramiro Pérez Arciniega, por todas las irregularidades, malos manejos así como actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y demás actos indebidos, que ha vendido realizando desde el inicio de su administración, mismos que se encuentran plenamente comprobados.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 22 de Junio de 2020.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

Fuente.-

<https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/parras-el-ejemplo-representativo-de-como-gobierna-morena-en-coahuila>

**PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTA LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA, CONJUNTAMENTE CON LAS DEMÁS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO, COMO EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN APOYO A VÍCTIMAS DE TORTURA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E.-**

En diciembre de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el *Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura*. Esta fecha se conmemora con el objetivo de concientizar a la sociedad para que se unan en apoyo a las personas que han sido víctimas de torturas.

La tortura no solo constituye un delito y una seria violación a los derechos humanos, también se considera un crimen de lesa humanidad, siendo prohibido por el derecho internacional de manera total.

Según diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, la tortura es generalizada, siendo que por ningún motivo se debe tolerar, y aunque la tortura no se ha eliminado en su totalidad en México, debemos seguir trabajando para prevenir, erradicar y en su caso sancionar los casos de tortura que aún se presentan en nuestra actualidad.

Con relación al presente tema, es menester recordar el caso ocurrido en mayo del 2013, de una mujer originaria de San Luis Potosí, de 52 años de edad, que fue víctima de distintas formas de tortura por elementos pertenecientes a la Marina, caso por el cual posteriormente la CNDH emitió algunas recomendaciones, y que fue motivo de reprimenda por parte de la ONU hacia México, señalándolo como un lugar con alta incidencia de tortura y malos tratos emanando particularmente por parte de miembros de fuerza de seguridad o agentes de investigación durante las primeras etapas de detención.

Tras varios años encarcelada, logró una sentencia absolutoria, pero la historia no termina ahí, actualmente la mujer tiene disociaciones que le impiden trabajar; desafortunadamente en nuestro país, existen casos que, como este, demuestran el grave problema y las secuelas que deja la tortura, relacionada comúnmente con actos de un policía o autoridad para obtener alguna confesión, para castigar o incluso detener a alguna persona.

Tan solo de 2007 a 2016, se presentaron más de 7,695 quejas por tortura ante las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de doce mil quejas anuales en años recientes. En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas. [[38]](#footnote-38) Desafortunadamente en México casi la mitad de las personas que se encuentran en la cárcel afirman haber sido víctimas de tortura.

Por ello y derivado de recomendaciones de diversas instancias internacionales, el 26 junio de año 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en la cual se estableció la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Con esta Ley, hoy en día la tortura es un delito que no prescribe y se castigará la cadena de mando; además, las organizaciones defensoras de derechos humanos podrán entrar a cualquier lugar donde se presuma puede haber gente detenida o presumiblemente desaparecida. Establece también la obligación de las autoridades a formarse en ciencias criminalistas para que toda investigación se funde y se compruebe en técnicas de investigación criminal. Y aquellas confesiones obtenidas por tortura serán desestimadas por los juzgadores, quienes tendrán la obligación de fincar responsabilidades para que se castigue a quien resulte responsable.

Por lo anteriormente expuesto, en conmemoración al *Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura*, mostramos nuestra solidaridad con las víctimas de tortura, y reafirmamos la decisión colectiva de reprobar totalmente cualquier acto de tortura en contra de cualquier persona, de trato o castigo cruel, inhumano y degradante, y de igual manera hacemos un llamado al Estado Mexicano, a que se priorice la implementación y aplicación de la Ley General, y el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y las disipaciones de su Protocolo Facultativo, para sancionar, investigar y procesar a las personas que sean responsables de cometer tortura, o quienes ordenen o lo toleren, garantizando la exclusión de pruebas fabricadas u obtenidas mediante tortura, y una reparación a las víctimas.

Es cuanto.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de junio de 2020**

**A T E N T A M E N T E**

**DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS**

**INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PRONUNCIAMIENTO “CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO, COMO EL DÍA INTERNACIONAL EN APOYO A VÍCTIMAS DE TORTURA”.

**PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDES, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR MOTIVO DE FOMENTAR A QUE EL APARATO GUBERNAMENTAL PROTEJA LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL, TOMANDO COMO BASE LA ESENCIA DEL DERECHO, LA FILOSOFÍA Y LA GENÉTICA.**

Para que entendamos el trasfondo de la presente misiva, debemos dar a conocer el significado del Derecho Natural, y es el sentido de justicia que no se encuentra establecido en la norma, es decir, es un derecho que naturalmente ejercemos aun sin conocer las leyes escritas. Esto, va más allá del aspecto moral o religioso, por tanto, debemos analizar el tema del derecho a la vida desde la perspectiva filosófica, ya que esta explica, que toda enseñanza de ciencias naturales siempre es anterior a toda ciencia histórico – social.

Bajo este precepto, podemos decir que la defensa de la vida se encuentra por encima de cualquier movimiento social que busque legalizar el aborto.

Por otro lado, existen protocolos, convenios y tratados internacionales que tutelan el derecho a la vida de manera clara, sin dar pie a interpretación. Por tanto, es necesario analizar algunos de esos preceptos para comprender lo que el Derecho mismo nos quiere decir.

Por ejemplo; en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; describe en sus considerandos, que todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida.

Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3°, menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, además en el preámbulo de dicho texto internacional, establece que es esencial que los derechos humanos sean protegidos con un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea obligado al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Cabe destacar, que los preceptos de dicha Declaración vislumbraban un futuro donde cierto sector de la sociedad, con el apoyo del derecho, buscarían abolir el derecho a la vida, y en consecuencia, habría respuesta a modo de rebelión por parte de las y los ciudadanos que buscarían de forma natural, proteger al bien jurídico tutelado más importante que es la vida.

En el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estipula que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. **Este derecho estará protegido por la ley**. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Además, en el inciso 1 del artículo 4° del Pacto de San José Costa Rica, menciona que toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Cabe decir, que nuestro país se encuentra suscrito en dicho pacto, y que de acuerdo con el principio de *ex facto oritur ius* (del hecho nace el derecho), toda reforma o creación de ley debe estar encaminada a proteger a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Es importante mencionar, que nuestras posturas no solo se fundan en los aspectos filosóficos y jurídicos sobre la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sino también, de aquellas fuentes que tienen fundamento médico y genético, referentes al comienzo de la vida humana.

De acuerdo con el médico Ricardo Cruz Coke, quien fue Profesor de Medicina y Genética de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, define a la fecundación como la fertilización de un óvulo y un espermatozoide, que es, la unión de un gameto masculino y uno femenino. De esto, se desprenden conceptos y definiciones biológicas, como son los gametos, células, zigotos, genes y cromosomas.

Después de un siglo de progreso, es posible establecer claramente la secuencia del proceso de trasmisión de la vida de una generación a otra y la procreación de un nuevo ser humano.

En cuanto a la vida fetal, el ser humano recibe el nombre genético de feto durante la vida intrauterina. Pese a que el proceso de desarrollo fetal es gradual, por motivos técnicos se acostumbra a dividir este proceso en varias etapas.

La primera, sucede en la primera semana y es el periodo de preimplantación donde el feto se llama blastocito. Al implantarse en la pared uterina, el blastocito recibe el nombre de embrión. El embrión genéticamente se define como germen de ser vivo.

En la segunda, se lleva a cabo en 2 meses donde el embrión forma los órganos y al cabo de 2 o 3 meses el ser humano tiene ya una forma humana y mide alrededor de 3 centímetros, este embrión ya es llamado simplemente feto, y comienza una tercera etapa que terminará a los 5 meses.

Después, en la cuarta etapa, el desarrollo fetal comienza alrededor de los 5 meses. El feto ya es viable, es decir, puede vivir fuera del útero.

Durante la vida intrauterina, el feto va perfeccionando y desarrollando muchas complejidades genéticas. Se van formando nuevas proteínas y estructuras vitales.

Ante esto, el médico Ricardo Cruz Coke, concluye que la vida comienza en la concepción a razón de lo siguiente:

1. El ser humano es una individualidad genética única en la historia de la especie humana. Es un ser único, no reproducible. Su identidad biológica se determina en el comienzo de su vida.
2. La vida de un ser humano tiene un comienzo y un final en el tiempo. Su comienzo es el momento de la concepción y su fin la muerte, dentro o fuera del útero de la madre.
3. El ser humano se forma genéticamente a nivel molecular, citológico y probabilístico al fusionarse los gametos masculino y femenino que darán paso al cigoto, que es la célula primordial que contiene los genotipos originales que contiene los genotipos que darán paso al nuevo ser. Este proceso que se desarrolla en pocas horas se llama fecundación, que es el sustrato biológico de la concepción.
4. Con la fecundación del óvulo y la formación del zigoto, se inicia un nuevo ser que es distinto a sus progenitores, y tiene la potencialidad e individualidad de desarrollarse por sí mismo.
5. El producto de la concepción es el feto, el cual durante la vida intrauterina pasa por sucesivas etapas de desarrollo que lo van adaptando al ecosistema materno para completar la fabricación de un infante capaz de ser viable.

Debemos afirmar, que la genética contribuye en forma decisiva para fundamentar el derecho del feto a vivir desde el momento de la concepción, así también las posturas de la filosofía y del derecho ofrecen bases sólidas que dan razones suficientes para defender la vida desde su origen hasta la muerte natural. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vemos la necesidad de concientizar a todas y todos, para dar cuenta de que hay que proteger ambas vidas, tanto de la madre como del bebé que viene en camino.

**ATENTAMENTE**

**“POR UNA PARTIA ORDENADA Y GENEROSA**

**Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 24 DE JUNIO DE 2020.**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

**DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**

**DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO** **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA**

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. BLANCA EPPEN CANALES**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN AL PRONUNCIAMIENTO POR MOTIVO DE FOMENTAR A QUE EL APARATO GUBERNAMENTAL PROTEJA LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL, TOMANDO COMO BASE LA ESENCIA DEL DERECHO, LA FILOSOFÍA Y LA GENÉTICA.**

Pronunciamiento **que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” de la Honorable LXI Legislatura del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en relación con la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, establecida por la Secretaría de Energía.**

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Como ya es del conocimiento general, el pasado 16 de mayo entró en vigor el Acuerdo por el que se expide la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, formulado por la titular de la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García.

De entonces a la fecha, opositores a la Cuarta Transformación, principalmente personajes comprometidos con el poder económico, que ven cómo se esfuman los privilegios que recibían, a costa de empobrecer a las mayorías y de saquear al país, no han cesado de emitir fuertes pronunciamientos, de iniciar ofensivas jurídicas y de lanzar amenazas, todo, con tal de que no surtan efecto las acciones que comprende dicho Acuerdo, pues, obviamente, estas van contra sus particulares intereses.

A la tradicional cruzada de desinformación, en la que participan abiertamente reconocidos medios periodísticos, se suma una despiadada e inusual campaña de desprestigio de la figura presidencial. Por si esto fuera poco, varios partidos políticos y un grupo de gobernadores se han organizado bajo el propósito de golpear al nuevo régimen, pues “*México va derechito al socialismo y no lo podemos permitir”*, como diría, en una grabación filtrada, el comunicador consentido del ITAM, del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Pedro Ferriz de Con.

En efecto, los gobernadores que integran la Reunión Interestatal COVID-19 lanzaron un manifiesto contra el Gobierno Federal, por restringir proyectos privados para generar energía renovable. Pregonan que esta decisión traería consecuencias graves en el tema ecológico, y que ello va en contra de acuerdos internacionales que firmaron los gobernadores en este año.

Los firmantes del manifiesto, quienes además amenazan con tomar medidas legales, son los mandatarios: Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Francisco García, de Tamaulipas; José Rosas, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán; José Peralta, de Colima, y Enrique Alfaro, de Jalisco, quienes argumentan que la Federación *“prioriza el uso de combustóleo, producto altamente contaminante en azufre, lo que traería consecuencias a la salud y la vida de las personas"*.

Lo cierto es que el Acuerdo sobre Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, busca poner en orden al sector energético, pues el futuro de toda una nación está en juego.

Pero existe otra razón de peso, a saber, la que expresó en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a los neoliberales: *“Se habían apoderado* --dijo-- *del sector energético, en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica, y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.”*

Con base en la mal llamada “reforma energética”, se hicieron contratos leoninos para favorecer a empresas privadas, tanto en la adquisición de gas, como en la compra de la energía eléctrica, dejando de lado a la Comisión Federal de Electricidad, con un plan para cerrarla, con objeto de dejar todo el mercado a las firmas particulares, a grado tal, que llegaron a venderle a la CFE el 50% de la electricidad que consumimos en el país.

Dentro de todo esto, nos seguimos preguntando: ¿En qué se beneficiaron los consumidores con todo esto, si constantemente subía el precio de la luz? ¿Por qué entonces no protestaban los que ahora se inconforman? ¿Por qué no levantaban la voz cuando veían que inexplicablemente vendíamos petróleo crudo para luego importar gasolina? ¿Cuál reforma energética?

La nueva política en el sistema eléctrico cumple lo dispuesto en los artículos 1, párrafo segundo, y 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, relativos a *"promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios"*.

Y contra lo que algunos tratan de hacer creer, el mismo Acuerdo establece que uno de los principios de esta nueva estrategia *considera la construcción de la transición energética de manera soberana y progresiva, mediante una política integral para la utilización de las energías renovables, sustentada en la evolución productiva y tecnológica, y en un aumento ordenado de la generación con energía limpia conectada y no conectada al Servicio Eléctrico Nacional...”*

El problema de fondo, mismo que los neoliberales tratan de ocultar, es que había la costumbre de dar facilidades a quienes produjeran energías renovables, y, como bien lo explica también el presidente de la república, en muchos casos se trataba de *“negocios sucios”*, en los que se dejaba de lado a la Comisión Federal de Electricidad, como si esta no produjera energías limpias; *“no se consideró la producción de energía en las hidroeléctricas de la CFE y en otros procesos, y entonces el trato preferencial se les dio sólo a los particulares.”*

Para ilustrar mejor lo anterior, me permito transcribir parte importante de un reciente análisis del presidente López Obrador: *“En el Sistema Nacional de Energía se tenía que subir primero, comprar primero la energía a los particulares y parar las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Y si nosotros estamos garantizando que no aumente el precio de le energía eléctrica, no puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada, se continúe con los mismos contratos leoninos, además, quedando claro de que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional. Eso es lo que se está haciendo, poniendo orden, y lo seguiremos haciendo. Y eso es lo mismo para los que no pagaban impuestos.”*

En este orden, es pertinente destacar que, ya desde octubre de 2019, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, había advertido que *“las energías limpias no son la solución total”* y, como ejemplo de ello, citó que *“España tiene una crisis brutal en materia de electricidad por la energía renovable”*.

En virtud de ello, ese país busca ahora poner orden en lo relativo a los permisos de acceso de nuevas instalaciones, sobre todo ante un sinnúmero de *“proyectos de energías renovables que se están produciendo, muchos de los cuales no tienen un proyecto industrial real atrás, sino otros fines, lo cual constituye riesgo”*.

Por su parte, el titular de la Comisión de Energía de la cámara alta, senador Armando Guadiana Tijerina, coincide en que es mentira que el Acuerdo de Política de Confiabilidad en materia eléctrica frene la entrada de inversiones en las energías renovables, más bien, *“pone orden al sector”*.

Esto no indica que la Secretaría de Energía sea excluyente respecto de las fuentes renovables, pero contempla, de forma ordenada, su incorporación al Sistema Eléctrico Nacional, a través del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que tiene la facultad de garantizar que los nuevos proyectos renovables no pondrán en riesgo la confiabilidad del sistema en las regiones en las que se pretende instalar.

De hecho, se estudian y analizan los nuevos proyectos, a fin de poder determinar su viabilidad por regiones y evitar un desequilibrio en el Sistema Eléctrico Nacional. Desde luego, en estos estudios se incluye a Coahuila.

Que no se equivoque la empresa Peñoles (con su vieja deuda en materia ambiental y de salud pública), al ampararse contra supuestas afectaciones a 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban a punto de operar.

Que no se equivoquen los gobiernos de Jalisco y Aguascalientes, que presentarían una controversia constitucional contra el referido Acuerdo, bajo el falso argumento de que este frena la generación de energías limpias y que significa, supuestamente, un retroceso y la pérdida de miles de empleos.

Que no se equivoquen los siete gobernadores del noreste y occidente del país, incluido Miguel Ángel Riquelme Solís, quienes, junto con la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), y bajo intereses que también son de carácter político-electoral, confabulan para anular la nueva política de confiabilidad eléctrica.

Que tampoco se equivoquen nuestros compañeros diputados que, desde esta misma tribuna, un día exigen que la Comisión Federal de Electricidad compre carbón a los productores de Coahuila, y, al otro día, se pronuncian totalmente a favor de la generación de energías limpias, emulando a Rogelio Montemayor, quien miente cuando afirma que prohibir el *fracking* en el Estado significaría un “suicidio económico...” ¿Suicidio económico para quién? ¿Para él?

Así pues, que no se equivoquen quienes pretenden insultar la inteligencia de un pueblo que se encuentra más despierto que nunca, y que está resuelto a que se le reivindique en el terreno de la justicia social. “¡Por el bien de todos, primero los pobres!”.

Gracias... Es cuánto.

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de junio de 2020**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

Pronunciamiento que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con relación al Día Mundial del Árbol.

**H. Pleno del Congreso del**

**Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

El próximo 28 de junio se conmemora el **Día Mundial del Árbol, no podemos p**erder esta oportunidad de recordar esta fecha tan significativa por la importancia que tienen los árboles para nuestra vida. De todos es conocido los beneficios de los árboles, aprovechando su madera desde hace miles de años por el hombre, de él se extrae la celulosa para el papel, y además proporciona otros materiales naturales como el corcho, las resinas, y el caucho.

**Suecia fue el primer país del mundo en instituir un día del año como “día del árbol”.** Esto ocurrió en 1840 cuando se había tomado conciencia de la importancia que tienen los recursos forestales y del cuidado que se debía brindar a los árboles.

**Sin lugar a duda, los árboles son los verdaderos pulmones del planeta absorbiendo ingentes cantidades de CO2 y produciendo oxígeno**; por lo tanto, juegan un papel muy importante en la lucha contra el calentamiento global. Los bosques son un gran almacén de carbono, se calcula que acumulan unos 289  giga toneladas de carbono.

**Los árboles ocupan grandes extensiones en el planeta alcanzando el 28,5% de las tierras emergidas**, excluyendo la Antártida y Groenlandia. La mitad de los bosques están en los trópicos y el resto, en las zonas templadas y boreales.

**Siete países albergan más del 60% de la superficie forestal mundial: Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Indonesia y República Democrática del Congo.**

**Por desgracia los árboles están desapareciendo**en un proceso dedeforestación sin precedentes. Según la FAO**, la tasa mundial de deforestación y pérdidas por causas naturales entre 1990 y 2000 fue de 16 millones de hectáreas anuales.**

**La mayor deforestación se está produciendo en Sudamérica (4 millones de hectáreas)**y en**África con 3,4 millones de hectáreas.** Los bosques están en peligro, se calcula que un tercio de los bosques del mundo han desaparecido debido a la deforestación, sobre todo a la alteración del hombre, pero también por clima y la meteorología.

En efecto, fenómenos meteorológicos como las sequías, corrimientos de tierra, especies invasoras, ataques de insectos, brotes de enfermedades, así como fenómenos meteorológicos tales como huracanes, vendavales y granizadas influyen en la salud de nuestros bosques.

El cambio climático está afectando a los bosques debido a las alteraciones en el clima. Estas alteraciones provocan un aumento en la acumulación de combustible en los bosques, que las temporadas de incendios sean más largas y que se produzca una mayor ocurrencia de condiciones meteorológicas extremas, además de un aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.

De igual forma, los cambios en el clima también modificarán la dinámica de las alteraciones generadas por los insectos y los patógenos forestales nativos, además de facilitar el establecimiento y propagación de especies de plagas introducidas. Tales transformaciones en la dinámica de las alteraciones, sumadas al impacto directo del cambio climático en los árboles y en los ecosistemas forestales, pueden tener efectos negativos así como aumentar la vulnerabilidad de los bosques frente a los cambios que se vayan presentando en los ecosistemas.

Se calcula que un tercio de los bosques del mundo han desaparecido, debido en parte a la sobreexplotación del terreno con la introducción de la agricultura intensiva de**mega cultivos**como la**soja**o de**aceite de palma**. Estos cultivos están devastando millones de hectáreas de árboles en todo el mundo. Las selvas tropicales de Brasil e Indonesia son los principales perjudicados.

La decisión del algunos países de fomentar el uso de biocombustibles a partir de cultivos de maíz, sorgo, palma, en un principio parece una idea adecuada porque sustituyes combustibles de origen fósil, como la gasolina, por biocombustibles de origen vegetal para reducir las emisiones, pero existen probadas evidencias de que los efectos secundarios dichas políticas son muy negativas.

Además, el hombre efectúa talas intensivas para hacer sitio a otro tipo de cultivo que da un rendimiento económico mayor a corto plazo, por ejemplo, para abrir pastos para la ganadería o para el cultivo de grandes extensiones de soja. Las consecuencias negativas son: la pérdida de hábitats para diversas especies animales y vegetales, la erosión, al dejar el terreno libre a la acción desecante del viento y la libre circulación de las aguas, lo que provoca que se pierda la capa fértil de suelo y ocasiona que el terreno se vaya desertificando.

En el Partido Verde Ecologista de México, somos plenamente conscientes que los árboles son los mejores aliados, pues captan y recargan las fuentes de agua, liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono. Por esa razón hay que promover una conciencia de protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un buen uso de los recursos naturales.

Hoy en día, la siembra de árboles simboliza otros elementos que están ligados a la planificación y al bienestar que el árbol y los ecosistemas urbanos deben proporcionar a los habitantes de las ciudades, bienestar que se genera a partir de una serie de servicios ambientales como la belleza paisajística, la regulación térmica y acústica, la regulación hídrica, la captura de CO2 y la emisión de O2, así como la generación de hábitat, especialmente para la avifauna.

Por todo ello, debemos hacer conciencia que el día mundial del árbol es una fecha muy significativa para resaltar la importancia que tienen nuestros bosques.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 22 de Junio de 2020.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

Fuente.-

<https://www.concienciaeco.com/2013/06/28/28-de-junio-dia-mundial-del-arbol/>

1. ADN 40. (2019). México es el segundo país más homofóbico del mundo. Disponible en: <https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2017-06-24-14-06/mexico-es-el-segundo-pais-mas-homofobico-del-mundo/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Violencia contra Personas Lesbianas, Gay,

   Bisexuales, Trans e Intersex en América. OEA. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Gobierno Federal.(2019). Plan Nacional de Desarrollo. Disponible en: <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.enasem.org/index_Esp.aspx> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.un.org/es/observances/small-business-day> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.liderempresarial.com/presenta-inegi-radiografia-de-mipymes-en-mexico/> [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://almomento.mx/el-papel-de-las-pymes-en-la-generacion-de-empleo-grupo-human/> [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 2. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículo 2 de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. Artículo 32 bis. [↑](#footnote-ref-13)
14. Artículo 86, fracción XVII. [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 86, fracción IX. [↑](#footnote-ref-15)
16. # DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el DOF el 04 de junio de 2019

    [↑](#footnote-ref-16)
17. www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/62/docs/62.pdf [↑](#footnote-ref-17)
18. Artículo 2 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia penal para Adolescentes [↑](#footnote-ref-18)
19. Artículo 1 de la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes [↑](#footnote-ref-19)
20. García Ramírez, Sergio, *Derecho penal,* México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990 [↑](#footnote-ref-20)
21. Morales Nuño, Gissela, *Los principios del derecho penal aplicados al derecho disciplinario*, México, s.f. [↑](#footnote-ref-21)
22. Moreno Hernández, Moisés, *Principios Rectores en el Derecho Penal Mexicano*, México: SEP, 2015 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ídem [↑](#footnote-ref-23)
24. Amparo en revisión 448/2010. 13 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. [↑](#footnote-ref-24)
25. <https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/cfe-no-comprara-carbon-por-caro-y-de-baja-calidad1> [↑](#footnote-ref-25)
26. <file:///C:/Users/famal/Downloads/Bol41.pdf> [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=646&ilib=5> [↑](#footnote-ref-27)
28. <https://elceo.com/negocios/ahmsa-liquidara-a-2400-personas-por-cancelacion-de-contratos-de-cfe/> [↑](#footnote-ref-28)
29. Conapred. (2020). ¿Quiénes somos? . Sitio oficial. Disponible en: <https://www.conapred.org.mx/movil_smartphone/index.php?contenido=pagina&id=37&id_opcion=631&op=631>. [↑](#footnote-ref-29)
30. Maldonado, Jorge (2020). Colectivos protestan contra detención de jóvenes en Plaza Mayor. Milenio. Disponible en: <https://www.milenio.com/estados/torreon-protestan-contra-detencion-de-jovenes-en-plaza-mayor> [↑](#footnote-ref-30)
31. Redespoder. (2020). Emiten pronunciamiento contra presunta represión policiaca en Torreón. Disponible en: <https://www.redespoder.com/politica/pronunciamiento-violencia-policiaca/> [↑](#footnote-ref-31)
32. Uturriaga Roberto (2020). Niegan represión de la Policía durante protesta en Torreón. El Siglo de Torreón. Disponible en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1710200.niegan-represion-de-la-policia-durante-protesta-en-torreon.html [↑](#footnote-ref-32)
33. Uturriaga Roberto (2020). Que no exageren, dice Zermeño sobre acusaciones de represión policial en Torreón. El Siglo de Torreón. Disponible en: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1710356.que-no-exageren-dice-zermeno-sobre-acusaciones-de-represion-policial-en-torreon.html> [↑](#footnote-ref-33)
34. <https://vanguardia.com.mx/articulo/dejan-de-recibir-quimioterapias-mujeres-con-cancer-en-saltillo> [↑](#footnote-ref-34)
35. <https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/sin-tratamiento-y-quimioterapias-ninos-con-cancer-en-hospital-infantil-noticias-de-ciudad-juarez-5231147.html> [↑](#footnote-ref-35)
36. <https://revistaq.mx/salud/pacientes-con-cancer-en-mexico-padecen-escasez-y-falta-de-atencion-medica/> [↑](#footnote-ref-36)
37. <https://www.debate.com.mx/estados/Salud-Michoacan-gestiona-con-INSABI-medicamentos-para-cancer-20200514-0166.html> [↑](#footnote-ref-37)
38. <https://fundar.org.mx/en-el-dia-internacional-en-apoyo-a-victimas-de-tortura-organizaciones-llaman-a-la-implementacion-de-la-ley/> [↑](#footnote-ref-38)